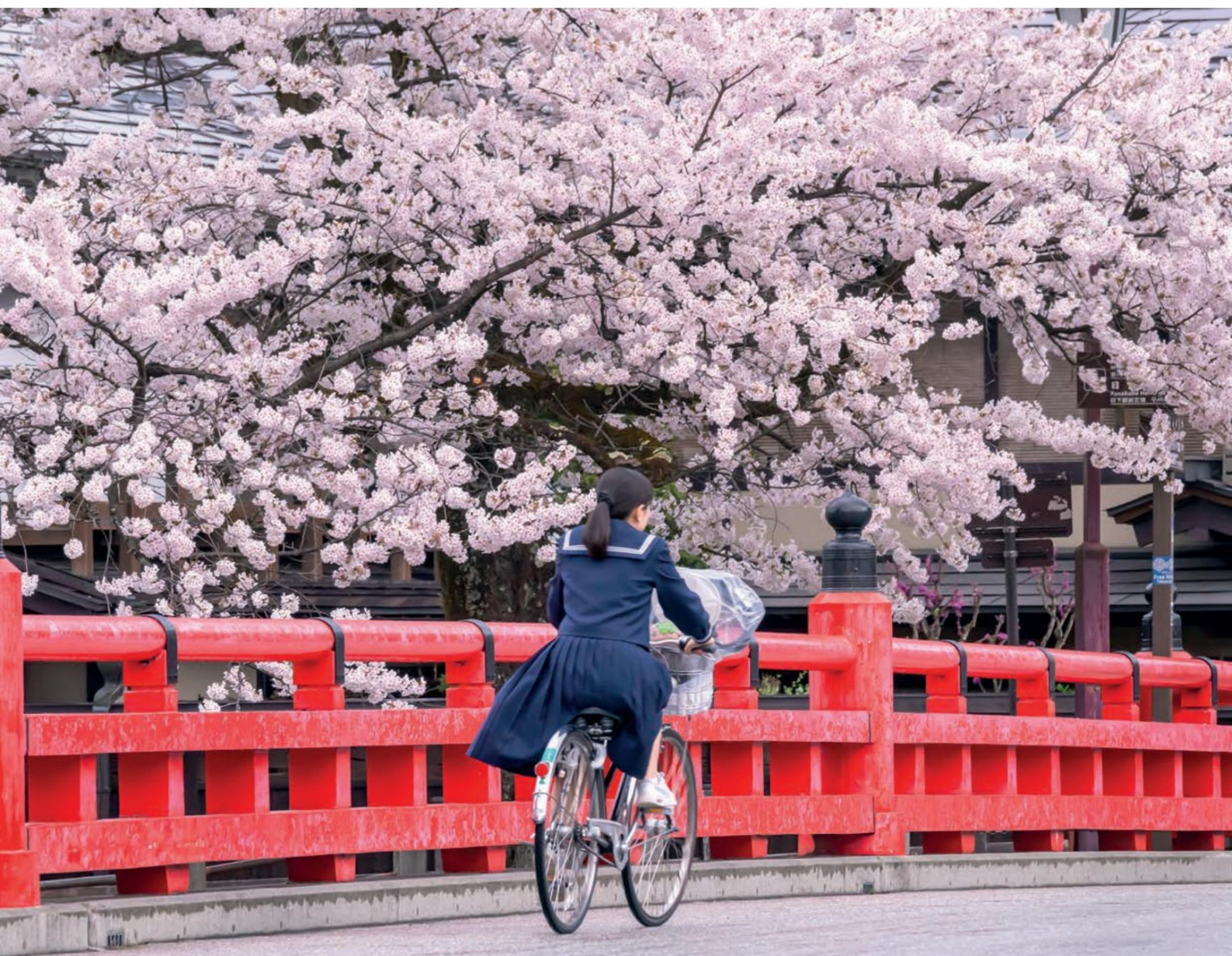


Estudios económicos de la OCDE:

Japón 2026

Mayo de 2026

Volumen 2026/12



Estudios económicos de la OCDE: Japón 2026

Este trabajo fue aprobado y desclasificado por el Comité de Revisión Económica y de Desarrollo el 25 de marzo de 2026.

Este documento, así como cualquier dato y mapa incluido en el mismo, se entienden sin perjuicio del estatus o la soberanía sobre cualquier territorio, de la delimitación de fronteras y límites internacionales y del nombre de cualquier territorio, ciudad o zona.

Los datos estadísticos de Israel son proporcionados por las autoridades israelíes competentes, quienes son responsables de su gestión. El uso de dichos datos por parte de la OCDE no menoscaba el estatus de los Altos del Golán, Jerusalén Este ni los asentamientos israelíes en Cisjordania, de conformidad con el derecho internacional.

Nota de la República de Turquía: La información contenida en este documento relativa a «Chipre» se refiere a la parte sur de la isla. No existe una autoridad única que represente a la población turcochipriota y grecochipriota en la isla. Turquía reconoce a la República Turca del Norte de Chipre (RTNC). Hasta que se encuentre una solución duradera y equitativa en el marco de las Naciones Unidas, Turquía mantendrá su posición respecto a la cuestión de Chipre.

Nota de todos los Estados miembros de la OCDE y de la Unión Europea: La República de Chipre está reconocida por todos los miembros de las Naciones Unidas, con excepción de Turquía. La información contenida en este documento se refiere al área bajo el control efectivo del Gobierno de la República de Chipre.

Kosovo*: Esta designación no prejuzga las posiciones sobre el estatus y está en consonancia con la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

Por favor, cite esta publicación como: OCDE
(2026), Estudios económicos de la OCDE: Japón 2026, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/54cc833d-en>.

ISBN 978-92-64-33890-6 (impreso)
ISBN 978-92-64-44150-7 (PDF)
ISBN 978-92-64-98322-9 (HTML)

Estudios económicos de la OCDE
ISSN 0376-6438 (impreso)
ISSN 1609-7513 (en línea)

Estudios económicos de la OCDE: Japón
ISSN 1995-3062 (impreso)
ISSN 1999-012X (en línea)

Créditos fotográficos: Portada © notamatsu/Shutterstock.com.

Las correcciones a las publicaciones de la OCDE pueden consultarse en: <https://www.oecd.org/en/publications/support/corrigenda.html>.

© OCDE 2026



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Al utilizar esta obra, usted acepta regirse por los términos de esta licencia (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).
Atribución : debe citar la obra.
Traducciones : debe citar la obra original, identificar los cambios realizados en el original y agregar el siguiente texto: En caso de discrepancia entre la obra original y la traducción, solo se considerará válido el texto de la obra original.
Adaptaciones : debe citar la obra original y añadir el siguiente texto: Esta es una adaptación de una obra original de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos empleados en esta adaptación no deben considerarse como la postura oficial de la OCDE ni de sus países miembros.
Material de terceros : la licencia no se aplica al material de terceros incluido en la obra. Si utiliza dicho material, usted es responsable de obtener el permiso del tercero y de cualquier reclamación por infracción de derechos de autor.
No debe utilizar el logotipo, la identidad visual ni la imagen de portada de la OCDE sin su autorización expresa, ni sugerir que la OCDE respalda su uso de la obra.
Cualquier controversia que surja en virtud de esta licencia se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de 2012. La sede del arbitraje será París (Francia). El número de árbitros será uno.

Prefacio

Este informe económico fue elaborado por Müge Adalet McGowan, Patrizio Sicari, Tetsuya Yoshioka y Natia Mosiashvili bajo la supervisión de Douglas Sutherland. Sisse Nielsen brindó apoyo editorial y Laura Fortin, asistencia en la comunicación.

Este estudio se publica bajo la responsabilidad del Comité de Examen Económico y de Desarrollo de la OCDE.

El Comité debatió el borrador de la encuesta el 3 de marzo de 2026. La fecha límite para la recopilación de datos utilizados en la encuesta es el 30 de abril de 2026.

Encontrará información sobre esta y anteriores encuestas, así como más detalles sobre cómo se elaboran, en <https://www.oecd.org/en/topics/economic-surveys.html>.

Tabla de contenido

Prefacio	3
Estadísticas básicas de Japón, 2025	7
Resumen ejecutivo	8
1. Principales conclusiones políticas	16
1.1. Las reformas deben continuar para aumentar la resiliencia ante las crisis.	17
1.2. Se prevé que la economía crezca moderadamente a pesar de los obstáculos externos.	19
1.3. La política monetaria debería seguir normalizándose gradualmente.	24
1.4. El sistema financiero parece sólido, pero enfrenta riesgos.	26
1.5. Crear reservas fiscales y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.	29
1.6. Abordar la escasez de mano de obra y de personal cualificado.	40
1.7. Hacia una economía con cero emisiones netas y resiliente al clima.	54
Referencias	67
2. Reactivación del crecimiento de la productividad 2.1.	72
La productividad de Japón está por debajo de la de sus pares	73
2.2. Fortalecimiento de la competencia	76
2.3. Fomento de la inversión extranjera directa para generar efectos indirectos en la productividad	86
2.4. Movilización de recursos para una economía más innovadora y dinámica	92
Referencias	111

CIFRAS

Figura 1. Factores temporales han empujado recientemente la inflación general a la baja	9
Figura 2. El uso de presupuestos suplementarios debería limitarse	11
Figura 3. Las brechas de participación en el aprendizaje de adultos son altas	12
Figura 4. La productividad laboral está por debajo del promedio de la OCDE	13
Figura 1.1. El PIB per cápita está por debajo del promedio del G7	17
Figura 1.2. La demanda interna ha sido el principal motor del crecimiento	19
Figura 1.3. El crecimiento de los salarios nominales ha cobrado impulso	19
Figura 1.4. La inflación general ha caído recientemente, pero las expectativas de inflación se mantienen por encima del objetivo	20
Figura 1.5. Las ganancias corporativas están respaldando la inversión empresarial	21
Figura 1.6. Estados Unidos y China son los principales destinos de exportación	21
Figura 1.7. El sector externo se mantiene resiliente a pesar de los vientos en contra de las exportaciones de bienes	22
Figura 1.8. Las condiciones monetarias y financieras se han mantenido acomodaticias	25
Figura 1.9. Las condiciones del mercado de bonos deben ser monitoreadas de cerca	26
Figura 1.10. El sistema financiero parece ser sólido	27
Figura 1.11. Los intermediarios financieros no bancarios deben ser monitoreados de cerca	28
Figura 1.12. La consolidación fiscal debe continuar	29
Figura 1.13. Se necesita un ajuste significativo para que la deuda pública se encamine hacia una senda descendente	31
Figura 1.14. Las reformas de pensiones deben equilibrar la suficiencia y la sostenibilidad	33
Figura 1.15. La infraestructura e instituciones de datos de salud son débiles	35
Figura 1.16. Las reformas podrían impulsar el consumo y los ingresos del impuesto sobre la renta personal	37
Figura 1.17. Hay margen para impulsar los incentivos laborales para los perceptores de ingresos secundarios	38
Figura 1.18. Los presupuestos suplementarios siguen siendo considerables	39
Figura 1.19. El mercado laboral está ajustado	41
Figura 1.20. Es necesario mejorar la correspondencia entre las habilidades y las necesidades del mercado laboral	41
Figura 1.21. Las prácticas tradicionales del mercado laboral pueden reducir la eficiencia de la asignación	43
Figura 1.22. Las reformas pueden ayudar a mitigar las disminuciones proyectadas en el empleo	44
Figura 1.23. El empleo no regular se concentra entre las mujeres y los trabajadores mayores	45
Figura 1.24. Las reformas de cuidado infantil podrían impulsar los incentivos laborales para algunos perceptores de ingresos secundarios	46
Figura 1.25. Se deben continuar los esfuerzos para hacer un mayor uso de los trabajadores extranjeros	47
Figura 1.26. Hay margen para mejorar la cobertura y el acceso al aprendizaje de adultos	51
Figura 1.27. Las reformas políticas pueden ayudar a abordar las barreras a la participación en el aprendizaje de adultos	52
Figura 1.28. Las emisiones han disminuido, pero se necesita hacer más para alcanzar los objetivos	55
Figura 1.29. Hay margen para ampliar los instrumentos basados en el mercado	57
Figura 1.30. La concesión de permisos más rápida ayudaría a impulsar las energías renovables	60
Figura 1.31. La adopción de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga siguen siendo limitadas	62
Figura 1.32. El cambio climático está creando costos humanos y económicos	63
Figura 2.1. La disminución de la proporción de la población en edad de trabajar ha reducido el PIB per cápita	73
Figura 2.2. El nivel de productividad laboral por hora está por debajo del promedio de la OCDE	73
Figura 2.3. La débil inversión ha sido el principal impulsor del bajo crecimiento de la productividad	74
Figura 2.4. Se necesitan inversiones complementarias para impulsar la productividad	75
Figura 2.5. El dinamismo empresarial sigue siendo moderado	76
Figura 2.6. La productividad laboral aumenta con el tamaño de la empresa	77
Figura 2.7. Hay margen para un marco regulatorio más favorable a la competencia	80
Figura 2.8. La postura regulatoria restringe la competencia en servicios digitales, legales y contables	81
Figura 2.9. Hay margen para mejorar la rentabilidad de las empresas y aumentar la inversión nacional	82
Figura 2.10. La calidad y composición de los consejos de administración de las empresas deberían mejorarse	83
Figura 2.11. El gasto en contratación pública es alto y está concentrado por función	85
Figura 2.12. Los niveles de corrupción percibida siguen siendo modestos	86
Figura 2.13. La aplicación de las medidas contra el blanqueo de capitales podría mejorarse	87
Figura 2.14. La capacidad de Japón para atraer inversión extranjera sigue siendo baja	88
Figura 2.15. Las restricciones regulatorias a la inversión extranjera entrante son bajas	91
Figura 2.16. Hay margen para impulsar la divulgación bilingüe, incluso entre las empresas cotizadas de primera categoría	93
Figura 2.17. El gasto en I+D es alto, pero está vinculado principalmente a las empresas más grandes	94
Figura 2.18. La orientación del sistema hacia la innovación de base amplia sigue siendo limitada	94
Figura 2.19. La participación de las PYME en el apoyo a la I+D sigue siendo baja	97
Figura 2.20. El número de investigadores está en torno a la media de la OCDE, pero se ha estancado	98
Figura 2.21. El escaso interés por las carreras de investigación refleja en	

Figura 2.22. El apoyo público a las PYME sigue siendo alto, pero las vías de crédito están cambiando. 101

Figura 2.23. Las quiebras y las salidas voluntarias están en aumento. Figura 102

2.24. La prevalencia de empresas zombi es relativamente alta, especialmente entre las empresas más 103

pequeñas. Figura 2.25. El envejecimiento de la clase empresarial está reconfigurando los patrones de sucesión 105

empresarial de las PYME. Figura 2.26. La adopción de soluciones digitales 106

se enfrenta a obstáculos. Figura 2.27. El uso de inteligencia artificial generativa está creciendo, pero sigue siendo bajo. 107

TABLAS

Tabla 1. La demanda interna será el principal motor del crecimiento Tabla 10

1.1. Indicadores y proyecciones macroeconómicas Tabla 1.2. 23

Eventos que podrían conducir a cambios importantes en las perspectivas Tabla 24

1.3. Pasos hacia la normalización de la política monetaria Tabla 1.4. 24

Recomendaciones anteriores sobre políticas monetarias y financieras Tabla 1.5. 28

Gastos seleccionados a gran escala y plurianuales Tabla 1.6. Impacto 30

fiscal ilustrativo del paquete de reformas recomendado Tabla 1.7. Impacto ilustrativo 31

de reformas propuestas seleccionadas en el PIB per cápita Tabla 1.8. Comparación internacional 32

de entornos seleccionados de salud y atención a largo plazo Tabla 1.9. Exenciones de seguros sociales 34

y fiscales seleccionadas relacionadas con incentivos laborales Tabla 1.10. Recomendaciones anteriores 38

sobre políticas fiscales Tabla 1.11. Ministerios y agencias a cargo 40

de diferentes políticas para extranjeros Tabla 1.12. Porcentaje de capacitación fuera del trabajo, por 49

tipo de proveedor, 2024 Tabla 1.13. Recomendaciones anteriores sobre políticas 53

del mercado laboral Tabla 1.14. Recomendaciones anteriores sobre políticas 54

ambientales Tabla 1.15. Recomendaciones sobre políticas macroeconómicas 64

y estructurales Tabla 2.1. Los procedimientos no competitivos representan una parte 65

sustancial de la contratación pública Tabla 2.2. Características principales de los sistemas de control de la IED en los 84

países del G7 Tabla 2.3. El sistema de crédito fiscal para I+D Tabla 2.4. Recomendaciones 89

para impulsar el crecimiento de la productividad 95

109

CAJAS

Recuadro 1.1. Prioridades de la reforma 18

gubernamental Recuadro 1.2. Cuantificación de recomendaciones políticas 31

seleccionadas Recuadro 1.3. Infraestructura y gobernanza sólidas de datos: Dinamarca y Finlandia 36

Recuadro 1.4. Revisiones independientes de los sistemas tributarios 36

nacionales Recuadro 1.5. Reforma integrada del mercado laboral en tres 43

vertientes Recuadro 1.6. Políticas de inmigración en 48

Australia Recuadro 1.7. Novedades recientes seleccionadas en las vías de 48

inmigración Recuadro 1.8. Automatización de tareas administrativas repetitivas en escuelas de Corea y Reino Unido 50

Recuadro 1.9. Organismos asesores climáticos 56

independientes Recuadro 2.1. Sistema de control de la 88

IED entrante de Japón Recuadro 2.2. Ejemplos de marcos simplificados para la 92

promoción de la IED entrante Recuadro 2.3. Características principales de las opciones de reestructuración en el régimen de insolvencia de Japón 104

Estadísticas básicas de Japón, 2025

(Las cifras entre paréntesis se refieren al promedio de la OCDE)¹

TIERRA, POBLACIÓN Y CICLO ELECTORAL					
Población (millones, 2024)	124,0 Densidad de población por km² (2024)			340.1	(39.6)
Menores de 15 años (% , 2024)	11.4	(16.7)	Esperanza de vida al nacer (años, 2023)	84.1	(81.2)
Mayores de 65 años (% , 2024)	29.8	(18.6)	Hombres (2023)	81.1	(78.6)
Población migrante internacional (% de la población, 2024)	2.8	(15.7)	Mujeres (2023)	87.1	(83.8)
Crecimiento promedio de los últimos 5 años (%)	-0,4	(0,5)	Últimas elecciones generales	Octubre de 2024	
ECONOMÍA					
Producto interno bruto (PIB)			Participación en el valor añadido (% , 2023, OCDE: 2024)		
En precios actuales (miles de millones de USD)	4 437.9		Agricultura, silvicultura y pesca	0,9	(2.6)
En precios actuales (billones de yenes)	663.8		Industria, incluida la construcción	28.8	(26.0)
Crecimiento real promedio de los últimos 5 años (%)	1.3	(3.0)	Servicios	70.3	(71.4)
Per cápita (miles de USD PPP, 2024) 2	54.2	(62.3)			
GOBIERNO GENERAL					
Gasto (2024)	38,4	(42.7)	Deuda financiera bruta (2024)	205,6	(112.5)
Ingresos (2024)	36,7	(37.9)	Deuda financiera neta (2024)	86,4	(65.8)
CUENTAS EXTERNAS					
Tipo de cambio (yenes por dólares)	149,56		Principales exportaciones (% del total de exportaciones de mercancías)		
Tipo de cambio PPP (EE. UU. = 1)	95,00		Maquinaria y electrónica	32.1	
En porcentaje del PIB			Transporte	22.0	
Exportaciones de bienes y servicios	21,7	(29,9)	Misceláneas	15.4	
Importaciones de bienes y servicios	22,2	(29,7)	Principales importaciones (% del total de las importaciones de mercancías)		
Saldo de la cuenta corriente	4,8	(-0,4)	Maquinaria y electrónica	26.1	
Posición neta de inversión internacional	83.0		Combustibles	19.6	
			productos químicos	9.4	
MERCADO LABORAL, HABILIDADES E INNOVACIÓN					
Tasa de empleo (personas de 15 años o más, %, OCDE: 2024)	62.2	(58.0)	Tasa de desempleo, Encuesta de Población Activa (de 15 años o más, %, OCDE: 2024)	2.5	(4.9)
Hombres	69.8	(65.4)	Jóvenes (de 15 a 24 años, %)	3.8	(11.1)
Mujer	55.1	(51.0)	Desempleados de larga duración (1 año o más, %, 2024)	0,8	(1.0)
Tasa de participación (mayores de 15 años, %, OCDE: 2024)	63.8	(61.0)	Nivel educativo terciario alcanzado (de 25 a 64 años, %, 2024)	57.0	(41.8)
Horas promedio trabajadas por año (OCDE: 2024)	1 788		Gasto interno bruto en I+D (% del PIB, (1 736) 2024)	3.6	(2.7)
AMBIENTE					
Suministro total de energía primaria per cápita (tep, 2024)	3.0	(3.7)	Emisiones de CO ₂ procedentes de la combustión de combustibles per cápita (toneladas, 2024)	7.3	(7.5)
Energías renovables (% , 2024)	8.2	(13.1)	Extracción de agua per cápita (1000 m³, 2019)	0,6	
Exposición a la contaminación atmosférica (más de 10 µg/ m³ de PM 2.5, % de la población, 2020)	95.0	(56.5)	Residuos municipales per cápita (toneladas, 2023, OCDE: 2024)	0,3	(0,5)
SOCIEDAD					
Desigualdad de ingresos (coeficiente de Gini, 2021, OCDE: última versión disponible)	0,338	(0,317)	Resultados educativos (puntuación PISA 2022)		
Tasa de pobreza relativa (% , 2021, OCDE: 2022)	15.4	(11.5)	Lectura	516	(476)
Ingreso familiar disponible medio (miles de USD PPP, 2021, OCDE: 2022)	23.0	(31.9)	Matemáticas	536	(472)
Gasto público y privado (% del PIB)			Ciencia	547	(485)
Atención sanitaria (2024)	10.6	(9.3)	Porcentaje de mujeres en el parlamento (% , 2024) 15,7	Ayuda	(33.3)
Pensiones (2022, OCDE: 2021)	9.7	(9.9)	oficial neta al desarrollo (% del INB, 2024) 0,4		(0,4)
Educación (gasto total, 2020)	4.1	(5.1)			

Nota: 1. El año se indica entre paréntesis si difiere del año que figura en el título principal de esta tabla. Cuando no se proporciona el agregado de la OCDE en la base de datos de origen, se calcula un promedio simple de la OCDE con los datos más recientes disponibles, siempre que existan datos para al menos el 80 % de los países miembros. 2. El agregado de la OCDE se refiere al promedio ponderado.

Fuente: Cálculos basados en datos extraídos de las bases de datos de las siguientes organizaciones: OCDE, Agencia Internacional de Energía, Organización Internacional del Trabajo, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Banco Mundial.

Resumen ejecutivo

Mensajes clave

La economía japonesa ha demostrado resiliencia ante diversas crisis en los últimos años y se prevé que crezca a un ritmo moderado, impulsada por la demanda interna, a pesar de las fuertes presiones externas. A medida que Japón avanza hacia un nuevo equilibrio caracterizado por precios y salarios más altos, las políticas macroeconómicas deben ajustarse cuidadosamente.

Las políticas deben encontrar un equilibrio entre mantener la inflación en torno al objetivo del 2%, garantizar la sostenibilidad fiscal e impulsar el crecimiento potencial a pesar del envejecimiento de la población.

Con una inflación general de precios al consumidor que se prevé que converja hacia el objetivo del 2 % y un sólido crecimiento de los salarios nominales, la normalización de la política monetaria debería continuar a un ritmo gradual. En un contexto de crecientes costos del servicio de la deuda, debe priorizarse la reducción de la deuda pública. Para garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, es necesario abordar las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población, aumentar los ingresos tributarios y limitar el uso de presupuestos suplementarios.

- El aumento de las tasas de participación femenina en la fuerza laboral y la mejora de la calidad del empleo, un mayor uso de trabajadores extranjeros, el fomento de la flexibilidad de los mercados laborales y la mejora de la pertinencia y la calidad de las políticas de aprendizaje para adultos pueden contribuir a reducir las brechas salariales de género, abordar la escasez de mano de obra y contrarrestar los efectos demográficos adversos.
- Garantizar la adicionalidad del apoyo financiero proporcionado para la inversión en Transformación Verde (GX),
Mejorar la gobernanza de las políticas climáticas, simplificar los procedimientos de concesión de permisos y modernizar la red eléctrica son factores cruciales para lograr una economía climáticamente resiliente y con cero emisiones netas.
- Impulsar el dinamismo empresarial, aumentar los efectos indirectos de la innovación, atraer capital extranjero y obtener la
La mayor parte de la digitalización es clave para impulsar el crecimiento de la productividad.

Se prevé que el crecimiento se mantenga sólido en medio de una gran incertidumbre.

A pesar del aumento de los obstáculos a corto plazo derivados de una mayor incertidumbre y los precios de la energía, se prevé que el crecimiento económico se modere, pero se mantenga sólido en 2026-27. Los riesgos a la baja son elevados. Con la inflación general de los precios al consumidor Dado que se prevé una convergencia hacia el objetivo del 2% y un sólido crecimiento de los salarios nominales, la normalización de la política monetaria debería continuar a un ritmo gradual.

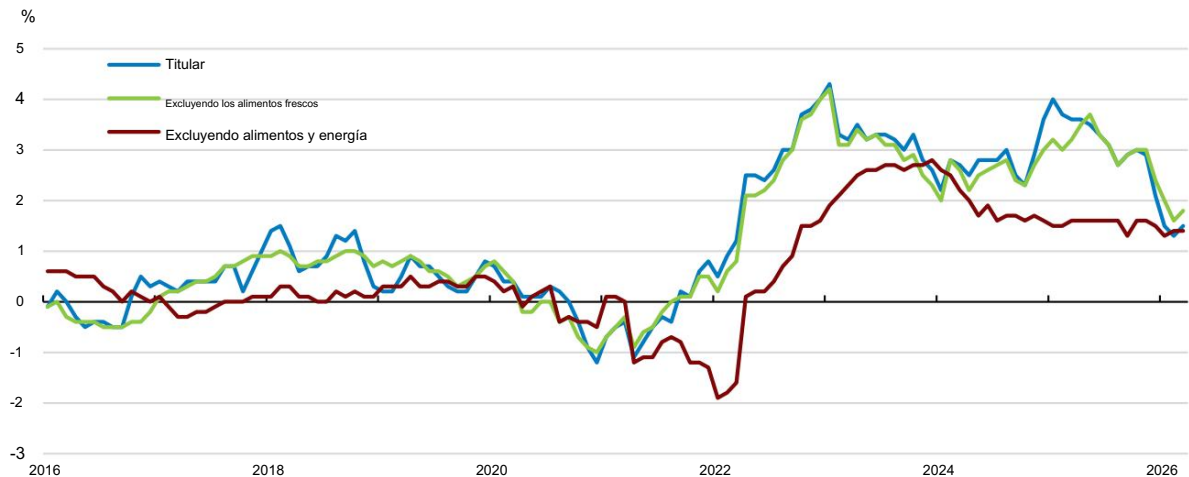
Tras tres décadas de inflación prácticamente nula, existen indicios de que la economía japonesa está transitando hacia un nuevo equilibrio en la dinámica de precios, crecimiento e ingresos. La inflación general de los precios al consumidor se mantuvo por encima del objetivo del 2% entre abril de 2022 y diciembre de 2025 (Figura 1). Factores temporales, como los subsidios a la energía y los efectos base, redujeron la inflación general a principios de 2026. Sin embargo, las presiones inflacionarias aumentarán a corto plazo debido al alza de los precios de la energía.

La escasez de mano de obra derivada del envejecimiento de la población y de los elevados beneficios empresariales ha impulsado al alza tanto los salarios nominales, que experimentaron el mayor crecimiento desde la década de 1990, como la inversión privada.

Tras un sólido crecimiento del 1,2% en 2025, se prevé que el PIB real se modere, pero supere su potencial en 2026-27 (Tabla 1). La demanda interna será el principal motor del crecimiento. El consumo privado se verá impulsado por el aumento de los salarios, lo que incrementará la renta disponible real.

Sólidas ganancias corporativas y el paquete de estímulo fiscal

Figura 1. Factores temporales han provocado recientemente una caída de la inflación general.



Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/q52y9u>

Tabla 1. La demanda interna será el principal motor del crecimiento.

Tasas de crecimiento anuales, %, salvo que se especifique lo contrario.

	2024	2025	2026	2027
PIB real	- 0,2	1.2	0,7	0,9
demanda interna total	- 0,2	1.5	1.0	0,9
Tasa de desempleo	2.5	2.5	2.7	2.7
Inflación general de los precios al consumidor	2.7	3.2	2.0	1.9
Saldo financiero del gobierno general (% del PIB)	- 1.7	-1.0	-1.8	-1.1
Deuda pública bruta (% del PIB)	205.6	197,4	194.2	189,7

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas.

Garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo

En un contexto de crecientes costes de servicio de la deuda, debería ser prioritario lograr que la deuda pública se encamine hacia una trayectoria descendente. Para crear reservas fiscales y prepararse para las presiones de gasto a medio y largo plazo, es necesario abordar los costes relacionados con el envejecimiento de la población, aumentar los ingresos fiscales y limitar el uso de presupuestos suplementarios.

Japón enfrenta importantes desafíos de sostenibilidad fiscal a mediano plazo. La deuda pública bruta es la más alto en la OCDE, en alrededor del 206% del PIB en 2024. Se prevé que el número de ancianos como porcentaje de la población activa sea del 79% en 2060. Se proyecta que los costos del envejecimiento y del servicio de la deuda aumenten para 2050. Los compromisos de gasto adicionales para la transformación verde y digital, la defensa y la seguridad económica aumentan la necesidad de crear colchones fiscales. Una combinación de consolidación fiscal y

Se necesitarán reformas estructurales que impulsen el crecimiento de la productividad y la oferta laboral para reducir la deuda pública. El punto de partida debe ser establecer una estrategia creíble de consolidación fiscal a mediano plazo, que incluya medidas para aumentar los ingresos tributarios y controlar el gasto.

Para contener el crecimiento del gasto se requieren reformas en los sistemas de pensiones, salud y cuidados a largo plazo. El ajuste automático de las prestaciones de pensiones (indexación macroeconómica) busca garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema.

Sin embargo, el sistema será revisado en caso de una caída importante en las prestaciones de pensión. Dado que una edad de jubilación más alta aumentaría las tasas de reemplazo, debería establecerse un vínculo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida.

Se adoptarían medidas para aumentar los gastos de bolsillo de las personas mayores con mayores recursos económicos mediante la evaluación de recursos y continuar alejándose de un sistema de atención médica basado en hospitales, lo que mejoraría la sostenibilidad fiscal.

Japón debería basarse principalmente en el impuesto al consumo (IVA) para aumentar sus ingresos. La tasa actual del 10% es una de las más bajas de la OCDE. Además, diversas deducciones del impuesto sobre la renta personal reducen la base imponible.

Las reformas fiscales deben ir acompañadas de medidas de apoyo específicas para los hogares de bajos ingresos.

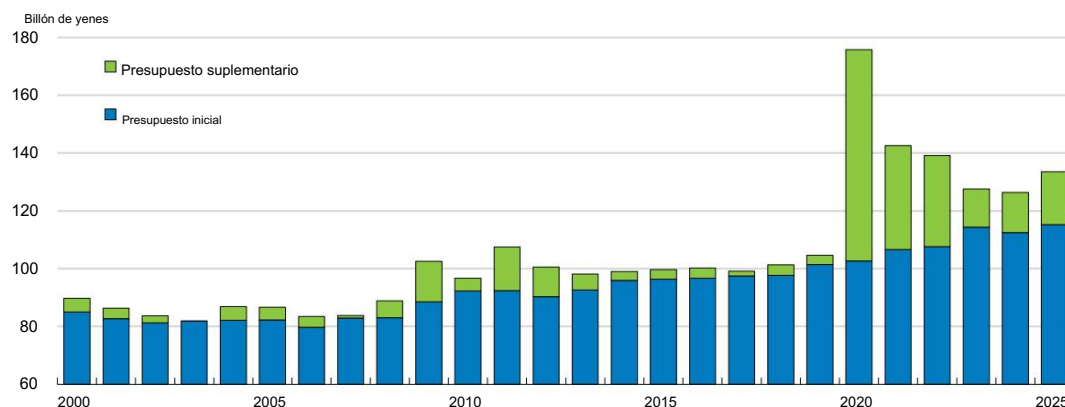
El fortalecimiento del marco fiscal basado en reglas ayudaría a alcanzar los objetivos de consolidación fiscal y mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se está volviendo más importante a medida que la base de inversores debe ampliarse y las tasas a largo plazo han estado aumentando. El tamaño de los presupuestos suplementarios disminuyó desde sus picos de la pandemia, pero siguen siendo grandes (Figura 2), lo que hace que el presupuesto

Los límites máximos no son vinculantes y reducen la coherencia de los presupuestos anuales y la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

Su uso debería limitarse a impactos fuertes, con una definición más concreta de las circunstancias en las que pueden utilizarse.

Figura 2. El uso de presupuestos suplementarios debe limitarse.

presupuesto de cuentas generales nacionales



Nota: El eje horizontal muestra los años fiscales.

Fuente: Ministerio de Finanzas.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/xon1da>

Impulsar la oferta laboral para contrarrestar la demografía adversa y hacer frente a la escasez de mano de obra.

Las proyecciones demográficas basadas en supuestos políticos sin cambios implican descensos significativos en las tasas de empleo.

Ampliar la vida laboral y fortalecer la calidad, la focalización y la relevancia de las políticas de aprendizaje de adultos será crucial. Seguir facilitando el acceso al mercado laboral para migrantes y mujeres impulsaría el empleo. Aumentar el empleo y la productividad también requerirá contar con mercados laborales flexibles y reducir la proporción de trabajadores no regulares. contratos.

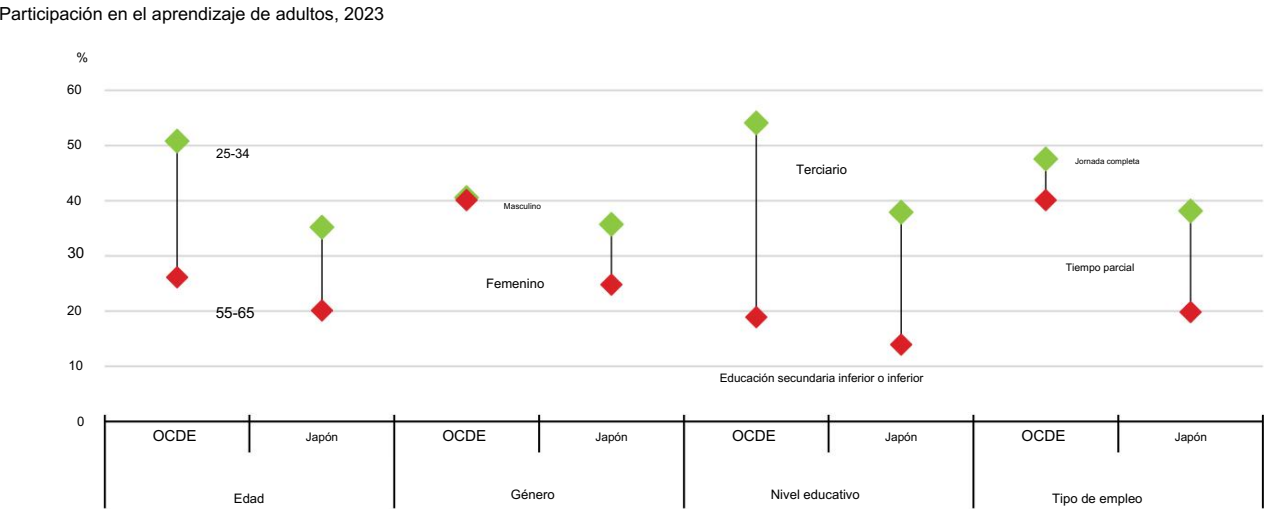
Las reformas del mercado laboral anteriores han aumentado la El empleo femenino y de trabajadores mayores es frecuente, pero su proporción en el empleo no regular sigue siendo alta. Los salarios más bajos y la menor calidad del empleo asociados debilitan la participación femenina en la fuerza laboral y contribuyen a la brecha salarial de género. Los trabajadores mayores suelen ser reempleados como trabajadores no regulares tras la jubilación obligatoria. Para las mujeres, las responsabilidades de cuidado constituyen una barrera importante para permanecer en el trabajo o reincorporarse a él, lo que subraya la importancia del acceso al cuidado infantil. Estilo de trabajo continuo Las reformas, incluida la igualdad salarial por igual trabajo y la eliminación del dualismo del mercado laboral, mediante la flexibilización de la protección del empleo para los trabajadores regulares y su mayor transparencia, son esenciales.

Deben continuar las políticas para atraer e integrar a los trabajadores extranjeros. El número de trabajadores extranjeros ha alcanzado máximos históricos, pero sigue siendo bajo en perspectiva internacional. Las recientes reformas que establecen nuevas vías para los migrantes son bienvenidas, pero hay una necesidad

Mejorar el conocimiento que tienen los solicitantes en el extranjero sobre la integración y orientarlos a través de la complejidad de los diferentes programas. La implementación de políticas de integración a nivel local requiere potenciar la experiencia y los recursos.

Las políticas de aprendizaje para adultos deben adaptarse a las necesidades cambiantes de habilidades y al envejecimiento de la población. Históricamente, la formación en el puesto de trabajo ha sido más común que la participación en la formación formal para adultos, debido a las prácticas de empleo a lo largo de la vida. Dado que la escasez de mano de obra aumenta la necesidad de movilidad laboral, es necesario mejorar la relevancia y la calidad de los programas de aprendizaje para adultos. La información sobre las diferentes oportunidades de formación está dispersa, lo que puede reducir su accesibilidad. Las mujeres, las personas mayores y los trabajadores con contratos irregulares tienen una probabilidad significativamente menor de participar en la formación para adultos (Figura 3), lo que subraya la necesidad de una difusión más específica, centrada en las habilidades más demandadas, especialmente las digitales.

Figura 3. Las brechas de participación en el aprendizaje de adultos son elevadas.



Fuente: OCDE (2025), Tendencias en el aprendizaje de adultos: Nuevos datos de la encuesta de 2023 sobre las competencias de los adultos.

StatLink 2<https://stat.link/onzhu9>

Descarbonizar la economía

Se necesita una acción acelerada para cumplir el objetivo de cero emisiones netas para 2050. Las políticas deben estar bien diseñadas para garantizar que no exacerben los desafíos de sostenibilidad fiscal. Mejorar la gobernanza de las políticas climáticas, impulsar la eficiencia de los procedimientos de concesión de permisos, el aumento de los impuestos sobre el carbono y la garantía de la adicionalidad del apoyo público a la inversión en la Transformación Verde (GX) son cruciales.

A pesar de los buenos avances en la desvinculación de las emisiones y el crecimiento desde su punto máximo en 2013, la matriz energética y eléctrica de Japón sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. El último pronóstico incluye un aumento en la

Se prevé que la participación de la energía nuclear y las energías renovables en la producción de electricidad alcance aproximadamente el 20 % y entre el 40 % y el 50 %, respectivamente, para el año fiscal 2040, lo que podría presentar dificultades en su implementación. Mejorar la gobernanza climática, por ejemplo, mediante el establecimiento de un organismo asesor climático independiente, puede contribuir a fortalecer la legitimidad del proceso de formulación de políticas y reforzar el apoyo público a la acción climática.

El diseño de las políticas será crucial para garantizar que La visión GX2040 ofrezca resultados efectivos a un precio justo. dinero. La estrategia incluye planes para introducir precios del carbono más adelante en la década a cambio de subsidios industriales iniciales para la inversión. Un proceso de selección competitivo y transparente para empresas y tecnologías. es esencial para asegurar la adicionalidad de la financiación

apoyo. Anunciar rápidamente los detalles del próximo precio del carbono, que debería ser lo suficientemente alto como para crear incentivos para la reducción de emisiones, impulsaría la certeza de la inversión y aumentaría los impuestos. ingresos.

Los largos procesos de obtención de permisos y la limitada capacidad de la red eléctrica están frenando el uso eficiente de las fuentes de energía renovables, así como la expansión de la capacidad de producción renovable. Existe margen para simplificar los procesos de obtención de permisos, por ejemplo, centralizando los trámites que involucran a múltiples organismos administrativos.

Será fundamental mantener su eficacia para identificar posibles impactos ambientales. Esto deberá complementarse con el aumento de la capacidad de la red eléctrica, basándose en un análisis de costo-beneficio, dada la creciente demanda de electricidad.

También deben continuarse las medidas de adaptación para hacer frente a los riesgos climáticos. Esto requiere el fortalecimiento de las capacidades a nivel local y la coordinación entre las diferentes partes interesadas.

Aumentar el crecimiento de la productividad

Impulsar el crecimiento de la productividad es fundamental para garantizar un alto nivel de vida y la sostenibilidad fiscal. Esto requiere fortalecer la competencia y aumentar la eficacia del apoyo público a las pequeñas y medianas empresas para incrementar el dinamismo empresarial, fomentar la inversión extranjera directa para generar efectos indirectos en la productividad y reformar el marco de innovación y los incentivos para las empresas emergentes.

El nivel de productividad laboral por hora es bajo (Figura 4). La marcada desaceleración en la acumulación de capital desde el año 2000 y el crecimiento históricamente bajo de la productividad multifactorial han limitado el crecimiento de la productividad. El dinamismo empresarial, que impulsa las ganancias de productividad al fomentar la entrada de nuevas empresas y su posterior crecimiento, así como la salida de las menos productivas, es débil en el ámbito internacional.

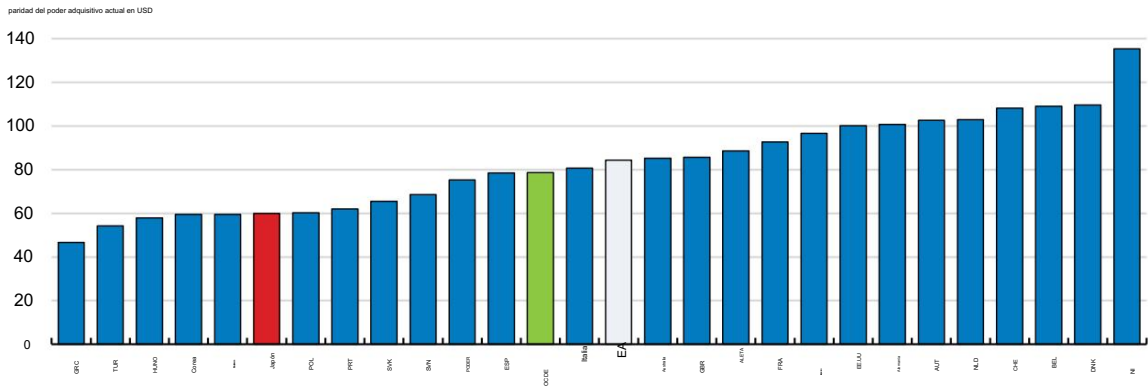
Los trámites administrativos para registrar y poner en marcha una empresa son complejos y pueden ser prolongados. La infraestructura pública digital está mejorando, pero se necesita una integración digital entre los servicios gubernamentales para permitir la plena aplicación del principio de "una sola vez". Esto garantizaría que las empresas no tengan que volver a presentar información ya compartida con otras autoridades. Adoptar el principio de "el silencio es consentimiento" puede mejorar la capacidad de las empresas para planificar con antelación, al reducir el tiempo necesario para completar los trámites de licencia.

Japón aspira a aumentar su stock de inversión extranjera directa (IED) entrante, el más bajo de la OCDE, en torno al 5% del PIB. Las regulaciones formales sobre la IED entrante no son demasiado restrictivas, pero la integración en los ecosistemas empresariales locales puede ser un desafío. Japón cuenta con ventanillas únicas que ayudan a los inversores extranjeros a navegar por el sistema regulatorio. Sin embargo, se enfrentan a limitaciones en su capacidad para Colaborar con otras autoridades de registro y concesión de licencias. Reforzar su función de coordinación simplificaría aún más los trámites administrativos para los inversores extranjeros.

El porcentaje de graduados en campos de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (CTIM) está por debajo del promedio de la OCDE, y es el más bajo de la OCDE para las mujeres, con un 3,6 %. La escasa representación de las mujeres en la educación y las trayectorias profesionales CTIM refleja en parte estereotipos. Se deben intensificar las diversas iniciativas para aumentar la concienciación y el interés en las carreras CTIM, incluyendo la tutoría eficaz de estudiantes femeninas en la educación secundaria superior y en los primeros años de la universidad.

Figura 4. La productividad laboral está por debajo del promedio de la OCDE.

PIB por hora trabajada, 2024 o fecha más reciente disponible



Nota: La OCDE y la EA (zona del euro) se refieren a un promedio ponderado.
Fuente: OCDE, base de datos de estadísticas de productividad.

StatLink 2<https://stat.link/cqnx15>

El apoyo financiero público a las PYME ha disminuido desde su pico durante la pandemia, pero se mantiene muy por encima de los niveles previos a la COVID-19, lo que podría afectar la asignación eficiente de recursos. Las generosas garantías de las Corporaciones de Garantía de Crédito, que cubren el riesgo crediticio de los bancos privados y están reaseguradas por la Corporación Financiera de Japón, de propiedad pública, reducen la exposición al riesgo de los bancos y pueden debilitar la evaluación crediticia. Mejorar el reparto del riesgo entre los bancos y las garantías públicas, por ejemplo, a través de

Unas tasas de cobertura de garantía más bajas contribuirían a fortalecer la evaluación de riesgos de los bancos.

El reducido tamaño del mercado de capital riesgo (VC) podría dificultar la entrada y el crecimiento de las empresas, incluso en el campo de la inteligencia artificial. La limitada disponibilidad de capital riesgo nacional en fases avanzadas suele impulsar a las empresas innovadoras a salir a bolsa antes de alcanzar la escala necesaria. Fortalecer las iniciativas de capital riesgo público, complementadas con opciones de financiación intermedia, puede apoyar el crecimiento de las empresas innovadoras antes de su salida a bolsa. Un sistema tributario para I+D más simplificado fomentaría su aprovechamiento por parte de las startups innovadoras, facilitando así su expansión.

PRINCIPALES HALLAZGOS	RECOMENDACIONES CLAVE
Garantizar la estabilidad y la sostenibilidad macroeconómicas.	
Se ha iniciado la normalización de la política monetaria y se prevé que la inflación converja hacia el objetivo del 2%.	Incrementar gradualmente el tipo de interés oficial, de forma flexible y basándose en datos.
La creciente interconexión entre los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) y el sistema financiero aumenta los riesgos de posibles efectos indirectos.	Continuar supervisando de cerca a las instituciones financieras no bancarias, subsanando las deficiencias de datos restantes, con miras a revisar el marco regulatorio, si fuera necesario.
Las recientes mejoras en la situación fiscal a corto plazo reflejan mayores ingresos tributarios en un contexto de elevado crecimiento nominal. Se prevé que el último presupuesto suplementario revierta estas mejoras y conduzca a un superávit primario en 2026.	Limitar el uso de presupuestos suplementarios a grandes crisis económicas y evaluarlos a posteriori.
La elevada relación deuda pública bruta/PIB, el aumento de los tipos de interés y el envejecimiento de la población plantean desafíos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo.	Elaborar un plan fiscal a mediano plazo claro y creíble para lograr superávits primarios cuanto antes y luego mantenerlos, respaldado por medidas específicas de gasto e impuestos, para que la relación deuda pública/PIB comience a disminuir.
Abordar los costes relacionados con el envejecimiento de la población es fundamental para mejorar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.	Vincular la edad de elegibilidad para la pensión con la esperanza de vida garantiza la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Aumentar aún más la tasa de copago de las personas mayores en la atención médica mediante una evaluación de recursos basada en un método eficaz para valorar los ingresos y el patrimonio.
Los ingresos fiscales se acercan al promedio de la OCDE, pero la proporción del consumo El impuesto al valor agregado es bajo. Diversas deducciones al impuesto sobre la renta personal reducen la base imponible.	Incrementar gradualmente los ingresos fiscales, incluso aumentando la tasa del impuesto al consumo en pequeños incrementos.
Cómo afrontar la escasez de mano de obra	
Japón ha impulsado significativamente el empleo de mujeres y trabajadores mayores, pero la proporción de mujeres y trabajadores mayores con empleos no regulares es alta, lo que refleja las responsabilidades de cuidado y la práctica de trasladar a los trabajadores mayores a empleos no regulares después de la jubilación obligatoria.	Incrementar aún más la participación de las mujeres en el mercado laboral y la calidad del empleo, rompiendo con el dualismo del mercado laboral y mejorando el acceso al cuidado infantil. Relajar la protección laboral para los trabajadores regulares y hacerla más transparente. para reducir la proporción de trabajadores no regulares.
La implementación del marco nacional de integración para migrantes a nivel local está retrasada.	Proporcionar más apoyo y herramientas para impulsar la integración de los migrantes, especialmente en zonas rurales y locales con menos conocimientos y recursos.
Las mujeres, las personas mayores y los trabajadores con contratos irregulares tienen menos probabilidades de participar en la formación de adultos.	Proporcionar formación específica para trabajadores vulnerables, incluidos cursos modulares vinculados a habilidades muy demandadas, especialmente las digitales.
Descarbonizar la economía	
Es necesario acelerar la implementación para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.	Mejorar aún más la gobernanza y la transparencia de las políticas climáticas, por ejemplo, mediante el establecimiento de un organismo asesor independiente en materia de clima.
La Visión de Transformación Verde (GX) 2040 incluye un apoyo de inversión inicial de 20 billones de yenes japoneses.	Garantizar la adicionalidad del apoyo financiero proporcionado en el marco de la Estrategia GX. mediante un proceso de selección competitivo y transparente y revisiones periódicas.
Aún faltan detalles sobre el próximo recargo GX y el sistema obligatorio de emisiones (ETS), lo que genera incertidumbre en materia de inversiones.	Determinar rápidamente el número total de exenciones, el tipo del recargo GX y sus futuras tendencias de ajuste, y considerar la posibilidad de incorporarlas a la legislación.
La expansión de la capacidad de energía renovable se ve frenada por los largos procesos de obtención de permisos y la limitada capacidad de la red eléctrica.	Simplificar aún más los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de concesión de permisos para las infraestructuras de energía eólica renovable, garantizando al mismo tiempo su eficacia.
Impulsar el crecimiento de la productividad	
La limitada integración digital en los servicios gubernamentales restringe el cumplimiento del principio de "una sola vez", obligando a las empresas a presentar información que ya se ha compartido. La falta de plazos para completar los trámites de licencias y permisos reduce la capacidad de las empresas para planificar con antelación.	Garantizar una integración digital perfecta de los servicios gubernamentales, por ejemplo, para Registro y concesión de licencias comerciales, y adoptar el principio de que "el silencio es consentimiento", cuando proceda.
Las ventanillas únicas para la inversión extranjera directa entrante se enfrentan a limitaciones en su capacidad para establecer contacto directo con otras autoridades de registro, concesión de licencias y cumplimiento normativo.	Se debe capacitar a las ventanillas únicas para la inversión extranjera directa entrante para que sirvan como interfaces más activas con las autoridades de registro, concesión de licencias y cumplimiento, con el fin de reducir la carga administrativa para los inversores extranjeros.
El porcentaje de graduados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) es bajo, especialmente entre las mujeres.	Promover una mayor participación en las disciplinas STEM, especialmente a través de iniciativas de mentoría dirigidas a estudiantes mujeres.
Las garantías públicas generalizadas y los préstamos subvencionados, que siguen siendo elevados, pueden ayudar a las empresas no viables a mantenerse a flote, retrasando así la reestructuración.	Mejorar el reparto de riesgos entre los bancos y el sector público, por ejemplo, reduciendo aún más el porcentaje de cobertura de las garantías de préstamos públicos.
La limitada disponibilidad de financiación para el crecimiento empuja a las empresas emergentes innovadoras de inteligencia artificial (IA) y tecnología avanzada a salir a bolsa prematuramente.	Reforzar las iniciativas públicas de capital riesgo, junto con las opciones de financiación intermedia, para ayudar a las empresas emergentes innovadoras de IA a crecer antes de salir a bolsa.

1

Información clave sobre políticas

Müge Adalet McGowan

Tetsuya Yoshioka

Tras tres décadas de inflación prácticamente nula, existen indicios de que la economía japonesa está transitando hacia un nuevo equilibrio en la dinámica de precios, crecimiento e ingresos. La inflación general de los precios al consumidor se mantuvo por encima del objetivo durante aproximadamente cuatro años, y los salarios nominales registraron su mayor crecimiento desde la década de 1990.

En general, el crecimiento económico se ha mantenido resistente a una sucesión de crisis y adversidades externas, a pesar de cierta volatilidad. Las políticas deben equilibrar el mantenimiento de la inflación en torno al objetivo del 2%, la garantía de la sostenibilidad fiscal y el impulso del crecimiento potencial, a pesar del envejecimiento de la población. En un contexto de crecientes costes del servicio de la deuda, debe priorizarse la reducción de la deuda pública.

Esto requiere abordar los costos relacionados con el envejecimiento de la población, aumentar los ingresos y reformar el marco fiscal. Mejorar la pertinencia y la orientación de la formación de adultos para garantizar una mayor participación de mujeres, personas mayores y trabajadores temporales, así como la flexibilidad de los mercados laborales para impulsar la oferta de mano de obra, contribuirían a contrarrestar los efectos demográficos adversos y a paliar la escasez de trabajadores. Es necesario garantizar que la futura fijación de precios del carbono ofrezca los incentivos adecuados para la reducción de emisiones y aumentar la eficiencia de los procedimientos de concesión de permisos para incrementar la participación de las energías renovables en la producción de electricidad, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

1.1. Las reformas deben continuar para aumentar la resiliencia ante las crisis.

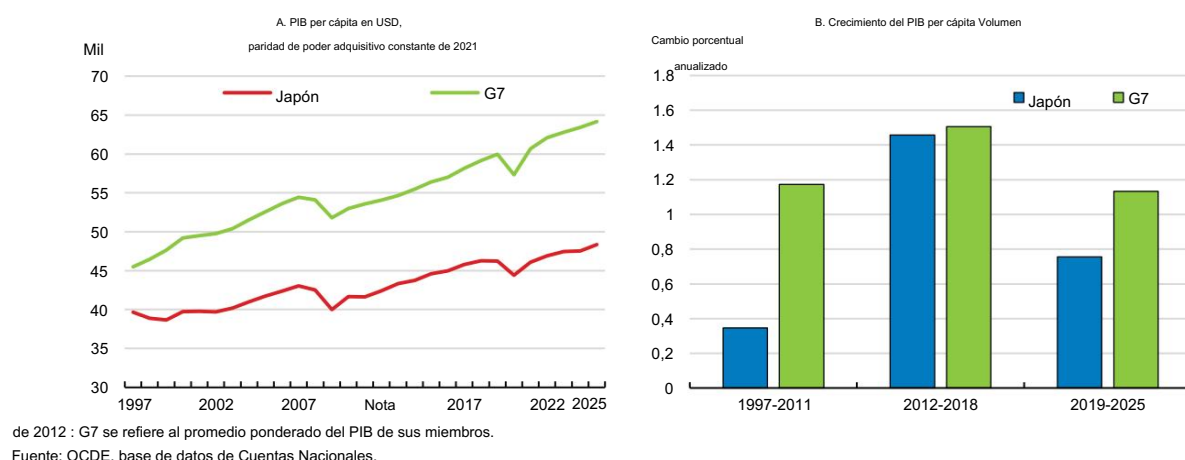
La economía japonesa se encuentra actualmente en un periodo de transición, pasando de tres décadas de inflación cercana a cero a una economía con precios y salarios en alza y un crecimiento impulsado por la demanda interna. Los crecientes indicios de que Japón está alcanzando un nuevo equilibrio, con una inflación mantenida en el objetivo del 2% del Banco de Japón, son una buena noticia.

El aumento de la inflación se debió inicialmente a perturbaciones globales, como la pandemia, las interrupciones en la cadena de suministro y el alza de los precios de las materias primas. Sin embargo, también se han intensificado las presiones inflacionarias subyacentes. La escasez de mano de obra, derivada del envejecimiento de la población y de los elevados beneficios empresariales, ha impulsado los salarios nominales, que han experimentado su mayor crecimiento desde la década de 1990, y la inversión privada. El incremento de las expectativas de inflación y la repercusión del aumento de los precios de los insumos en los precios de los productos también sugieren que es probable que la transición hacia este nuevo equilibrio sea sostenible.

Las políticas deberán calibrarse cuidadosamente para garantizar la resiliencia de la economía japonesa. Los pasos subsiguientes hacia la normalización de la política monetaria, con aumentos en la tasa de interés oficial y reducción de las compras de bonos del gobierno japonés por parte del Banco de Japón, generan oportunidades y desafíos. Las tasas de interés más altas pueden mejorar el funcionamiento del mercado financiero y la asignación de recursos, impulsando el crecimiento de la productividad (Capítulo 2), incluso al facilitar la salida de empresas de baja productividad. También pueden aumentar la rentabilidad de los bancos, aunque un aumento desproporcionado de las quiebras podría perjudicar sus balances. Las tasas más altas también incrementarán los costos del servicio de la deuda para el gobierno en términos nominales, dado el elevado ratio de deuda pública bruta respecto al PIB. A medida que la base de inversores debe ampliarse y las tasas a largo plazo han ido en aumento, la política fiscal debe ser prudente para garantizar la confianza de los inversores.

Es necesario complementar los esfuerzos de consolidación fiscal para crear reservas con reformas estructurales que contrarresten los desafíos que plantea la disminución y el envejecimiento de la población. Se proyecta que el número de personas mayores como porcentaje de la población activa alcance el 79 % en 2060, el segundo porcentaje más alto de la OCDE. El crecimiento del PIB per cápita se ha quedado rezagado con respecto a sus pares (Figura 1.1, Panel A), lo que refleja la disminución de la población en edad de trabajar y el lento crecimiento de la productividad (Capítulo 2). Gracias a las reformas estructurales, sobre todo aquellas que aumentaron la participación laboral de las mujeres y los trabajadores mayores, el crecimiento del ingreso per cápita se ha acelerado desde 2012 (Panel B). Si bien la pandemia interrumpió el progreso, se espera que el cambiante entorno económico interno genere un crecimiento sólido, a pesar del reciente aumento de los obstáculos externos, incluido el alza de los precios de la energía.

Figura 1.1. El PIB per cápita está por debajo del promedio del G7.



Enlace estadístico 2<https://stat.link/kxr401>

Se necesitan reformas adicionales para impulsar aún más el crecimiento potencial. En los últimos años, Japón ha aumentado sus compromisos de gasto en políticas relacionadas con la infancia y el medio ambiente, diseñadas para elevar las tasas de fertilidad y cumplir con los objetivos climáticos. Las áreas estratégicas de inversión del nuevo gobierno incluyen la digitalización, la inteligencia artificial, los semiconductores y la defensa (Recuadro 1.1). Será importante priorizar las iniciativas que impulsan el crecimiento.

reformas, como aumentar la participación y la flexibilidad en el mercado laboral, facilitar la movilidad laboral para abordar la escasez de mano de obra e impulsar el crecimiento de la productividad (Capítulo 2).

Recuadro 1.1. Prioridades de la reforma gubernamental

La agenda política del gobierno, descrita en las Medidas Económicas Integrales para Construir una Economía Japonesa Fuerte, consta de tres pilares:

1. Garantizar la vida cotidiana y abordar el aumento de precios: Las políticas incluyen medidas para contrarrestar la inflación energética (eliminación de los tipos impositivos provisionales sobre la gasolina y el diésel en 2025-26) y subvenciones y ayudas específicas a los gobiernos locales para que puedan adaptar los programas a las necesidades locales. Las deducciones básicas del impuesto sobre la renta se han incrementado en consonancia con la inflación, y se proporciona una ayuda única de 20 000 yenes para la crianza de los hijos. Además, se implementará apoyo a las PYME para mejorar la productividad, aumentar los salarios y llevar a cabo la sucesión empresarial y las fusiones (por ejemplo, la promoción de la repercusión de precios, la inversión en ahorro de mano de obra) y apoyo a las industrias clave en las áreas locales para impulsar el potencial de crecimiento regional.
2. Construir una economía sólida mediante inversiones estratégicas para mejorar la resiliencia frente a posibles crisis e inversiones orientadas al crecimiento: Esto incluye impulsar la seguridad económica y fortalecer las cadenas de suministro, a través de asociaciones público-privadas en 17 sectores estratégicos (IA y semiconductores, construcción naval, tecnología cuántica, biología sintética y biotecnología, aeroespacial, digital y ciberseguridad, contenido (animación, música, películas, etc.), tecnología alimentaria, seguridad de recursos y energía y transformación verde (GX), prevención de desastres y resiliencia nacional, descubrimiento de fármacos y medicina avanzada, energía de fusión, minerales críticos y piezas/ materiales, logística portuaria, industria de defensa, información y comunicaciones y sector marítimo y oceánico).
3. Fortalecimiento de la capacidad de defensa y el poder diplomático: El objetivo es reforzar las capacidades de defensa para responder a un entorno de seguridad cambiante, mejorar la cooperación internacional e impulsar la resiliencia nacional, por ejemplo, en materia de prevención y reconstrucción ante desastres, así como en lo que respecta a la estabilidad energética y el suministro de bienes. Se buscará, por ejemplo, ampliar los acuerdos internacionales, como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

El presupuesto suplementario del año fiscal 2025 asignó fondos para todos los pilares, incluyendo el adelanto de los planes para aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB de 2022 al año fiscal 2025 desde el año fiscal 2027. La sede de la Estrategia de Crecimiento de Japón se estableció en noviembre de 2025. Las políticas también apuntarán a abordar ocho cuestiones intersectoriales (convertirse en una nación impulsada por la tecnología y fortalecer la competitividad, desarrollo de recursos humanos, startups, liberar el potencial a través de las finanzas, reforma del mercado laboral, reducir las cargas del cuidado, cuidado infantil, mejorar el entorno para aumentos salariales y ciberseguridad). Tras la formulación de hojas de ruta para 17 sectores estratégicos por parte de los ministerios pertinentes, incluyendo detalles, cronograma y monto objetivo de las inversiones, se espera que se publique una Estrategia de Crecimiento en el verano de 2026. Se planean medidas, como la presupuestación plurianual, para aumentar la certeza de la inversión. Se establecerá una Agencia de Gestión de Desastres en 2026. Otro objetivo importante es construir un sistema de seguridad social para todas las generaciones. Se estudiarán reformas para reducir las primas de los seguros de salud y de cuidados a largo plazo (por ejemplo, los gastos de bolsillo para medicamentos sin receta, la revisión de los precios de los fármacos y el fortalecimiento de la capacidad de pago de los copagos), teniendo en cuenta la carga que supone para las personas con enfermedades crónicas o bajos ingresos. Se ha iniciado un proceso de consulta para diseñar un sistema de crédito fiscal reembolsable para hogares de ingresos bajos y medios.

Nota: Este recuadro no es exhaustivo y refleja la situación previa a las elecciones para la Cámara Baja del Parlamento que se celebrarán el 8 de febrero.

Fuente: Gobierno de Japón (2025), [Medidas económicas integrales para construir una "economía japonesa fuerte"](#).

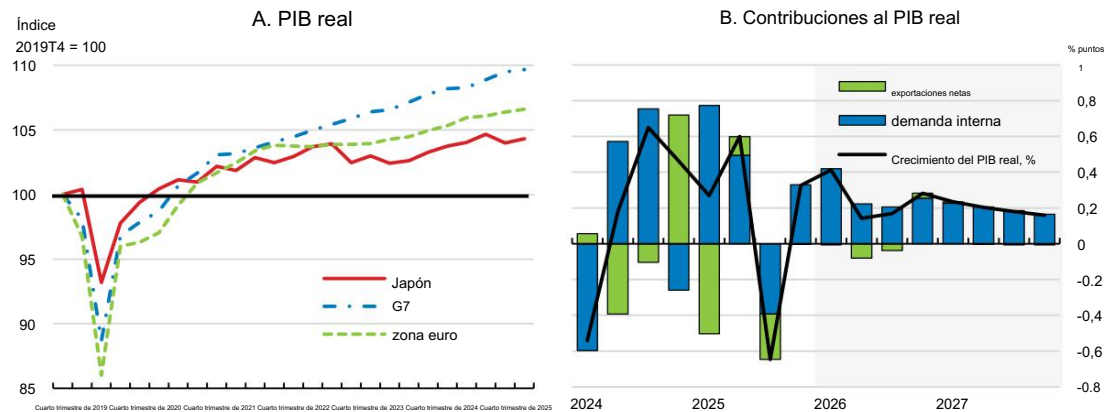
En este contexto, la Sección 1 expone los recientes acontecimientos macroeconómicos y las previsiones. Las Secciones 2 y 3 analizan las políticas monetarias y financieras, respectivamente. La Sección 4 se centra en la evolución de la política fiscal y los retos de la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Las Secciones 5 y 6 abordan dos cuestiones estructurales: la escasez de mano de obra y la mitigación y adaptación al cambio climático, respectivamente.

1.2. Se prevé que la economía crezca moderadamente a pesar de los obstáculos externos.

El PIB real creció con solidez un 1,2 % en 2025. Si bien el crecimiento ha sido inferior al promedio del G7, ha superado el potencial de producción (Figura 1.2, Panel A). Aunque las exportaciones netas han fluctuado debido a la anticipación de la entrada en vigor de aranceles más altos, la demanda interna ha sido el principal motor del crecimiento (Panel B). El número de personas empleadas ha ido en aumento y la tasa de desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos, en un 2,7 % en marzo.

Los indicadores mensuales, como la producción industrial y las exportaciones, apuntan a un buen comienzo de 2026, que se verá parcialmente afectado por el conflicto en Oriente Medio.

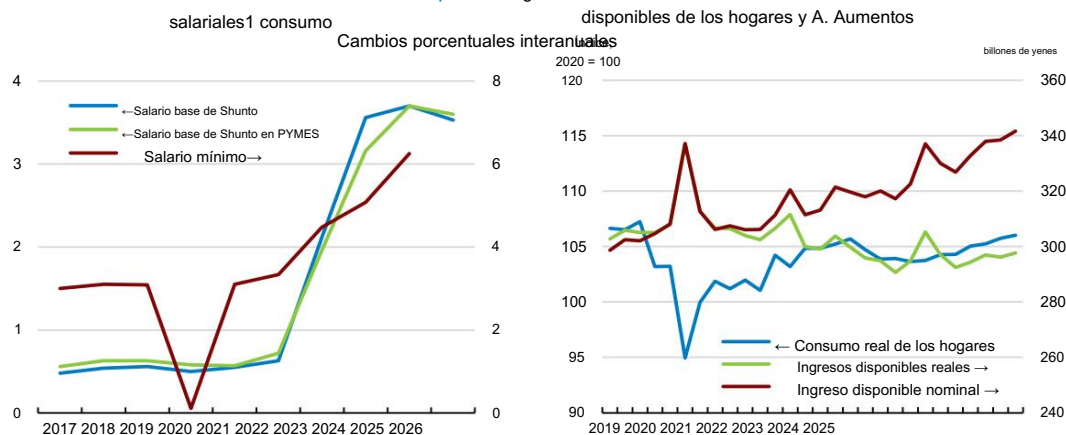
Figura 1.2. La demanda interna ha sido el principal motor del crecimiento.



StatLink 2 <https://stat.link/k908m2>

El crecimiento de los salarios nominales ha cobrado impulso, reflejando la escasez de mano de obra, los precios más altos y las sólidas ganancias corporativas. La tasa promedio de aumento salarial nominal acordada por los sindicatos fue de un históricamente alto 5,25% en las negociaciones salariales de Shunto de 2025. La tasa promedio de aumento del salario base, entre los sindicatos para los que se pueden identificar aumentos, fue del 3,7%, con un crecimiento salarial que se extendió a las PYME (Figura 1.3, Panel A). Los resultados preliminares para las negociaciones salariales de 2026 implican un aumento del 5,1% para los salarios totales y del 3,5% para el salario base. Los salarios también se han visto respaldados por salarios mínimos más altos, que aumentaron en 66 JPY con respecto al año anterior hasta 1121 JPY en el año fiscal 2025. Sin embargo, el consumo privado comenzó a repuntar solo recientemente, ya que el crecimiento de los salarios nominales fue del 2,3% en 2025 y la alta inflación limitó el crecimiento de los salarios reales y la renta disponible (Panel B).

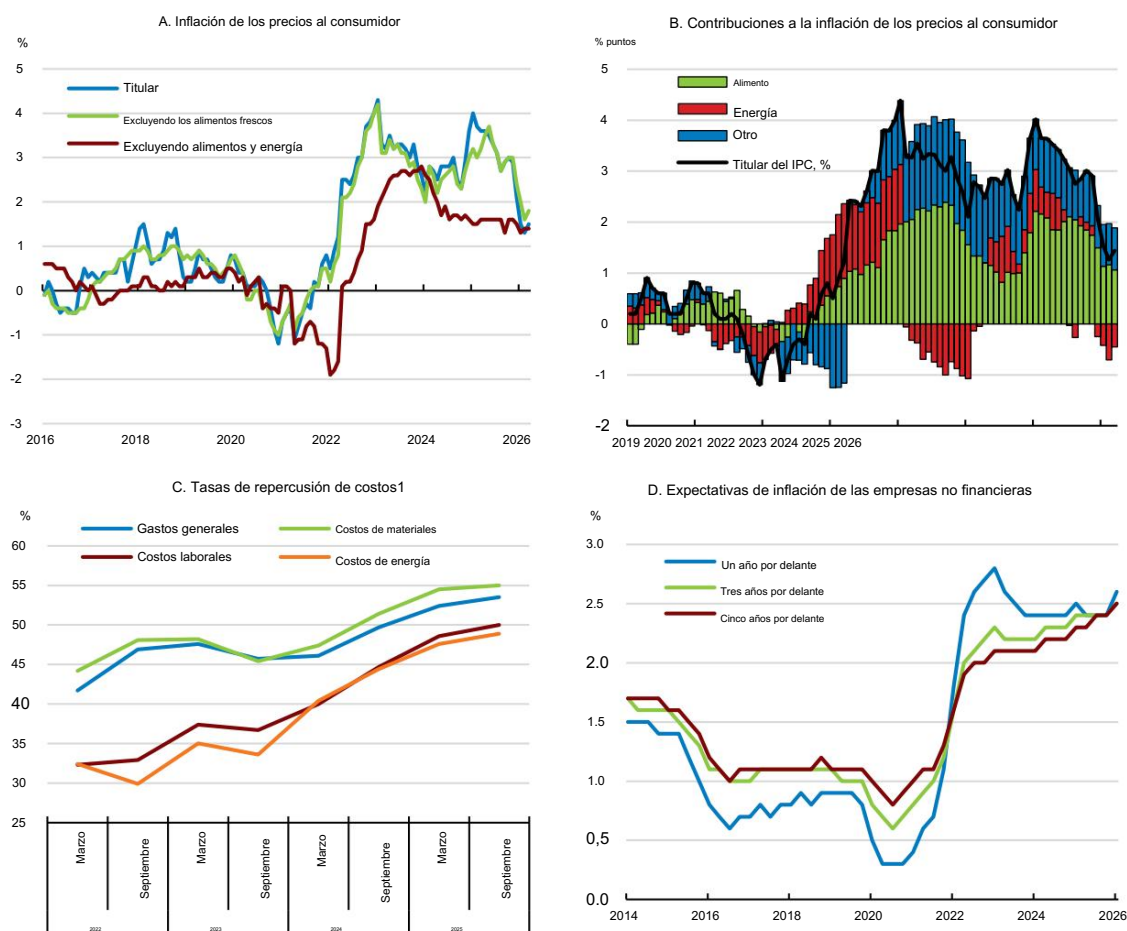
Figura 1.3. El crecimiento de los salarios nominales ha cobrado impulso B. Ingresos



StatLink 2 <https://stat.link/vpcire>

La inflación general de los precios al consumidor y la inflación excluyendo los alimentos frescos se mantuvieron por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón entre abril de 2022 y diciembre de 2025 (Figura 1.4, Panel A). El principal impulsor de la inflación general del 3,2% en 2025 fue la alta inflación de los precios de los alimentos, en particular del arroz, impulsada por factores de oferta temporales que ahora se están atenuando (Panel B). Los efectos base y los factores temporales, como los subsidios a la energía, redujeron la inflación general a principios de 2026. Se espera que el aumento de los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio eleve la inflación en el segundo trimestre de 2026, a pesar de que Japón introdujo subsidios para limitar los precios minoristas de la gasolina a 170 yenes por litro. Otros indicadores relacionados con el comportamiento y las expectativas de las empresas también sugieren que la inflación convergerá hacia el objetivo en 2026-27. Los cambios en la dinámica de salarios y precios han afectado la capacidad y la voluntad de las empresas para trasladar el aumento de los costos a las empresas clientes (Panel C). Las medidas basadas en encuestas de las expectativas de inflación de las empresas se han estabilizado por encima del objetivo del 2% (Panel D).

Figura 1.4. La inflación general ha disminuido recientemente, pero las expectativas de inflación se mantienen por encima del objetivo.



Nota: 1. Encuesta realizada entre empresas que operan en el sector B2B (de empresa a empresa).

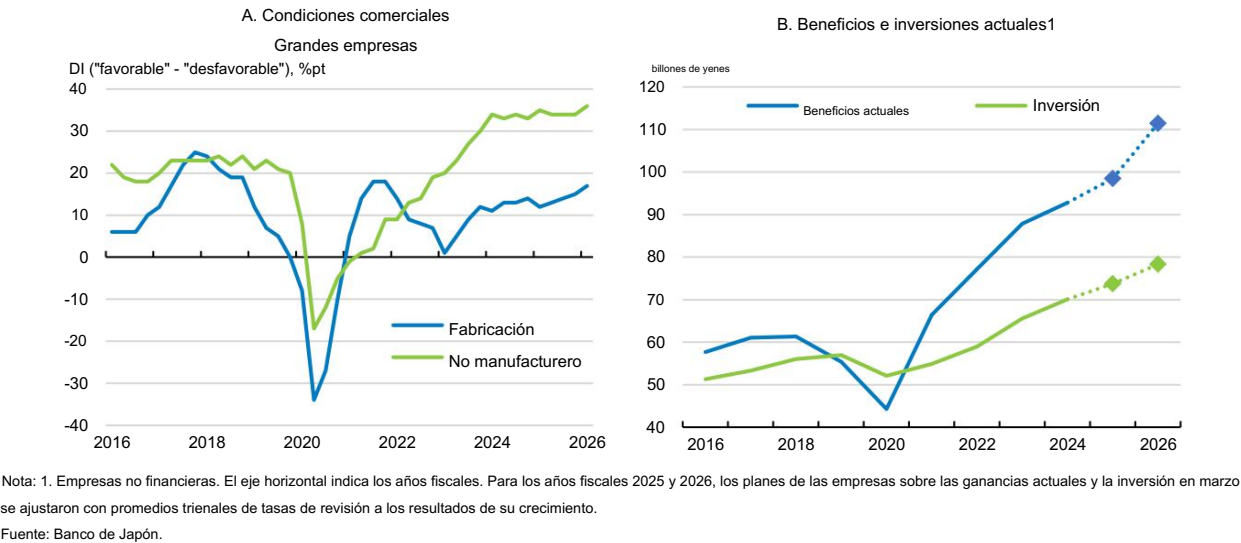
Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones; Agencia para las Pymes; Banco de Japón; y cálculos de la OCDE.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/bupnwl>

A pesar de la incertidumbre y los aranceles más altos, el optimismo empresarial se mantiene, especialmente entre las grandes empresas del sector no manufacturero (Figura 1.5, Panel A). Los elevados beneficios empresariales han impulsado el crecimiento salarial y la inversión empresarial, tendencia que se espera se mantenga en el ejercicio fiscal de 2026 (Panel B). La encuesta Tankan de marzo del Banco de Japón apunta a la continuidad de los planes de inversión, con un incremento interanual del 3,0% para todas las grandes empresas, lo que refleja en parte la escasez de mano de obra. La producción industrial ha sido volátil, pero las perspectivas siguen siendo positivas. No obstante, los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre global sobre la inversión persisten.

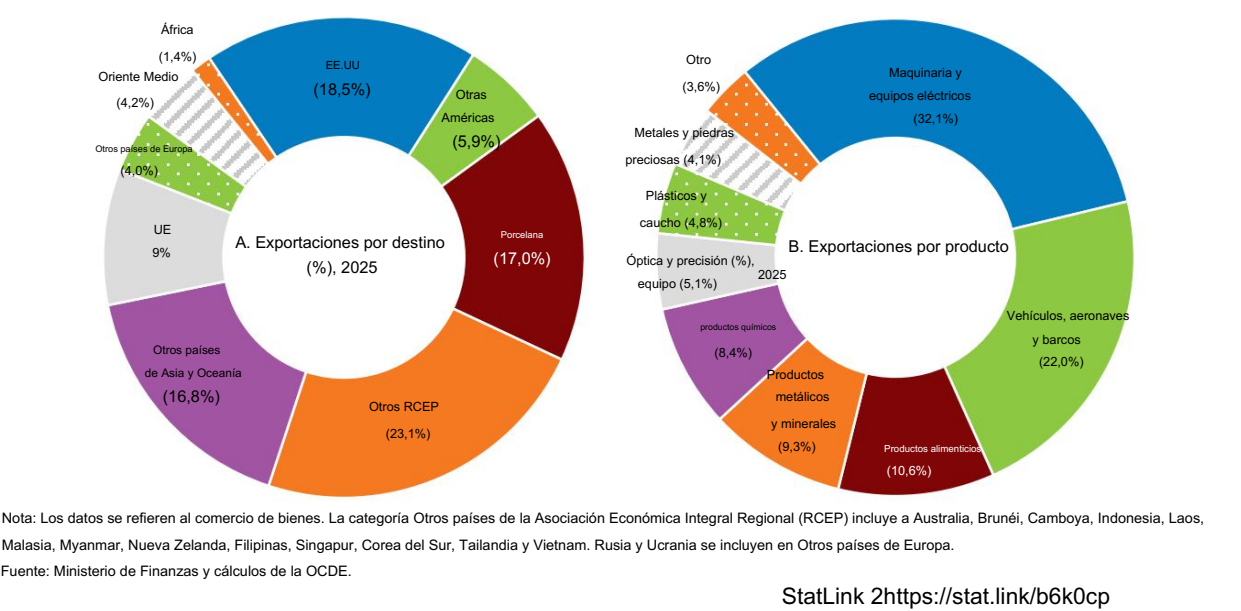
Japón importa alrededor del 90% de su petróleo crudo de Oriente Medio. Si bien Japón mantiene abundantes reservas estratégicas equivalentes a unos siete meses de consumo al 28 de abril de 2026 y solo alrededor del 10% de sus importaciones de GNL provienen de Oriente Medio, los elevados precios del petróleo y el gas podrían mermar las ganancias de los importadores japoneses y frenar la demanda de los consumidores.

Figura 1.5. Los beneficios corporativos respaldan la inversión empresarial.



Estados Unidos y China representan cada uno alrededor del 20 % de las exportaciones de bienes de Japón, mientras que el transporte constituye el 22 % (Figura 1.6). Desde la pandemia, el tipo de cambio real efectivo de Japón se depreció significativamente. Entre 2020 y 2022, esto pudo deberse a una perturbación negativa en la relación real de intercambio (Figura 1.7, Panel A), ya que las restricciones de la oferta elevaron los precios de importación de energía y materias primas.

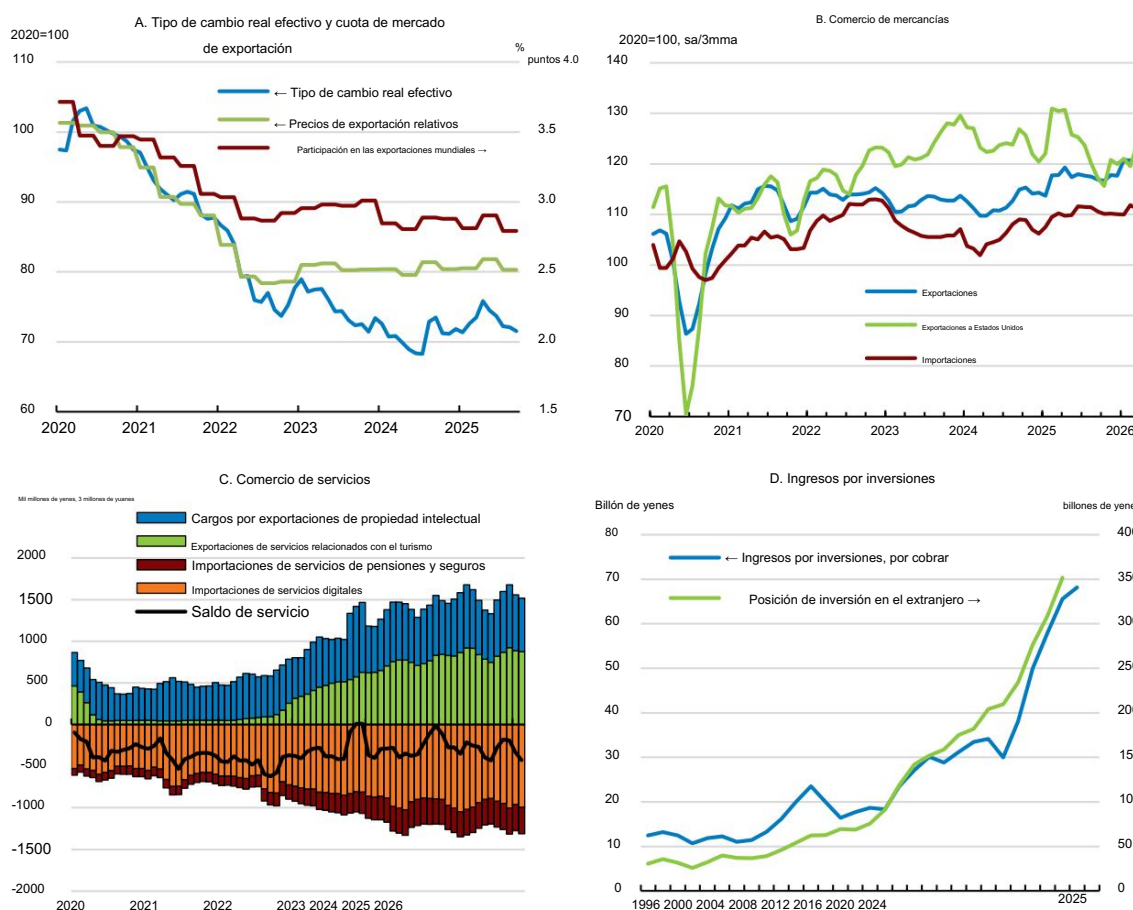
Figura 1.6. Estados Unidos y China son los principales destinos de exportación.



La tasa de transmisión del tipo de cambio a la inflación de los precios al consumidor aumentó entre mediados de la década de 2000 y la de 2020, lo que refleja una mayor penetración de las importaciones (Yagi et al., 2022[1]). La depreciación del yen apoyó la rentabilidad de algunas empresas exportadoras, en particular aquellas que no dependen en gran medida de insumos importados, y el turismo receptivo, mientras que

El aumento de los precios de importación incrementó la carga sobre el sector importador. Sin embargo, la combinación de factores cíclicos y estructurales (perturbaciones de la demanda relacionadas con la pandemia, creciente competencia, interrupciones en la cadena de suministro y reestructuración) contribuyó a la pérdida de cuota de mercado de exportación, a pesar de la depreciación del yen. Diversos factores, como los diferenciales de tipos de interés, las operaciones de carry trade y la volatilidad en los mercados globales, influyeron en la evolución del tipo de cambio desde 2022. La cuota de mercado de exportación de Japón se estabilizó entre 2022 y 2025, lo que podría reflejar las perturbaciones derivadas del fin de la pandemia, la depreciación del yen y el aumento de las exportaciones de servicios (Figura 1.7, Panel A).

Figura 1.7. El sector exterior se mantiene resiliente a pesar de los obstáculos que enfrentan las exportaciones de bienes.



Nota: Panel C: Los servicios digitales incluyen servicios de consultoría profesional y de gestión, telecomunicaciones, servicios informáticos y de información, así como cargos por el uso de derechos de autor. Los servicios relacionados con el turismo incluyen viajes y transporte de pasajeros. Algunas categorías se omiten y los componentes no suman el total de servicios.

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas y Banco de Japón.

Enlace estadístico [2https://stat.link/rcmgvi](https://stat.link/rcmgvi)

Los cambios en los aranceles estadounidenses (un arancel fijo del 10 % en abril de 2025, del 15 % en agosto de 2025 y del 10 % en febrero de 2026) generaron cierta anticipación y corrección de las exportaciones (Panel B). Las exportaciones de bienes reales a Estados Unidos registraron un crecimiento trimestral del 8,4 % en el primer trimestre de 2025, antes de contraerse en el segundo y tercer trimestres, seguido de un repunte del 2,4 % y del 3,2 % en el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, respectivamente. Al mismo tiempo, las exportaciones a destinos fuera de Estados Unidos, especialmente Asia excluyendo China, aumentaron, lo que subraya la importancia de la diversificación comercial. A pesar de un turismo receptivo sólido, la balanza comercial de servicios sigue siendo ligeramente negativa, ya que las importaciones de servicios relacionados con lo digital se han mantenido en niveles altos (Panel C). Gracias a la depreciación del yen, el saldo de renta primaria, principalmente los ingresos por inversiones, ha aumentado hasta el 6,3% del PIB en 2025 (Panel D), contribuyendo al incremento de la cuenta corriente.

Si bien las industrias japonesas han participado cada vez más en las cadenas de valor globales, las crecientes tensiones geopolíticas y los aranceles más elevados están impulsando algunos cambios hacia la relocalización, la producción en países cercanos y la producción local. Los modelos de la OCDE muestran que un escenario de localización de la cadena de suministro reduciría el comercio, el PIB y la resiliencia ante las crisis tanto a nivel mundial como en Japón (OCDE, 2025[2]). A medida que los países consideran cambios estratégicos en respuesta a las vulnerabilidades de las cadenas de suministro, mantener mercados abiertos será fundamental para equilibrar la seguridad económica con el crecimiento sostenido (OCDE, 2025[3]). Por lo tanto, es positivo que Japón haya continuado promoviendo asociaciones comerciales internacionales bilaterales y multilaterales basadas en normas, con una cobertura de los acuerdos comerciales de Japón que se expandió de alrededor del 20 % en 2018 a alrededor del 80 % en 2024 (Oficina del Gabinete, 2025[4]). Al mismo tiempo, en 2024, Japón ha añadido componentes electrónicos avanzados a los bienes críticos designados en virtud de la Ley de Promoción de la Seguridad Económica de 2022, cuyo suministro estable debe garantizarse. Además, la Estrategia para la Industria de Semiconductores y Digital busca aumentar el desarrollo y la producción nacional de semiconductores avanzados, con el objetivo de incrementar las ventas de semiconductores de producción nacional en más de 15 billones de yenes para 2030 (OCDE, 2025[3]). En este contexto, Japón apoyó la creación de una nueva empresa de chips (Rapidus Corp) con fondos públicos de 1,7 billones de yenes.

Se prevé que el PIB real se modere ligeramente, pero continúe expandiéndose a un ritmo moderado y creciendo por encima de su potencial en un 0,7 % y un 0,9 % en 2026 y 2027, respectivamente (Tabla 1.1). A pesar de los obstáculos derivados del aumento del costo de las importaciones de energía, el crecimiento estará impulsado principalmente por la demanda interna. Se prevé que la inversión empresarial se vea respaldada por las sólidas ganancias corporativas y los subsidios gubernamentales. Las elevadas ganancias corporativas permitirán un crecimiento salarial continuo, lo que, junto con la moderación de la inflación, impulsará el consumo privado. El paquete de estímulo fiscal (que se detalla a continuación) respaldará el consumo público y la inversión en 2026. Se espera que el aumento de los precios de la energía genere mayores presiones inflacionarias a corto plazo, pero se prevé que la inflación general de los precios al consumidor vuelva al objetivo del 2 % en 2026-27.

Tabla 1.1. Indicadores y proyecciones macroeconómicas

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Precios actuales (billones de yenes)	Variaciones porcentuales, volumen (precios de 2020)				
PIB a precios de mercado	584.9	0,7	- 0,2	1.2	0,7	0,9
Consumo privado	319.0	0.1	- 0,6	1.5	0,7	0,6
Consumo gubernamental	121.1	- 0,2	1.6	1.0	1.9	1.8
Formación bruta de capital fijo	162.8	1.9	- 0,6	0,9	1.3	0,7
Demanda interna final	603.0	0,5	- 0,2	1.2	1.1	0,9
Edificio de existencias ¹	2.8	- 0,5	- 0,1	0,2	- 0,2	0.0
demanda interna total	605.8	0.0	- 0,2	1.5	1.0	0,9
Exportaciones de bienes y servicios	120.8	3.1	0,9	2.9	0,3	2.1
Importaciones de bienes y servicios	141,6	- 0,4	0,9	4.0	1.3	2.2
exportaciones netas ¹	- 20.9	0,7	0.0	- 0,3	- 0,2	0.0
Documentos de memorándum						
PIB potencial	—	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5
deflactor del PIB	—	4.6	3.2	3.4	1.8	2.1
Índice de precios al consumidor ²	—	3.3	2.7	3.2	2.0	1.9
Índice de precios al consumidor subyacente ³	—	2.7	2.0	1.7	1.6	2.0
Tasa de desempleo (% de la población activa)	—	2.6	2.5	2.5	2.7	2.7
Tasa de ahorro de los hogares, neta (% de la renta disponible)	—	- 0,9	0,7	- 0.0	1.1	2.1
Saldo financiero del gobierno general (% del PIB)	—	- 2.3	- 1.7	- 1.0	- 1.8	- 1.1
Deuda bruta del gobierno general (% del PIB)	—	218.1	205.6	197,4	194.2	189,7
Saldo por cuenta corriente (% del PIB)	—	3.7	4.6	4.8	5.0	5.1

1. Contribuciones a las variaciones del PIB real, importe real en la primera columna.
2. Calculado como la suma de los índices trimestrales ajustados estacionalmente para cada año.
3. Índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas.

Los principales riesgos son los altos precios de la energía, las posibles interrupciones en las cadenas de suministro y una demanda externa menor de lo esperado debido a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en la política comercial. Si bien Japón ha reducido su dependencia de proveedores únicos, sigue dependiendo en gran medida de China para algunos minerales de tierras raras. Las fluctuaciones bruscas en los precios de los bonos y las acciones podrían desestabilizar los mercados financieros y perjudicar los balances de las instituciones financieras y del gobierno. El carry trade con yenes (endeudamiento en yenes a bajo costo para invertir en otras monedas y activos que ofrecen mayores rendimientos) podría aumentar la volatilidad. Una pérdida de confianza en la sostenibilidad fiscal de Japón y un aumento en la prima de riesgo soberano también podrían afectar negativamente al sector financiero y a la economía real. Una reconstrucción más rápida de lo esperado de las cadenas de suministro globales y el desarrollo de nuevos canales de exportación podrían impulsar aún más las exportaciones y respaldar el crecimiento. Además, otras amenazas de menor probabilidad para las perspectivas podrían impactar negativamente el crecimiento (Tabla 1.2).

Tabla 1.2. Acontecimientos que podrían provocar cambios importantes en las perspectivas.

Choque	Posible impacto
Aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas	Interrupciones en la cadena de suministro y una contracción de las exportaciones y la inversión empresarial.
Mayor frecuencia y gravedad de los desastres naturales	Pérdida significativa de vidas, interrupción de la actividad económica y altos costos de reconstrucción.
Ciberataques que afectan a servicios clave	Las interrupciones en la infraestructura, el sector financiero y los servicios gubernamentales clave provocan inestabilidad financiera.

1.3. La política monetaria debería seguir normalizándose a un ritmo gradual.

Ante la significativa evolución hacia un ciclo virtuoso de precios y salarios, el aumento de los beneficios empresariales, una mayor correlación entre los precios de los insumos y los productos, y un incremento de las expectativas inflacionarias, se ha iniciado la normalización de la política monetaria. La dinámica cambiante de los precios, junto con la escasez de mano de obra, ha propiciado un sólido aumento de los salarios nominales y la inversión privada. En consecuencia, a pesar de cierta volatilidad, la economía japonesa ha demostrado resiliencia ante diversas crisis y se prevé que el crecimiento se mantenga por encima de su potencial en 2026-27. El Banco de Japón (BoJ) ha elevado gradualmente la tasa de interés oficial, que alcanzó el 0,75 % en diciembre de 2025, y ha comenzado a reducir el tamaño de su balance (Tabla 1.3). Un balance más pequeño proporciona mayor margen de maniobra en materia de política monetaria, disminuye los riesgos de pérdidas financieras para el BoJ y mejora el funcionamiento del mercado de bonos del gobierno japonés (JGB).

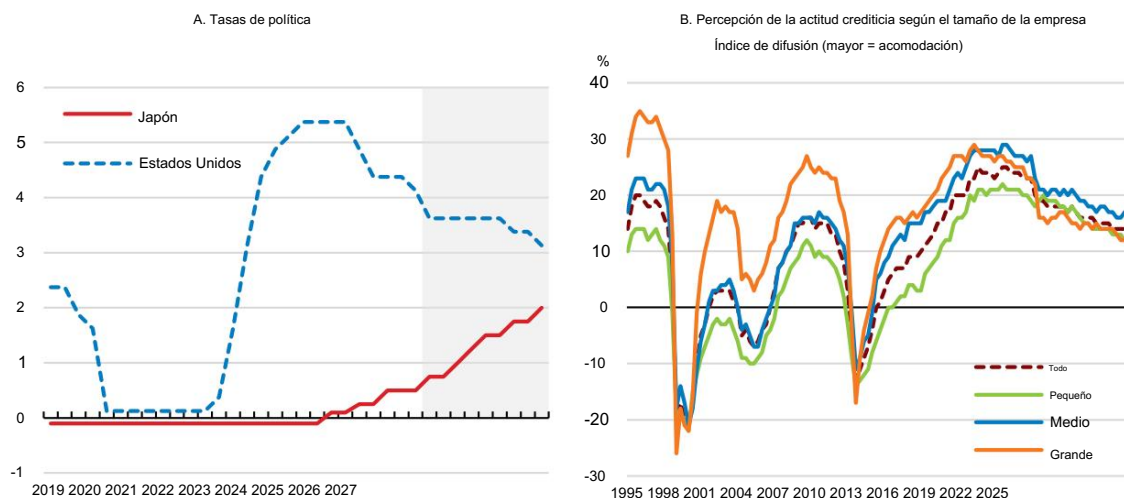
Tabla 1.3. Pasos hacia la normalización de la política monetaria

	Elementos principales
Marzo de 2024	Poner fin al marco de control de la curva de rendimiento y a la política de tipos de interés negativos, elevando el tipo de interés oficial del -0,1% al 0,1%. Suspenda la compra de fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos de inversión inmobiliaria japoneses (J-REIT), reduzca gradualmente la compra de papel comercial y bonos corporativos, y suspenda las compras después de un año.
Julio de 2024	Aumentar el tipo de interés a corto plazo al 0,25% y un plan para reducir las tenencias de bonos del gobierno japonés (JGB) (reducción de las compras mensuales de JGB en unos 400.000 millones de yenes cada trimestre, lo que resultará en una compra mensual de unos 3 billones de yenes para el primer trimestre de 2026 y una reducción de aproximadamente el 7-8% en las tenencias de JGB para marzo de 2026).
Enero de 2025	Aumentar el tipo de interés a corto plazo del 0,25% al 0,5%.
Junio de 2025	Annunciar una reducción más gradual del ritmo de compra de bonos del gobierno japonés (JGB) a partir de abril de 2026, hasta alcanzar aproximadamente 200.000 millones de yenes por trimestre, lo que resultará en una compra mensual de aproximadamente 2 billones de yenes para el primer trimestre de 2027.
Septiembre de 2025	Annuncian un plan para vender ETF y J-REIT a un ritmo de 330.000 millones de yenes y 5.000 millones de yenes al año, respectivamente.
Diciembre de 2025	Aumentar el tipo de interés a corto plazo del 0,5% al 0,75%.

Las condiciones monetarias y financieras siguen siendo acomodaticias (Figura 1.8). El rango de las estimaciones del tipo de interés natural es de -0,9% a 0,5% (Banco de Japón, 2026[5]). Si bien estas estimaciones siguen siendo muy inciertas, suponiendo una inflación del 2%, el tipo de interés oficial actual se situaría cerca del extremo inferior del rango del tipo neutral nominal. Se prevé que el tipo de interés oficial a corto plazo alcance el 2% a finales de 2027. La elevada incertidumbre, más recientemente debido al conflicto en Oriente Medio, exige una estrecha vigilancia y un ritmo de política monetaria basado en datos.

Normalización. La OCDE prevé que la inflación convergerá hacia el objetivo del 2 % en 2026-27 y que el crecimiento del PIB se mantendrá sólido, impulsado por una fuerte demanda interna. Por lo tanto, dadas las proyecciones de inflación, los indicios de un crecimiento salarial sostenido y la reducción de la brecha de producción, el tipo de interés oficial debería seguir incrementándose gradualmente para evitar sobrepasarlo.

Figura 1.8. Las condiciones monetarias y financieras se han mantenido acomodaticias.



Nota: Panel B: Un valor positivo indica alojamiento.

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas y Banco de Japón.

StatLink 2 <https://stat.link/bvtamk>

El enfoque del Banco de Japón para reducir sus compras de bonos del gobierno japonés y su comunicación clara son bienvenidos. Rendimientos a largo plazo han aumentado (Figura 1.9, Panel A), reflejando en parte los aumentos de las tasas de interés y los cambios en los participantes del mercado.

Expectativas de futuras subidas. La continua reducción de las compras de JGB ha mejorado el funcionamiento del mercado (Panel B), pero persisten las incertidumbres y los riesgos. Se espera que las tenencias de JGB del BoJ se mantengan en un nivel alto, dado el elevado stock (Panel C), lo que implica que las compras probablemente seguirán afectando la forma de la curva de rendimiento (Nakazawa y Osada, 2024[6]). La magnitud de la reducción del balance en Japón es modesta en comparación con la de otros bancos centrales, en línea con los cambios graduales en el tipo de interés oficial (FMI, 2025[7]). El plan de reducción gradual sigue siendo flexible, como lo demuestra el anuncio de junio de 2025 sobre el ritmo de reducción en respuesta a la evolución del mercado. En adelante, el BoJ debería estar preparado para modificar el ritmo y el perfil de vencimiento de sus compras en caso de perturbaciones en las condiciones de los mercados financieros y de bonos.

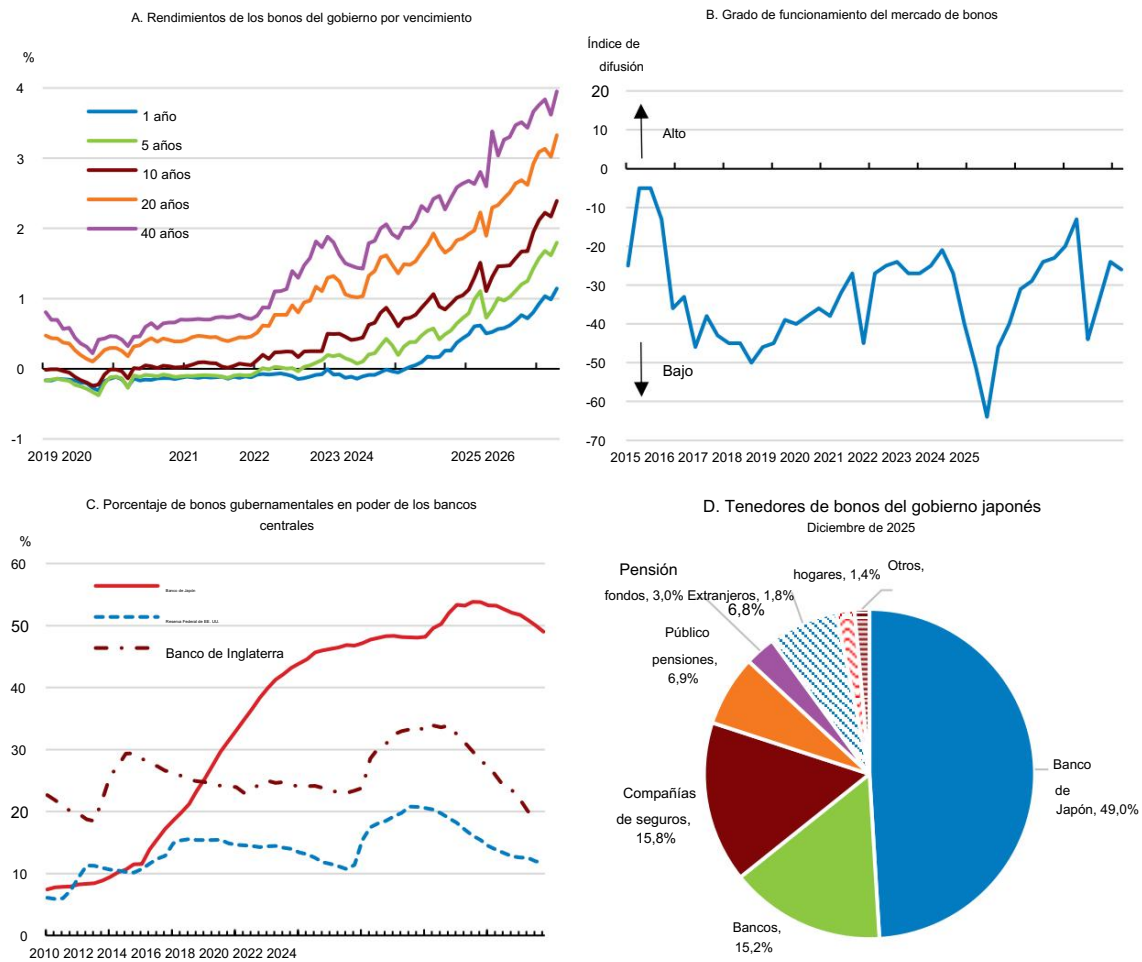
Las autoridades están analizando los riesgos potenciales derivados de la absorción de la emisión de JGB y se reúnen con los participantes del mercado, lo cual debería continuar. En la última década, la proporción de JGB en manos de inversores institucionales (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones) ha disminuido debido a la compresión de los tipos de interés y la baja liquidez del mercado (Figura 1.9, Panel D). Por ejemplo, la proporción de JGB en manos de los bancos se redujo del 41,9 % en marzo de 2013 al 15,2 % en diciembre de 2025. Actualmente se está considerando ampliar la base de inversores minoristas, actualmente limitada a inversores individuales, a entidades sin ánimo de lucro y empresas no cotizadas, con el objetivo de emitir dichos bonos para enero de 2027.

Un análisis de la política monetaria realizado en 2024 reveló que, si bien la flexibilización monetaria a gran escala desde 2013 tuvo un impacto positivo general en la economía japonesa, se observaron algunos efectos secundarios en el funcionamiento del mercado de bonos del gobierno japonés (JGB) y en la rentabilidad de las instituciones financieras. Sin embargo, no existen pruebas contundentes de un impacto adverso en la intermediación financiera (BoJ, 2024[8]). El efecto en la economía fue menor y más lento de lo esperado, lo que refleja, en parte, que el efecto sobre las expectativas de inflación no fue suficiente para anclar la inflación en el 2 %.

La revisión también destaca el riesgo de que los efectos secundarios negativos se materialicen con cierto retraso, ya que el funcionamiento del mercado de JGB podría no recuperarse por completo, dado el gran volumen de tenencias de JGB del Banco de Japón. Intermediación financiera

La situación también podría deteriorarse debido a la exposición de los bancos a prestatarios con una capacidad de adaptación relativamente baja ante una disminución de los ingresos o un aumento de los tipos de interés.

Figura 1.9. Es necesario vigilar de cerca las condiciones del mercado de bonos.



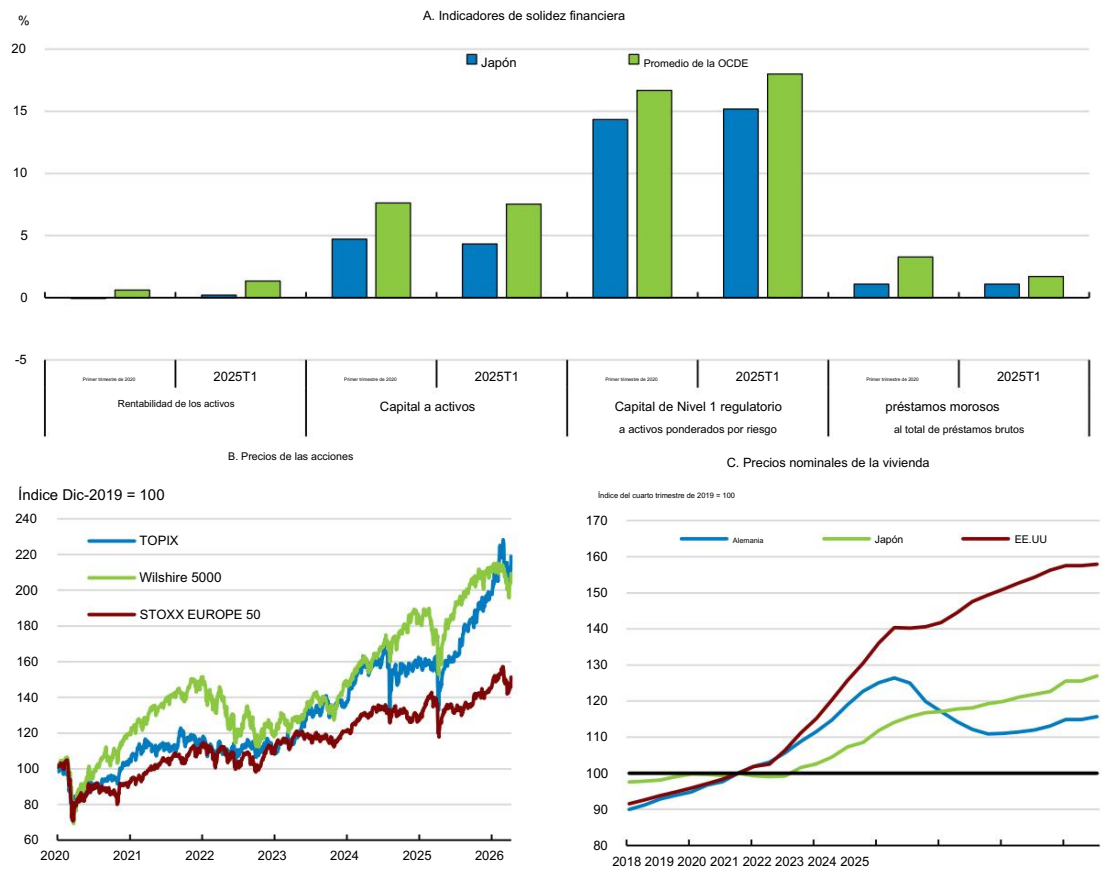
Nota: Panel B: El índice de difusión es la diferencia entre las empresas que responden con valores altos y bajos a la pregunta sobre cómo perciben el funcionamiento del mercado de bonos.
Panel C: Los bonos del gobierno japonés no incluyen letras del Tesoro.
Fuente: LSEG; Banco de Japón; Banco de la Reserva Federal; y Banco de Inglaterra.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/jb0q21>

1.4. El sistema financiero parece sólido pero se enfrenta a riesgos.

El sistema financiero de Japón parece estable, respaldado por sólidos colchones de capital y liquidez (Figura 1.10, Panel A). Los precios de las acciones y los bienes raíces han estado subiendo (Panels BC), con algunos indicios potenciales de sobrecalentamiento en el caso de las primeras (BoJ, 2025[9]). El aumento de los precios de los bienes raíces, especialmente en las principales áreas metropolitanas, refleja mayores costos de construcción, la demanda de extranjeros y los flujos migratorios hacia las principales áreas urbanas. El aumento gradual de las tasas de interés ha contribuido a la rentabilidad general de los bancos, pero los riesgos asociados con una posible aceleración de las subidas de las tasas de interés podrían ser problemáticos, especialmente para algunos bancos más pequeños con una cantidad considerable de tenencias de JGB y exposición a empresas con mayor probabilidad de quiebra. Los posibles cambios repentinos en las condiciones financieras globales, o los fuertes aumentos en las quiebras corporativas debido a las tasas de interés más altas, resaltan la importancia de un seguimiento riguroso de los riesgos, en un panorama nacional e internacional cambiante. Por lo tanto, el inicio a gran escala de la plataforma de datos común entre el BoJ y la Agencia de Servicios Financieros (FSA) en marzo de 2025 es bienvenido.

Figura 1.10. El sistema financiero parece ser sólido.



Nota: Los datos del primer trimestre de 2025 para el promedio de la OCDE se calculan utilizando el último trimestre disponible para los países de la OCDE.
Fuente: FMI, Indicadores de solidez financiera; Refinitiv; y OCDE, Base de datos analítica de precios de la vivienda.

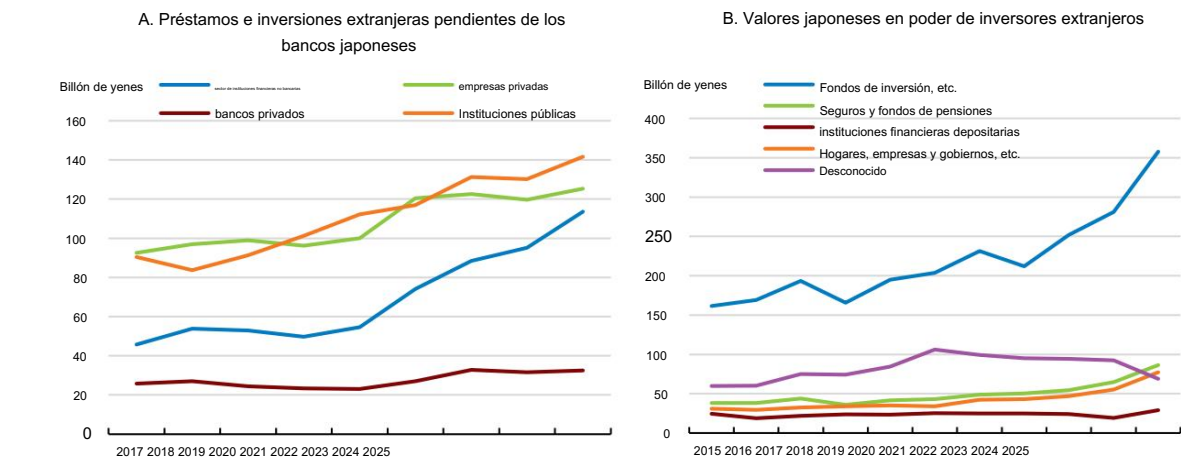
Enlace estadístico 2<https://stat.link/jb8l1e>

Es necesario vigilar de cerca las posibles vulnerabilidades en algunos segmentos del sector inmobiliario. Si bien los tipos de interés de los préstamos hipotecarios han aumentado, los índices de morosidad siguen siendo bajos. Los riesgos están estrechamente relacionados con las características individuales de los prestatarios, pero algunas instituciones financieras se enfrentan a dificultades en la gestión de riesgos al evaluar su capacidad de pago (BoJ, 2025[10]). Esto subraya la importancia de una evaluación exhaustiva y un seguimiento constante de los ingresos de los prestatarios (BoJ, 2025[11]). Las normas hipotecarias de «5 años y 125%», que establecen que los pagos mensuales cambian con poca frecuencia (cada 5 años) y que el aumento está limitado al 25%, ayudarán a mitigar el impacto del aumento de los tipos de interés, cuando se apliquen. Si los riesgos aumentaran significativamente, podrían considerarse herramientas macroprudenciales tradicionales basadas en el prestatario, como los límites a los ratios préstamo-valor, tal como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024. Otros riesgos derivados de la disminución de la rentabilidad esperada de los bienes inmuebles comerciales y del desvío de los préstamos bancarios hacia fondos inmobiliarios y negocios inmobiliarios distintos de la vivienda deben ser objeto de un seguimiento exhaustivo.

Las quiebras corporativas han aumentado, aunque partiendo de una base baja, con 10 261 quiebras en 2025, un incremento del 3,6 % respecto al año anterior. Entre las causas se incluyen la escasez de mano de obra, la dificultad para encontrar sucesores y el fin de los préstamos a cero-cero. Las quiebras se han concentrado en el sector no manufacturero y en las pequeñas empresas. Si bien los beneficios corporativos generales han aumentado, las pymes y microempresas en situación de impago tienden a ser aquellas con pérdidas operativas y patrimonio neto negativo (BoJ, 2025[11]). Hasta el momento, el impacto del aumento de los tipos de interés en las quiebras ha sido limitado, pero nuevos aumentos podrían provocar la salida de empresas improductivas, incrementando la reasignación de recursos y el crecimiento de la productividad (Capítulo 2).

Aunque la proporción de activos financieros en manos del sector nacional de intermediarios financieros no bancarios (IFNB) se mantiene sin cambios en torno al 30%, la composición está cambiando, con un aumento en la proporción de fondos de inversión, que pueden ser más vulnerables que los fondos de seguros y pensiones bien regulados. Además, La exposición de los bancos al sector de las instituciones financieras no bancarias extranjeras, especialmente a los fondos de inversión, y la inversión de estas instituciones en acciones y bonos japoneses han aumentado (Figura 1.11). Esto incrementa el riesgo de posibles efectos indirectos en el sistema financiero japonés.

Figura 1.11. Los intermediarios financieros no bancarios deben ser monitoreados de cerca.



Nota: NBFI se refiere a intermediarios financieros no bancarios.
Fuente: Banco de Japón (2026), Informe de Estabilidad Financiera, abril.

StatLink 2<https://stat.link/tcs8db>

En los últimos años, los supervisores han intensificado la evaluación y el seguimiento del sector de las instituciones financieras no bancarias (IFNB), mediante estudios específicos sobre su tamaño, composición e interconexión (Eguchi et al., 2025[12]), y la participación en iniciativas internacionales de recopilación de datos. Los reguladores deben seguir supervisando las IFNB y subsanar las deficiencias de datos, especialmente en lo que respecta a los fondos de cobertura y los fondos privados extranjeros. Las directrices internacionales destacan la importancia de contar con datos detallados y frecuentes, así como la necesidad de adaptar las políticas a las condiciones específicas y al marco regulatorio de cada país. Por ejemplo, algunos países de la OCDE están implementando políticas macroprudenciales para las entidades no bancarias. Una opción a considerar es ampliar el alcance de las instituciones que pueden recibir asistencia de liquidez de emergencia a las IFNB sistémicas (FMI, 2025[7]).

Si bien la rentabilidad de los bancos regionales ha mejorado gracias a operaciones comerciales más eficientes y tasas de interés más altas, siguen enfrentando dificultades a mediano plazo debido a la disminución de la población. Los supervisores financieros han apoyado a los bancos regionales ofreciendo incentivos financieros para fusiones y adquisiciones, y flexibilizando las regulaciones sobre el alcance de los servicios que pueden ofrecer. Deben continuar supervisando de cerca a los bancos regionales, dada la distribución desigual de la rentabilidad y la evolución demográfica regional, y proporcionar incentivos para facilitar la digitalización y las fusiones. La FSA supervisa los riesgos de liquidez de los bancos individuales a través del Sistema de Alerta Temprana, que funciona bien, pero podría considerar establecer requisitos mínimos individuales de liquidez y capital para los bancos nacionales con el fin de mejorar su resiliencia ante las crisis (FMI, 2024[13]).

Tabla 1.4. Recomendaciones anteriores sobre políticas monetarias y financieras.

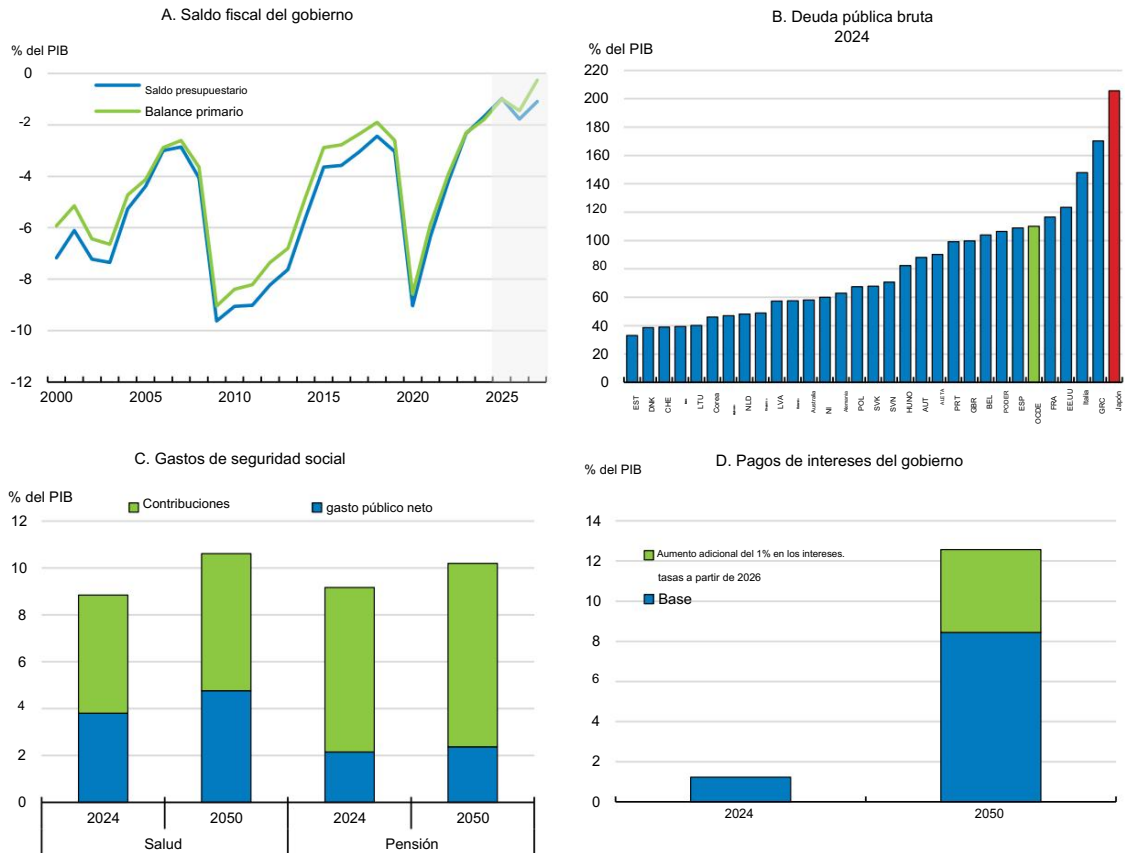
Las recomendaciones de encuestas recientes	Medidas adoptadas desde la encuesta de 2024.
sugieren aumentar aún más la flexibilidad en el control de la curva de rendimiento y comenzar a subir gradualmente las tasas de interés oficiales, siempre que se proyecte que la inflación se mantenga en torno al 2% de forma sostenida.	Se eliminó el control de la curva de rendimiento y los tipos de interés han ido aumentando gradualmente desde marzo de 2024.
Ampliar el alcance de la evaluación del riesgo sistémico por parte de los supervisores financieros para que supervisen de cerca los riesgos de tipo de interés en moneda extranjera y los posibles riesgos crediticios.	Se estableció una plataforma de datos común entre el Banco de Japón y la Agencia de Servicios Financieros.

1.5. Crear reservas fiscales y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo

1.5.1. Priorizar la consolidación fiscal

La situación fiscal a corto plazo ha mejorado, principalmente debido a los elevados ingresos tributarios en un contexto de sólido crecimiento nominal (Figura 1.12, Panel A). Sin embargo, se prevé que el déficit fiscal aumente en 2026, como consecuencia del último paquete de estímulo fiscal, antes de mejorar en 2027 (esto supone que no habrá presupuestos suplementarios adicionales, cuyo uso debería ser limitado, como se analiza más adelante). La relación deuda pública bruta/PIB ha disminuido recientemente, gracias a que el fuerte crecimiento del PIB nominal es superior a los costes del servicio de la deuda, pero sigue siendo la más alta de la OCDE (Panel B).

Figura 1.12. La consolidación fiscal debe continuar.



Nota: Panel A: El área sombreada se refiere a las proyecciones. Paneles C y D: Los datos se basan en el Modelo Económico a Largo Plazo de la OCDE, excepto las proyecciones de pensiones, que son cálculos de la OCDE basados en la Valoración Actuarial del Sistema Público de Pensiones (escenario basado en proyecciones de crecimiento demográfico medio y PIB basado en el Caso de Transición a una Nueva Etapa Económica) del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y las Proyecciones Económicas y Fiscales para el Análisis a Medio y Largo Plazo de la Oficina del Gabinete en 2024.

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas; Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar; Oficina del Gabinete; Modelo Económico a Largo Plazo de la OCDE; y cálculos de la OCDE.

Enlace estadístico [2https://stat.link/t9ojru](https://stat.link/t9ojru)

Los objetivos fiscales del gobierno se basan en el saldo primario de los gobiernos central y locales, excluyendo los pagos netos de intereses sobre la deuda pendiente. Los últimos objetivos oficiales (antes del último paquete fiscal) son un superávit del saldo primario en el año fiscal 2025-26, actualizado desde el objetivo anterior de un superávit para el año fiscal 2025, y una reducción constante de la relación deuda pública nominal/PIB hacia el nivel pre-COVID para el año fiscal 2030. Las proyecciones del gobierno para alcanzar un superávit primario en el año fiscal 2027 suponen un crecimiento económico constante y sostenido, mientras que se supone que los gastos reflejan las tasas de crecimiento de los precios y los salarios. Además, entre los tres escenarios (proyección de la tendencia pasada (PP), transición a una nueva etapa económica (TN) y mayor crecimiento económico (HG)), la relación deuda/PIB no tiene una tendencia descendente en la tendencia PP (Oficina del Gabinete, 2026[14]).

En noviembre de 2025, el gabinete aprobó un paquete de estímulo fiscal de 21,3 billones de yenes (3,5 % del PIB de 2024). El paquete consta de tres pilares: medidas para abordar los altos precios, inversiones estratégicas a mediano plazo para mejorar la resiliencia frente a posibles crisis y estimular el crecimiento (por ejemplo, inteligencia artificial, semiconductores, construcción naval; 7,2 billones de yenes) y fortalecimiento de las capacidades de defensa y diplomáticas (1,7 billones de yenes). El primer pilar incluye subsidios a la electricidad y al gas urbano (0,5 billones de yenes), apoyo a los hogares a través de los gobiernos locales, por ejemplo, cupones de alimentos y compras (2 billones de yenes) y ayudas en efectivo para hogares con niños (0,4 billones de yenes). Esto se suma a la ampliación ya promulgada de la deducción de ingresos (1,2 billones de yenes) y mayores subsidios a la gasolina, que se transformaron en la abolición del tipo impositivo provisional a la gasolina a partir de diciembre (1,0 billón de yenes). Los tipos impositivos provisionales al diésel se abolieron en abril. Dichos subsidios deberían eliminarse gradualmente, ya que no están dirigidos a un público específico y distorsionan las señales de precios (véase más abajo). El paquete resultó ser mayor de lo previsto inicialmente para atender las demandas de los partidos de la oposición, dado que la coalición gobernante era minoritaria en ese momento. Otras medidas de gasto deberían financiarse mediante aumentos concretos de los ingresos o recortes del gasto en otras áreas. El presupuesto anual para el año fiscal 2026, aprobado el 7 de abril, alcanzó la cifra récord de 122,3 billones de yenes, un 6,2 % superior al presupuesto inicial para el año fiscal 2025, debido a la inflación, el envejecimiento de la población y el aumento de los tipos de interés.

Es necesario mejorar la coherencia entre los incrementos de gastos e ingresos. Japón tiene importantes compromisos de gasto en políticas relacionadas con la infancia y el medio ambiente, defensa y gestión de desastres, necesarios para atender las crecientes necesidades. Sin embargo, parte de la información financiera aún no se ha determinado ni anunciado (Tabla 1.5). Además, las inversiones en defensa y medio ambiente comenzaron en el año fiscal 2023, pero la legislación sobre algunas de las fuentes de ingresos aún no se ha aprobado ni aclarado. Dado el limitado margen fiscal, es preciso finalizar e implementar planes para compensar el aumento del gasto con mayores ingresos. Asimismo, se espera que parte de la financiación para gastos adicionales provenga de la reforma del gasto. Es necesario identificar rápidamente las áreas de ahorro, lo cual puede facilitarse mediante revisiones del gasto (véase más adelante).

Tabla 1.5. Gastos seleccionados a gran escala y plurianuales

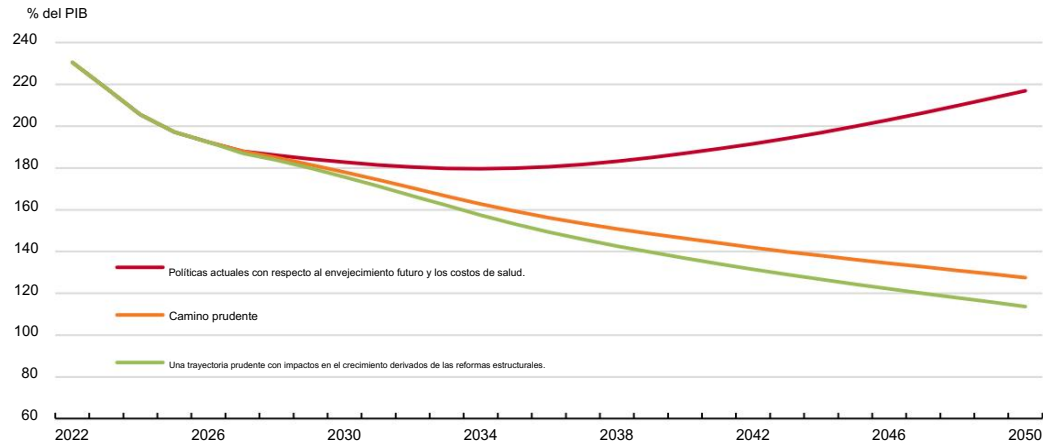
Programa	
La Defensa de 2022 Programa de desarrollo	El nivel de gasto relacionado con la defensa será de 43 billones de yenes en el periodo fiscal 2023-2027, lo que implica un gasto adicional de 14,6 billones de yenes. La financiación provendrá de reformas del gasto, el uso del superávit de liquidación (es decir, ingresos menos gastos de ejercicios fiscales anteriores) y los ingresos fiscales. Por ejemplo, estos últimos incluyen un recargo especial del 4 % sobre el impuesto de sociedades para las obligaciones tributarias que superen los 5 millones de yenes (a partir de abril de 2026) y aumentos en los impuestos sobre el tabaco (en tres etapas, de abril de 2027 a 2029, por un total acumulado de 1,5 millones de yenes) y sobre la renta personal (a partir de enero de 2027). El objetivo de elevar el gasto en defensa al 2 % del PIB de 2022 para el ejercicio fiscal 2027 se logró en el ejercicio fiscal 2025.
El concurso infantil de 2023 Estrategia futura	La Estrategia cuenta con un presupuesto de 3,6 billones de yenes para el año fiscal 2028, del cual el 80% se ejecutó en el año fiscal 2025. Alrededor del 40% (1,5 billones de yenes) de la financiación provendrá de los presupuestos existentes. Aproximadamente el 30% (1 billón de yenes) se financiará mediante reformas del gasto hasta el año fiscal 2028, de las cuales ya se han alcanzado 0,56 billones de yenes. El resto se financiará mediante la creación de un nuevo mecanismo para transferir las cotizaciones a la seguridad social, pero hasta entonces se emitirán «Bonos Especiales para Niños» (1,1 billones de yenes en el año fiscal 2025).
Visión GX 2040	La política incluye una inversión inicial de 20 billones de yenes, mediante bonos de transición de la economía GX, que se financiará con la futura fijación de precios del carbono, tema que actualmente se encuentra en discusión.
El primer plan de mediano plazo para la implementación de Resiliencia nacional	El Plan está diseñado para mitigar el impacto de los desastres, con un presupuesto de más de 20 billones de yenes en los cinco años a partir del año fiscal 2026 (el anterior, hasta el año fiscal 2025, fue de 15 billones de yenes).
Paquete fiscal para el año fiscal 2025	El paquete incluye inversiones estratégicas a medio plazo para mejorar la resiliencia ante posibles crisis y estimular el crecimiento en sectores como la construcción naval, la industria aeroespacial y la inteligencia artificial (7,2 billones de yenes), pero aún se desconocen los detalles.

A medio plazo, el aumento de los tipos de interés y el gasto relacionado con el envejecimiento de la población intensificarán los desafíos de la sostenibilidad fiscal, lo que subraya la importancia de reducir la deuda. Se prevé que los costes de las pensiones, la sanidad y la atención a largo plazo, así como los intereses de la deuda pública, aumenten para 2050 (Figura 1.12, Paneles CD). Sin reformas, el aumento de los costes del servicio de la deuda reduciría el gasto primario. Si bien los tipos de interés a largo plazo en Japón siguen siendo más bajos que los de sus pares del G7, a medida que el Banco de Japón reduce la compra de bonos, el impacto en los tipos de interés podría ser mayor que el previsto en el escenario base, lo que conllevaría un aumento de los pagos del servicio de la deuda.

Sin medidas adicionales para compensar los costos relacionados con el envejecimiento que se analizan a continuación, se proyecta que la relación deuda pública/PIB comience a aumentar nuevamente a mediados de la década de 2030, alcanzando alrededor del 217% del PIB para 2050 (Figura 1.13, escenario de políticas actuales). Aunque se proyecta que el crecimiento del PIB real se acelere a largo plazo, según los supuestos del modelo a largo plazo de la OCDE de convergencia del crecimiento de la productividad total de los factores a ese

En la economía de frontera, se espera que las tasas de interés a largo plazo superen el crecimiento nominal. Esto ejerce una mayor presión sobre los pagos netos de intereses a partir de la década de 2030. Los esfuerzos de consolidación fiscal y los efectos de crecimiento de las reformas estructurales enumeradas en el Cuadro 1.2 llevarían la deuda a una trayectoria descendente hasta alrededor del 114% del PIB en 2050 (Figura 1.13, escenario de trayectoria prudente con impactos de crecimiento de las reformas estructurales). Las reformas estructurales también pueden aumentar los ingresos fiscales debido a los efectos en el comportamiento (mayor empleo y jornadas laborales), lo que reduciría aún más la deuda pública.

Figura 1.13. Se necesita un ajuste significativo para que la deuda pública retome una senda descendente.



Nota: El escenario de "políticas actuales" se basa en la base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE hasta 2027 y en el Modelo Económico a Largo Plazo de la OCDE a partir de entonces. Los datos de pensiones son cálculos de la OCDE basados en la Valoración Actuarial del Sistema Público de Pensiones del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y en las Proyecciones Económicas y Fiscales para el Análisis a Medio y Largo Plazo de la Oficina del Gabinete en 2024. El escenario de "trayectoria prudente" supone la consolidación mediante las medidas descritas en la Tabla 1.6. El escenario de "trayectoria prudente con impactos de crecimiento de las reformas estructurales" supone un crecimiento anual adicional del PIB real de alrededor de 0,2 puntos porcentuales con las políticas descritas en la Tabla 1.7.

Fuente: Modelo Económico a Largo Plazo de la OCDE; Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social; Oficina del Gabinete; y cálculos de la OCDE.

StatLink 2<https://stat.link/q7zhvp>

Recuadro 1.2. Cuantificación de recomendaciones políticas seleccionadas

Este recuadro resume los posibles impactos a mediano plazo de algunas reformas estructurales incluidas en este estudio sobre el PIB (Tabla 1.6) y el saldo fiscal (Tabla 1.7). La cuantificación de los impactos y los paquetes de reformas son meramente ilustrativos. Los efectos fiscales estimados incluyen únicamente el impacto directo y excluyen las posibles respuestas conductuales que podrían derivarse de un cambio de política.

Tabla 1.6. Impacto fiscal ilustrativo del paquete de reformas recomendado.

Ahorros fiscales (+) y costes (-)

Medidas	Impacto en el saldo presupuestario, % del PIB
Medidas de gasto	0,50
Mejorar las oportunidades de aprendizaje para adultos	-0,05
Incrementar el apoyo gubernamental a la I+D empresarial.	-0,50
Reforma de las pensiones mediante la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida.	0,40
Digitalización de la atención sanitaria	0,20
Eliminación gradual de las medidas de apoyo a los precios de la energía no focalizadas.	0,40
Apoyo específico a hogares vulnerables	-0,25
Mayor eficiencia en el gasto gracias a las reformas presupuestarias.	0,30
Medidas de ingresos	3,45
El tipo impositivo sobre el consumo se incrementa en un punto porcentual cada año hasta alcanzar el 18%.	3,00
Eliminación de las deducciones conyugales de los impuestos sobre la renta personal.	0,30
Implementación de impuestos al carbono	0,15
Impacto presupuestario total	3,95% para 2050

Tabla 1.7. Impacto ilustrativo de algunas reformas propuestas sobre el PIB per cápita.		
En relación con el valor inicial		
Reforma	Efecto a 10 años	Efecto para 2050
Reforma de las pensiones (aumentar la edad de jubilación a 67 años y vincularla a un tercio de la esperanza de vida posterior).	0,2	0,9
Reformas del mercado laboral y de la educación (ampliación de la atención infantil temprana, aumento de las oportunidades de aprendizaje para adultos)	1.2	2.6
Incrementar y potenciar la focalización del gasto en I+D.	0.1	0,5
Mejorar el entorno empresarial y el marco regulatorio.	1.4	3.2
Impacto total	2.9	7.2
Fuente: OCDE, Modelo a largo plazo.		

Garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo en un contexto de disminución de la fuerza laboral requerirá mejoras en varias áreas. En primer lugar, debe establecerse una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio plazo, que incluya medidas tanto de ingresos como de gastos, para reducir la deuda pública. Dicha estrategia también aumentaría la credibilidad y la transparencia de las proyecciones y objetivos fiscales oficiales. Esto exige abordar los costes relacionados con el envejecimiento de la población, aumentar los ingresos y fortalecer el marco fiscal, como se analiza más adelante. En segundo lugar, seguir incrementando la participación en la fuerza laboral de los grupos vulnerables, mediante reformas del mercado laboral y tributarias, no solo ayudaría a paliar la escasez de mano de obra (véase más adelante), sino que también contribuiría a mejorar las finanzas públicas. Por último, el nivel de productividad laboral por hora en Japón está por debajo de la media de la OCDE. El crecimiento anual de la productividad por hora cayó del 1,2 % en el periodo 2000-2008 al 0,3 % entre 2019 y 2024 (Capítulo 2). Por lo tanto, impulsar el crecimiento de la productividad puede mejorar la sostenibilidad fiscal, al elevar el PIB real, ampliar la base impositiva y aliviar las presiones sobre el gasto.

1.5.2. Abordar los costos relacionados con el envejecimiento

Pensiones

La dependencia de la tercera edad, que ya es alta, seguirá aumentando (Figura 1.14, Panel A). El sistema público de pensiones de Japón consta de las pensiones básicas y de los empleados, que proporcionan prestaciones a tanto alzado y vinculadas a los ingresos, respectivamente. El gobierno realiza una verificación financiera del sistema público de pensiones cada cinco años, lo que lleva a una reforma del sistema, si es necesario. Tras la verificación de 2024, el Proyecto de Ley de Pensiones de 2025 aumentó el límite máximo de las cotizaciones a la seguridad social y la cobertura de los trabajadores a tiempo parcial e irregulares, tal como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024. La reforma también aumenta los incentivos laborales para los trabajadores mayores, al elevar el umbral para la deducción de las prestaciones de pensión cuando estos combinan trabajo y pensión, lo cual es positivo.

Sin cambios en las políticas, la duración prevista de la jubilación aumentará notablemente, con una mayor esperanza de vida. La edad de elegibilidad para la pensión correspondiente al componente de tarifa plana del Seguro de Pensiones para Empleados es de 65 años. La edad de elegibilidad para el componente vinculado a los ingresos aumentó a 65 años para los hombres en 2025 y se prevé que alcance los 65 para las mujeres en 2030, pero las personas pueden comenzar a solicitar beneficios a los 60 años o retrasar la solicitud inicial hasta los 75, con un aumento del beneficio de pensión del 8,4% anual en caso de aplazamiento. Sin embargo, se prevé que los hombres (mujeres) japoneses que ingresaron al mercado laboral en 2022 a los 22 años y que se jubilen a la edad más temprana posible sin penalizaciones, pasarán 5,2 (6,0) años más jubilados que aquellos que se jubilaron en 2022 (Figura 1.14, Panel B). Al mismo tiempo, la pobreza relativa en la vejez, del 20%, está por encima del promedio de la OCDE del 12,5%, mientras que la suficiencia futura de las pensiones para los pensionistas con una carrera profesional completa, del 42%, es inferior al promedio de la OCDE (Panel C).

Los activos financieros del sistema de pensiones representan aproximadamente el 54 % del PIB a finales de 2024, y el ajuste automático de las prestaciones (indexación macroeconómica) busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. La indexación macroeconómica ajusta automáticamente las prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida y la disminución de la población en edad laboral, pero el ajuste se retrasa en épocas de crecimiento negativo de los precios o los salarios.

Un mecanismo de arrastre, introducido en 2016, corrige en principio el ajuste diferido en los años siguientes. Sin embargo, si la tasa de reemplazo (actualmente estimada en un 61,2% según el método japonés de cálculo)

La falta de seguridad económica derivada de la pensión básica para algunos ancianos también ejerce presión sobre el sistema de asistencia pública financiado con impuestos. El Programa Básico de Protección de los Medios de Vida (BLPP, por sus siglas en inglés) ayuda a personas de todas las edades con ingresos inferiores al umbral mínimo de subsistencia que cumplen los criterios de elegibilidad, los cuales consideran sus bienes y la capacidad de sus familiares para brindarles apoyo. La proporción de beneficiarios mayores de 65 años ha ido en aumento (Figura 1.14, Panel D), lo que refleja el envejecimiento de la población, pero el BLPP también actúa como complemento a las bajas pensiones básicas de algunos jubilados. Las reformas de las pensiones deben garantizar que una disminución de las pensiones básicas no genere una carga adicional para las finanzas públicas, dado que el BLPP se financia con los ingresos fiscales.

Salud y cuidados a largo plazo

El sistema de salud de Japón tiene un desempeño muy bueno a nivel internacional, con la segunda mayor esperanza de vida en la OCDE y una buena calidad de atención y acceso (OCDE, 2023[15]). Sin embargo, el elevado número de camas hospitalarias, la larga duración de las estancias hospitalarias y el alto número de consultas médicas sugieren que existe margen para mejorar la eficiencia del gasto (Tabla 1.8). Además, el gasto privado en atención médica y el gasto de bolsillo son inferiores al promedio de la OCDE.

Tabla 1.8. Comparación internacional de determinados centros de salud y atención a largo plazo.

2023 o más reciente	Número de consultas médicas per cápita	Gasto privado en atención sanitaria (%)	Pagos de bolsillo de los hogares (%)	Estancia hospitalaria promedio para atención hospitalaria1	Número total de camas2,3	Número de casos agudos-cuidado camas2,3	Número de largo plazo cuidado camas2,3	Número de camas en cuidados a largo plazo cuidado instalaciones2
Japón	12.1	15.2	12.2	26.3	43.0	26.5	7.7	26.7
OCDE promedio	6.7	25.0	19.7	8.3	22.3	15.8	2.4	41.5
País más alto	17.5	48.4	39.1	26.3	69.2	33.6	28.1	78.5
País más bajo	1.9	13.0	8.8	4.2	9.1	6.4	0.0	9.3

Nota: 1. En días. 2. Por cada 1000 habitantes de 65 años o más. 3. En hospitales.
Fuente: OCDE, base de datos de estadísticas sanitarias.

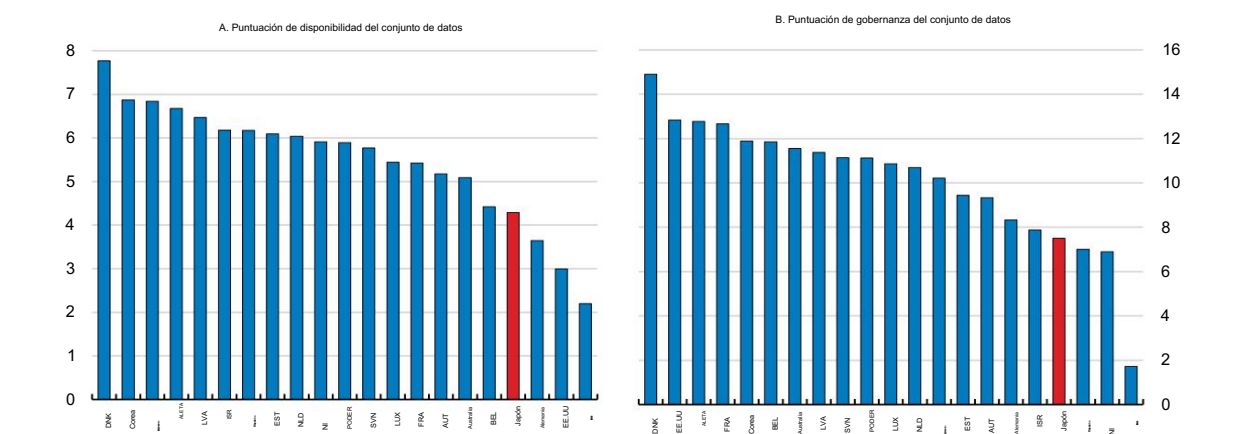
La atención médica ambulatoria representa aproximadamente el 30 % del gasto sanitario, lo que refleja la alta frecuencia de consultas médicas (12,1 al año por persona), muy por encima de la media de la OCDE. Esto se debe, en parte, a la generosa cobertura del seguro médico y a la reducción de los copagos para las personas mayores de 70 años. Si bien existe una evaluación de ingresos, solo las personas mayores (con ingresos muy superiores a la media) pagan el copago del 30 % que se exige a los menores de 70 años. El aumento del copago del 10 % al 20 % para las personas mayores de 75 años, cuyos ingresos superen un determinado umbral en 2022, provocó una disminución del 1 % en el uso de servicios médicos y del 3 % en el gasto sanitario. Sin nuevas reformas, la carga sobre la población en edad laboral aumentará con el envejecimiento de la población. Por lo tanto, deberían incrementarse los copagos para las personas mayores, en función de sus recursos económicos, tal como se recomienda en anteriores estudios económicos de la OCDE.

Japón cuenta con un gran número de camas hospitalarias y estancias hospitalarias prolongadas, lo que contribuye a un mayor gasto en atención médica. El programa Community Health Care Visions, lanzado en 2014, tenía como objetivo reestructurar los sistemas hospitalarios y de atención, integrando los servicios médicos y de cuidados a largo plazo. Uno de los objetivos era mejorar la asignación de camas hospitalarias por función (aguda, aguda avanzada, recuperación y crónica) mediante la previsión de necesidades hasta 2025. El número total de camas ha disminuido ligeramente a nivel nacional, pero para mejorar la eficiencia de la prestación de servicios sanitarios reduciendo las estancias hospitalarias prolongadas y las visitas médicas, se debe seguir promoviendo una mayor optimización de la asignación de capacidad y la diferenciación funcional de las instituciones sanitarias. Por ejemplo, el número de camas de cuidados a largo plazo por cada 1000 habitantes mayores de 65 años sigue siendo elevado (Tabla 1.8), lo que puede incrementar los costes. Aumentar la eficiencia del gasto también requerirá una sólida estructura de gobernanza entre las prefecturas, las instituciones médicas y los proveedores de cuidados a largo plazo. (Instituto de Investigación de Mitsubishi, 2024[16]), complementado con una buena infraestructura de datos que permita comparar el rendimiento de los proveedores y las autoridades locales.

Otro propósito de las Visiones de Atención Sanitaria Comunitaria era reasignar recursos para satisfacer de manera eficiente las futuras necesidades de salud y cuidados a largo plazo de las regiones, con los recursos existentes. Con ese fin, se está avanzando en la transición de un sistema de atención sanitaria hospitalario, donde todos los servicios, desde la atención aguda avanzada hasta la atención crónica, se prestaban en un solo hospital, a un sistema de atención sanitaria comunitario, que incluye hospitales, clínicas comunitarias, residencias de ancianos y servicios de atención domiciliaria. Esto también requiere fortalecer el papel de los equipos de atención primaria (Nomura et al., 2022[17]), lo que puede ayudar a contener los costos, ya que las visitas al hospital para necesidades de atención sanitaria no especializadas pueden ser costosas. Por lo tanto, el gobierno debería clarificar y respaldar el papel de los equipos de atención primaria como filtro de acceso, asegurándose al mismo tiempo de que cuenten con la experiencia necesaria en medicina general.

Las mejoras en la eficiencia del gasto también dependen de una infraestructura digital y de datos avanzada. El nivel de preparación de Japón en salud digital está rezagado en comparación con otros países, ya que carece tanto de la capacidad analítica para vincular y utilizar datos de salud en dominios críticos como de una gobernanza eficaz de los conjuntos de datos (Figura 1.15). La falta de un número de identificación único y común para cada paciente/persona en todos los conjuntos de datos (Oderkirk, 2021[18]) se está abordando mediante el cambio al uso de My Tarjeta de identificación para fines de seguro médico en 2025. Esto facilitará el intercambio de información entre centros de salud, mejorando la calidad de la atención.

Figura 1.15. La infraestructura y las instituciones de datos sanitarios son débiles.



Nota: Panel A: Capacidad para acceder y vincular conjuntos de datos en el sector sanitario. Panel B: Puntuación calculada como la suma de las proporciones de conjuntos de datos sanitarios nacionales con elementos de gobernanza recomendados. Una puntuación más alta indica un mejor resultado.
Fuente: OCDE, Gobernanza de datos sanitarios para la era digital.

StatLink 2<https://stat.link/xmc3k6>

La Sede de Promoción de la Transformación Digital Médica, establecida en 2022, tiene como objetivo crear una plataforma nacional para compartir e intercambiar información sobre todos los aspectos de la salud y la atención a largo plazo y estandarizar Registros médicos electrónicos. Esto generaría mejoras en la eficiencia al reducir la carga de ingreso y almacenamiento de datos, y debería implementarse con rapidez, ya que también puede ayudar a paliar la escasez de mano de obra en el sector (véase más adelante). Esto requerirá superar las barreras legales o normativas existentes para el intercambio de datos entre las autoridades públicas, y una autoridad pública responsable de la vinculación de los datos sanitarios (OCDE, 2022[19]).

La promoción de la utilización de datos es crucial para reducir el uso inapropiado de la atención médica, promover el acceso a una atención médica de alta calidad y evaluar las políticas de salud, incluso a través de revisiones de gastos (véase más arriba). Una vez establecida la infraestructura de datos para vincular los registros nacionales de salud, se debe implementar un sistema que permita el acceso para analizar los datos para las partes interesadas pertinentes. Esto requiere la implementación de medidas sólidas de privacidad y seguridad de datos (Nomura et al., 2022[17]). Por ejemplo, algunos países de la OCDE tienen organismos públicos para supervisar el uso primario y secundario de datos de salud individualizados, incluidos procesos sólidos para preservar la confidencialidad del paciente y protocolos rigurosos y transparentes que permiten a los investigadores y responsables políticos acceder a conjuntos de datos debidamente anonimizados para fines de análisis y supervisión de servicios (Recuadro 1.3).

Recuadro 1.3. Infraestructura y gobernanza sólidas en materia de datos: Dinamarca y Finlandia

Dinamarca cuenta con un marco de gobernanza bien desarrollado y una autoridad central para la aprobación de solicitudes de procesamiento de datos personales de salud. Cada ciudadano tiene un número de Registro Personal Central que permite el seguimiento longitudinal de los resultados de salud, al permitir la vinculación entre los diversos registros nacionales. La Autoridad Danesa de Datos de Salud (Sundhedsdatastyrelsen) supervisa la recopilación, el control de calidad y el acceso a los datos nacionales de salud. Los investigadores pueden acceder a datos anonimizados bajo estrictos requisitos éticos y de seguridad. Findata es un sistema centralizado que emite permisos y una ventanilla única para el uso secundario de datos de salud y asistencia social en Finlandia, posible gracias al código de identificación personal finlandés. Otorga permisos de uso de datos, recopila y vincula y prepara los datos, los proporciona en un entorno informático seguro para los usuarios de datos, ofrece un servicio de asistencia técnica para los usuarios de datos y trabaja en colaboración con los responsables del tratamiento de los datos.

Fuente: (OCDE, 2022[19]).

1.5.3. Incrementar los ingresos y eliminar los desincentivos al empleo.

Los ingresos fiscales de Japón como porcentaje del PIB se sitúan en torno a la media de la OCDE (Figura 1.16, Panel A). Para garantizar la sostenibilidad de la deuda, se necesita una estrategia de reforma fiscal a medio plazo que incremente los ingresos y reduzca las distorsiones del sistema tributario que desalientan el empleo. Algunos países de la OCDE han contado con comisiones fiscales independientes (Recuadro 1.4) para aportar una perspectiva a medio plazo, incluyendo la exposición de las ventajas y desventajas, como los efectos a corto y medio plazo y las consecuencias distributivas. Si bien estas recomendaciones no son vinculantes, pueden aumentar la concienciación pública para que las reformas difíciles sean aceptables y ofrecer recomendaciones que no se basen en consideraciones políticas o a corto plazo. Por ejemplo, los datos de encuestas muestran que, si bien la población japonesa se opone a los aumentos del impuesto al consumo, se muestra más favorable cuando la opción se presenta como una compensación entre este y un aumento de las primas de la seguridad social o una disminución de las prestaciones (Fundación Tokio, 2024[20]).

Recuadro 1.4. Exámenes independientes de los sistemas tributarios nacionales

Las revisiones tributarias independientes pueden proporcionar análisis y recomendaciones objetivas y expertas sobre el sistema tributario de un país para mejorar su diseño, eficiencia, equidad y sostenibilidad. Por ejemplo, la Revisión Mirrlees, una revisión exhaustiva del sistema tributario del Reino Unido, se llevó a cabo en 2010 para evaluar cómo se podría hacer que el sistema tributario fuera más eficiente, equitativo y simple, y formular propuestas de reforma tributaria a mediano plazo, basadas en la teoría económica y la evidencia empírica. La Comisión Irlandesa de Impuestos y Bienestar, establecida en 2021, se creó un organismo independiente encargado de "revisar la mejor manera en que el sistema tributario y de bienestar social puede respaldar la actividad económica y la redistribución de ingresos, al tiempo que promueve un mayor empleo de manera resiliente y garantiza que haya recursos suficientes disponibles para cubrir los costos de los servicios y apoyos públicos a mediano y largo plazo". En 2010, Australia llevó a cabo una revisión del sistema tributario que tuvo en cuenta su relación con el sistema de pagos de transferencia y otros pagos, normas y concesiones de apoyo social.

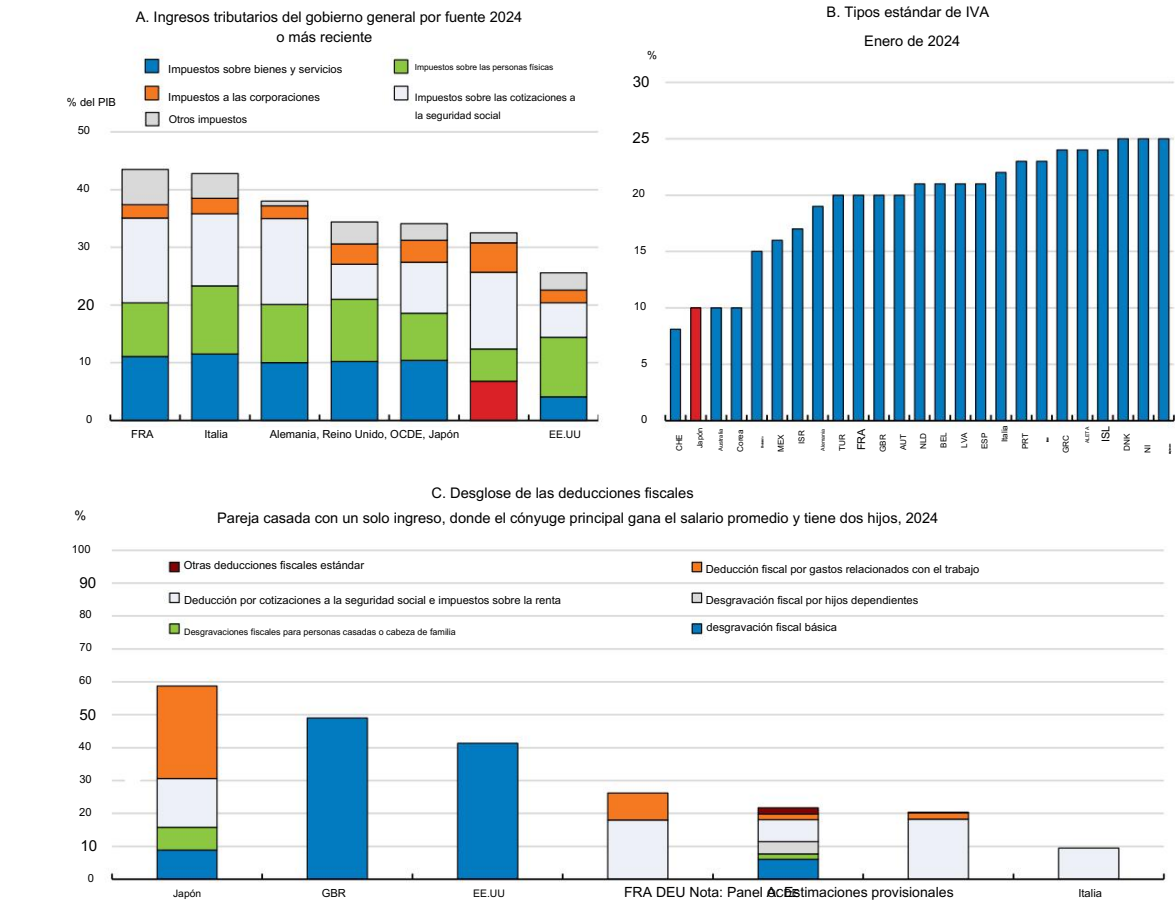
Según una simulación de diferentes reformas fiscales, un aumento de los impuestos al consumo (valor añadido, IVA) produciría los mayores ingresos, con efectos adversos relativamente pequeños sobre el PIB y el bienestar a largo plazo (FMI, 2022[21]). Los impuestos al consumo tienen efectos distorsionadores relativamente bajos sobre el trabajo, el ahorro y la inversión, y distribuyen la carga tributaria de manera equitativa entre las generaciones. También pueden ser una fuente de ingresos relativamente estable, que podría respaldar el aumento del gasto social (MoF, 2025[22]). El tipo impositivo del 10 % sobre el consumo (IVA estándar) en Japón sigue siendo uno de los más bajos de la OCDE, y los ingresos procedentes de los impuestos sobre bienes y servicios, que representan el 6,8 % del PIB, son relativamente bajos (Figura 1.16; Paneles AB).

La tasa del impuesto al consumo debería incrementarse gradualmente, siguiendo un calendario regular a medio plazo consagrado en la legislación, para limitar el impacto económico y minimizar la incertidumbre política, como se recomendó en anteriores Estudios Económicos de Japón de la OCDE. Parte de los ingresos de la reforma deberían utilizarse para transferencias dirigidas a hogares de bajos ingresos. El acuerdo de coalición establece que se considerará una reducción temporal del impuesto al consumo de alimentos para apoyar a los hogares frente a una mayor inflación. Sin embargo, la primera mejor solución es

Crear un entorno que propicie un crecimiento sólido de los salarios reales, en lugar de reducir los impuestos al consumo, que es una medida inespecífica y costosa.

Los impuestos sobre la renta personal en Japón generan bajos ingresos debido a las generosas deducciones, especialmente por gastos relacionados con el trabajo, en comparación con los países del G7 (Figura 1.16, Panel C). En 2025, la deducción por ingresos del trabajo se elevó a 650 000 yenes de ingresos brutos del trabajo para quienes percibían un salario bruto de 1,9 millones de yenes o menos. Posteriormente, la deducción aumenta con los ingresos hasta alcanzar un límite máximo de 1,95 millones de yenes. La reforma de esta deducción, que beneficia principalmente a los hogares de altos ingresos, podría incrementar los ingresos fiscales en aproximadamente un 0,2 % del PIB si el límite máximo se fijara en 1,5 millones de yenes (FMI, 2022[21]).

Figura 1.16. Las reformas podrían impulsar el consumo y los ingresos por impuestos sobre la renta personal.



para todos los países. Los ingresos procedentes de las cotizaciones a la seguridad social se imputan para Japón. Los datos de Japón se presentan por años fiscales.

Fuente: OCDE, base de datos de estadísticas de ingresos; OCDE, Tendencias de los impuestos al consumo - 2024; y OCDE, Impuestos sobre los salarios - 2025.

StatLink 2<https://stat.link/t1g3sh>

El gobierno ha iniciado un proceso de consulta para diseñar un sistema de crédito fiscal reembolsable que reduzca la carga impositiva, las primas de la seguridad social y el aumento de precios para los hogares de ingresos bajos y medios. Actualmente se está considerando la reducción de los impuestos al consumo de alimentos como medida provisional no focalizada (2 años) hasta la implementación del sistema. La idea de un sistema de este tipo no es nueva en Japón, pero históricamente se ha visto obstaculizada por la falta de transparencia en los ingresos, especialmente entre los trabajadores autónomos, y la ausencia de un identificador único que combine las diferentes fuentes de ingresos. La expansión del uso del número individual (My Number) para contribuyentes y cotizantes a la seguridad social podría ayudar a superar estas barreras y permitir una implementación efectiva de esta posible reforma fiscal. Como se analizó en el Estudio de Japón de la OCDE de 2019, los créditos fiscales reembolsables también pueden impulsar los incentivos laborales, especialmente para los segundos perceptores de ingresos y los beneficiarios del Programa Básico de Protección de los Medios de Vida, y reducir el número de trabajadores pobres.

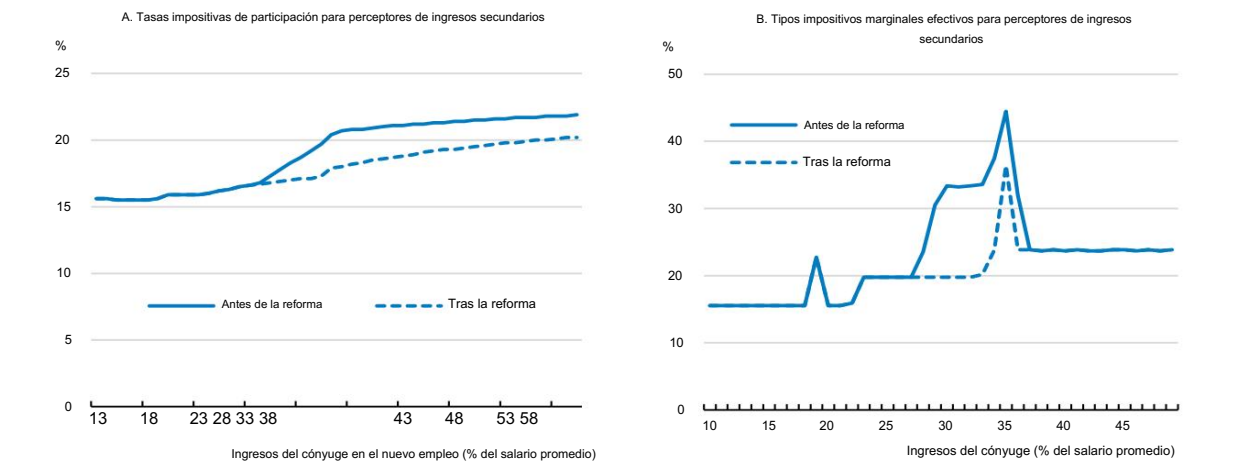
Los sistemas de impuesto sobre la renta y seguridad social presentan varios umbrales de ingresos que pueden reducir los incentivos laborales, especialmente para los trabajadores a tiempo parcial y los perceptores de ingresos secundarios (Tabla 1.9). La Ley de Pensiones de 2025 suprimirá uno de estos umbrales (el de 1,06 millones de yenes), requisito indispensable para la afiliación obligatoria a los seguros de pensiones y salud. Esta medida es positiva, ya que puede contribuir a mejorar las horas de trabajo y la suficiencia de las pensiones para los trabajadores no regulares, además de reducir la dualidad en el mercado laboral. Los umbrales de ingresos restantes, que incrementan los tipos impositivos marginales efectivos sobre la renta laboral de los perceptores de ingresos secundarios (generalmente mujeres casadas), incentivan a mantener sus ingresos por debajo de 1,3 millones y 1,6 millones de yenes para evitar las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta personal, respectivamente.

Tabla 1.9. Exenciones fiscales y de seguridad social seleccionadas relacionadas con los incentivos laborales.

1,06 millones de yenes	Determina si un trabajador a tiempo parcial (incluidos los cónyuges que trabajan a tiempo parcial) debe afiliarse al Seguro de Pensiones y Salud para Empleados. Los demás criterios de exención se basan en las horas trabajadas y el tamaño de la empresa. Con la Ley de Pensiones de 2025, este umbral de ingresos se eliminará a mediados de 2028.
1,1 millones de yenes	Los trabajadores con ingresos anuales inferiores a 1,0-1,1 millones de yenes, según el municipio, no están sujetos al impuesto de residencia local. Si ningún miembro de un hogar paga dicho impuesto, pueden optar a diversas ayudas sujetas a verificación de recursos, como reducciones en las primas de la seguridad social, los copagos médicos y los gastos de guardería y educación, y, en algunos casos, transferencias monetarias puntuales.
1,3 millones de yenes	El cónyuge que percibe menos de 1,3 millones de yenes está exento de las cotizaciones a la seguridad social y tiene derecho a la pensión básica, clasificado como asegurado de categoría III, así como al seguro médico de su cónyuge. Si se alcanza dicho umbral, la afiliación al seguro de pensiones y salud para empleados se vuelve obligatoria.
1,23/1,5/1,6 millones de yenes	Si un dependiente gana menos de 1,23 millones de yenes al año, el principal sostén económico puede reclamar una deducción fiscal por dependiente en su declaración de impuestos sobre la renta y puede ser elegible para beneficios por dependiente de su empleado, dependiendo de las normas de la empresa. Si el dependiente es el cónyuge o un hijo de entre 19 y 22 años, el principal sostén económico de la familia tiene derecho a una deducción especial adicional a la deducción por dependiente. Esta deducción especial para cónyuges o dependientes del principal sostén económico comienza a reducirse gradualmente cuando los ingresos del cónyuge alcanzan los 1,6/1,5 millones de yenes, llegando a cero cuando alcanzan los 2,01/1,88 millones de yenes.

El impacto de la barrera de 1,3 millones de yenes podría disminuir con los próximos cambios en la reforma de las pensiones. Sin embargo, dado que el número de hogares con dos ingresos aumentó de alrededor de 9 millones en 2006 a 13 millones en 2024, y aún existe un amplio margen para aumentar las horas de trabajo de las mujeres, los umbrales restantes deberían reformarse para aumentar los ingresos fiscales, aliviar la escasez de mano de obra y reducir la brecha salarial de género (Kitao y Mikoshiba, 2024[23]). Las simulaciones de la OCDE muestran que la eliminación de las deducciones por cónyuge en los sistemas tributarios nacionales y locales aumentaría los incentivos laborales para los segundos perceptores de ingresos. La reforma reduciría la proporción de los ingresos brutos que una familia pierde debido a impuestos más altos o prestaciones más bajas cuando un miembro de la familia pasa de estar desempleado a trabajar (tasa impositiva de participación) o de trabajar a tiempo parcial a tiempo completo, es decir, aumentaría sus ingresos (tasa impositiva efectiva marginal), especialmente en torno a los umbrales en los que se retiran las deducciones (Figura 1.17).

Figura 1.17. Hay margen para aumentar los incentivos laborales para los perceptores de ingresos secundarios.



Nota: Los ingresos brutos del principal sostén económico se fijan en el 67 % del salario medio. La principal prestación por desempleo es la asistencia social. No se incluyen los complementos de la ayuda a la vivienda ni las ayudas temporales para la inserción laboral. Los cálculos corresponden al año 2025 y el municipio de referencia es Tokio.
Fuente: Modelo de Impuestos y Beneficios de la OCDE, versión 2.8.0.

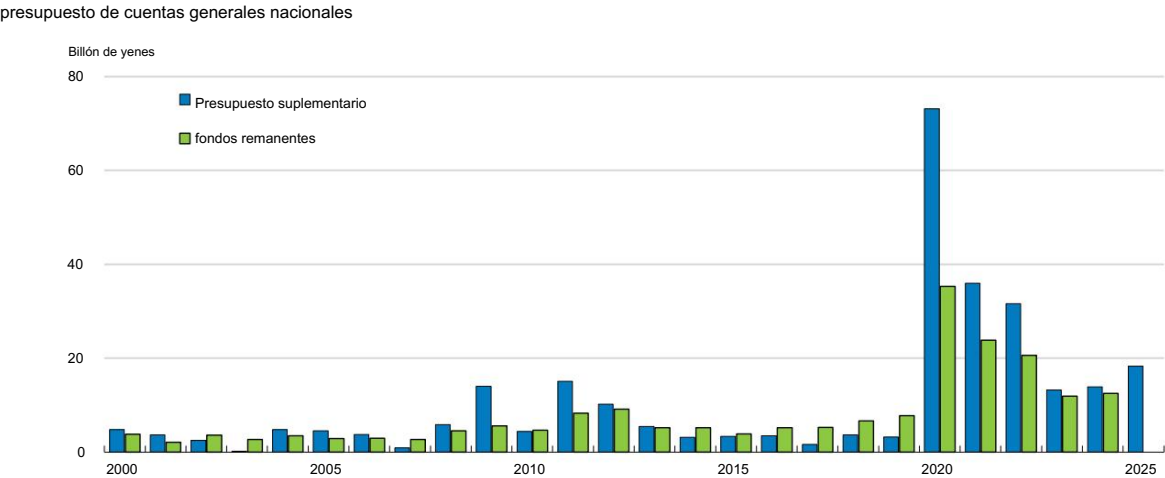
Enlace estadístico 2<https://stat.link/9x6rjz>

1.5.4. Mejora del marco fiscal

Japón cuenta con normas fiscales destinadas a gestionar la deuda pública y los déficits, pero no son tan estrictas como las de algunas economías de la OCDE. Los presupuestos iniciales se basan en un mecanismo de tope presupuestario, con el Ministerio de Finanzas como principal coordinador. Sin embargo, no existe un mecanismo para controlar el presupuesto total, incluidos los presupuestos suplementarios, lo que hace que los topes no sean vinculantes y reduce la coherencia de los presupuestos anuales con lo necesario para garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Tres cuartas partes de las economías avanzadas cuentan con normas de gasto, y el 88% dispone de procedimientos formales de aplicación, ya sea bajo normas nacionales o supranacionales (Alonso-Albarran et al., 2025[24]). El fortalecimiento del marco fiscal basado en normas mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos que cobran cada vez más importancia a medida que se amplía la base de inversores en bonos gubernamentales.

Una regla fiscal más estricta contribuiría a controlar el uso de presupuestos suplementarios. Según la Ley de Finanzas Públicas de 1947, los presupuestos suplementarios solo pueden utilizarse «si se requiere una adición o revisión para complementar el presupuesto obligatorio del gobierno, o para añadir o modificar gastos que resulten particularmente urgentes debido a circunstancias posteriores a la elaboración del presupuesto inicial». Dado que no existe una definición precisa, se han utilizado anualmente desde 1947. Como en otros países de la OCDE, el monto aumentó con la COVID-19 y, aunque ha disminuido, sigue siendo considerable (Figura 1.18). Su uso debería limitarse a grandes crisis, con una definición más precisa de las circunstancias en las que pueden utilizarse. Por ejemplo, el gobierno podría verse obligado a declarar formalmente una crisis o emergencia para utilizar presupuestos suplementarios que superen un determinado umbral. Además, dado que el tiempo para preparar el presupuesto suplementario es limitado (1-2 meses después de la solicitud del Primer Ministro) y no existen límites en su alcance, resulta más difícil garantizar la calidad del gasto fiscal (FMI, 2025[7]). El hecho de que una mayor proporción de los presupuestos se traslade al año siguiente indica que hay margen para una mejor planificación fiscal.

Figura 1.18. Los presupuestos suplementarios siguen siendo considerables.



Nota: El eje horizontal muestra los años fiscales. Los fondos remanentes son los fondos restantes al final del año fiscal.
Fuente: Ministerio de Finanzas.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/j2ph0f>

Las revisiones de gastos pueden mejorar la eficiencia del gasto al guiar la priorización y reasignación de los gastos, y podrían concentrarse especialmente en los gastos relacionados con el clima, la salud y la atención a largo plazo, que se proyecta que aumentarán (Arimura et al., 2025[25]; Nomura et al., 2022[17]). Las revisiones de gastos y la formulación de políticas basadas en evidencia (EBPM), que Japón ha estado utilizando para la evaluación de políticas desde 2017, podrían mejorarse fortaleciendo sus vínculos con el proceso presupuestario y la planificación fiscal a mediano plazo. Por ejemplo, en Dinamarca, las revisiones de gastos informan las decisiones sobre los acuerdos presupuestarios plurianuales para mejorar los vínculos con el marco fiscal a mediano plazo (Tryggvadottir, 2022[26]). El Plan de Acción EBPM, iniciado en 2024, estableció un marco para la evaluación EBPM de políticas clave, lo cual es positivo. Sin embargo, existen desafíos clave para la implementación, como la falta de datos para realizar análisis de costo-beneficio y la escasez de expertos en análisis cuantitativo (Haraoka, 2022[27]; Morikawa, 2023[28]). Esto último podría reflejar en parte la alta rotación de personal en los ministerios y

agencias y la prevalencia de personal gubernamental generalista (Toyoda, 2022[29]). Por lo tanto, se debe priorizar el desarrollo y el fomento de la accesibilidad a los datos relacionados con las políticas y las estadísticas gubernamentales, incluidos los microdatos, así como la planificación de análisis empíricos ex post en el proceso presupuestario. También se podría considerar la creación de una unidad especializada con la experiencia y las habilidades adecuadas, como en el Reino Unido y Singapur.

Otra opción es que una institución fiscal independiente realice revisiones del gasto, como ocurre en algunos países de la OCDE.

El Consejo de Política Económica y Fiscal de Japón, integrado por expertos externos, publica proyecciones económicas y fiscales a medio y largo plazo, con diversos escenarios. La creación de una institución fiscal independiente, tal como se recomienda en el Informe de la OCDE sobre Japón de 2024, también contribuiría a evaluar los planes y proyecciones macroeconómicas y fiscales del gobierno, y podría proporcionar una evaluación ex ante oportuna y transparente de determinadas políticas, como los escenarios de reforma de pensiones e impuestos.

Tabla 1.10. Recomendaciones anteriores sobre políticas fiscales

Recomendaciones de encuestas anteriores:	Acciones emprendidas desde 2024
Reducir el déficit fiscal eliminando gradualmente las ayudas relacionadas con la pandemia y las crisis energéticas.	El déficit fiscal ha ido disminuyendo, pero los subsidios a la gasolina se mantuvieron vigentes en 2025 y fueron reemplazados por la abolición permanente del tipo impositivo provisional a la gasolina en diciembre, mientras que los subsidios a la electricidad y al gas urbano se han suspendido y reintroducido varias veces.
Limitar el uso de presupuestos suplementarios y fondos de reserva para contingencias a grandes perturbaciones macroeconómicas y evaluarlos a posteriori.	No se ha tomado ninguna medida.
Trasladar la atención a largo plazo de los hospitales a la atención domiciliaria para quienes tienen necesidades leves y moderadas, y a la atención institucional para quienes tienen necesidades graves.	La revisión de las tarifas de atención médica y de cuidados a largo plazo de 2024 incluye un cambio para promover la atención domiciliaria.
Incrementar gradualmente los ingresos fiscales, incluso aumentando la tasa del impuesto al consumo en pequeños incrementos.	No se ha tomado ninguna medida.

1.6. Abordar la escasez de mano de obra y de personal cualificado

Desde principios de la década de 2010, a excepción de la pandemia, Japón ha enfrentado una grave escasez de mano de obra. La relación entre vacantes y desempleo es una de las más altas de la OCDE (Figura 1.19, Panel A). La relación entre ofertas de empleo y solicitantes también se mantiene elevada en 1,22 en 2025, pero podría estar subestimando la tensión del mercado laboral, ya que se basa en las ofertas de empleo y los solicitantes registrados en las agencias públicas de empleo, mientras que ha habido una

Se observa un reciente desplazamiento de las ofertas de empleo hacia agencias privadas, con una tasa de vacantes ajustada que casi duplica la tasa sin ajustar (Panel B). La percepción de escasez de mano de obra también es notable, aunque varía según el sector y el tamaño de la empresa (Paneles C y D). Además, las quiebras atribuibles a la escasez de mano de obra alcanzaron máximos históricos en 2025.

También es necesario abordar la falta de correspondencia entre las habilidades y la demanda. Si bien Japón presenta uno de los niveles de competencia más altos en alfabetización y aritmética en la OCDE, la proporción de empleados con cualificaciones insuficientes o excesivas, así como aquellos con un campo de estudio inadecuado, es superior al promedio de la OCDE (Figura 1.20, Panel A). Japón también enfrenta escasez de personal cualificado, especialmente en habilidades técnicas e idiomas extranjeros (OCDE, 2022[30]). De hecho, la proporción de adultos con bajas competencias en tecnologías de la información y la comunicación es elevada en comparación con otros países (Panel B), lo que subraya la importancia de mejorar las competencias digitales.

Según una encuesta de 2024, las empresas están respondiendo a la escasez de mano de obra mejorando las condiciones laborales, flexibilizando los requisitos de contratación para recién graduados y profesionales con experiencia, ofreciendo mayores oportunidades de formación, recontratando a antiguos empleados e implementando inversiones para el ahorro de mano de obra (Cabinet Office, 2024[31]). Por ejemplo, las empresas de los sectores de alojamiento y hostelería, construcción y comercio minorista, que se enfrentan a una grave escasez percibida, han aumentado la inversión en el ahorro de mano de obra. Las políticas bien diseñadas pueden ayudar a respaldar estas iniciativas facilitando un mercado laboral flexible y móvil, impulsando la participación de mujeres, trabajadores mayores y extranjeros, y mejorando la eficacia de los programas de aprendizaje para adultos para adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral.

Figura 1.19. El mercado laboral está ajustado.

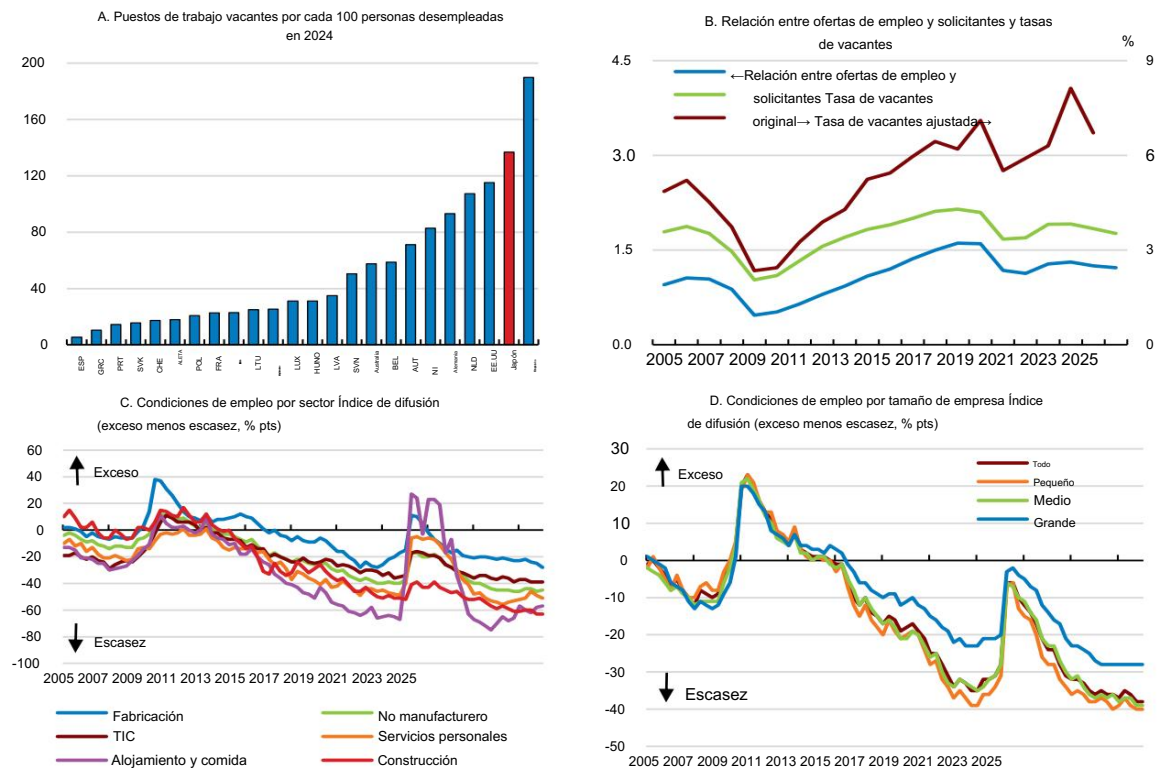
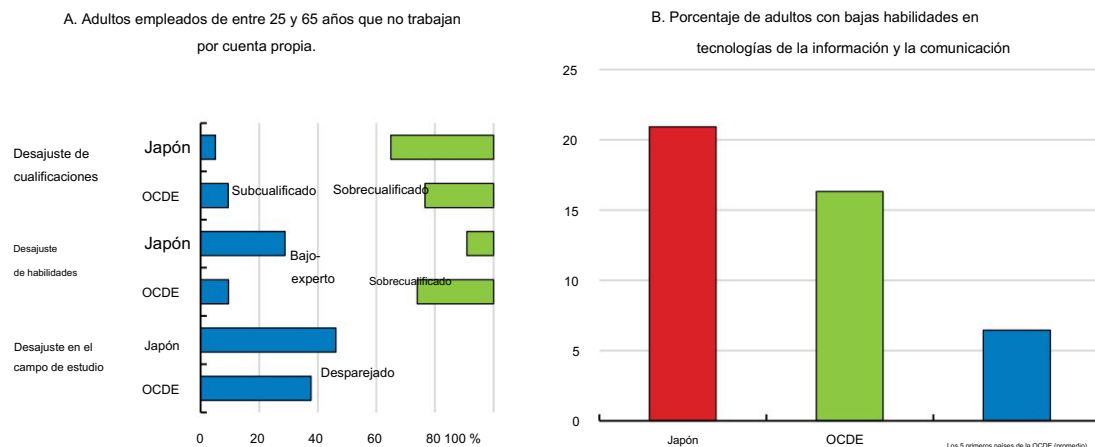
StatLink 2 <https://stat.link/sz9kgo>

Figura 1.20. Es necesario mejorar la correspondencia entre las habilidades y las necesidades del mercado laboral.

StatLink 2 <https://stat.link/rg7qzk>

1.6.1. Hacer más flexible el mercado laboral

Es necesaria una reforma fundamental del mercado laboral para afrontar el doble desafío de una población menguante y envejecida, y los cambios estructurales derivados de las transformaciones digital y ecológica, que requieren un mercado laboral flexible y dinámico. El modelo tradicional japonés de empleo vitalicio (un contrato implícito a largo plazo, donde las empresas contratan a recién graduados y les garantizan un puesto de trabajo hasta la jubilación), un sistema de salarios y ascensos basado en la antigüedad (los salarios aumentan considerablemente con la antigüedad, de modo que los trabajadores más jóvenes cobran por debajo de su productividad marginal, mientras que los más veteranos cobran por encima), la jubilación obligatoria a los 60 años (con la garantía de reincorporación laboral hasta los 65), largas jornadas laborales, formación en la empresa, la práctica de la contratación simultánea de recién graduados y una proporción relativamente baja de contrataciones a mitad de carrera funcionaron bien cuando la población de Japón era joven y creciente. Sin embargo, en un contexto de mayor longevidad laboral, escasez de mano de obra y un entorno externo en rápida transformación, se necesita un mercado laboral más ágil.

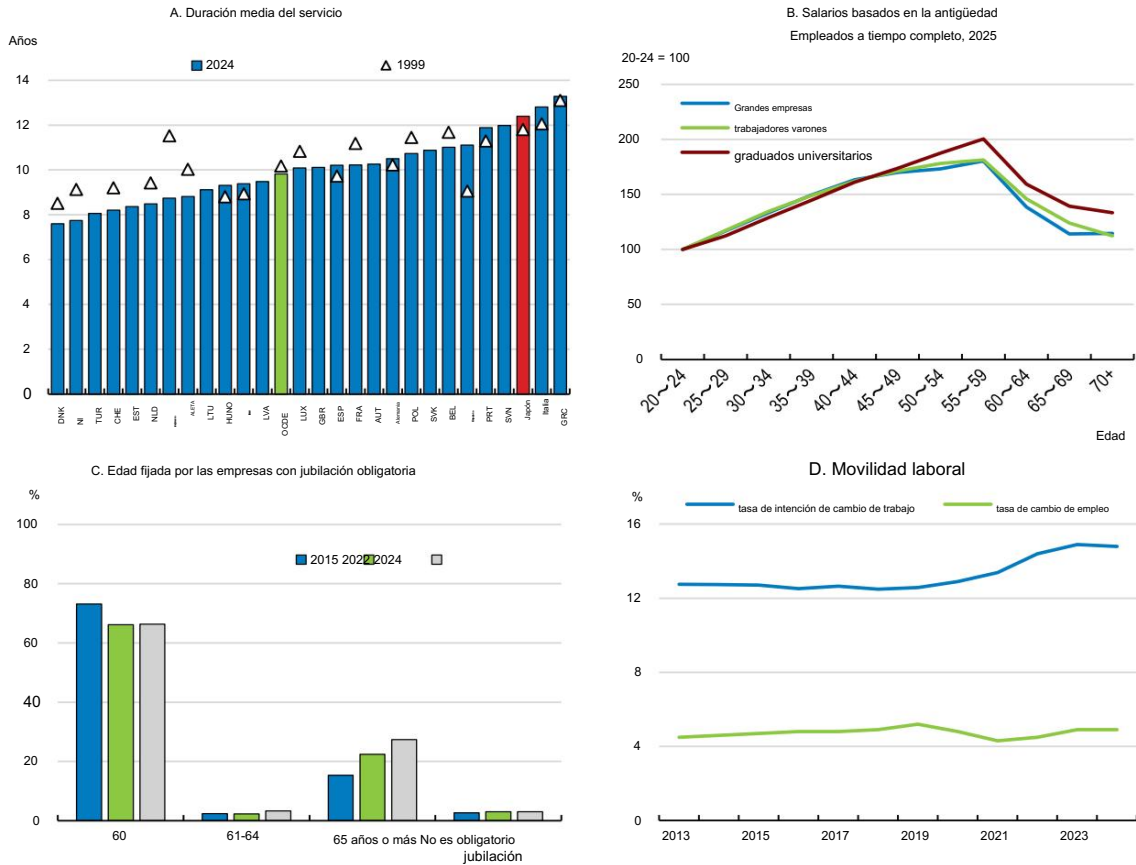
El empleo de por vida se refleja en la larga permanencia en el puesto, con una duración media de servicio de 12,4 años superior a la media de la OCDE (Figura 1.21, Panel A). La proporción de trabajadores empleados durante diez años o más, que alcanza el 46,7%, también es elevada. Los salarios aumentan considerablemente con la antigüedad, especialmente en las grandes empresas, y para los hombres y los trabajadores con mayor nivel educativo, hasta la jubilación obligatoria, que suele ser a los 60 años (Panel B). Como reflejo del coste de los salarios basados en la antigüedad, el 96,1% de las empresas tienen jubilación obligatoria para los trabajadores de mayor edad. Si bien está disminuyendo, entre las empresas con jubilación obligatoria, la proporción de empresas que la fijan a los 60 años sigue siendo alta, en un 66,3% en 2024 (Panel C). La proporción de empresas que mantienen a sus empleados después de la jubilación obligatoria hasta los 70 años ha aumentado del 25,6 % en 2021 al 31,9 % en 2024 (JILPT, 2025[32]), pero a menudo lo hacen en puestos no regulares (véase más adelante). El empleo vitalicio y la fijación de salarios basada en la antigüedad pueden reducir los incentivos para que los trabajadores cambien de trabajo a lo largo de su carrera. La jubilación obligatoria impulsa la rotación de personal dentro de la empresa, pero la recontractación como trabajadores no regulares puede mantener el empleo de los trabajadores mayores a costa de una menor calidad del trabajo.

Se han implementado varias reformas positivas para abordar algunos de estos desafíos, como la introducción de reformas en los estilos de trabajo y la obligación de las empresas de garantizar el empleo a quienes deseen trabajar hasta los 65 años (ofreciéndoles la continuidad laboral o elevando o eliminando la edad de jubilación obligatoria). Las reformas también incentivan a las empresas a ofrecer flexibilidad a los trabajadores hasta los 70 años, ya sea mediante la continuidad laboral, el trabajo independiente u otras modalidades de trabajo.

La evidencia anecdótica sugiere que las reformas están cambiando lentamente los mercados laborales, aunque los datos aún no reflejan completamente estas tendencias. Por ejemplo, si bien las tasas de cambio de empleo no han aumentado, las tasas de intención de cambio de empleo han ido en aumento (Figura 1.21, Panel D), y la proporción de contrataciones a mitad de carrera para trabajadores permanentes a tiempo completo ha aumentado del 63,1 % en 2014 al 68,3 % en 2024. La asignación de mano de obra se está volviendo gradualmente más eficiente, y la evidencia sugiere que los empleados a tiempo completo se están trasladando a empresas más productivas y los salarios para los trabajadores altamente cualificados que cambian de empleo han mostrado una tendencia al alza (Ikeda et al., 2025[33]). Además, el 40,4 % de las empresas habían revisado sus sistemas salariales entre 2019 y 2021 para vincular mejor la remuneración con el rendimiento (Fujimoto, 2024[34]).

Las reformas deben seguir apoyando los cambios estructurales en curso. En primer lugar, la imposición de límites a la jornada laboral, introducida con las Reformas del Estilo de Trabajo, puede contribuir a impulsar la movilidad laboral, dado que las largas jornadas laborales suelen ser un obstáculo para la búsqueda de empleo (Oficina del Gabinete, 2025[4]). En segundo lugar, se necesita una reforma integral del mercado laboral que incluya varios elementos recomendados en anteriores Estudios Económicos de la OCDE, como el aumento de la edad de jubilación obligatoria, con miras a su abolición, y el abandono de los salarios basados en la antigüedad para adoptar una remuneración basada en el desempeño y el puesto de trabajo. Debe priorizarse la rápida implementación de las medidas previstas en la Reforma Integrada del Mercado Laboral de Tres Pilares de 2023 (Recuadro 1.5; (Oficina del Gabinete, 2023[35])). Romper el vínculo entre antigüedad y salario también allanaría el camino para la reforma de la edad de jubilación obligatoria. Esto debería complementarse con reformas para brindar capacitación a los trabajadores mayores y permitirles acceder a nuevos puestos sin la pérdida de calidad laboral que suele observarse en los sistemas de recontractación tradicionales (véase más abajo; (OCDE y MHLW, 2024[36])).

Figura 1.21. Las prácticas tradicionales del mercado laboral pueden reducir la eficiencia de la asignación.



Nota: Panel A: Duración media en el puesto actual/principal. Panel B: Las grandes empresas tienen más de 1000 empleados. Panel C: Los datos de 2015 y 2022 provienen de la Encuesta General sobre Condiciones de Trabajo, que abarca a las empresas con 30 o más trabajadores fijos. Los valores de 2024 provienen del Resumen del Informe sobre las Condiciones de Empleo de las Personas Mayores, que abarca a las empresas con 31 o más empleados.

Fuente: Base de datos de la OCDE sobre empleo por periodos de permanencia en el puesto; Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social; y Ministerio del Interior y Comunicación.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/d36cge>

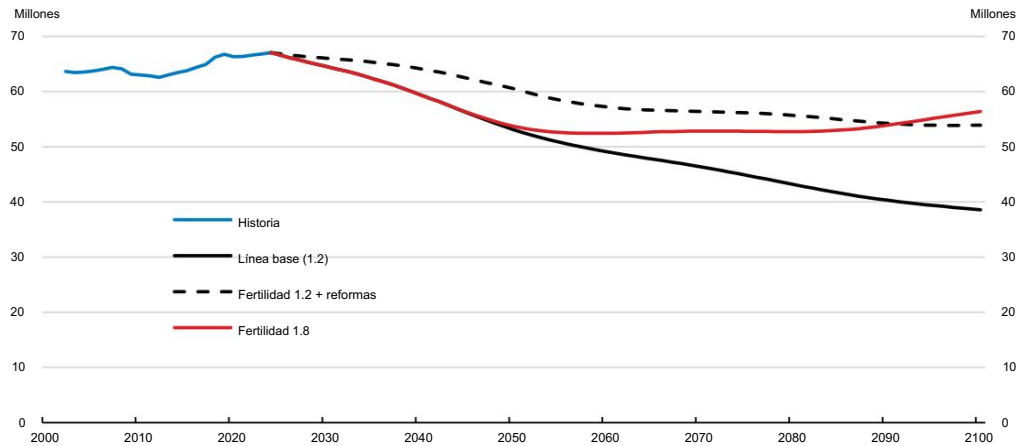
Recuadro 1.5. Reforma integrada del mercado laboral con tres pilares.

- Apoyo al desarrollo de habilidades: El objetivo es pasar de la formación en el puesto de trabajo a un sistema en el que las personas seleccionen sus propias opciones de formación. Los planes incluyen aumentar la formación en los sectores con mayor escasez de personal, destinar los subsidios de adaptación laboral a la formación, simplificar los trámites y la información en línea sobre las prestaciones de formación y mejorar el apoyo a la reconversión profesional para los trabajadores temporales.
- Facilitación de la movilidad laboral hacia sectores y empresas en crecimiento: Se revisará el sistema de prestaciones por desempleo y la tributación de las rentas de jubilación. Entre las opciones se incluyen la reforma de las prestaciones por desempleo, la abolición de los sistemas tributarios de jubilación que favorecen a los trabajadores con 20 años o más de antigüedad en una empresa, la ampliación de los planes de jubilación transferibles y la eliminación de los obstáculos a la dimisión voluntaria. También se mejorará el intercambio de información pública y privada sobre ofertas de empleo y oportunidades de desarrollo profesional.
- Introducción de la gestión de personal basada en puestos de trabajo y adaptada a las condiciones de cada empresa: El objetivo es promover la contratación y remuneración de los trabajadores en función de las funciones específicas que desempeñan. Las políticas incluyen el desarrollo de estudios de caso que sirvan de referencia para las empresas en materia de selección, formación y evaluación de personal, sistemas salariales y de permisos.

1.6.2. Impulsar el empleo de mujeres, personas mayores y trabajadores extranjeros.

Según las proyecciones de la OCDE, con tasas de fertilidad, inmigración neta y tasas de empleo constantes por género y cohortes de edad de cinco años, la fuerza laboral se reduciría en más de la mitad para finales de siglo, mientras que la proporción de personas mayores aumenta. Dado que la tasa de empleo para los hombres de entre 15 y 64 años ya se encuentra entre las más altas de la OCDE, con un 84,7 % en 2025, las políticas deberían centrarse en las mujeres, los trabajadores mayores (de más de 60 años) y los trabajadores extranjeros. Se necesita una estrategia integral que aumente las tasas de empleo y las horas trabajadas de estos trabajadores. (Figura 1.22), lo que contribuiría a reducir la escasez de mano de obra a corto y mediano plazo. El aumento de las tasas de natalidad, como se analiza en profundidad en el Estudio Económico de Japón de la OCDE de 2024, también daría resultados, pero con cierto desfase.

Figura 1.22. Las reformas pueden ayudar a mitigar la disminución proyectada del empleo.



Nota: Las reformas incluyen la entrada de 320 000 trabajadores extranjeros al año; la convergencia de las tasas de empleo femenino con las masculinas para 2050; y la convergencia de la tasa de empleo para cada cohorte de cinco años, desde los 60-64 hasta los 70-74 años, con la de la cohorte anterior (es decir, la tasa para el grupo de 60-64 años aumentaría a la tasa de 2021 para el grupo de edad de 55-59 años, etc.) para 2050. Fuente: Cálculos de la OCDE basados en el Modelo a Largo Plazo de la OCDE.

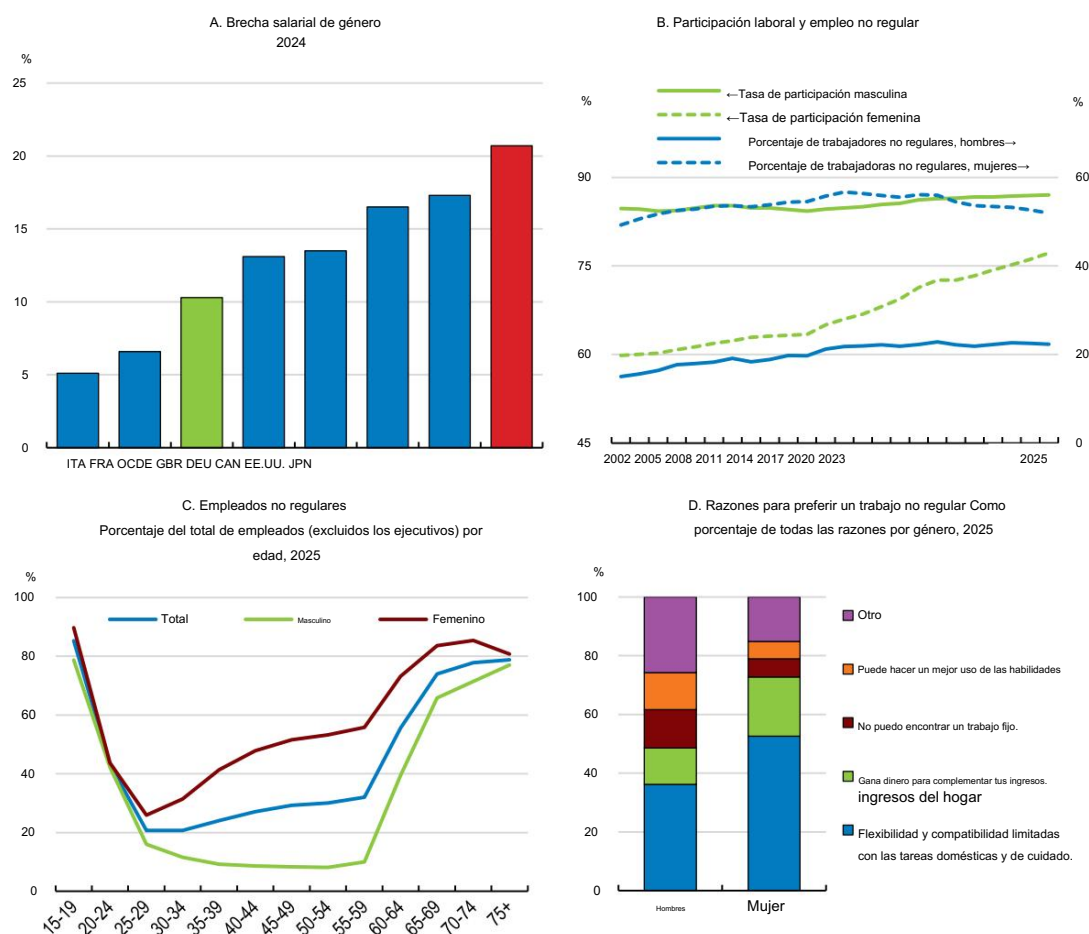
Enlace estadístico 2<https://stat.link/uys50l>

Japón ha aumentado significativamente el empleo de mujeres y trabajadores mayores (55-74 años) a alrededor del 75% y el 63%, respectivamente. Esto refleja no solo la escasez de mano de obra, sino también el aumento de la provisión de cuidado infantil y las reformas del estilo de trabajo. y la retención obligatoria de empleados menores de 65 años. Sin embargo, hay margen para impulsar aún más la participación femenina en la fuerza laboral y la calidad del empleo. La brecha salarial de género se encuentra entre las más altas de la OCDE (Figura 1.23, Panel A), lo que refleja en parte la baja proporción de mujeres en puestos de alta remuneración (por ejemplo, gerencia), la menor antigüedad y la sobrerrepresentación de mujeres en empleos no regulares (Panel B). La brecha de género en el empleo temporal, del 12 % en 2023, es la más alta de la OCDE, donde el promedio es del 2 % (OCDE, 2025[37]). Por lo tanto, se valoran positivamente las reformas que exigen a las empresas con 101 o más empleados fijos divulgar información sobre la brecha salarial de género y la presencia de mujeres en puestos directivos. Además, una gran proporción de trabajadores mayores se convierte en trabajadores temporales tras la jubilación obligatoria, percibiendo salarios sustancialmente inferiores (Panel C). Es fundamental seguir mejorando la cobertura de la seguridad social y los programas de formación para trabajadores temporales, tal como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024 .

Las empresas contratan trabajadores temporales para que actúen como amortiguadores de crisis: recursos fáciles de contratar y despedir que pueden ajustarse rápidamente al ciclo económico, dada la seguridad laboral de los trabajadores fijos. Las Reformas del Estilo de Trabajo de 2019 incluyen el principio de «igual salario por igual trabajo», es decir, la eliminación de disparidades injustificadas en el trato entre trabajadores fijos y temporales que realizan trabajos iguales o similares. Si bien el indicador general de protección del empleo de la OCDE para los trabajadores fijos se sitúa en torno a la media de la OCDE, aún existen algunas brechas. A los trabajadores les resulta difícil llevar quejas por trato injusto al sistema judicial, dada su información limitada y su escasa representación en los sindicatos (OCDE, 2024[38]). La Ley de Contrato Laboral de Japón establece que cualquier despido de trabajadores que “carezca de motivos objetivos y razonables y no se considere apropiado en términos sociales generales, [será] tratado como un abuso de poder y será inválido”. Esta formulación otorga al sistema legal una considerable discreción. Si se considera que una empresa no cumple con alguno de los criterios, el despido puede ser

invalidado. Los tribunales suelen ordenar la reincorporación de los trabajadores despedidos con el pago de los salarios atrasados. Por lo tanto, los empleadores se enfrentan a una gran incertidumbre al despedir a trabajadores fijos, lo que los lleva a recurrir a trabajadores temporales para obtener flexibilidad. Las autoridades están analizando actualmente la situación real de los despidos y los conflictos relacionados con ellos para evaluar, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, la viabilidad de una reforma. Aumentar la certeza del sistema de resolución de conflictos contribuiría a proteger a todo tipo de trabajadores y debería ir acompañado de ayudas económicas y de reinserción laboral para los trabajadores desplazados.

Figura 1.23. El empleo no regular se concentra entre las mujeres y los trabajadores de mayor edad.



Nota: Panel A: Porcentaje del salario medio de los hombres en el mismo decil. Panel B: Personas de 15 a 64 años. Los valores de 2011 faltan debido al Gran Terremoto del Este de Japón y se han interpolado. Panel D: Todas las personas que trabajan y las que no trabajan en el momento de la encuesta.

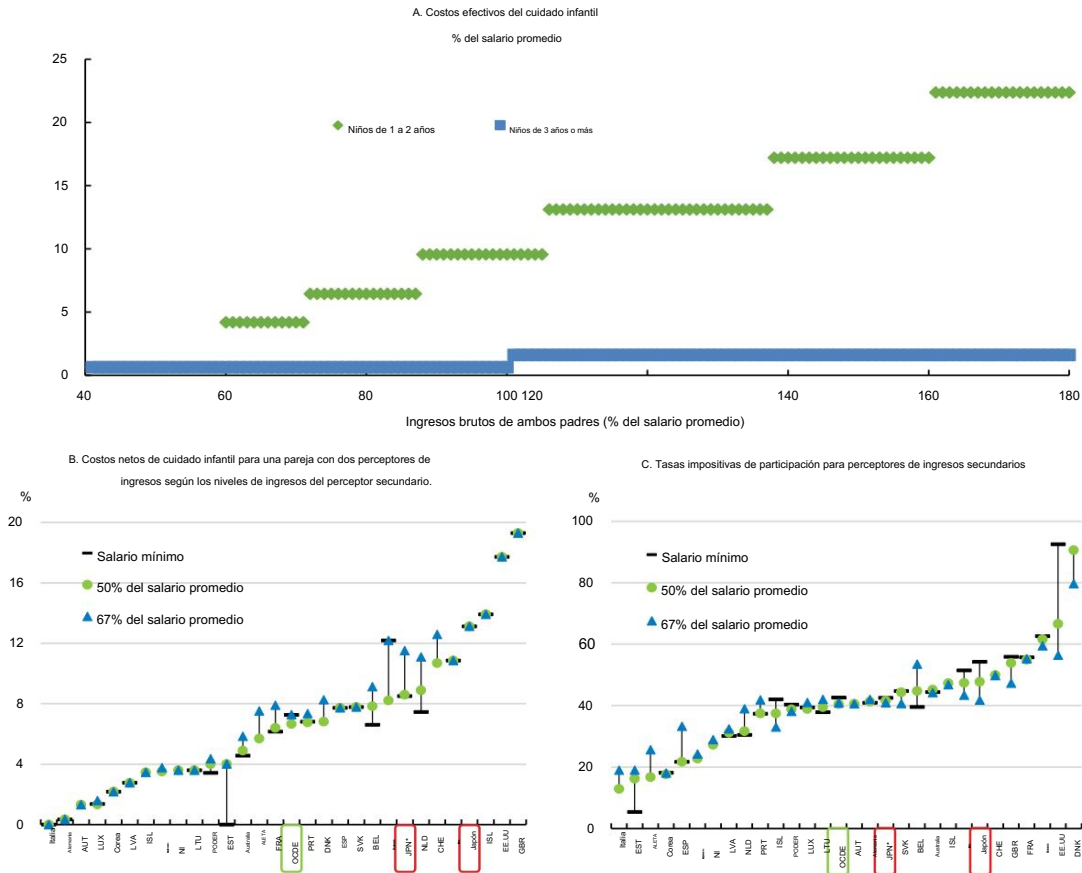
Fuente: OCDE, Brecha salarial de género; y Ministerio del Interior y Comunicaciones, Encuesta de población activa (tabulación detallada).

StatLink 2 <https://stat.link/q04cj3>

Varias otras políticas pueden ayudar a aumentar el empleo femenino y las horas trabajadas. La brecha de género en el trabajo no remunerado de alrededor de 178 minutos por día es más alta que el promedio de la OCDE de 126 (OCDE, 2025[37]), mientras que las horas de trabajo en Japón son las más largas de la OCDE. Las mujeres son más propensas a citar la flexibilidad limitada como razón para preferir trabajar en empleos no regulares (Figura 1.23, Panel D), lo que destaca la importancia de los horarios de trabajo flexibles y el teletrabajo. Las enmiendas de 2025 a la Ley de Licencia por Cuidado Infantil y Familiar ampliaron la elegibilidad para la exención de horas extras y licencia de corta duración para niños enfermos/lesionados y para cuidadores e introdujeron el requisito para que los empleadores ofrezcan opciones de trabajo flexibles para quienes crían niños de tres años de edad o más y que aún no han ingresado a la escuela primaria. Además, los impuestos y beneficios para los perceptores de un segundo ingreso deben reformarse (ver más arriba). Por último, el sistema en el que los empleados suelen elegir entre la trayectoria profesional o la trayectoria administrativa (no profesional), con una movilidad limitada entre ambas, al incorporarse a una empresa, afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

La matriculación en educación infantil temprana es casi universal para los niños de 3 a 5 años, mientras que ronda el 45 % para los de 0 a 2 años (OCDE, 2025[39]). El cuidado infantil para niños de 3 a 5 años es prácticamente gratuito. Las contribuciones de los padres a los costos del cuidado infantil aumentan progresivamente con los ingresos de los padres para los niños de 1 a 2 años, con tarifas más bajas para el segundo hijo y gratuito a partir del tercero. Estos aumentos progresivos pueden afectar los incentivos laborales para aceptar un empleo o aumentar los ingresos de los segundos perceptores de ingresos en algunos casos (Figura 1.24, Panel A). Sujeto a una evaluación de su rentabilidad y viabilidad, ya que los gobiernos locales deciden las tarifas con referencia a las directrices nacionales, una posible opción de reforma es linealizar el esquema de cuotas de contribución parental para aquellos que no están exentos de pago, a fin de evitar aumentos abruptos en las contribuciones parentales o pérdidas repentinas de subsidios. Dicha reforma podría reducir los costos netos del cuidado infantil para algunos hogares, especialmente los de bajos ingresos (Panel B). Para una familia donde el segundo perceptor de ingresos percibe el salario mínimo, los costos netos del cuidado infantil disminuirían del 13,1 % al 8,5 % del salario promedio tras la reforma, ligeramente por encima del promedio de la OCDE. Esto podría aumentar los incentivos laborales al reducir la tasa impositiva de participación para los segundos perceptores de ingresos, especialmente para los hogares de bajos ingresos (Panel C).

Figura 1.24. Las reformas en el cuidado infantil podrían aumentar los incentivos laborales para algunos perceptores de ingresos secundarios.



Nota: Panel A: El ingreso de uno de los padres se establece en el 20% del salario promedio, mientras que el ingreso del otro padre varía entre el 21 y el 160% del salario promedio. Para el niño de 3 años, el niño se beneficia del programa gratuito de educación y cuidado infantil temprano y los padres solo pagan las comidas. Los pasos son límites superiores establecidos por las directrices nacionales, mientras que las tarifas son establecidas y varían por las autoridades locales. Panel B: Familia con un niño de 2 años. El ingreso del perceptor principal es del 67% del salario promedio. Se supone que ambos padres trabajan a tiempo completo. Se supone que el hogar es elegible para asistencia social o beneficios de ingreso mínimo. Los datos sobre los costos netos de cuidado infantil para los padres que utilizan cuidado infantil en centros se presentan después de contabilizar cualquier beneficio o crédito fiscal diseñado para reducir los costos brutos de cuidado infantil. El análisis excluye a las familias con más de un hijo. Panel C: El perceptor secundario acepta un empleo a tiempo completo en diferentes niveles de ingresos. En los paneles B y C: JPN* se refiere a Japón bajo el escenario de reforma que elimina los saltos en los subsidios, según el nivel de ingresos, sin recortar los beneficios para los hogares de mayores ingresos. Los datos de Japón en ambos escenarios corresponden a 2025, y los del resto de países a 2024.

Fuente: Modelo de Impuestos y Beneficios de la OCDE, versión 2.8.0.

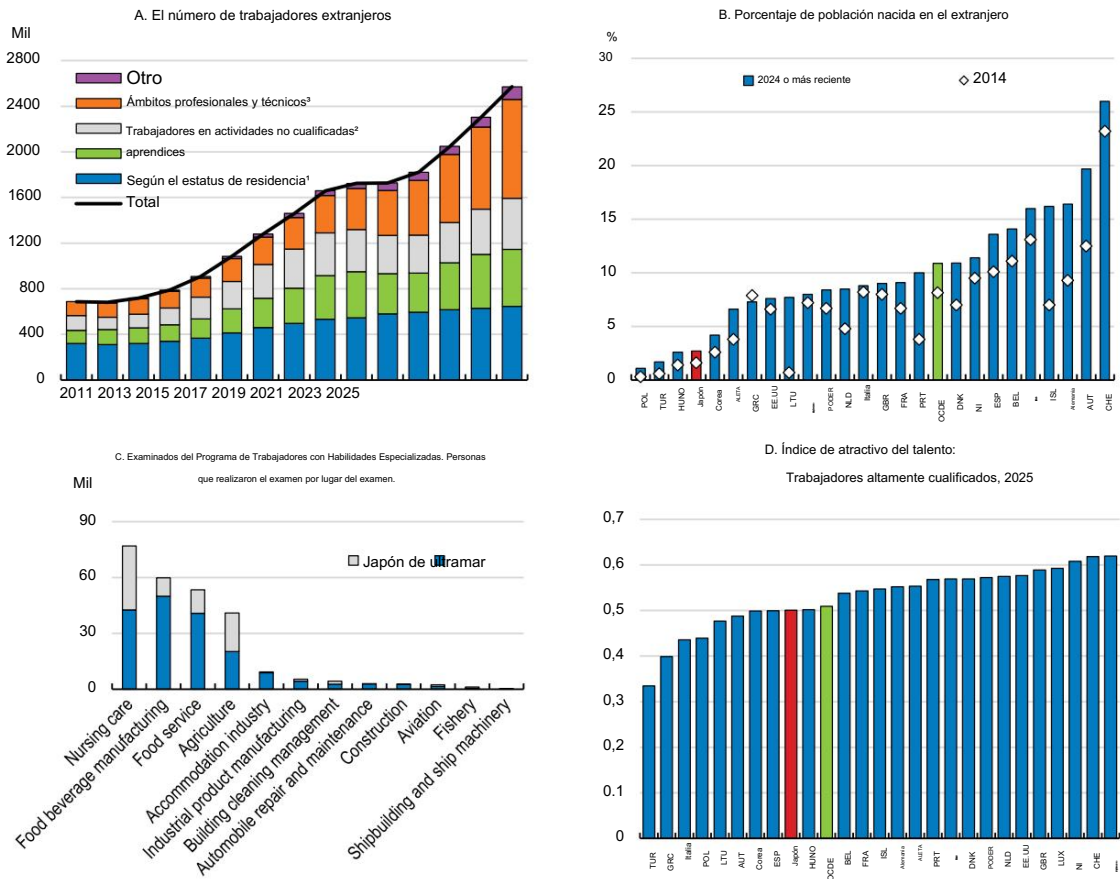
Enlace estadístico 2<https://stat.link/s4u0ov>

Japón ha logrado grandes avances en políticas familiares, como la licencia parental. El derecho a una licencia parental de hasta 12 meses para los padres es el más largo entre los países de la OCDE y la obligación de revelar el porcentaje de empleados elegibles que toman licencia parental ahora se aplica a las empresas con más de 300 empleados, en lugar de

el umbral anterior de 1000 empleados. La utilización de la licencia de paternidad ha aumentado del 7,5 % en 2019 al 40,5 % en 2024 (MHLW, 2025[40]), pero la duración sigue siendo baja, con un 37,7 % que toma menos de dos semanas y un 58,1 % que toma menos de un mes. Además, el regreso al empleo regular para las mujeres de mediana edad después de un período de cuidado de niños pequeños es difícil. La proporción de empleo regular entre las mujeres disminuye después de los 30 años, como se analiza en la Encuesta de Japón de la OCDE de 2024. Por ejemplo, los umbrales de edad para solicitar algunos empleos públicos podrían afectar de manera desproporcionada a estos grupos y podrían reformarse.

El número de trabajadores extranjeros ha ido en aumento, alcanzando un máximo histórico de alrededor de 2,5 millones en 2025 (Figura 1.25, Panel A), lo que refleja la escasez de mano de obra y las políticas gubernamentales, como los programas de Trabajadores Calificados Específicos e Ingenieros/Especialistas en Humanidades/Servicios Internacionales (EHI). No obstante, algunas estimaciones sugieren que Japón necesitará 6,9 millones de trabajadores extranjeros para 2040, lo que representa aproximadamente un millón más que la oferta prevista de trabajadores extranjeros potenciales (JICA, 2024[41]). La población nacida en el extranjero en Japón, si bien está en aumento, sigue siendo baja en un 2,7 % en términos internacionales (Panel B).

Figura 1.25. Deben continuarse los esfuerzos para hacer un mayor uso de los trabajadores extranjeros.



Nota: Panel A: 1. Incluye residentes (permanentes) y cónyuges de residentes japoneses o (permanentes). 2. Personas que tienen permiso para realizar actividades fuera de su estatus de visa. 3. Incluye profesores y maestros, artistas, maestros religiosos, periodistas, administración de empresas (incluidas las transferencias intraindustriales corporativas), servicios legales y contables, atención médica y de enfermería, entretenimiento, investigación, ingenieros y especialistas en humanidades y servicios internacionales. Panel C: Número acumulado a junio de 2024. Panel D: Para trabajadores altamente cualificados teniendo en cuenta las políticas de visa y admisión. Puntuación: 0 (menor) a 1 (mayor atractivo).

Fuente: Agencia de Servicios de Inmigración; OCDE, Perspectivas de la Migración Internacional 2025; Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar; y Andersson, L. (2025), "Medición y evaluación del atractivo del talento en los países de la OCDE".

Enlace estadístico 2<https://stat.link/deas3z>

Las vías de inmigración de Japón para extranjeros altamente cualificados están bien desarrolladas. El programa EHI representa alrededor del 20% del total de trabajadores extranjeros y el 60% de los migrantes cualificados. Japón también tiene un sistema basado en puntos para profesionales altamente cualificados desde 2012. Más recientemente, nuevas rutas más rápidas para la residencia permanente (1 año bajo ciertas condiciones en lugar de otras categorías que van de 3 a 10 años), como J-Skip para profesionales altamente cualificados especiales.

Se ha incorporado a profesionales (por ejemplo, profesores e investigadores universitarios, ingenieros y directivos de empresas). El programa J-Find (Sistema Japonés para la Creación de Futuros Visados Individuales) otorga la residencia a graduados de universidades clasificadas entre las mejores del mundo. Se valora positivamente la flexibilización de los requisitos de acceso a la residencia permanente para los inmigrantes que cumplen los criterios, tal como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024. Otros países de la OCDE, como Australia, actualizan constantemente sus políticas de inmigración para atraer trabajadores cualificados ante la escasez de mano de obra (Recuadro 1.6). A pesar de la creciente variedad de opciones, Japón no cuenta con una plataforma web única que centralice toda la información sobre las vías migratorias. Dada la reciente proliferación de programas de migración laboral para trabajadores altamente cualificados, se podría considerar una plataforma que ayude a los posibles migrantes a desenvolverse en el sistema y que también permita evaluar los distintos programas, como las plataformas Make it in Germany , New Zealand Now y Skill Finder (OCDE, 2024[42]).

Recuadro 1.6. Políticas de inmigración en Australia

El sistema migratorio australiano ha logrado atraer a inmigrantes altamente cualificados que contribuyen positivamente a la economía nacional. El sistema se caracteriza por evaluaciones frecuentes y un seguimiento constante de las políticas, con reformas continuas para abordar los retos que se presenten. Australia prioriza la migración cualificada, utilizando un sistema de puntos para seleccionar a los inmigrantes en función de factores como la educación, la experiencia laboral, el dominio del inglés y la edad. El sistema opera a través de diversas categorías de visados, incluyendo visados independientes para trabajadores cualificados, visados patrocinados por empleadores y programas de migración regional. En 2024-25, Australia continuó implementando su Estrategia Migratoria, centrándose en simplificar el sistema de inmigración y abordar la escasez de mano de obra. Una reforma clave fue la introducción del nuevo visado de Habilidades en Demanda (SID, por sus siglas en inglés), que incluye tres categorías basadas en umbrales salariales y listas de ocupaciones. El visado SID ofrece un proceso más ágil tanto para los inmigrantes como para los empleadores y proporciona a los titulares de visados una vía más clara hacia la residencia permanente. En diciembre de 2024, el gobierno lanzó el Visado Nacional de Innovación (NIV, por sus siglas en inglés) para atraer talento internacional excepcional. El NIV está dirigido a personas que han obtenido reconocimiento internacional por su experiencia o logros en sectores prioritarios, como tecnologías críticas, industrias de la salud o infraestructura y transporte.

Fuente: OCDE (2025), [Perspectivas de la migración internacional 2025](#) y la OCDE (2023), [Estudios económicos de la OCDE: Australia 2023](#).

Las vías para trabajadores poco y medianos cualificados se revisaron en 2024, con la ampliación del Sistema de Trabajadores Cualificados Específicos (SSWS) y la revisión de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, que sienta las bases para la abolición del Programa de Formación de Pasantes Técnicos (TITP) y la creación del Programa de Empleo para el Desarrollo de Habilidades (ESD) (Recuadro 1.7). Estas reformas son bienvenidas, ya que el ESD Aborda los aspectos criticados de TITP, al permitir una mayor flexibilidad para cambiar de empleador, aumentar la transparencia en el proceso de contratación y regular las tarifas.

Recuadro 1.7. Novedades recientes seleccionadas en materia de vías de inmigración

La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados y la Ley de Formación Técnica Adecuada y Protección de Pasantes Técnicos en Formación fueron revisadas en junio de 2024 para preparar el terreno para la abolición del Programa de Formación Técnica en Formación (TITP) y la creación del Programa de Empleo para el Desarrollo de Habilidades (ESD) para crear una vía para el Sistema de Trabajadores Calificados Específicos (SSWS). Se espera que el Programa ESD esté operativo para 2027, con un período transitorio hasta 2030 para la eliminación completa del TITP. En marzo de 2024, el número de campos industriales específicos en el SSWS aumentó a 16 y el número esperado de trabajadores extranjeros que se aceptarán (máximo durante cinco años) aumentó de 345 150 a 820 000. El SSWS tiene dos categorías: (i) para trabajadores "con un grado considerable de conocimiento o experiencia" en las industrias específicas, que aprueban pruebas de competencia en el idioma japonés y habilidad vocacional; y (ii) para aquellos con "habilidades expertas", quienes pueden renovar su período de estadia sin restricciones y traer a su cónyuge e hijos, siempre que cumplan con requisitos legales específicos. Quienes completen tres años del TITP pueden cambiar su estatus a SSWS (i) sin exámenes. El Programa ESD ha sido diseñado para asegurar trabajadores en sectores con escasez de mano de obra, capacitando a trabajadores extranjeros para que cambien a SSWS (i) después de tres años, sujeto a la aprobación de una prueba de competencias y de idioma.

Fuente: (ISA, 2024[43]).

Los nuevos programas tienen el potencial de satisfacer eficazmente la futura demanda laboral, pero su visibilidad y accesibilidad en el extranjero podrían mejorarse. En diciembre de 2025, había alrededor de 382 000 trabajadores inscritos en el programa SSWS. categoría (i) y alrededor de 8 000 en la categoría (ii), pero alrededor del 54% provenían de TITP. La mayoría de los solicitantes ya estaban en Japón cuando realizaron los exámenes pertinentes, y la distribución entre sectores ha sido desigual (Figura 1.25, Panel C). Desde su inicio, la implementación de las pruebas de habilidades para SSWS ha sido lenta, con un número relativamente bajo de solicitantes en los países de origen. Para desarrollar escala, Japón debe ampliar su capacidad de reclutar trabajadores directamente de los países de origen, por ejemplo haciendo que la estructura de pruebas y cualificaciones sea más transparente y aumentando el número de pruebas administradas en el extranjero (OCDE, 2024[42]). El período de transición a ESD debe usarse eficientemente para establecer capacidad de capacitación y canteras, por ejemplo invirtiendo en instituciones de capacitación asociadas en los países de origen para reforzar su capacidad de proporcionar candidatos adecuados. Para garantizar la rentabilidad, esto podría comenzar con proyectos piloto en uno o dos países designados a pequeña escala.

Las Medidas Integrales para la Aceptación y la Coexistencia de Extranjeros de 2018 y la Hoja de Ruta para la Realización de una Sociedad de Coexistencia Armoniosa con Extranjeros de 2022 han creado un marco para las políticas de integración. Además, la Ley de Acreditación de Institutos de Enseñanza de Idioma Japonés para Garantizar una Implementación Adecuada y Confiable de la Enseñanza del Idioma Japonés entró en vigor en abril de 2024 para mejorar la calidad de la enseñanza del idioma (OCDE, 2024[44]). Si bien estos avances son bienvenidos, la implementación de una estrategia integral para la integración de los migrantes, como se recomienda en la Encuesta de la OCDE sobre Japón de 2024, es clave. Japón ocupa un puesto relativamente bajo en un referente internacional sobre el atractivo de los países para los trabajadores extranjeros altamente calificados (Figura 1.25, Panel D). La medida se basa en varias dimensiones, incluyendo la calidad de las oportunidades, las habilidades y los entornos familiares, la calidad de vida y las perspectivas de futuro.

Según una encuesta del año fiscal 2024, los inmigrantes de EHI se sintieron discriminados al buscar vivienda (17,4 %), trabajo (12,4 %) o en el trabajo (14,2 %) (ISA, 2024[45]). Los migrantes también enfrentan barreras para acceder a la atención médica debido a la falta de información (Khin et al., 2025[46]). Además, la escolarización no es obligatoria para los hijos de extranjeros y no existen políticas concretas para ayudar a los cónyuges de migrantes calificados a integrarse en el mercado laboral. Por lo tanto, la estrategia de integración integral debe centrarse en estos aspectos.

Si bien la Agencia de Servicios de Inmigración desempeña un papel central en las medidas relacionadas con los trabajadores extranjeros en Japón, Diversos ministerios y agencias se encargan de diferentes aspectos (Tabla 1.11), y existe margen para una mayor coordinación (Ishikawa y Goto, 2024[47]). Por lo tanto, la creación de la Oficina para una Sociedad de Convivencia Armoniosa y Ordenada con Extranjeros y el nombramiento de un Ministro de Estado responsable en 2025 son medidas positivas. La implementación de las estrategias nacionales también dependerá de las autoridades locales. Hasta el momento, la integración ha tenido mayor éxito en áreas urbanas con poblaciones extranjeras residentes concentradas (Tian, 2025[48]). Alrededor del 80% de las ciudades cuentan con planes o directrices para promover la convivencia multicultural, cifra muy superior al 10% en pueblos y aldeas (Ministerio del Interior y Comunicaciones, 2024[49]). Es necesario apoyar a las autoridades locales, por ejemplo, mediante el desarrollo continuo de un conjunto de herramientas y recursos, como la reciente creación de un portal de aprendizaje electrónico para la formación en idioma japonés. Estas herramientas deben evaluarse con frecuencia para mejorar su diseño y garantizar su rentabilidad.

Tabla 1.11. Ministerios y organismos encargados de las diferentes políticas para extranjeros

Agencia o Ministerio	Responsabilidades principales
Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y tecnología	Promoción del idioma y la educación japoneses, fomento de la matriculación de niños extranjeros en la escuela, apoyo en la búsqueda de empleo para estudiantes internacionales.
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar	Gestión del empleo de extranjeros, mejora del acceso al sistema sanitario, difusión y sensibilización sobre el sistema de seguridad social.
Ministerio de Interno Asuntos y Comunicaciones	Medidas financieras locales para la orientación vital, capacitación de coordinadores de información para víctimas de desastres en el extranjero.
Agencia de Niños y Familias	Ayudas para la crianza de los hijos para extranjeros
Ministerio de Justicia	Encuesta básica a residentes extranjeros, difusión exhaustiva de información y utilización de números individuales (Mi Número).

Fuente: (Ishikawa y Goto, 2024[47]).

1.6.3. Uso de la digitalización y la inteligencia artificial en los sectores de atención y educación.

El uso de tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial (IA) y la robótica, puede desempeñar un papel crucial para abordar la escasez de mano de obra. Las empresas japonesas están aumentando la inversión en estas tecnologías para hacer frente a los desafíos demográficos y aumentar el crecimiento de la productividad (Capítulo 2). Estas tecnologías también pueden ayudar a mejorar las condiciones laborales y la escasez de mano de obra en los sectores de cuidado y educación, al aumentar la eficiencia y automatizar las tareas administrativas, lo que permite a los trabajadores centrarse en sus responsabilidades principales. Según estimaciones del gobierno, en comparación con el año fiscal 2022, Japón necesitará alrededor de 570 000 cuidadores más en el año fiscal 2040, cuando su población anciana se acerque a su máximo. En educación, la tasa nacional de competencia por puestos docentes en escuelas públicas (primarias) ha disminuido del 5,7 % (4,1 %) en el año fiscal 2014 al 3,2 % (2,2 %) en el año fiscal 2024. Además, la proporción de docentes menores de 30 años que expresan su intención de dejar la docencia en los próximos cinco años, que es del 20%, se sitúa en la media de la OCDE, pero es 6 puntos porcentuales superior a la de 2018 (OCDE, 2025[50]).

Japón ha adoptado diversas medidas para mejorar la calidad del empleo en el sector sanitario, como campañas de información pública, fomento del reparto de tareas entre instituciones médicas, concesión de subvenciones y utilización de tecnologías digitales. Por ejemplo, la adopción de robots en residencias de ancianos ha conllevado una mejora en la calidad, la productividad y la retención de personal (Lee et al., 2024[51]). Sin embargo, el uso de herramientas digitales, como la proporción de centros de atención primaria que utilizan historias clínicas electrónicas, sigue siendo bajo en comparación con otros países (OCDE, 2023[52]). La adopción de herramientas de diagnóstico basadas en IA y plataformas de telesalud, que deberían promoverse, requerirá las competencias necesarias entre los profesionales sanitarios y marcos sólidos de gobernanza de datos para proteger la información de los pacientes y mantener la confianza pública (véase más arriba).

Japón debería garantizar que los docentes reciban la formación necesaria para utilizar herramientas digitales que mejoren la eficiencia en el aula y reduzcan el tiempo dedicado a tareas no docentes, como en otros países de la OCDE (Recuadro 1.8). Los docentes japoneses tienen la jornada laboral más larga de la OCDE, con 55,1 horas semanales (media de la OCDE: 41), pero dedican más tiempo a tareas administrativas que en la OCDE (OCDE, 2025[50]). El exceso de trabajo administrativo se cita como la principal fuente de estrés entre los docentes (63%) (OCDE, 2024[53]). Una ley aprobada en junio de 2025 introdujo un aumento gradual de los ajustes financieros adicionales para la profesión docente, del 4% al 10% para 2031, y estableció el objetivo de reducir las horas extras de los docentes. Las herramientas digitales tienen el potencial de mejorar la eficiencia, por ejemplo, mediante la automatización de tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, pero los docentes necesitan tiempo para desarrollar sus competencias digitales y adaptar sus prácticas docentes. El 17% de los profesores japoneses han utilizado IA en su trabajo, una cifra inferior a la media de la OCDE del 36% (OCDE, 2025[50]), y aunque la necesidad de incluir habilidades TIC en su desarrollo profesional fue superior a la media de la OCDE, el porcentaje de profesores japoneses que participaron en el desarrollo profesional de habilidades TIC fue inferior a la media de la OCDE (OCDE, 2023[54]).

Recuadro 1.8. Automatización de tareas administrativas repetitivas en escuelas de Corea y Reino Unido.

En Corea, el "Sistema Nacional de Información Educativa" incorpora información estudiantil, funciones administrativas y un sistema de credenciales digitales en una plataforma web centralizada (Ministerio de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos de Corea, 2025[55]). El objetivo es digitalizar o automatizar las tareas administrativas y reducir el tiempo que los docentes dedican a la entrada de datos, el mantenimiento de registros o los procedimientos de verificación. En Inglaterra, el Departamento de Educación lanzó el "Kit de herramientas para la reducción de la carga de trabajo escolar" en 2018, que proporciona a las escuelas asesoramiento y herramientas digitales para optimizar una serie de procesos, incluidas las tareas administrativas, la planificación de lecciones, la gestión de datos y la calificación (Departamento de Educación del Reino Unido, 2024[56]). Una evaluación de 2020 encontró un impacto positivo en el bienestar de los docentes con una reducción del tiempo dedicado a las tareas objetivo y no impacto negativo en los resultados de los estudiantes.

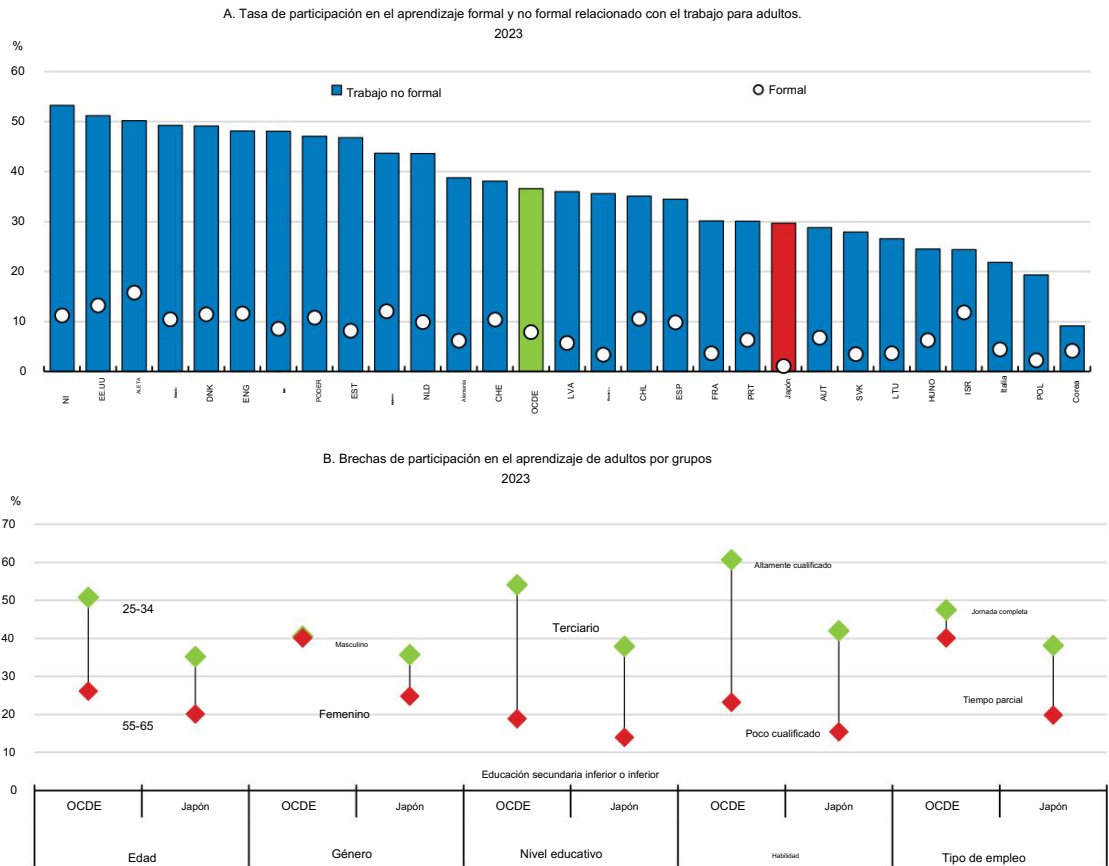
1.6.4. Adaptación de las políticas de aprendizaje de adultos a las necesidades cambiantes del mercado laboral.

Un sistema de aprendizaje de adultos que funcione correctamente es esencial para ayudar a los trabajadores a adaptarse a los cambios en el mercado laboral y garantizar la igualdad de acceso. Según el panel de control de Prioridades para el Aprendizaje de Adultos de la OCDE, a pesar de estar bien financiado, Japón tiene margen de mejora en términos de cobertura, inclusión, flexibilidad y alineación de

necesidades de habilidades (OCDE, 2021[57]). El mercado laboral japonés también ocupa un puesto relativamente bajo en un índice reciente de la OCDE sobre la preparación y adopción de habilidades prioritarias, que mide los ecosistemas de aprendizaje, el reconocimiento del talento y el entorno propicio más amplio (OCDE, 2025[58]).

La participación en el aprendizaje para adultos fuera del lugar de trabajo sigue siendo baja (Figura 1.26, Panel A). La concentración de la formación dentro de la empresa, ya sea en el puesto de trabajo o fuera de él, probablemente refleja las prácticas laborales tradicionales de Japón, que limitan la necesidad y el tiempo para la formación externa. Si bien la ley incentiva a los empleadores a ofrecer permisos de formación y educación, solo el 7,5 % de ellos los concedió en 2024. El predominio de la formación interna, centrada en habilidades específicas de la empresa, resulta menos adecuado para una mayor movilidad laboral y para satisfacer las nuevas necesidades de habilidades emergentes.

Figura 1.26. Hay margen para mejorar la cobertura y el acceso al aprendizaje de adultos.



Nota: Adultos de entre 25 y 65 años, formación formal y no formal relacionada con el trabajo durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Se considera de baja (alta) cualificación a quien obtenga una puntuación de Nivel 1 o inferior (Nivel 4 o superior) en la escala de alfabetización del PIAAC.

Fuente: OCDE (2025), Tendencias en el aprendizaje de adultos: nuevos datos de la encuesta de 2023 sobre las habilidades de los adultos, Getting Skills Right, OCDE Publishing, París.

StatLink 2<https://stat.link/61jf0n>

Reformas recientes y previstas, descritas en la Política básica sobre la reforma de la gestión económica y fiscal de 2025. y el recuadro 1.5, tienen como objetivo fortalecer el sistema de formación de adultos. El límite máximo de las prestaciones de formación educativa se elevó del 70 % al 80 % en octubre de 2024, y en 2025 se introdujo una prestación por licencia de formación educativa, que compensa el salario de quienes reciben seguro de desempleo cuando realizan una formación designada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social por su cuenta. Además, los empleadores pueden optar a una subvención de apoyo al desarrollo de recursos humanos cuando implementen programas de formación para el desarrollo.

Al igual que en otros países de la OCDE, los trabajadores mayores, mujeres, a tiempo parcial, con menor nivel educativo y baja cualificación tienden a participar menos en el aprendizaje de adultos (Figura 1.26, Panel B; (OCDE, 2025[59])). Las brechas entre trabajadores masculinos y femeninos en

Los programas de aprendizaje para adultos deberían estar mejor dirigidos a los grupos desfavorecidos. Los análisis sobre la formación para personas que buscan empleo y trabajadores que participan en programas de formación en el lugar de trabajo y en instituciones públicas y privadas se encuentran dispersos en diferentes lugares. Si bien estas fuentes cumplen propósitos distintos, un seguimiento más centralizado y sistemático de la participación puede ayudar a formular políticas más específicas. Por ejemplo, Australia y Alemania ofrecen incentivos financieros más generosos dirigidos a los trabajadores mayores. De igual manera, la subvención de apoyo al desarrollo de recursos humanos podría ser más generosa para los empleadores que capacitan a trabajadores mayores. Además, la falta de tiempo debido a las obligaciones laborales y familiares, que afecta especialmente a las mujeres y a los trabajadores con contratos temporales, constituye una barrera mayor para la participación en el aprendizaje para adultos en Japón que el promedio de la OCDE (Figura 1.27, Panel A). Por lo tanto, un mayor uso del aprendizaje electrónico y la oferta de cursos modulares, que se han expandido con la pandemia, pueden ayudar a llegar a los grupos desfavorecidos.

A. Barreras para la formación, 2023

Barrera	Japón (%)	OCDE (%)
No tengo tiempo debido al trabajo o la familia	58	46
Demasiado caro	12	18
No hay formación adecuada	15	13
Falta de apoyo del empleador	0	4

B. Porcentaje de aprendizaje no formal que conduce a un certificado, 2023

País	Porcentaje (%)
ESP	77
Austria	76
Italia	75
PRT	75
AUT	74
LVA	72
NLD	70
Corea	69
LIT	67
CHE	66
POL	65
CIL	64
HUN	62
OCDE	61
GBR	60
EST	60
FIN	60
SVK	55
DEU	54
ROU	53
POB	53
FRA	52
NOR	52
DNK	51
EEJ	50
ISR	49
USA	35

C. Aprendizaje no formal relacionado con el trabajo, por enfoque, 2023

Enfoque	Japón (%)	OCDE (%)
Habilidades de lectura y escritura	1	1
Habilidades relacionadas con los números y las habilidades de cálculo	1	1
Habilidades creativas o musicales, por ejemplo, manualidades	2	2
Lengua extranjera	3	3
Habilidades de comunicación y presentación	5	4
Operar maquinaria o equipo	7	7
Atención a clientes, pacientes o estudiantes	10	10
Habilidades de trabajo en equipo o de liderazgo, por ejemplo, resolución de conflictos	9	9
Conocimientos de informática o software	10	14
Seguridad, por ejemplo, seguridad laboral o primeros auxilios	15	18
Gestión de proyectos o habilidades organizativas, por ejemplo, gestión del tiempo	16	7
Otro enfoque	24	21

Fuente: OCDE (2025). Tendencias en el aprendizaje de adultos: Nuevos datos de la encuesta de 2023 sobre las competencias de los adultos.

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA OCDE: JAPÓN 2026 © OCDE 2026

La falta de formación adecuada como barrera (Panel A) refleja, en parte, la información insuficiente sobre las distintas oportunidades de formación, especialmente las impartidas por formadores privados no formales. Japón cuenta con diversas plataformas, como Manapass, centrada principalmente en los programas ofrecidos por instituciones públicas de educación superior; otro sitio web que enumera los cursos subvencionables para la formación; y varios portales de orientación profesional, como el de la agencia pública de empleo. La creación de una plataforma online integral que abarque todos los cursos de formación, tanto formales como no formales, podría ayudar a los futuros estudiantes a orientarse en el sistema. Una vez establecida, podría ampliarse para incluir información sobre la calidad de los proveedores.

Mejorar el control de calidad de los programas de formación aumentaría su eficacia. Japón introdujo directrices no obligatorias para los proveedores de formación privada no formal en 2011, así como la posibilidad de solicitar una certificación (renovable cada tres años) si seguían dichas directrices, lo que les otorgó credibilidad y un mejor acceso a algunas licitaciones de formación financiadas con fondos públicos. Sin embargo, el sistema se suspendió en 2023 debido a la baja participación, lo que refleja la falta de control y los elevados costes de solicitud. A medida que el aprendizaje para adultos se generaliza, se necesita un mecanismo de garantía de calidad y señalización para asegurar una buena relación calidad-precio para el gobierno y los participantes, y ayudar a empleadores y empleados a evaluar mejor la calidad de los proveedores de formación. Este enfoque regulatorio para la garantía de calidad es común en Austria (Ö-Cert) y Suiza (eduQwa) (OCDE, 2021[61]). Ö-Cert goza de buena aceptación entre los proveedores de aprendizaje para adultos en Austria debido a su administración sencilla y sus bajos costes de solicitud (100 EUR) para la acreditación (Eurydice, 2025[62]). Japón podría introducir un proceso de acreditación similar, comenzando con proyectos piloto en algunas áreas locales para garantizar un diseño que incentive la adopción. Como complemento, el aprendizaje no formal que conduce a un certificado para los participantes proporcionaría a los trabajadores evidencia de las habilidades adquiridas y haría que el aprendizaje fuera más reconocible para los empleadores.

mejorar la transferibilidad de habilidades entre empleadores y sectores. En promedio, en los países de la OCDE, el 62 % de las actividades de aprendizaje no formal conducen a un certificado, una cifra superior a la de Japón (Figura 1.27, Panel B).

Dado que se prevé que las necesidades de capacitación aumenten con el cambio de las tecnologías y la mayor duración de la vida laboral, el papel de los proveedores de capacitación subutilizados deberá cambiar. En 2024, solo el 8 % de las universidades e instituciones públicas ofrecían capacitación fuera del lugar de trabajo para trabajadores regulares (Tabla 1.12). Desde 2019, Japón lanzó un sistema universitario profesional y vocacional. Las instituciones de educación vocacional y superior podrían desempeñar un papel más importante al ofrecer oportunidades y programas de estudio más diversificados y flexibles, alineados con las necesidades de habilidades actuales y futuras, tal como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024.

Tabla 1.12. Porcentaje de formación fuera del lugar de trabajo, por tipo de proveedor, 2024

%	Trabajadores regulares	Trabajadores no regulares
corporaciones de interés público	20.1	7.8
asociaciones empresariales	10.3	3.4
Instituciones públicas de formación profesional, universidades y centros de enseñanza técnica.	8.0	2.8
instituciones de formación privadas	50.3	26.0
Escuelas de formación profesional	1.2	1.0
Empresa propia	75.2	83.5
Empresa matriz/grupo	25.7	18.8

Nota: La formación se realiza en grupo, dentro o fuera de la empresa. Solo se incluyen empresas con más de 30 empleados. Se permiten varias respuestas.
Fuente: Encuesta básica sobre desarrollo de recursos humanos, 2025.

La falta de formación adecuada como barrera para la participación en el aprendizaje de adultos también podría reflejar que la oferta formativa no se ajusta completamente a las necesidades del mercado laboral. La relación entre el número de personas que asisten a formación relacionada con el trabajo y las ofertas de empleo en esa ocupación no es significativamente fuerte en Japón (OCDE, 2021[57]). A pesar de la baja proporción de adultos con habilidades en TIC (véase más arriba), la proporción de formación no formal relacionada con el trabajo en habilidades digitales es inferior a la media de la OCDE (Figura 1.27, Panel C). Si bien la escasez de mano de obra en la empresa japonesa promedio se acerca a la media de la OCDE, las empresas que operan en campos verdes y digitales tienden a enfrentarse a una escasez más aguda (Marcolin y Filippucci, 2025[63]). Japón ya tenía una proporción de ocupaciones orientadas a lo verde del 20%, ligeramente superior a la media de la OCDE entre 2015 y 2019 (OCDE, 2024[64]), pero se espera que aumenten las necesidades de habilidades para la transformación verde. La evidencia de la encuesta también revela que el 65% de los empleados en Japón citaron las habilidades digitales como la principal

Habilidades a adquirir, incluyendo ciberseguridad (54%), análisis de datos (51%) e inteligencia artificial y aprendizaje automático (46%). (Economist Impact, 2023[65]). Por lo tanto, deben continuar las políticas para facilitar la mejora de las competencias para las transformaciones verde y digital, incluyendo la revisión periódica de los programas de formación que pueden optar a subvenciones para garantizar que sigan siendo coherentes con las necesidades de competencias identificadas.

Según una comparación internacional de oportunidades de formación de adultos para las transformaciones verde y digital (GX y DX), Japón cuenta con políticas y estrategias bien establecidas, incluidos programas de formación financiados con fondos públicos e incentivos para trabajadores, solicitantes de empleo y proveedores de aprendizaje para adultos. Sin embargo, las iniciativas de información, asesoramiento y orientación podrían impulsarse aún más (OCDE, 2024[66]). Japón planea ampliar los cursos elegibles para subsidios de educación y formación en habilidades digitales, incluida la IA, y los Consorcios Centrales y Regionales para la Promoción del Desarrollo de Habilidades Vocacionales, establecidos en 2022, se centran en las habilidades necesarias para GX y DX, compartiendo mejores prácticas entre los gobiernos locales. Esta plataforma puede utilizarse aún más para garantizar la coordinación de las políticas verdes, del mercado laboral y de habilidades ofrecidas por diferentes ministerios, municipios, empresas e instituciones financieras (OCDE, 2024[64]).

Las prácticas laborales tradicionales restaban relevancia al vínculo entre formación, ocupación y necesidades de cualificaciones. A medida que estas prácticas evolucionan, el gobierno ha mejorado la información sobre las necesidades de cualificaciones y la correspondencia entre cualificaciones, ocupaciones y descripciones de puestos, por ejemplo, con la introducción del portal de información laboral (job tag), el equivalente japonés de O*NET. Si bien job tag supone una mejora significativa, aún hay margen para optimizar su funcionalidad como base de datos de información sobre cualificaciones, ocupaciones, salarios y formación, actualizándola periódicamente y conectándola con otras fuentes de datos (Mitsubishi Research Institute, 2023[67]). Los estándares ocupacionales y los marcos nacionales de cualificaciones deberían incluirse en job tag para garantizar que la formación se ajuste a las necesidades del mercado laboral.

Tabla 1.13. Recomendaciones anteriores sobre políticas del mercado laboral.

Recomendaciones de encuestas anteriores:	Acciones emprendidas desde 2024
Aumentar la utilización y la duración del permiso parental por parte de los padres incrementando la prestación para todos los padres y exigiendo a las empresas que revelen el porcentaje de sus empleados elegibles que se toman el permiso.	El umbral para la divulgación obligatoria de información se redujo de empresas con más de 1.000 empleados a 300.
Romper con el dualismo del mercado laboral flexibilizando la protección del empleo para los trabajadores regulares y haciéndola más transparente.	No se ha tomado ninguna medida.
Ampliar la cobertura de la seguridad social y la formación para los trabajadores a tiempo parcial.	La reforma de pensiones de 2025 reducirá gradualmente y, finalmente, eliminará el umbral de tamaño de la empresa y suprimirá los requisitos de ingresos mensuales para la afiliación de los trabajadores a tiempo parcial al seguro.
Aumentar aún más la edad de jubilación obligatoria con miras a su abolición, y hacer cumplir la disposición de igual salario por igual trabajo en el Estilo de Trabajo, reforma para todos los trabajadores.	No se ha tomado ninguna medida.
Mejorar la capacidad de Japón para atraer trabajadores extranjeros mediante la implementación de una estrategia integral para la integración de los inmigrantes, lo que incluye prevenir la discriminación contra ellos y mejorar su acceso a la educación y la vivienda.	Se han actualizado la Hoja de Ruta para la Realización de una Sociedad de Convivencia Armoniosa con los Extranjeros y las Medidas Integrales para la Acogida y Convivencia de los Extranjeros. La Oficina para una Sociedad de Convivencia Armoniosa y Ordenada con los Extranjeros se creó en julio de 2025.

1.7. Hacia una economía con cero emisiones netas y resiliente al clima.

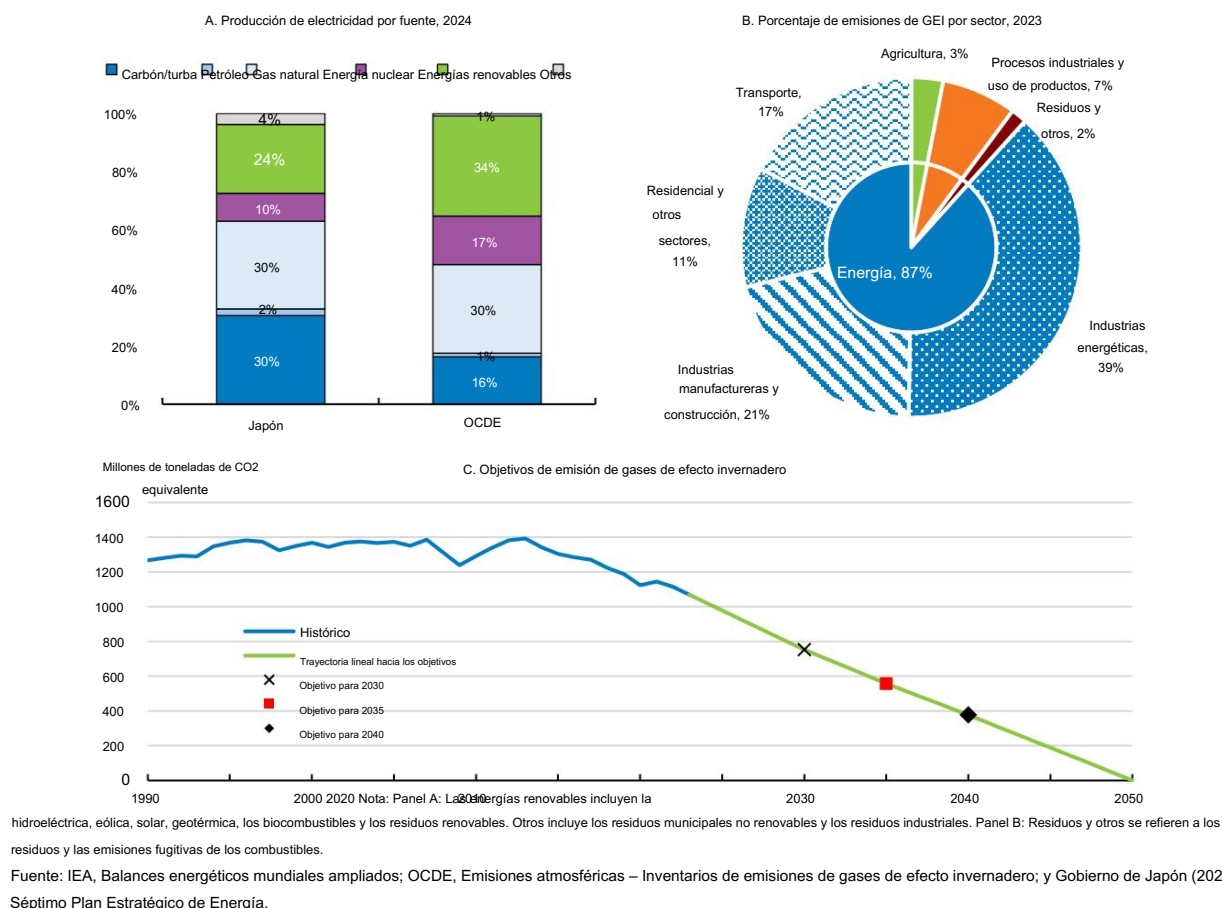
1.7.1. Acelerar la implementación para alcanzar los objetivos

A pesar del buen progreso en la desvinculación de las emisiones y el crecimiento desde su pico en 2013, la matriz energética y eléctrica de Japón sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles (Figura 1.28, Panel A). El 87% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están vinculadas a la producción y el uso de energía, siendo las industrias energéticas la mayor fuente, seguidas de la manufactura, el transporte y los edificios (Panel B). Reducir la participación de los combustibles fósiles en la generación de electricidad reduciría las emisiones y mejoraría la seguridad energética. El conflicto de Oriente Medio de 2026 subraya la importancia de reducir la exposición a las interrupciones del suministro energético mundial y a la volatilidad de los precios. La perspectiva para el año fiscal 2030 era de alrededor del 41% de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, con el carbón representando alrededor del 19%. La última perspectiva para el año fiscal 2040 sitúa la energía térmica en aproximadamente un 30-40%, pero no hay un desglose en carbón,

Petróleo y gas. Dada la gran incertidumbre asociada a varias tecnologías, Japón no proporciona un desglose de las fuentes de energía acorde con su objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Las políticas ambientales y energéticas de Japón se basan en el principio S+3E, donde la seguridad es el objetivo principal, seguido de: i) seguridad energética, con una tasa de autosuficiencia energética que se espera aumente del 12,6 % en el año fiscal 2022 a alrededor del 30-40 % en el año fiscal 2040; ii) eficiencia económica para tener precios competitivos internacionalmente; y iii) medio ambiente para continuar los esfuerzos para ser coherentes con el objetivo global de 1,5 °C (METI, 2025[68]). Además del compromiso legislado a largo plazo de cero emisiones netas para 2050 (Figura 1.28, Panel C), el objetivo principal de Japón en el marco de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional es una reducción de emisiones del 46 % con respecto a los niveles del año fiscal 2013 para el año fiscal 2030. Esto se ha complementado recientemente con objetivos de reducción del 60 % y el 73 % para los años fiscales 2035 y 2040, respectivamente (METI, 2025[68]).

Figura 1.28. Las emisiones han disminuido, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos.



Enlace estadístico 2 <https://stat.link/lpe03f>

Se necesitan reformas audaces y una implementación acelerada para cumplir con los nuevos objetivos. Si las emisiones de GEI disminuyeran a los valores históricos (un promedio del 2,4 % en el período FY2013-22), estarían un 47,5 % por debajo de las del año fiscal 2013 para 2040, frente al objetivo del 73 %. Además, los objetivos se establecen utilizando un enfoque bruto-neto, donde el año base no incluye las emisiones y absorciones derivadas del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF), que es un pequeño sumidero neto de carbono, mientras que el objetivo las incluye (OCDE, 2025[70]). El Séptimo Plan Estratégico de Energía, el Plan de Medidas contra el Calentamiento Global, que incluye las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Japón en el marco del Acuerdo de París, y la Visión GX2040 describen las principales políticas y objetivos de Japón. Estos incluyen la expansión de las energías renovables, el aumento de la eficiencia energética, la provisión de apoyo financiero y subsidios para la inversión y la I+D, y la introducción de un sistema de precios del carbono que fomente el crecimiento.

La gobernanza climática es clave para una mitigación climática eficaz. Los organismos asesores climáticos independientes pueden mejorar la legitimidad del proceso de formulación de políticas y fortalecer la confianza pública y el apoyo a la acción climática (Averchenkova

y Lazaro, 2020[71]). Por ejemplo, Finlandia determinó su objetivo de cero emisiones netas siguiendo las recomendaciones del Panel Finlandés sobre el Cambio Climático (Nachtigall et al., 2022[72]). Los organismos asesores climáticos pueden desempeñar un papel crucial como monitores independientes, guiando a los gobiernos hacia decisiones políticas basadas en evidencia y proporcionando transparencia a través de revisiones periódicas (Nick y Duwe, 2021[73]). El Consejo Central del Medio Ambiente (CEC), compuesto por expertos no gubernamentales y alrededor de 80 miembros, es el principal órgano asesor del Ministerio de Medio Ambiente en materia de políticas ambientales. Sin embargo, el CEC está ubicado dentro del Ministerio y sus miembros son designados por el Primer Ministro (OCDE, 2025[70]). Si bien el proceso de consulta pública en la actualización de los planes energéticos es extenso en Japón, los miembros tienden a ser hombres de entre 50 y 70 años, concentrados en representantes del suministro de energía, con una participación limitada de las ONG (Hiroyuki, Hirata y Mochizuki, 2024[74]).

Un organismo asesor independiente sobre el clima, como en Alemania y el Reino Unido (Recuadro 1.9), podría ayudar al gobierno japonés a identificar políticas que le ayuden a alcanzar sus objetivos a largo plazo al tiempo que mejora Transparencia y evaluación (OCDE, 2025[70]). El Plan 2025 para la Lucha contra el Calentamiento Global ha fortalecido el proceso de gestión para revisar y ajustar las medidas y políticas. Sin embargo, el Plan sigue centrándose principalmente en las reducciones de emisiones previstas a partir de las políticas existentes, utilizando proyecciones lineales hacia los objetivos, mientras que los planes climáticos de los países europeos suelen incluir escenarios políticos adicionales. Un organismo asesor climático independiente podría contribuir a subsanar estas deficiencias.

Recuadro 1.9. Órganos asesores independientes sobre el clima

Los organismos asesores independientes sobre el clima en el Reino Unido y Alemania desempeñan un papel fundamental para garantizar que las políticas climáticas se guíen por la evidencia científica y rindan cuentas respecto a los objetivos de emisiones a largo plazo. El Comité de Cambio Climático es un organismo independiente, creado en virtud de la Ley de Cambio Climático de 2008, que asesora al gobierno del Reino Unido sobre la definición de presupuestos de carbono, el logro del objetivo de cero emisiones netas para 2050 y la elaboración de informes anuales de progreso para el Parlamento, evaluando si las políticas gubernamentales están encaminadas a cumplir los objetivos de emisiones. En Alemania, el Consejo de Expertos en Asuntos Climáticos se creó en virtud de la Ley Federal de Cambio Climático de 2019. Este panel independiente de científicos revisa los datos anuales de emisiones del gobierno, evalúa si se están cumpliendo los objetivos sectoriales y proporciona evaluaciones de las nuevas medidas climáticas.

1.7.2. Garantizar la eficacia de la Estrategia de Transformación Verde

Japón utiliza una mezcla diversa de instrumentos políticos para reducir las emisiones, en consonancia con la evidencia de que una combinación equilibrada de políticas es más eficaz que unas pocas (D’Arcangelo, Kruse y Pisu, 2024[75]; OCDE, 2025[70]). Japón se ha basado tradicionalmente en subvenciones (eficiencia energética, energías renovables, vehículos eléctricos), apoyo a la I+D y políticas no basadas en el mercado (regulaciones, objetivos de rendimiento y acuerdos voluntarios con la industria), mientras que los instrumentos basados en el mercado, como los impuestos sobre la energía y los vehículos, han desempeñado un papel menor (véase más abajo). Por lo tanto, es positivo que la Política Básica de Transformación Verde (GX) de 2023, revisada como Visión GX2040 en 2025, incluya planes para ampliar la fijación de precios del carbono más adelante en la década a cambio de subsidios industriales iniciales para la inversión, respaldados por Bonos de Transición Económica GX. El diseño será fundamental para garantizar su eficacia en la reducción de emisiones y la obtención de una buena relación calidad-precio.

apoyo a la inversión

El gobierno está adelantando 20 billones de yenes en subsidios, incentivos fiscales y apoyo a la I+D para las empresas, con el objetivo de alcanzar una inversión pública y privada de 150 billones de yenes. La financiación provendrá de los Bonos de Transición Económica GX, que se amortizarán antes del año fiscal 2050, con la primera emisión (1,6 billones de yenes) en febrero de 2024. Las 16 áreas prioritarias incluyen acero, productos químicos, papel y pulpa, cemento, automóviles, baterías, aeronaves, combustible de aviación sostenible, buques, industria relacionada con la vida, circulación de recursos, semiconductores (semiconductores de potencia, fusión fotoeléctrica, etc.), hidrógeno y sus derivados, energía renovable de próxima generación (células solares de perovskita, energía eólica marina flotante y energía geotérmica de próxima generación), energía nuclear y captura y almacenamiento de carbono. Las estrategias sectoriales son actualizadas periódicamente por el Ministerio de Economía y Comercio.

y la Industria (METI), más recientemente a principios de 2025. El Consejo de Implementación de GX, encabezado por el Primer Ministro e integrado por varios ministros, partes interesadas de la industria y expertos de empresas, supervisa la implementación y proporciona orientación estratégica.

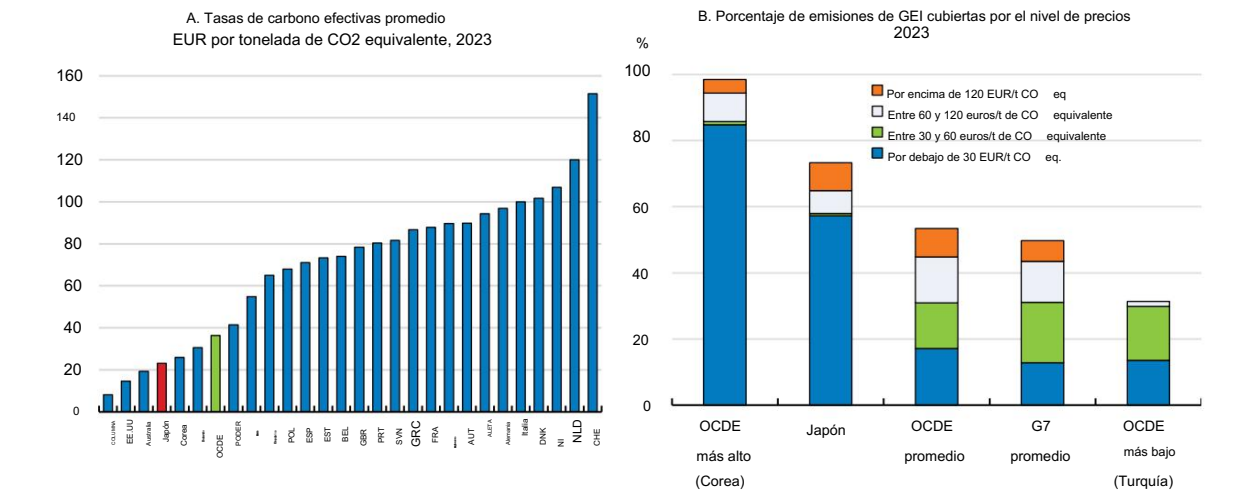
La Agencia de Aceleración GX, establecida en mayo de 2024, se encarga de brindar apoyo financiero, incluyendo inversión de capital y garantías de préstamos. Los criterios de selección incluyen la alineación con las políticas gubernamentales, la implementación y promoción de tecnologías relacionadas con GX, la gestión de riesgos que no pueden ser asumidos completamente por el sector privado, una evaluación general de la sostenibilidad y el establecimiento de una estructura de gestión e implementación adecuada. Al igual que en otros países, el proceso de selección de empresas para el apoyo verde

Deben ser competitivas, no discriminatorias y transparentes para evitar favorecer a las empresas establecidas y desalentar a los nuevos participantes (Milot y Rawdanowicz, 2024[76]). Estas políticas, si bien son necesarias y comunes en toda la OCDE, deben incluir un cronograma claro para la eliminación gradual de la política, promover la competencia y establecer mecanismos sólidos para el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes sobre los costos fiscales (OCDE, 2024[77]). La implementación de un proceso de selección competitivo y transparente para las empresas y tecnologías que reciben apoyo es esencial para garantizar la adicionalidad del apoyo financiero. Los mecanismos regulares de revisión y retroalimentación, incluida la evaluación independiente de las inversiones apoyadas, también aumentan la eficacia (OCDE, 2025[70]; Goto, 2025[78]). Por lo tanto, la transparencia del funcionamiento de la Agencia de Aceleración GX debe garantizarse mediante la divulgación de información y la comunicación del impacto y la evaluación de los proyectos al público.

Impuestos

Los impuestos ambientales más elevados proporcionarían señales de precios más consistentes, generarían ingresos y mejorarían la efectividad y eficiencia de otros instrumentos de política (Stechemesser et al., 2024[79]). Los ingresos fiscales relacionados con el medio ambiente como porcentaje del PIB y los impuestos totales son del 1,2 % y del 3,6 %, respectivamente, con impuestos sobre la energía que se aplican al CO2. Las emisiones por la combustión de combustibles fósiles desde 2012 a 289 JPY (1,9 USD/tCO2) son relativamente bajas. La tasa efectiva promedio de carbono (excluyendo los subsidios antes de impuestos) en Japón fue de 23 EUR/tCO2 en 2023, con solo un 8,4 % por encima de 120 EUR (Figura 1.29), que es la estimación de rango medio del precio del carbono necesario para 2030 para ser coherente con los objetivos de cero emisiones netas. Las tasas efectivas netas de carbono (ECR) son solo 3,3 EUR/tCO2, una de las más bajas de la OCDE, y son desiguales entre sectores, con ECR negativas en los sectores de agricultura y transporte todoterreno. La baja tasa y alcance de la tributación del carbono han disminuido su efectividad en la reducción de emisiones (Gokhale, 2021[80]). También existen dos sistemas subnacionales de comercio de emisiones (ETS), que cubrían el 1,6% de las emisiones a partir de 2023, mucho menos que la cobertura promedio del 31% en otros países de la OCDE con ETS (OCDE, 2024[81]).

Figura 1.29. Existe margen para ampliar los instrumentos basados en el mercado.



Nota: Panel A: Excluyendo el CO2 de los biocombustibles. La comparación entre países de los precios efectivos del carbono para 2023 se ve afectada por las medidas temporales de apoyo a los precios de la energía en muchos países de la OCDE.
Fuente: OCDE, Tasas netas efectivas de carbono; y OCDE, Porcentaje de emisiones con precio.

Se prevé la introducción de un recargo GX (recargo sobre el suministro de combustibles fósiles) a partir del año fiscal 2028, y el sistema nacional de comercio de emisiones (ETS) se está implementando gradualmente en tres etapas a lo largo de diez años. La primera fase voluntaria de referencia y créditos comenzó en el año fiscal 2023, con más de 700 empresas, que representan más del 50% de las emisiones de CO₂ registradas hasta agosto de 2025. Se volvió obligatorio en el año fiscal 2026 para las empresas con emisiones superiores a un cierto umbral (emisiones anuales de 100 000 toneladas o más), con el gobierno asignando los derechos de emisión. La fase final será la subasta de derechos de emisión a las compañías eléctricas a partir del año fiscal 2033. En mayo de 2025, se modificó la Ley de Promoción GX.

El objetivo es establecer las bases para la implementación obligatoria del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) y definir los requisitos técnicos necesarios para la introducción del recargo GX en el año fiscal 2028, cuya implementación estará a cargo de la Agencia de Aceleración GX. Sin embargo, aún no se han definido el nivel del recargo, las tasas de cobertura ni el monto total de los derechos de emisión, lo que podría reducir la certeza de las inversiones.

El diseño y el calendario del ETS y el impuesto futuro deberían incluir varias características para aumentar su eficacia y certeza de inversión, como se recomienda en la Encuesta de la OCDE de Japón de 2024 y la Revisión de la Política Ambiental de la OCDE de Japón de 2025. Primero, debería considerarse la consagración en la legislación del límite máximo del ETS, la tasa del recargo GX y sus trayectorias de ajuste futuras, que podrían ser automáticas. Segundo, una implementación más rápida sería más eficaz para ayudar a cumplir los objetivos intermedios de 2035 y 2040. Algunos modelos sugieren que una introducción de precios del carbono en 2025 habría sido necesaria para promover el cambio de comportamiento y la reestructuración industrial (IGES, 2023[82]). Tercero, el recargo debería fijarse a una tasa que proporcione incentivos suficientes. Por ejemplo, una tasa correspondiente al pago de los bonos GX de 20 billones de JPY, como se anunció, podría implicar 1000 JPY/tCO₂ (Nikkei, 2022[83]), lo que estaría muy por debajo de lo necesario para ser coherente con las emisiones netas cero (OCDE, 2025[70]). En cuarto lugar, las subastas pueden ayudar a corregir posibles distorsiones en la distribución del mercado, como penalizar a los nuevos participantes, generar ingresos y aumentar la eficacia de mitigación del ETS. Podría considerarse adelantar la subasta de derechos de emisión del año fiscal 2033. Finalmente, podría considerarse una fase adicional de extensión de las subastas a sectores más allá de los generadores de energía, como en la Fase 4 del ETS europeo, con los ingresos utilizados para apoyar la descarbonización en esas industrias (REI, 2025[84]).

El fortalecimiento de la fijación de precios del carbono puede tener efectos distributivos negativos. Dado que los hogares de bajos ingresos gastan una proporción desproporcionadamente grande de sus ingresos en energía, son particularmente vulnerables a los aumentos de precios (Inoue, Matsumoto y Morita, 2020[85]). Muchos países de la OCDE reciclan los ingresos de los impuestos al carbono y el ETS y, en menor medida, de los impuestos especiales sobre los combustibles (Marten y van Dender, 2019[86]). Japón ha destinado los ingresos del próximo recargo GX y ETS para pagar los Bonos de Transición Económica GX, que financiarán la inversión en tecnologías energéticas bajas en carbono. También será importante brindar apoyo específico a los hogares vulnerables. Los hogares de bajos ingresos y los hogares de mayor edad en áreas rurales con alta dependencia del automóvil y el queroseno para calefacción son los más vulnerables en Japón (Okushima y Simcock, 2024[87]). Por ejemplo, Canadá proporcionó mayores transferencias de su esquema de fijación de precios del carbono a los hogares rurales.

Si bien Japón ofrece prestaciones sociales condicionadas a los ingresos de los hogares de bajos recursos, existe margen de mejora en las transferencias dirigidas cuando entre en vigor la fijación de precios del carbono. Esto requiere definiciones claras de la pobreza energética y de transporte, así como un sistema eficaz para identificar a los beneficiarios e implementar las transferencias. Es necesario mejorar la capacidad de dirigir las medidas contra los altos precios de la energía. Los subsidios generales del gobierno para combustibles y energía (por ejemplo, electricidad, gas ciudad y gasolina), en su mayoría no dirigidos, aumentaron de 306 mil millones de yenes en el año fiscal 2021 a 4.681 mil millones en el año fiscal 2023. Estas medidas no dirigidas debilitan los incentivos para ahorrar energía, entran en conflicto con los objetivos de mitigación del cambio climático y son costosas y regresivas. Los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles deberían eliminarse gradualmente para garantizar que los subsidios GX y la fijación de precios del carbono ofrezcan incentivos eficaces. Los subsidios a la gasolina fueron reemplazados por la abolición de la tasa provisional del impuesto a la gasolina a partir de diciembre de 2025 (ver más arriba), lo que se espera que resulte en una pérdida de ingresos anual de 1 billón de yenes (Oficina del Gabinete, 2025[88]), y la tasa provisional del impuesto al diésel fue abolida a partir de 2025. Estos cambios, diseñados como medidas contra los precios elevados, entran en conflicto con el próximo impuesto al carbono y podrían reducir la adopción de vehículos eléctricos (ver más abajo), por lo que deberían reconsiderarse.

1.7.3. Descarbonización del sector energético y aceleración del despliegue de energías renovables.

La reducción de la proporción de combustibles fósiles puede impulsar la seguridad energética y descarbonizar la economía. El gobierno planea expandir las energías renovables y la energía nuclear, así como utilizar tecnologías emergentes, como el hidrógeno y la captura de carbono. Dados los desafíos que plantea la aceptación pública de algunas energías renovables y la energía nuclear, y la ampliación de algunas tecnologías emergentes de forma rentable, es necesario seguir mejorando la planificación de contingencia, con hojas de ruta alternativas concretas para alcanzar los objetivos, basándose en los diferentes escenarios energéticos del informe Perspectivas de la oferta y la demanda de energía para el año fiscal 2040, tal como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024.

Nuclear

El Séptimo Plan Energético ha introducido un cambio en los planes de energía nuclear de Japón, pasando de "reducir la dependencia nacional de la energía nuclear" a "aprovechar al máximo la energía nuclear". Los nuevos objetivos incluyen aumentar la participación de la energía nuclear del 8,5 % en el año fiscal 2023 a alrededor del 20 % en el año fiscal 2040. A abril de 2026, 14 de los 33 reactores operativos habían reiniciado su funcionamiento, mientras que el resto se encontraba en diferentes etapas de aprobación o construcción, o sin que se hubiera iniciado el proceso de evaluación. Dados los tiempos de reinicio relativamente largos, el objetivo de poner en funcionamiento los 36 reactores para alcanzar la meta del año fiscal 2040 podría ser difícil de lograr (REI, 2025[89]; Climate Integrate, 2025[90]), y depende de normas de seguridad rigurosas y consultas con las comunidades locales para aumentar la aceptación social. Según una encuesta de febrero de 2024, el 50% de la población apoya la reactivación de los reactores, un porcentaje mucho mayor en comparación con las consecuencias del accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi en 2011. El aumento del apoyo refleja el impacto de la crisis energética y las iniciativas de comunicación, consulta y participación de las partes interesadas.

También existen planes para desarrollar e implementar reactores avanzados de última generación con nuevos mecanismos de seguridad integrados, con regulaciones de permisos simplificadas para su reconstrucción en emplazamientos donde se desmantelan centrales nucleares. La energía nuclear puede contribuir a mejorar la seguridad energética, y la producción de electricidad nuclear es más estable a lo largo del tiempo en comparación con las energías renovables intermitentes, aunque existen preocupaciones relacionadas con riesgos negativos de alto impacto en caso de accidentes nucleares graves. Por lo tanto, es importante que los proyectos nucleares, al igual que cualquier otro proyecto energético, se basen en análisis transparentes e integrales de costo-beneficio del ciclo de vida que tengan en cuenta, entre otros aspectos, el costo de construcción de las centrales eléctricas, el almacenamiento de residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales en desuso.

Carbón, hidrógeno, amoníaco y captura y almacenamiento de carbono

El carbón sigue siendo una fuente importante de emisiones de GEI derivadas de la producción y el uso de energía. Si bien la flota de carbón de Japón se encuentra entre las más eficientes del mundo, incluso una central de carbón altamente eficiente emite más CO₂ que otras fuentes de energía alternativas (IEA, 2024[91]). En 2024, junto con otros países del G7, Japón se comprometió a eliminar gradualmente la generación de energía a partir de carbón sin mitigación en los sistemas energéticos durante la primera mitad de la década de 2030 o en un cronograma consistente con mantener dentro del alcance un límite de aumento de temperatura de 1,5 °C, en línea con las trayectorias de cero emisiones netas de los países. La eliminación gradual de la generación de energía a partir de carbón ineficiente no ha progresado lo suficiente debido a la aparición de escasez de capacidad de suministro, pero el gobierno anunció que continuará promoviendo la eliminación gradual a través de esfuerzos voluntarios de los operadores hacia 2030 (METI, 2025[69]). Por lo demás, la descarbonización de la generación de energía térmica se llevará a cabo utilizando tecnologías, como hidrógeno, amoníaco y captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Al mismo tiempo, algunos interesados están pidiendo excepciones a la eliminación gradual (Nikkei, 2025[92]). Si bien la seguridad energética, como garantizar un suministro eléctrico estable, debe tenerse en cuenta, podrían considerarse medidas para asegurar la eliminación gradual de la generación de energía de carbón sin mitigación, como se prometió. Por ejemplo, comprometerse con un cronograma de eliminación gradual, como lo hicieron la mayoría de los países de la OCDE con capacidad de energía de carbón, suavizaría la transición e incentivaría la ampliación de las energías renovables (OCDE, 2025[70]).

El uso de hidrógeno, amoníaco y tecnología CCUS es una parte importante de los planes de Japón para reducir las emisiones de las centrales térmicas existentes y nuevas. Japón fue el primer país en desarrollar una estrategia de hidrógeno en

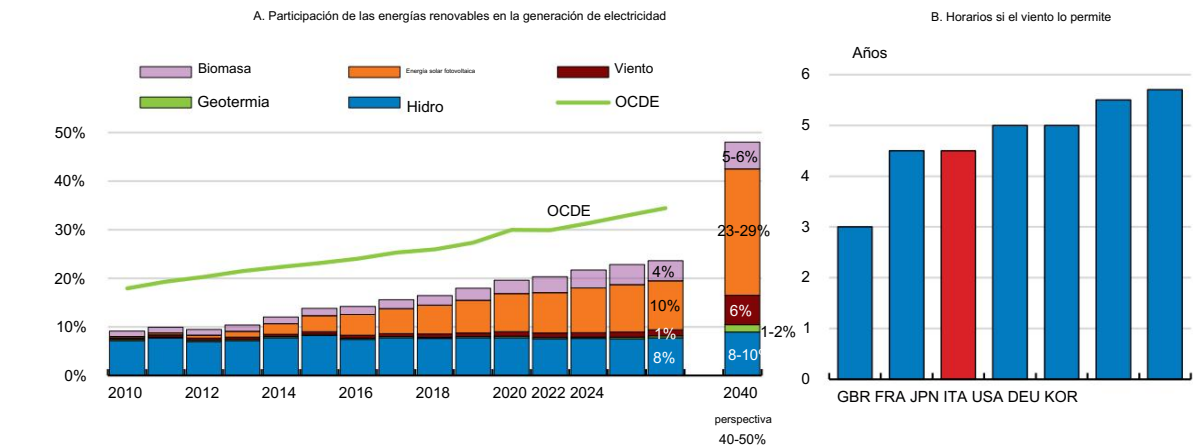
En 2017, se asignaron fondos para I+D en estas tecnologías y el desarrollo de cadenas de suministro internacionales, y se promulgó legislación (Ley de Promoción de la Sociedad del Hidrógeno y Ley de Captura y Almacenamiento de Carbono) para regularlas y promoverlas. A nivel mundial, el despliegue de proyectos a gran escala para la producción de hidrógeno, amoníaco y combustibles a base de hidrógeno de bajas emisiones es costoso, con costos más elevados en Japón que en China y Estados Unidos (IEA, 2024[93]; BNEF, 2023[94]; IEA, 2023[95]). Dada la considerable incertidumbre sobre el alcance para ampliar estas tecnologías de manera rentable, la magnitud y la asignación del apoyo deberían reconsiderarse en ausencia de grandes avances tecnológicos.

Japón planea utilizar amoníaco como combustible en centrales eléctricas de carbón existentes y nuevas, y está proporcionando importantes subsidios a los proveedores que buscan desarrollar una cadena de suministro a escala comercial de hidrógeno bajo en carbono y sus derivados. Si el hidrógeno y el amoníaco no se descarbonizan, como ocurre actualmente, invertir en la modernización de centrales eléctricas de combustión térmica existentes o en la construcción de nuevas podría generar mayores emisiones durante la vida útil de estas plantas, así como una dependencia del carbono (IEA, 2024[96]). El mayor costo del combustible de amoníaco implica que estas plantas operan a menor capacidad que las centrales de carbón sin mitigación actuales y sirven principalmente para proporcionar flexibilidad y capacidad de respaldo, en lugar de electricidad de carga base. Por lo tanto, es importante utilizar amoníaco en sectores donde estas tecnologías serían la opción más rentable, como los procesos industriales difíciles de mitigar (producción de fertilizantes y productos químicos, aviación y almacenamiento a largo plazo) (IEA, 2023[97]). Además, se prevé que la demanda de amoníaco en Japón aumente de 1 millón de toneladas en 2021 (alrededor del 1 % de la producción mundial) a 30 millones de toneladas en 2050 (alrededor del 11 % de las proyecciones de la demanda mundial (GR Japan, 2024[98]). Suponiendo que Japón continúe siendo un importador neto de amoníaco, la diversificación de las cadenas de suministro será crucial para garantizar la seguridad energética.

Energías renovables

La capacidad de energía renovable ha aumentado significativamente, pero se necesita una mayor aceleración. Gracias a las generosas tarifas de alimentación y al esquema de prima de alimentación introducido para la energía renovable en 2022, la participación de las energías renovables en la generación de electricidad aumentó del 10 % en 2013 al 23 % en 2024, pero aún se mantiene por debajo del promedio de la OCDE (Figura 1.30, Panel A). El Séptimo Plan Energético revisó la participación objetivo de las energías renovables en el suministro de energía del 36-38 % en el año fiscal 2030 al 40-50 % en el año fiscal 2040 (METI, 2025[69]). Estimaciones alternativas de escenarios energéticos de otras instituciones sugieren que las energías renovables podrían representar alrededor del 70-80 % del suministro de energía para 2035 y el 90 % para 2040 o 2050 (Shiraishi et al., 2023[99]; IGES, 2023[82]; REI, 2024[100]). Una mayor expansión de las energías renovables puede crear oportunidades de empleo en las zonas rurales, donde el potencial de energía renovable es alto (OCDE, 2025[70]).

Figura 1.30. Una tramitación de permisos más rápida ayudaría a impulsar las energías renovables.



Nota: Panel A: Solar PV se refiere a la energía solar fotovoltaica. La proyección para 2040 se refiere a valores aproximados. Panel B: Corea y Estados Unidos: solo en condiciones favorables para la energía eólica marina.
Fuente: IEA, Balances energéticos ampliados mundiales; Gobierno de Japón (2025), Perspectivas de la oferta y la demanda de energía en el año fiscal 2040, y OCDE (2025), Evaluaciones del desempeño ambiental: Japón.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/397us2>

El coste de las energías renovables, si bien está disminuyendo, sigue siendo elevado a nivel internacional. El despliegue de energías renovables se enfrenta a barreras geográficas, regulatorias, de capacidad de la red y culturales. Las aguas costeras profundas limitan el desarrollo de parques eólicos marinos fijos, mientras que los recursos geotérmicos se ubican principalmente en zonas protegidas o interactúan con la explotación de aguas termales. La falta de capacidad de equilibrio interregional para gestionar la variabilidad en la producción de energías renovables constituye otra barrera. No obstante, a pesar de la limitada superficie disponible para el despliegue de energía solar debido al terreno montañoso de Japón y la competencia con la agricultura por el uso del suelo, el país ha logrado aumentar su producción de energía solar, alcanzando la mayor densidad de capacidad fotovoltaica instalada por campo llano en la OCDE. Se prevé que la energía solar siga siendo la principal fuente de generación de electricidad renovable para 2040, lo que refleja las primas de alimentación y otros mecanismos de apoyo a las nuevas tecnologías.

Como en muchos países de la OCDE, los complejos y prolongados procedimientos de autorización para proyectos de energías renovables constituyen una barrera importante para su mayor implementación (Figura 1.30, Panel B). Desde 2021, se han adoptado diversas medidas para agilizar el proceso de autorización de centrales eólicas, como la simplificación de ciertos requisitos de evaluación, el aumento de los umbrales de capacidad para una evaluación de impacto ambiental (EIA) obligatoria y el uso de un proceso de zonificación específico para identificar áreas para proyectos de energía eólica marina. Las enmiendas de 2025 a la Ley de Promoción de la Utilización de Zonas Marítimas para el Desarrollo de Instalaciones de Generación de Energía Renovable Marina, que permite la instalación de dichas instalaciones en Zonas Económicas Exclusivas, son bienvenidas. Los procedimientos de EIA y autorización deben seguir simplificándose, garantizando al mismo tiempo su eficacia para identificar y mitigar los posibles impactos ambientales (OCDE, 2025[70]). Por ejemplo, agilizar los procedimientos de concesión de licencias, centralizando los procedimientos que abarcan múltiples organismos administrativos, podría ser de ayuda.

Deben continuarse los esfuerzos para aumentar la concienciación pública y la participación de las partes interesadas con el fin de impulsar la aceptación local. Las Zonas de Promoción de Energías Renovables no solo simplifican los trámites administrativos para los proyectos de energías renovables, sino que también facilitan la participación de los consejos y las partes interesadas para garantizar el consenso regional. Por su parte, las prefecturas utilizan ordenanzas locales para gestionar las compensaciones entre el desarrollo y las preocupaciones locales (OCDE, 2025[101]). Es fundamental asegurar que estas ordenanzas locales no se conviertan en un obstáculo para la transición a las energías renovables.

En otros países, como Francia y Corea, las políticas locales de búsqueda de consenso han dado resultados positivos (Tajima, Doedt e Iida, 2022[102]). La aceptación local también puede promoverse asignando una parte de los beneficios a las comunidades locales.

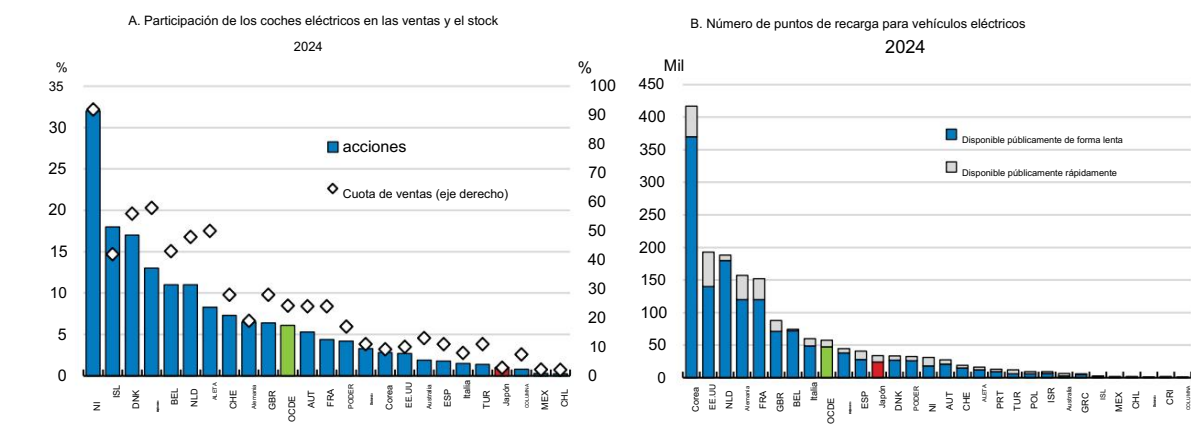
Los planes para incrementar la inversión en la red eléctrica deben evaluarse y priorizarse periódicamente. El Plan Maestro de Desarrollo de la Red Eléctrica Nacional de 2023 estimó necesidades de inversión de alrededor de 50 mil millones de dólares para 2050, incluyendo planes para la construcción de líneas de transmisión de CC submarinas entre Hokkaido y Honshu y las instalaciones de conexión Chugoku/Kyushu. El Plan Maestro está en revisión, dada la creciente demanda de electricidad. Japón debería continuar invirtiendo en infraestructura de transmisión y distribución, basándose en un análisis de costo-beneficio, como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024. Además, dado que la fragmentación de la red eléctrica en redes regionales limita el despliegue de energía renovable, cuyo mayor potencial reside en áreas alejadas de los centros de consumo, se debe mejorar la integración de la red.

1.7.4. Reducción de las emisiones procedentes de edificios y transporte

Las recientes reformas que hacen obligatorios los estándares de rendimiento energético para todos los edificios nuevos a partir de 2025 y que buscan alcanzar el consumo energético neto cero para todas las construcciones nuevas en 2030 son bienvenidas. Si bien el parque inmobiliario japonés es relativamente nuevo en comparación con otros países, el 80 % de las viviendas y el 60 % de los edificios no residenciales no cumplen con los estándares de rendimiento energético vigentes (OCDE, 2025[70]). El uso de estándares de rendimiento y certificaciones para edificios existentes podría contribuir a alcanzar el objetivo de consumo energético neto cero para 2050 en promedio para todo el parque inmobiliario de Japón (OCDE, 2024[103]). Reforzar los requisitos de eficiencia energética para las renovaciones importantes de edificios o utilizar certificaciones de rendimiento energético durante las transacciones inmobiliarias (es decir, cuando se venden o alquilan viviendas existentes), e introducir requisitos de emisiones de carbono para todo el ciclo de vida, como en varios países europeos, podría ser de ayuda (OCDE, 2025[70]; OCDE, 2025[104]).

El sector del transporte representa alrededor del 17 % de las emisiones totales de GEI, y el transporte por carretera contribuye con el 90 % del total del sector (OCDE, 2025[105]). Los subsidios están apoyando el crecimiento de los vehículos de combustible alternativo, con ventas de automóviles híbridos que representan alrededor del 54 % de las ventas de automóviles nuevos de pasajeros. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos (VE) como porcentaje de las ventas de automóviles nuevos de pasajeros, con un 2,8 % en 2024, siguen siendo bajas (Figura 1.31, Panel A). Esto refleja el hecho de que Japón sigue un enfoque de múltiples vías para alcanzar su objetivo de 100 % de "vehículos electrificados" (vehículos eléctricos, de pila de combustible, híbridos e híbridos enchufables) en la venta de vehículos de pasajeros para 2035. La rentabilidad de dichos subsidios, que fueron de 129.100 millones de yenes en el año fiscal 2024, debe gestionarse con cuidado. Los criterios para recibir subsidios se ampliaron en 2024 para incluir otros factores, como el desarrollo de infraestructura de carga, sistemas de recolección de baterías usadas y ayuda a las comunidades en respuesta a desastres (METI, 2024[106]).

Figura 1.31. La adopción de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga siguen siendo limitadas.



Nota: Panel A: Los coches eléctricos incluyen vehículos eléctricos de batería (VEB) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (VHE). Panel B: Los cargadores de 22 kW o menos se clasifican como lentos, y los de más de 22 kW y hasta 150 kW como rápidos.

Fuente: IEA (2025), Perspectivas globales de los vehículos eléctricos 2025.

StatLink 2<https://stat.link/sz5x4a>

Se debe acelerar el despliegue de infraestructura de carga pública para vehículos eléctricos (VE) para satisfacer el crecimiento previsto de estos vehículos. El número de vehículos eléctricos ligeros por punto de carga público es relativamente alto (Figura 1.31, Panel B). Japón tiene como objetivo alcanzar los 300 000 puntos de carga públicos para 2030, frente a los 68 000 del año fiscal 2024. La vinculación de las subvenciones a la inversión privada en infraestructura para VE es positiva y deben continuar las políticas de expansión de la red de carga, junto con las mejoras en la red eléctrica. Para contener los costes, el gobierno podría destinar subvenciones para estaciones de carga públicas a zonas rurales desatendidas donde las inversiones privadas son menos atractivas o inviables comercialmente.

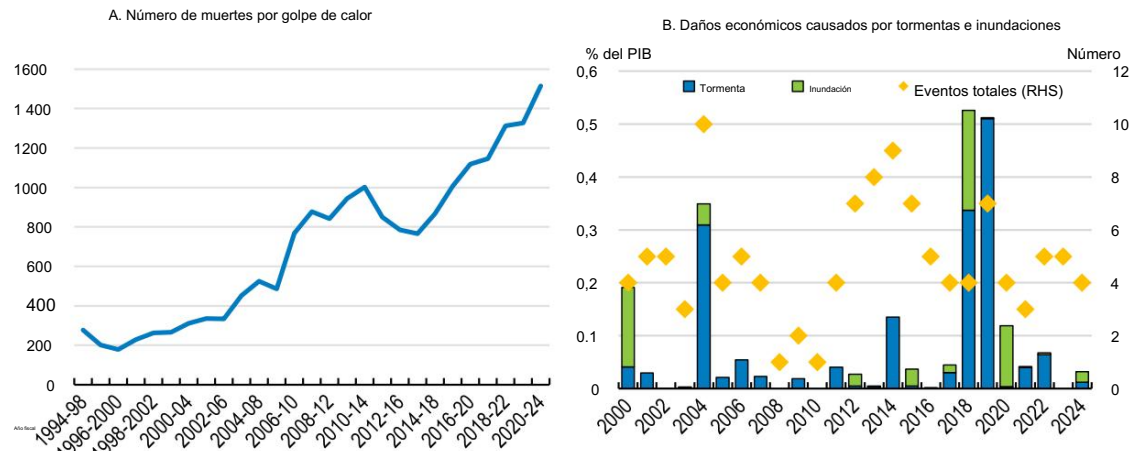
Las emisiones per cápita del transporte terrestre en las zonas rurales triplican las de las zonas urbanas, lo que refleja el desarrollo del transporte público en las áreas metropolitanas y el mayor uso de vehículos en las zonas rurales. La baja densidad de población, junto con administraciones más pequeñas y una menor capacidad técnica y financiera, dificulta la implementación de alternativas bajas en carbono (OCDE, 2025[101]). Deben continuar las políticas para reducir la dependencia del automóvil, como los sistemas de transporte a demanda y la promoción de autobuses comunitarios. Se debe dar prioridad a los programas de viajes compartidos y al despliegue de vehículos eléctricos en las zonas rurales.

1.7.5. Adaptación al cambio climático

Japón está altamente expuesto a peligros relacionados con el clima, como ciclones tropicales, marejadas ciclónicas, inundaciones y olas de calor. Por ejemplo, las muertes por golpes de calor han aumentado (Figura 1.32). Según la Agencia Meteorológica de Japón, las temperaturas anuales han aumentado 1,4 °C por siglo entre 1898 y 2024, y se proyecta que aumenten 3 °C para finales del siglo XXI en comparación con el siglo XX. Si bien la exposición de la población a inundaciones fluviales y costeras es menor que en muchos otros países, el 28 % del área urbanizada de Japón está expuesta a tormentas de viento violentas, una de las proporciones más altas de la OCDE (OCDE, 2025[70]). Industrias clave como

La agricultura, la infraestructura y la energía son particularmente vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. Japón sufrió daños relacionados con el clima por valor de 13,7 billones de yenes (90.800 millones de dólares) durante la última década y se enfrenta a pérdidas potenciales crecientes relacionadas con el clima de 952 billones de yenes (9,2 billones de dólares) para 2050 (Yamada et al., 2025[107]). Además, los daños relacionados podrían afectar de manera desproporcionada a los bancos regionales, ya que las zonas suburbanas y rurales históricamente han sufrido mayores daños que las grandes áreas metropolitanas (Ashizawa et al., 2022[108]).

Figura 1.32. El cambio climático está generando costos humanos y económicos.



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente; Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar; base de datos EM-DAT; base de datos de Perspectivas Económicas de la OCDE; y cálculos de la OCDE.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/r5vjwy>

Japón cuenta con una larga trayectoria en la gestión de desastres naturales, lo que le ha permitido desarrollar una amplia experiencia en la administración del riesgo de desastres. Esta sólida capacidad de respuesta incluye el uso de tecnologías adaptativas avanzadas y el mantenimiento preventivo para fortalecer la infraestructura y la resiliencia climática, así como un marco nacional de planificación de la adaptación bien diseñado. En 2026 se creará una Agencia de Gestión de Desastres para impulsar la coordinación, la planificación estratégica, la capacidad de respuesta y las capacidades regionales. La Ley de Adaptación al Cambio Climático de Japón se ajusta a numerosas buenas prácticas, como la exigencia de medir e informar sobre el progreso de la implementación, desarrollar métodos de evaluación, promover una sólida cooperación entre las diversas partes interesadas y revisar el plan cada cinco años (OCDE, 2024[109]). Las revisiones de la Ley de 2023 incluyeron reformas legales para reforzar las medidas contra el golpe de calor, con el objetivo de reducir a la mitad el número de muertes relacionadas con el calor (promedio móvil de 5 años) para 2030. Un informe de revisión provisional de 2023 indica que los desarrollos futuros deberían centrarse en evaluar la eficacia y el progreso de las medidas de adaptación, mejorar y utilizar el conocimiento científico y evaluar los impactos del cambio climático, promover la adaptación por parte de las regiones y las empresas privadas, y comunicarse con el público.

Las autoridades locales desempeñan un papel fundamental en la adaptación al cambio climático, pero a menudo carecen de capacidades técnicas y fiscales. Por lo tanto, los gobiernos centrales deben brindar apoyo técnico y un marco normativo y político nacional para incentivar a las autoridades locales a desarrollar resiliencia climática (OCDE, 2023[110]). Japón ha establecido centros locales de adaptación al cambio climático y la Plataforma de Información sobre Adaptación al Cambio Climático (A-PLAT) para recopilar, analizar y proporcionar información sobre el cambio climático y la adaptación, así como para ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a los gobiernos locales. Si bien la elaboración de planes de adaptación locales no es obligatoria, en julio de 2025, todas las prefecturas y el 24,2 % de los municipios los habían desarrollado. Estos esfuerzos deben continuar, ya que el intercambio de información entre los distintos niveles de gobierno puede contribuir a impulsar las medidas preventivas a nivel local.

La presentación de informes eficaces sobre la implementación y la evaluación es clave para políticas de adaptación rentables (OCDE, 2024[111]). Japón cuenta con varios indicadores clave de desempeño, incluso a nivel sectorial (por ejemplo, agricultura, salud, actividades industriales y económicas), que son proporcionados anualmente por diferentes ministerios sectoriales, coordinados por el Ministerio de Medio Ambiente y supervisados por el Consejo de Promoción de la Adaptación al Cambio Climático. Es importante garantizar la coherencia de los indicadores entre las diferentes partes interesadas mediante una mayor cooperación. En algunos países de la OCDE,

En países como Irlanda, estos indicadores son elaborados por consejos climáticos independientes, lo cual también podría considerarse. Los indicadores deberían ir acompañados de cronogramas para monitorear su implementación. El gobierno está evaluando actualmente los métodos para examinar la efectividad de las medidas de adaptación, lo que podría ser una buena oportunidad para mejorar su coherencia.

La información sobre las amenazas climáticas puede proporcionarse a las comunidades y a los responsables políticos mediante evaluaciones de riesgos climáticos y mapas de vulnerabilidad (OCDE, 2024[111]). En Japón, los municipios proporcionan mapas de peligros relacionados con los riesgos de inundaciones, mareas altas, tsunamis, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y terremotos, que son difundidos por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo. Varias leyes permiten a los gobiernos locales restringir la construcción y el desarrollo en áreas designadas, como áreas de riesgo de desastre, prevención de deslizamientos de tierra, alerta de desastres por tsunami y áreas de prevención de daños por inundaciones. Sin embargo, la implementación práctica se ha visto obstaculizada por limitaciones sociales, institucionales y legales, como la insuficiente capacidad técnica y financiera a nivel local y la resistencia de los residentes (Yamazaki-Honda, 2025[112]). La difusión de Debe continuarse informando sobre los riesgos y prestando apoyo técnico a los municipios.

En Japón, el seguro contra catástrofes naturales lo ofrece exclusivamente el sector privado y no es obligatorio. No existe una póliza de seguro dedicada únicamente a desastres relacionados con el clima, sino que estos se incluyen en otras pólizas, como las de incendios. Por lo tanto, existen lagunas en los datos que impiden una evaluación precisa de la cobertura, así como de los importes asegurados y las franquicias. Es necesario mejorar la presentación de informes para aumentar la cobertura. Podría considerarse la obligatoriedad del seguro contra riesgos de desastre (especialmente inundaciones), junto con un programa nacional de seguros contra catástrofes como en Francia y Suiza. Estos programas suelen beneficiarse del coaseguro, el reaseguro o la garantía estatal. Una garantía estatal asegura la cobertura de los daños causados por eventos extremos. Una ventaja del sistema francés es que ofrece una cobertura completa y primas asequibles, al tiempo que mantiene un papel importante para las aseguradoras privadas, con beneficios en términos de rentabilidad. En Japón, el reaseguro público solo se ofrece para terremotos a través del Ministerio de Finanzas.

También hay margen de mejora en las herramientas que utilizan las instituciones financieras, incluidas las aseguradoras, para realizar análisis de riesgos. Los pagos de indemnizaciones por inundaciones y tifones están aumentando, y los supervisores han estado mejorando su marco de análisis de escenarios para ayudar a evaluar los riesgos futuros. Las instituciones financieras están desarrollando sus capacidades e iniciativas para apoyar las medidas de adaptación de sus clientes, incluyendo departamentos especializados, lo cual es positivo. Sin embargo, muchas se enfrentan a dificultades para realizar evaluaciones de riesgos cuantitativos y formular estrategias de manera prospectiva y fiable (FSA, 2025[113]). Por lo tanto, los supervisores deben seguir supervisando los esfuerzos de las instituciones financieras en materia de riesgos relacionados con el clima.

Tabla 1.14. Recomendaciones anteriores sobre políticas ambientales.

Recomendaciones de encuestas anteriores:	Acciones emprendidas desde 2024
Mejorar la planificación de contingencias mediante la elaboración de escenarios energéticos y hojas de ruta que reflejen las incertidumbres sobre las trayectorias de desarrollo de las tecnologías.	No se ha tomado ninguna medida.
Continuar invirtiendo en infraestructura de transmisión y distribución, basándose en análisis de costo-beneficio, y mejorar la red eléctrica para respaldar un aumento en el suministro de electricidad renovable.	La implementación del Plan Maestro 2023 para el Desarrollo de la Red Eléctrica Nacional está progresando.
Seguir las mejores prácticas internacionales de participación obligatoria, asignación establecida por el regulador y una transición gradual hacia las subastas en el diseño del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), tal como estaba previsto.	En mayo de 2025, la Ley de Promoción GX fue enmendada para sentar las bases para la implementación obligatoria del ETS, pero aún se desconocen los detalles.
Asegúrese de que las medidas previstas de fijación de precios del carbono ofrezcan incentivos suficientes y considere una implementación más rápida para contribuir al logro de los objetivos de 2030.	En mayo de 2025, la Ley de Promoción GX fue enmendada para definir los requisitos técnicos necesarios para la introducción del recargo GX en el año fiscal 2028, pero aún faltan detalles.

Tabla 1.15. Recomendaciones sobre políticas macroeconómicas y estructurales.

PRINCIPALES HALLAZGOS	RECOMENDACIONES (Las recomendaciones clave están en negrita)
Políticas monetarias y financieras	
Se ha iniciado la normalización de la política monetaria y se prevé que la inflación converja hacia el objetivo del 2%.	Incrementar gradualmente la tasa de política monetaria, de forma flexible y basada en datos. manera.
La creciente interconexión entre los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) y el sistema financiero aumenta los riesgos de posibles efectos indirectos.	Continuar supervisando de cerca a las instituciones financieras no bancarias, subsanando las deficiencias de datos restantes, con miras a revisar el marco regulatorio, si fuera necesario.
Mejorar la sostenibilidad fiscal a medio plazo	
Las recientes mejoras en la situación fiscal a corto plazo reflejan mayores ingresos tributarios en un contexto de elevado crecimiento nominal. Se prevé que el último presupuesto suplementario revierta estas mejoras y conduzca a un superávit primario en 2026.	Limitar el uso de presupuestos suplementarios a grandes crisis económicas y evaluarlos a posteriori.
La elevada relación deuda pública bruta/PIB, el aumento de los tipos de interés y el envejecimiento de la población plantean desafíos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo.	Elaborar un plan fiscal a mediano plazo claro y creíble para lograr Lograr superávits primarios desde el principio y luego mantenerlos, respaldados por medidas específicas de gasto e impuestos, para que la relación deuda pública/PIB comience a disminuir.
Abordar los costes relacionados con el envejecimiento de la población es fundamental para mejorar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.	Vincular la edad de elegibilidad para la pensión con la esperanza de vida garantiza la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Aumentar aún más la tasa de copago de las personas mayores en la atención médica mediante una evaluación de recursos basada en un método eficaz para valorar los ingresos y el patrimonio.
El número total de camas hospitalarias y la duración media de las estancias hospitalarias son superiores a la media de la OCDE.	Continuar alejándose de un sistema de atención sanitaria basado en hospitales, integrando los servicios de salud y asistencia social a nivel local y evaluando el desempeño en función de los estándares existentes.
La falta de historiales médicos integrados y digitales limita la eficiencia del gasto y la eficacia de la evaluación de las políticas.	Desarrollar una infraestructura de datos sanitarios, con bases de datos interconectadas, y hacerla accesible para su evaluación, con estrictos controles de privacidad, para fundamentar y mejorar el diseño de políticas.
Los ingresos fiscales se sitúan cerca de la media de la OCDE, pero la proporción de los impuestos sobre el consumo (valor añadido) y sobre la renta personal es baja.	Incrementar gradualmente los ingresos fiscales, incluso aumentando la tasa del impuesto al consumo en pequeños incrementos.
El sistema de seguridad social y el tratamiento fiscal de los segundos perceptores de ingresos reducen el empleo femenino y disminuyen los ingresos fiscales.	Suprimir la exención de las cotizaciones a la seguridad social para los segundos perceptores de ingresos inferiores a 1,3 millones de yenes y la deducción fiscal por cónyuge.
El uso de las revisiones de gastos y su vinculación con el proceso presupuestario sigue siendo relativamente limitado, a pesar de que se supone que una parte de la financiación para nuevos gastos (por ejemplo, defensa) proviene de una mayor eficiencia en el gasto.	Seguir desarrollando la capacidad para realizar revisiones de gastos exhaustivas y periódicas, integrarlas sistemáticamente en el proceso presupuestario y garantizar la disponibilidad y el acceso a datos de rendimiento adecuados para aumentar la eficiencia del gasto.
Cómo afrontar la escasez de mano de obra	
Las prácticas tradicionales del mercado laboral japonés, como el empleo vitalicio, la jubilación obligatoria y los salarios basados en la antigüedad, podrían reducir la movilidad laboral y la calidad del empleo.	Dar mayor importancia al desempeño y al tipo de puesto a la hora de fijar los salarios, para así alejarse de los salarios basados en la antigüedad y aumentar aún más la edad de jubilación obligatoria con el objetivo de abolirla.
Japón ha impulsado significativamente el empleo de mujeres y trabajadores mayores, pero la proporción de mujeres y trabajadores mayores con empleos no regulares es alta, lo que refleja las responsabilidades de cuidado y la práctica de trasladar a los trabajadores mayores a empleos no regulares después de la jubilación obligatoria.	Incrementar aún más la participación de las mujeres en el mercado laboral y la calidad del empleo, rompiendo con el dualismo del mercado laboral y mejorando el acceso al cuidado infantil. Relajar la protección laboral para los trabajadores regulares y hacerla más transparente.
Las tarifas de guardería para niños de 1 a 2 años son elevadas, con drásticas caídas en los subsidios, lo que puede reducir los incentivos laborales para quienes aportan un segundo ingreso al hogar.	Considerar, como posible opción de reforma, modificar la contribución de los padres a los gastos de guardería para niños de 1 a 2 años, estableciendo un sistema lineal, sujeto a una evaluación de rentabilidad y viabilidad.
Han aumentado las vías de inmigración para los trabajadores extranjeros, lo que incrementa la complejidad del sistema.	Crear un portal único para orientar a los extranjeros a través del sistema de migración laboral.
El Programa de Trabajadores Cualificados Específicos sigue dependiendo de programas en los que los inmigrantes ya se encuentran en Japón, con un bajo porcentaje de personas que realizan exámenes en el extranjero.	Hacer más transparente la estructura de pruebas y cualificaciones y aumentar el número de pruebas realizadas en los países de origen.
La implementación del marco nacional de integración para migrantes a nivel local está retrasada.	Proporcionar más apoyo y herramientas para impulsar la integración de los migrantes, especialmente en zonas rurales y locales con menos conocimientos y recursos.
Las largas jornadas laborales, debidas en parte al tiempo dedicado a tareas administrativas, están contribuyendo a la escasez de mano de obra en los sectores de la educación y la atención a personas dependientes.	Incrementar el uso de tecnologías digitales en los sectores de atención y educación para realizar tareas repetitivas, con el fin de disponer de más tiempo para las funciones principales.
Las mujeres, las personas mayores y los trabajadores con contratos irregulares tienen menos probabilidades de participar en la formación de adultos.	Proporcionar formación específica para trabajadores vulnerables, incluidos cursos modulares vinculados a habilidades muy demandadas, especialmente las digitales.
La información sobre las diferentes oportunidades de formación está dispersa, lo que puede reducir su accesibilidad.	Crear una plataforma online integral que ofrezca todos los cursos de formación, tanto formales como no formales.

La falta de correspondencia entre las habilidades y los puestos de trabajo es común, y el desarrollo de la adecuación de las habilidades a las ocupaciones y las descripciones de los puestos se encuentra en sus primeras etapas.	Revise periódicamente los programas de capacitación que pueden optar a subvenciones para garantizar que sigan siendo coherentes con las necesidades de habilidades identificadas y actualícelos. normas profesionales y marcos nacionales de cualificaciones.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático.	
Es necesario acelerar la implementación para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas y mejorar aún más la gobernanza y la transparencia del clima para 2050.	políticas, por ejemplo, mediante el establecimiento de un organismo asesor independiente sobre el clima.
La Estrategia de Transformación Verde (Visión GX2040) incluye un apoyo de inversión inicial de 20 billones de yenes japoneses.	Garantizar la adicionalidad del apoyo financiero proporcionado en el marco de la Estrategia GX mediante un proceso de selección competitivo y transparente y revisiones periódicas.
Aún faltan detalles sobre el próximo recargo GX y el sistema obligatorio de emisiones (ETS), lo que genera incertidumbre en materia de inversiones.	Determinar rápidamente el número total de exenciones, el tipo del recargo GX y sus futuras tendencias de ajuste, y considerar la posibilidad de incorporarlas a la legislación.
Algunas medidas contra la crisis energética no han sido selectivas y probablemente reduzcan la eficacia de la fijación de precios del carbono. El tipo impositivo provisional sobre la gasolina se suprimió en diciembre de 2025.	Eliminar gradualmente las medidas de apoyo energético no focalizadas y reconsiderar la abolición del tipo impositivo provisional sobre la gasolina.
Japón se ha comprometido a eliminar gradualmente la generación de energía a partir del carbón sin medidas de mitigación en su sistema energético durante la primera mitad de la década de 2030, o en un plazo que permita mantener dentro del límite un aumento de temperatura de 1,5 °C, en línea con sus objetivos de cero emisiones netas. La expansión de la capacidad de energía renovable se ve frenada por los largos procesos de obtención de permisos y la limitada capacidad de la red eléctrica.	Considere la posibilidad de formalizar este compromiso, incluyendo un cronograma de eliminación gradual más concreto, teniendo en cuenta las preocupaciones sobre la seguridad energética. Simplificar aún más los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de concesión de permisos para las infraestructuras de energía eólica renovable, garantizando al mismo tiempo su eficacia. Continuar invirtiendo en infraestructura de transmisión y distribución, basándose en un análisis de costo-beneficio, y mejorar la integración de la red eléctrica.
El número de vehículos eléctricos ligeros por punto de recarga público es relativamente alto.	Ajustar las subvenciones para que reflejen los costes reales de instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en zonas desatendidas.
Si bien Japón cuenta con un marco de adaptación bien desarrollado, aún hay margen de mejora en la capacidad a nivel local. Ampliar la cobertura de los seguros privados para desastres relacionados con el clima podría reducir la carga sobre el presupuesto público.	Mejorar la capacidad profesional para planificar e implementar medidas de adaptación al cambio climático a nivel local. Realice una evaluación exhaustiva de la cobertura de seguro privado para desastres relacionados con el clima y considere el seguro obligatorio al proporcionar Reaseguro público para pérdidas catastróficas.

Referencias

- Alonso-Albarran, V. et al. (2025), "Reglas fiscales y consejos fiscales", Documentos de trabajo del FMI, vol. 198, <https://doi.org/10.5089/9798229025072.001>. [24]
- Arimura, Y. et al. (2025), "Identificación de factores para promover la formulación de políticas basadas en la evidencia en Japón desde la perspectiva de los responsables políticos, los investigadores y los intermediarios del conocimiento: una entrevista semiestructurada", Health Research Policy and Systems, Vol. 23/1, <https://doi.org/10.1186/s12961-025-01320-0>. [25]
- Ashizawa, T. et al. (2022), "Riesgos físicos del cambio climático a los que se enfrentan las instituciones financieras de Japón: Impacto de las inundaciones en la economía real, los precios de la tierra y las condiciones financieras de las FI", Bank of Japan Review, Vol. 2, https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2022/data/rev22e02.pdf. [108]
- Averchenkova, A. y L. Lazaro (2020), El diseño de un mecanismo independiente de asesoramiento de expertos en el marco de la legislación climática europea: ¿Cuáles son las opciones? [71]
- Banco de Japón (2026), Evolución del tipo de interés natural y evaluación del grado de flexibilidad monetaria. [5]
- BNEF (2023), Japón puede alcanzar el objetivo de cero emisiones netas con una dependencia mínima del hidrógeno. [94]
- BoJ (2025), Informe del sistema financiero, <https://www.boj.or.jp/en/research/brp/fsr/data/fsr250423a.pdf>. [11]
- BoJ (2025), Informe del sistema financiero, <https://www.boj.or.jp/en/research/brp/fsr/data/fsr251023b.pdf>. [9]
- BoJ (2025), Política de inspección in situ para el año fiscal 2025, https://www.boj.or.jp/en/finsys/exam_monit/exampolicy/kpolicy25.pdf. [10]
- BoJ (2024), Revisión de la política monetaria desde una perspectiva amplia, Banco de Japón, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k241219b.pdf. [8]
- Oficina del Gabinete (2026), Proyecciones económicas y fiscales para el análisis a medio y largo plazo (enero), <https://www5.cao.go.jp/keizai3/projection-e.html>. [14]
- Oficina del Gabinete (2025), Informe anual sobre la economía y las finanzas públicas japonesas, <https://www5.cao.go.jp/jp/wp/wp-je25/25.html>. [4]
- Oficina del Gabinete (2025), Efectos económicos de las medidas económicas integrales para lograr una "economía fuerte", https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/1121_taisaku_shisan.pdf. [88]
- Oficina del Gabinete (2024), Informe anual sobre la economía y las finanzas públicas japonesas 2024, <https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper-e.html>. [31]
- Oficina del Gabinete (2023), Directrices para reformas integradas del mercado laboral en tres frentes, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/roudousijouen.pdf. [35]
- Climate Integrate (2025), Japan Policy Briefing: 7th Strategic Energy Plan, Climate Plan/NDC and GX 2040 Vision, https://climateintegrate.org/wp-content/uploads/2025/03/2025_SEP_NDC_GX-EN.pdf. [90]
- D'Arcangelo, F., T. Kruse y M. Pisu (2024), "Identificación y seguimiento de estrategias de mitigación del cambio climático con una evaluación basada en clústeres", Climate Action, <https://doi.org/10.1038/s44168-024-00158-6>. [75]
- Economist Impact (2023), Cerrando la brecha de habilidades: Impulsando las carreras profesionales y la economía en Japón. [65]
- Eguchi, M. et al. (2025), "El panorama cambiante de las NBFi en los sistemas financieros", Bank of Japan Review, https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2025/data/rev25e07.pdf. [12]
- Euridice (2025), Garantía de calidad en la educación y formación de adultos, <https://euridice.eacea.ec.europa.eu/eurypedia/austria/quality-assurance-adult-education-and-training>. [62]
- FSA (2025), Prácticas y cuestiones sobre la gestión de riesgos relacionados con el clima, https://www.fsa.go.jp/en/news/2025/20250620_2/02.pdf. [113]
- Fujimoto, M. (2024), "¿Se seguirá manteniendo el sistema japonés de empleo a largo plazo?", Japan Labour Issues, Vol. 8, <https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2024/047-05.pdf>. [34]
- Gokhale, H. (2021), "Política de impuestos al carbono de Japón: limitaciones y sugerencias de políticas", Current Research in Environmental Sustainability, <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100082>. [80]

- Goto, E. (2025), Fortalecimiento de la competitividad a través de la descarbonización: tendencias recientes en las políticas industriales europeas e implicaciones para la estrategia GX de Japón, https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_EU_IndustrialPolicyTrends_EN_202507.pdf. [78]
- GR Japón (2024), Políticas de Japón sobre hidrógeno y amoníaco. [98]
- Haraoka, N. (2022), Cuestiones para promover la gestión basada en la evidencia en Japón: Entrevista con el profesor Daiji Kawaguchi, <https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/kawaguchi/data/12.pdf>. [27]
- Hiroyuki, Y., K. Hirata y H. Mochizuki (2024), Proceso de formulación de políticas en Japón: el Plan Estratégico de Energía como estudio de caso, <https://climateintegrate.org/wp-content/uploads/2024/06/Policy-making-process-EN.pdf>. [74]
- IEA (2024), Factores de emisión 2024, <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-Factores-de-emisión-2024>. [91]
- IEA (2024), Revisión mundial del hidrógeno 2024, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/89c1e382-dc59-46ca-aa47-9f7d41531ab5/GlobalHydrogenReview2024.pdf>. [96]
- IEA (2024), Perspectivas energéticas mundiales 2024, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918c/WorldEnergyOutlook2024.pdf>. [93]
- IEA (2023), Hoja de ruta para lograr emisiones netas cero: Un camino global para mantener el objetivo de 1,5 °C al alcance - Actualización de 2023. [97]
- IEA (2023), Hacia definiciones de hidrógeno basadas en la intensidad de sus emisiones. [95]
- IGES (2023), Hoja de ruta de 1,5 °C: Un plan de acción para Japón. Informe técnico resumido, Instituto de Estrategias Ambientales Globales. [82]
- Ikeda, S. et al. (2025), "Efectos del cambio demográfico en el mercado laboral y la evolución salarial", Bank of Japan Review, Vol. 2. [33]
- FMI (2025), Japón: 2025 Artículo IV, <https://doi.org/10.5089/9798229006811.002>. [7]
- FMI (2024), Japón: Evaluación de la estabilidad del sistema financiero, <https://doi.org/10.5089/9798400273384.002>. [13]
- FMI (2022), Japón: Cuestiones seleccionadas, <https://doi.org/10.5089/9798400206597.002>. [21]
- Inoue, N., S. Matsumoto y M. Morita (2020), "Desigualdades en el impacto del impuesto al carbono en Japón", en Economía, derecho e instituciones en Asia Pacífico, https://doi.org/10.1007/978-981-15-6964-7_12. [85]
- ISA (2024), Encuesta básica sobre residentes extranjeros del año fiscal 2024, <https://www.moj.go.jp/isa/content/001436052.pdf>. [45]
- ISA (2024), Esquema del Programa de Empleo para el Desarrollo de Habilidades, <https://www.moj.go.jp/isa/content/001438445.pdf>. [43]
- Ishikawa, T. y S. Goto (2024), "Puntos a considerar en el diseño de políticas de trabajadores extranjeros: ¿qué se puede aprender del "fracaso de Occidente?", JRI Research Journal, Vol. 7/10, <https://www.jri.co.jp/en/MediaLibrary/file/english/periodical/jrij/2024/12/goto.pdf>. [47]
- JICA (2024), Migración y desarrollo: apoyo para la aceptación de recursos humanos extranjeros / Comunidad multicultural e inclusiva, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, <https://www.jica.go.jp/english/activities/schemes/multicultural/index.html>. [41]
- JILPT (2025), "Más del 30% de las empresas aseguran empleos para los empleados hasta los 70 años", Japan Labour Issues, Japan Institute for Labour Policy and Training, <https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2025/053-03.pdf>. [32]
- Khin, Y. et al. (2025), "Barreras y facilitadores para el acceso a la atención médica entre inmigrantes en Japón: una revisión sistemática de métodos mixtos y metasíntesis", The Lancet Regional Health - Western Pacific, Vol. 54, <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2024.101276>. [46]
- Kitao, S. y M. Mikoshiba (2024), Por qué las mujeres trabajan como lo hacen en Japón: Papel de las políticas fiscales, <https://sagirikitao.github.io/mywebsite/FLFP.pdf>. [23]
- Ministerio de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos de Corea (2025), Sistema Nacional de Información Educativa, <https://neis.go.kr/nxuiPortal/index.html>. [55]
- Lee, Y. et al. (2024), "Robots y mano de obra en residencias de ancianos", NBER Working Papers, No. 33116, <http://www.nber.org/data-appendix/w33116>. [51]

- Marcolin, L. y F. Filippucci (2025), Comprender la escasez de mano de obra: las fuerzas estructurales en juego. Nuevas evidencias del Foro Mundial sobre Productividad. [63]
- Marten, M. y K. van Dender (2019), "El uso de los ingresos procedentes de la fijación de precios del carbono", Documentos de trabajo sobre fiscalidad de la OCDE, n.º 43, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/3cb265e4-en>. [86]
- METI (2025), Energía de Japón: 2024, https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/2025_strategic_energy_plan.pdf. [68]
- METI (2025), Séptimo Plan Estratégico de Energía, Ministerio de Economía, Comercio e Industria, https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basic_plan/pdf/7th_outline.pdf. [69]
- METI (2024), Subvenciones mejoradas para la compra de vehículos de energía limpia hacia la realización de GX en el sector automotriz, https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/special/article/detail_199.html. [106]
- MHLW (2025), Encuesta básica sobre igualdad de género en la gestión del empleo, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. [40]
- Millot, V. y Ł. Rawdanowicz (2024), "El retorno de las políticas industriales: consideraciones políticas en el contexto actual", Documentos de política económica de la OCDE, <https://doi.org/10.1787/051ce36d-en>. [76]
- Ministerio del Interior y Comunicaciones (2024), Encuesta sobre el estado de formulación de planes o directrices relativas a la promoción de la coexistencia multicultural, (en japonés), https://www.soumu.go.jp/main_content/000984202.pdf. [49]
- Instituto de Investigación Mitsubishi (2024), Lograr que los sistemas médicos y de atención a largo plazo de Japón sean autosostenibles para 2040, https://www.mri.co.jp/en/knowledge/article/202409_1.html. [16]
- Instituto de Investigación Mitsubishi (2023), Propuesta de política para un lenguaje común en el mercado laboral. [67]
- MoF (2025), Hoja informativa sobre finanzas públicas japonesas, Ministerio de Finanzas, <https://www.mof.go.jp/english/policy/budget/budget/fy2025/02.pdf>. [22]
- Morikawa, M. (2023), EBPM y estadísticas gubernamentales: medición de los efectos de la "inversión en personas", https://www.rieti.go.jp/en/columns/s23_0014.html. [28]
- Nachtigall, D. et al. (2022), "El marco de medición de las acciones y políticas climáticas: una base de datos de políticas climáticas estructurada y armonizada para monitorear las acciones de mitigación de los países", Documentos de trabajo sobre medio ambiente de la OCDE, n.º 203, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/2caa60ce-en>. [72]
- Nakazawa, T. y M. Osada (2024), "Las compras de bonos gubernamentales a gran escala del Banco de Japón y la formación de tasas de interés a largo plazo", Documentos de trabajo del Banco de Japón, n.º 10, https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2024/data/wp24e10.pdf. [6]
- Nick, E. y M. Duwe (2021), Sistemas de gobernanza climática en Europa: El papel de los organismos consultivos nacionales. [73]
- Nikkei (2025), "Abolición del carbón ineficiente: "Considerar medidas excepcionales", Opinión de la Federación de Energía Eléctrica", <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC078ER0X00C25A3000000/>. [92]
- Nikkei (2022), Cobrar a las empresas para reducir las emisiones de CO2: El gobierno como fuente de fondos para el reembolso de los bonos GX, <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA291AD0Z21C22A1000000/>. [83]
- Nomura, S. et al. (2022), Sostenibilidad y resiliencia en el sistema de salud de Japón, https://www3.weforum.org/docs/WEF_PHSSR_Japan_final_2022.pdf. [17]
- Oderkirk, J. (2021), "Resultados de la encuesta: Infraestructura y gobernanza de los datos sanitarios nacionales", Documentos de trabajo sobre salud de la OCDE, n.º 127, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/55d24b5d-en>. [18]
- OCDE (2025), "Un enfoque territorial para la acción climática y la resiliencia en Japón", Documentos de Desarrollo Regional de la OCDE, n.º 131, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/6b871ebc-en>. [101]
- OCDE (2025), Emisiones atmosféricas - Inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. [105]
- OCDE (2025), Seguridad económica en un mundo cambiante, <https://doi.org/10.1787/4eac89c7-en>. [3]
- OCDE (2025), Panorama de la educación 2025, <https://doi.org/10.1787/1c0d9c79-en>. [39]
- OCDE (2025), Igualdad de género en un mundo cambiante, <https://doi.org/10.1787/e808086f-en>. [37]

- OCDE (2025), Perspectivas del empleo de la OCDE 2025: Japón, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/07/oecd-employment-outlook-2025-country-notes_5f33b4c5/japan_fa8fbc74/7672bd00-en.pdf. [60]
- OCDE (2025), Exámenes de desempeño ambiental de la OCDE: Japón 2025, Exámenes de desempeño ambiental de la OCDE, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/583cab4c-en>. [70]
- OCDE (2025), Revisión de la resiliencia de la cadena de suministro de la OCDE: Navegando los riesgos, <https://doi.org/10.1787/94e3a8ea-en>. [2]
- OCDE (2025), Resultados de TALIS 2024: El estado de la enseñanza, <https://doi.org/10.1787/90df6235-en>. [50]
- OCDE (2025), Índice de preparación y adopción del enfoque "Comienzo de las competencias", <https://www.oecd.org/en/data/dashboards/skills-first-readiness-and-adoption-index.html>. [58]
- OCDE (2025), Tendencias en el aprendizaje de adultos: nuevos datos de la encuesta de habilidades de adultos de 2023, Getting Skills Right, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/ec0624a6-en>. [59]
- OCDE (2025), Edificios con cero emisiones de carbono en las ciudades: un enfoque de ciclo de vida completo, Estudios urbanos de la OCDE, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/daae8779-en>. [104]
- OCDE (2024), "Acelerar la adaptación al cambio climático: un marco para evaluar y abordar las necesidades y prioridades de adaptación", Documentos de política económica de la OCDE, n.º 35, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/8afaaeb8-en>. [111]
- OCDE (2024), Fijación de precios del carbono en Japón, <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/carbon-pricing-and-energy-taxes/carbon-pricing-japan.pdf>. [81]
- OCDE (2024), Perspectivas de la política educativa 2024: Reconfigurando la enseñanza para convertirla en una profesión próspera, desde los fundamentos hasta la IA, Publicaciones de la OCDE, París, <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>. [53]
- OCDE (2024), Seguimiento mundial de políticas para la descarbonización de edificios: un enfoque multinivel, Estudios urbanos de la OCDE, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/d662fdbcb-en>. [103]
- OCDE (2024), "Políticas industriales verdes para la transición a cero emisiones netas", Documentos de política de OCDE Net Zero+, n.º 2, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/ccc326d3-en>. [77]
- OCDE (2024), Perspectivas de la migración internacional 2024, <https://doi.org/10.1787/50b0353e-en>. [44]
- OCDE (2024), Medición del progreso en la adaptación a un clima cambiante: perspectivas de los países de la OCDE, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/8cfe45af-en>. [109]
- OCDE (2024), Estudios económicos de la OCDE: Japón 2024, <https://doi.org/10.1787/41e807f9-en>. [38]
- OCDE (2024), Perspectivas del empleo de la OCDE 2024: Japón. [64]
- OCDE (2024), Contratación de trabajadores inmigrantes: Japón 2024, <https://doi.org/10.1787/0e5a10e3-en>. [42]
- OCDE (2024), Oferta de formación para las transiciones verde y de IA: Equipar a los trabajadores con las habilidades adecuadas, Obtener las habilidades adecuadas, Publicaciones de la OCDE, París, <https://doi.org/10.1787/7600d16d-en>. [66]
- OCDE (2023), Acceso a los recursos del sistema de atención sanitaria: Japón. [15]
- OCDE (2023), "Adaptación climática: por qué los gobiernos locales no pueden hacerlo solos", Documentos de política ambiental de la OCDE, n.º 38, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/be90ac30-en>. [110]
- OCDE (2023), Panorama de la salud 2023: Indicadores de la OCDE, <https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en>. [52]
- OCDE (2023), Perspectivas de la educación digital de la OCDE 2023: Hacia un ecosistema de educación digital eficaz, Publicaciones de la OCDE, París, <https://doi.org/10.1787/c74f03de-en>. [54]
- OCDE (2022), Gobernanza de datos sanitarios para la era digital: Implementación de la recomendación de la OCDE sobre gobernanza de datos sanitarios, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/68b60796-en>. [19]
- OCDE (2022), El nuevo lugar de trabajo en Japón: habilidades para una recuperación sólida, Getting Skills Right, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/7c897f52-en>. [30]
- OCDE (2021), Creación de oportunidades de aprendizaje para adultos receptivos en Japón, Getting Skills Right, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/cfe1ccd2-en>. [57]

- OCDE (2021), Mejorar la calidad del aprendizaje no formal de adultos: aprender de las mejores prácticas europeas en materia de garantía de calidad, *Getting Skills Right*, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/1b450e1-en>. [61]
- OCDE y MHLW (2024), Resumen e implicaciones políticas del evento conjunto de la OCDE y el MHLW sobre políticas de empleo para personas mayores 2024, <https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001355793.pdf>. [36]
- Okushima, S. y N. Simcock (2024), "Doble vulnerabilidad energética en Japón", *Energy Policy*, Vol. 191, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114184>. [87]
- REI (2025), Los objetivos de energía nuclear de Japón para los años fiscales 2030 y 2040 probablemente estén fuera de alcance, <https://www.renewable-ei.org/en/activities/column/REupdate/20250321.php>. [89]
- REI (2025), Hacia un GX-ETS que contribuya a la descarbonización de manera efectiva: tres propuestas, Instituto de Energías Renovables. [84]
- REI (2024), Escenario de transición energética a través de energías renovables, https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_2040senario_rev-edition_en.pdf. [100]
- Shiraishi, K. et al. (2023), La caída en picado de los costes de la energía solar, eólica y las baterías puede acelerar el futuro de la electricidad limpia e independiente de Japón, https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/lbnl_2035_japan_report_english_publish.pdf. [99]
- Stechemesser, A. et al. (2024), "Políticas climáticas que lograron importantes reducciones de emisiones: evidencia global de dos décadas", *Science*, Vol. 385, <https://doi.org/10.1126/science.adl6547>. [79]
- Tajima, M., C. Doedt y T. Iida (2022), "Estudio comparativo sobre las reformas de la política de uso de la tierra para promover la agrivoltaica", *AIP Conference Proceedings*, <https://doi.org/10.1063/5.0115906>. [102]
- Tian, Y. (2025), "Las barreras institucionales dificultan la integración de la población extranjera de Japón", *East Asia Forum*, <https://doi.org/10.59425/EABC.1748426400>. [48]
- Fundación Tokio (2024), Recomendaciones de política: Programa de investigación Reconstrucción fiscal y reforma del sistema de seguridad social aceptable para ciudadanos diversos, <https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4476>. [20]
- Toyoda, M. (2022), EBPM: Su potencial y limitaciones, https://www.jef.or.jp/journal/pdf/243rd_Publishers_Note.pdf. [29]
- Tryggvadottir, Á. (2022), "Las mejores prácticas de la OCDE para las revisiones de gastos", *OECD Journal on Budgeting*, <https://doi.org/10.1787/90f9002c-en>. [26]
- Departamento de Educación del Reino Unido (2024), Mejorar la carga de trabajo y el bienestar del personal escolar. [56]
- Yagi, T. et al. (2022), "Transferencia de presiones de costos a los precios al consumidor", No. 17, Banco de Japón, https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2022/data/wp22e17.pdf. [1]
- Yamada, Y. et al. (2025), Deberes de los directores en relación con el cambio climático en Japón: 2025. [107]
- Yamazaki-Honda, R. (2025), "Evolución de las regulaciones y controles del uso de la tierra basados en el riesgo en Japón", *Journal of Disaster Research*, Vol. 20, <https://doi.org/10.20965/jdr.2025.p0616>. [112]

2

Reactivando el crecimiento de la productividad

Patrizio Sicari

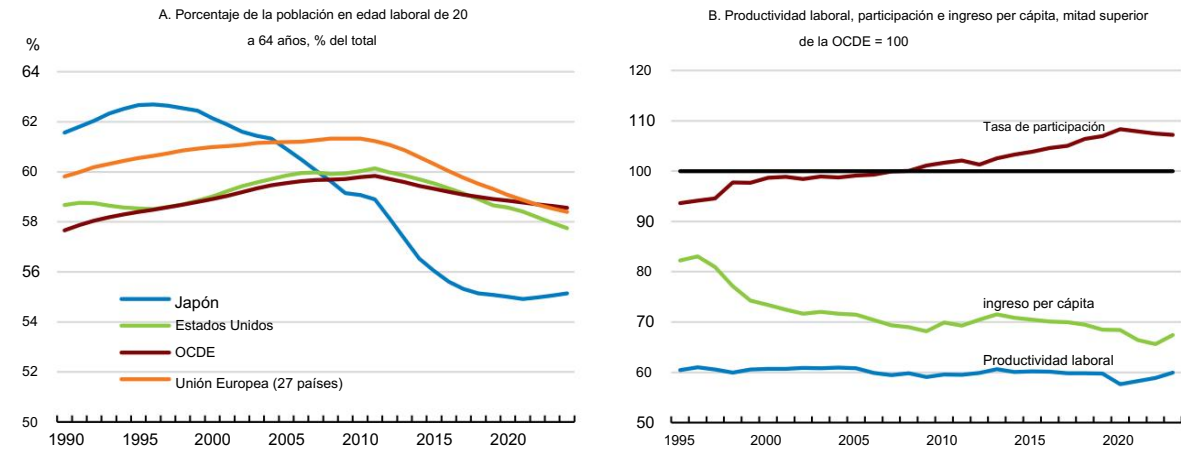
Tetsuya Yoshioka

Japón se enfrenta al reto de la baja productividad laboral y el lento crecimiento de la productividad. En un contexto de disminución de la población en edad de trabajar, se requerirán mayores aumentos de productividad para mantener el nivel de vida. Esto se complica por un entorno empresarial que desalienta la entrada de nuevas empresas, limita la expansión y retrasa la salida de las empresas menos productivas. Las engorrosas regulaciones empresariales y las persistentes barreras a la competencia en sectores clave de servicios constituyen obstáculos adicionales para un mayor crecimiento. La flexibilización de estas restricciones y de las barreras regulatorias e informales que aún dificultan la inversión extranjera directa contribuiría a atraer empresas y talento extranjeros más innovadores, fomentando así efectos indirectos en la productividad. El acceso de las pymes a la I+D y a las colaboraciones de investigación con universidades es relativamente limitado, lo que sugiere la necesidad de un apoyo público más específico para ampliar la difusión de nuevas tecnologías. Una mayor captación de estudiantes de educación superior en programas orientados a la investigación impulsaría una economía más orientada a la innovación. Se debería priorizar la flexibilidad en los procesos de insolvencia, reestructuración y sucesión empresarial para aumentar la eficiencia en la asignación de recursos. Impulsar la baja adopción actual de tecnologías digitales avanzadas, incluida la inteligencia artificial, será crucial para aprovechar el potencial de productividad aún sin explotar.

2.1. La productividad de Japón está por debajo de la de sus pares.

La disminución de la población en edad de trabajar de Japón ha sido el principal factor que explica la brecha en el ingreso per cápita de Japón con respecto a la mitad superior de la OCDE (Figura 2.1). La productividad laboral, medida como productividad por persona empleada, que está muy por debajo de la de la mitad superior de los países de la OCDE, también contribuyó a esta brecha. Por otro lado, el aumento del empleo tuvo el efecto contrario. Dado que se proyecta que la población en edad de trabajar disminuya al 49,9% para 2050 bajo el escenario de baja tasa de natalidad del gobierno, se necesita una mayor oferta de mano de obra o productividad para sostener el crecimiento. La productividad laboral, medida como PIB por hora trabajada, también es inferior al promedio de la OCDE (Figura 2.2, Panel A). El crecimiento anual de la productividad por hora cayó del 1,2% en el período 2000-08 al 0,3% entre 2019 y 2024 (Panel B).

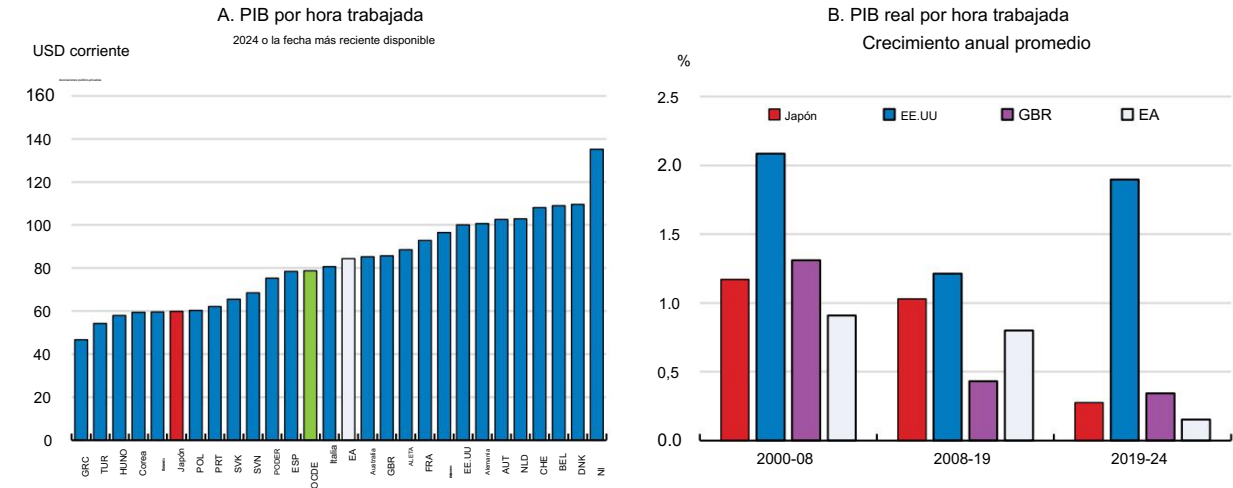
Figura 2.1. La disminución de la proporción de la población en edad de trabajar ha reducido el PIB per cápita.



Fuente: OCDE, datos históricos de población; OCDE, base de datos de cuentas nacionales y OCDE, base de datos de productividad.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/vjoucd>

Figura 2.2. El nivel de productividad laboral por hora está por debajo del promedio de la OCDE.



Nota: La OCDE y la EA (zona del euro) se refieren a un promedio ponderado basado en las horas trabajadas.

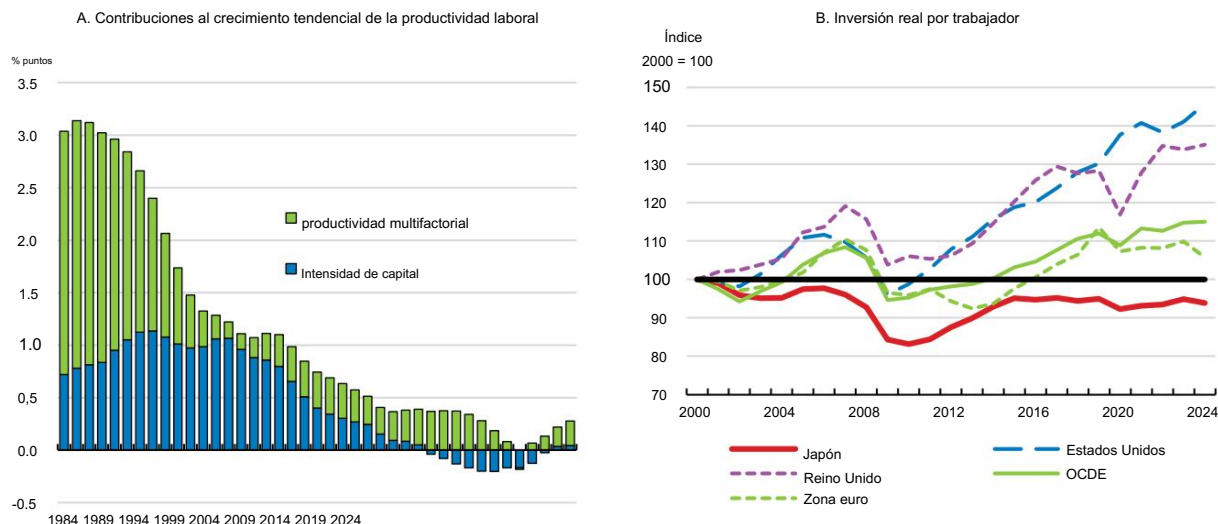
Fuente: OCDE, base de datos de estadísticas de productividad.

StatLink 2<https://stat.link/wymbdf>

La marcada desaceleración en la profundización del capital desde el año 2000 ha limitado el crecimiento de la productividad laboral (Figura 2.3, Panel A). De hecho, el crecimiento de la inversión real por trabajador se ha quedado rezagado con respecto al resto de la OCDE (Panel B).

El estancamiento en la acumulación de activos de capital tangibles refleja factores demográficos y estructurales. Las expectativas de crecimiento de las empresas se moldearon tras el colapso de la burbuja económica, lo que redujo los incentivos para expandir la capacidad de producción nacional. Junto con la aversión al riesgo de las empresas, esto ha generado altos niveles de efectivo y depósitos en corporaciones no financieras. Con alrededor del 60% del PIB, este nivel es elevado en perspectiva internacional. Además, las grandes empresas incrementaron su participación en la inversión en valores, lo que refleja el traslado de la producción al extranjero. Estas tendencias se reflejan en una alta proporción de inversión extranjera directa (IED) saliente (Figura 2.4, Panel A). Por otro lado, la IED entrante a Japón es baja, con un 5,1% del PIB.

Figura 2.3. La escasa inversión ha sido el principal motor del bajo crecimiento de la productividad.



Nota: Panel A: Variación anual del PIB real potencial por persona empleada, desglosada en capital por trabajador y crecimiento de la productividad multifactorial. Panel B: El empleo total se define como el número de trabajadores.

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/59yvlf>

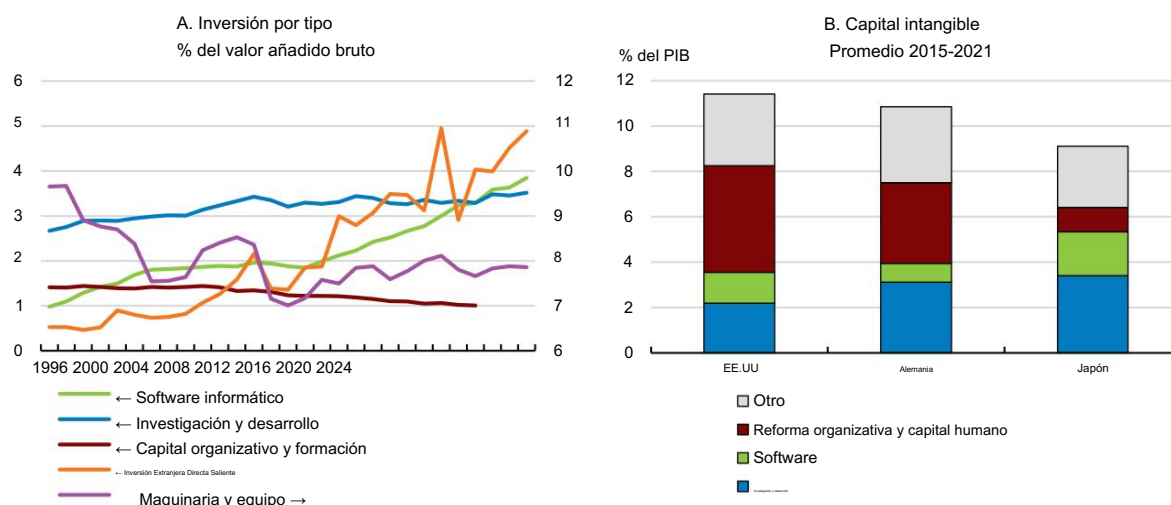
La contribución del crecimiento de la productividad multifactorial tendencial (la eficiencia con la que se utilizan el trabajo y el capital) se mantuvo en general estable después de la década de 1990, aunque en un nivel relativamente bajo (Figura 2.3, Panel A). Si bien se recuperó un poco después de la pandemia, la productividad multifactorial tendencial ha crecido a una tasa anual promedio de solo 0,4% entre 2000 y 2024. Esto está por debajo del promedio de la OCDE de 0,8% y el de Estados Unidos y Corea del Sur, de 1,2% y 1,9%, respectivamente. Además, si bien los activos intangibles continuaron acumulándose, especialmente en I+D y software, no generaron ganancias de productividad. Esto se ha atribuido a una falta de inversión en capital organizacional y capacitación (Figura 2.4) (Miyagawa y Ishikawa, 2021[1]). Las regresiones entre países revelan que la eficiencia de la inversión en activos intangibles es menor en Japón que en sus pares (Yagi et al., 2022[2]). Por lo tanto, la inversión complementaria en TIC, inteligencia artificial y capital humano (Capítulo 1) es esencial.

La reasignación de recursos también ha frenado el crecimiento de la productividad. La probabilidad de que las empresas de baja productividad superen estos niveles, ya sea mediante mejoras o su cierre, es menor en Japón que en Estados Unidos (Yagi et al., 2022[2]). Como reflejo de estos patrones, el crecimiento de la productividad agregada de Japón se ha basado principalmente en mejoras dentro de los sectores y las empresas, mientras que la contribución de la reasignación de recursos entre sectores y empresas ha sido consistentemente pequeña (Fukao, Kim y Kwon, 2021[3]). Además, la proporción de empresas zombi aumentó tras la pandemia, pasando del 10,1 % en 2019 al 14,3 % en 2024 (Teikoku Data Bank, 2026[4]).

Al estar los recursos estancados en sectores y empresas de baja productividad, el potencial innovador de los más productivos se ve limitado, lo que les impide expandirse y lastra el crecimiento de la productividad agregada.

En consecuencia, el dinamismo empresarial sigue siendo bajo, con tasas de entrada y salida de empresas que rondan la mitad de las de Estados Unidos (Figura 2.5). Facilitar la entrada de empresas y su posterior crecimiento, así como la salida oportuna de las empresas menos productivas, son claves para abordar el desafío de la productividad en Japón.

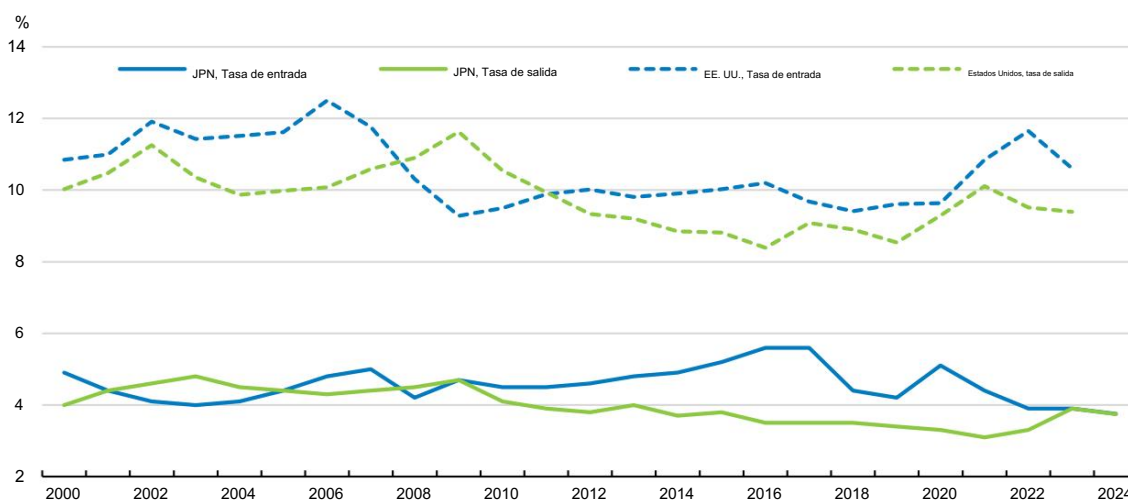
Figura 2.4. Se necesitan inversiones complementarias para impulsar la productividad.



Fuente: Ministerio de Finanzas; Oficina del Gabinete y Bontadini, F. et al. (2023), EUKLEMS & INTANProd: Cuentas de productividad de la industria con intangibles.

StatLink 2<https://stat.link/5xyn0c>

Figura 2.5. El dinamismo empresarial se mantiene moderado.



Nota: El número de empresas que se incorporan o abandonan el seguro de desempleo se expresa como porcentaje del número total de empresas al final del ejercicio fiscal anterior.

Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industria y Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar; y Oficina del Censo de los Estados Unidos, Estadísticas de Dinámica Empresarial.

StatLink 2<https://stat.link/7f4bpz>

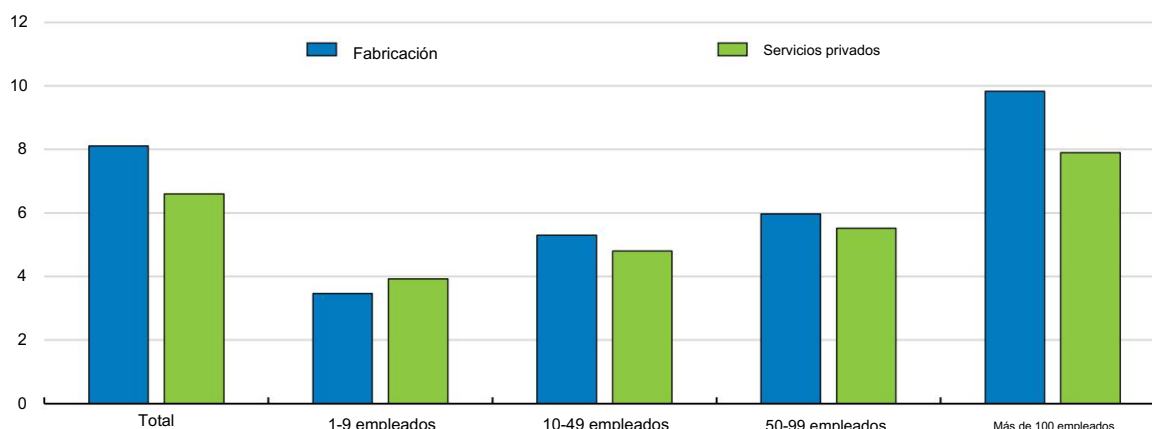
La productividad laboral en el sector servicios es inferior a la del sector manufacturero. Dentro del sector servicios, la productividad en los servicios profesionales y técnicos es particularmente baja, lo que posiblemente refleje una mayor regulación.

Las brechas de productividad entre pequeñas y grandes empresas, más pronunciadas en el sector servicios, también contribuyen a la baja productividad agregada. Al igual que en otros países de la OCDE, la productividad laboral aumenta con el tamaño de la empresa tanto en la industria manufacturera como en los servicios (Figura 2.6). El impacto en la productividad agregada es alto, ya que las PYME representan el 70% y el 56% del empleo y el valor agregado, respectivamente. Las PYME que participan en cadenas de valor globales tienden a ser más productivas y tienen acceso a productos y servicios más diversificados (OCDE, 2023[5]). La baja productividad de las PYME en Japón refleja el hecho de que están concentradas en los servicios (71% de los empleados en PYME no agrícolas), se quedan atrás en la innovación y la adopción de tecnologías digitales, tienden a ser antiguas y participan

menor participación en el comercio internacional. Por ello, las PYMES tienden a ser menos competitivas, lo que, sumado a un dinamismo empresarial débil, contribuye a mantener bajos los niveles de productividad y crecimiento.

Figura 2.6. La productividad laboral aumenta con el tamaño de la empresa.

Valor añadido bruto por trabajador, millones de yenes



Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones/Ministerio de Economía, Comercio e Industria, Censo Económico de Actividad Empresarial de 2021.

StatLink 2 <https://stat.link/bemfly>

El envejecimiento también puede afectar la productividad laboral a través de diversos canales. Los trabajadores pueden volverse menos productivos con la edad, mientras que la innovación y el espíritu emprendedor pueden debilitarse si los jóvenes tienen mayor propensión a innovar.

Por el contrario, dado que los trabajadores mayores han acumulado experiencia, las empresas que los combinan eficazmente con compañeros más jóvenes y en plena edad laboral tienden a ser más productivas que otras. La jubilación obligatoria también puede provocar una pérdida de conocimiento específico de la empresa, lo que debilita la productividad general. Los cambios en la demanda hacia sectores donde es más difícil lograr aumentos de productividad, como algunos servicios personales intensivos en mano de obra, y el desplazamiento de las inversiones productivas por el gasto relacionado con el envejecimiento, pueden debilitar aún más la productividad (Andre et al., 2025[6]). En este sentido, los sectores no mercantiles (principalmente educación, sanidad y asistencia social, y administración pública) representaron el 16% del valor añadido bruto de Japón en 2023, un aumento de alrededor de cuatro puntos porcentuales con respecto a 1995. El aumento refleja principalmente la expansión de la sanidad y la asistencia social, una tendencia que precedió al impacto de la pandemia. Sin embargo, la incidencia relativa de los sectores no mercantiles sigue siendo inferior a la de la mayoría de los países de la UE y Estados Unidos.

El envejecimiento de la población, sumado a la creciente escasez de mano de obra, probablemente incentivará la automatización para mejorar la productividad. La digitalización avanzada, el despliegue de robots y los sistemas integrados con IA podrían hacer más eficientes las tareas manuales, mitigando posiblemente las presiones del tipo Baumol asociadas al envejecimiento (Filippucci et al., 2024[7]). En este contexto, impulsar el crecimiento de la productividad requerirá políticas en una amplia gama de áreas, como el aumento de la entrada y salida de empresas, la reforma del sector de las PYME de baja productividad y la facilitación de la expansión de las empresas exitosas, la mejora del capital humano (a lo largo de la educación y la vida laboral), el impulso de la inversión extranjera directa y la simplificación de las regulaciones. Otras políticas, como la apertura comercial, también son importantes para el crecimiento de la productividad, pero quedan fuera del alcance de este capítulo.

2.2. Fortalecimiento de la competencia

La competencia de mercado vibrante es clave para una asignación de recursos más eficiente y un mayor bienestar del consumidor. Los indicadores de Regulación del Mercado de Productos (RMP) de la OCDE de 2023 muestran que el marco regulatorio general de Japón sigue estando entre los menos favorables a la competencia en la OCDE, a pesar de algunas mejoras desde 2018 (Figura 2.7, Panel A). Sin embargo, un desglose por área regulatoria revela una imagen más matizada. Las barreras al comercio y la inversión se encuentran entre las más bajas de la OCDE, mientras que la carga administrativa y regulatoria para las empresas es la segunda más alta de la OCDE (Paneles BC). Las distorsiones a la competencia derivadas de la propiedad pública y la participación estatal en las operaciones comerciales son más severas que en los países con mejor desempeño, como el

Figura 2.7. Existe margen para un marco regulatorio más favorable a la competencia.

A. Regulación del mercado de productos de la OCDE, indicador general

País	2023	2019
ARG	0.80	0.80
AUS	0.85	0.85
BEL	0.90	0.90
BRA	0.90	0.90
CAN	0.90	0.90
CHL	1.00	1.00
CHE	1.05	1.05
COR	1.15	1.15
CZE	1.15	1.15
DEU	1.20	1.20
DNK	1.20	1.20
ESP	1.20	1.20
FRA	1.20	1.20
GRC	1.20	1.20
HUN	1.20	1.20
IDN	1.25	1.25
ITA	1.30	1.30
JPN	1.35	1.35
KOR	1.35	1.35
LVA	1.35	1.35
MEX	1.35	1.35
NLD	1.35	1.35
NOR	1.35	1.35
POL	1.35	1.35
ROU	1.35	1.35
SLO	1.35	1.35
SVK	1.35	1.35
SWE	1.35	1.35
TUR	1.35	1.35
USA	1.35	1.35
VEN	1.35	1.35
OCDE	1.35	1.35
MEX	1.35	1.35
ARG	1.35	1.35
AUS	1.35	1.35
BEL	1.35	1.35
BRA	1.35	1.35
CAN	1.35	1.35
CHL	1.35	1.35
CHE	1.35	1.35
COR	1.35	1.35
CZE	1.35	1.35
DEU	1.35	1.35
HUN	1.35	1.35
IDN	1.35	1.35
ITA	1.35	1.35
JPN	1.35	1.35
KOR	1.35	1.35
LVA	1.35	1.35
MEX	1.35	1.35
NLD	1.35	1.35
NOR	1.35	1.35
POL	1.35	1.35
ROU	1.35	1.35
SLO	1.35	1.35
SVK	1.35	1.35
SWE	1.35	1.35
TUR	1.35	1.35
USA	1.35	1.35
VEN	1.35	1.35
OCDE	1.35	1.35

B. Indicadores de nivel medio

Indicador	Japón	OCDE	5 mejores intérpretes
Distorsiones inducidas por la propiedad pública	1.70	1.20	0.30
Participación en las operaciones comerciales	1.90	1.10	0.40
Evaluación del impacto de las regulaciones	1.90	1.90	0.80
Carga administrativa y regulatoria	2.90	1.80	1.00
Barreras en los sectores de servicios y redes	1.10	1.70	0.90
Barreras al comercio y la inversión	0.20	0.50	0.30

C. Indicadores de bajo nivel seleccionados

Indicador	Japón	OCDE	5 mejores intérpretes
Evaluación del impacto en la competencia	0.20	0.90	0.10
Interacción con las partes interesadas	3.40	2.70	1.00
Requisitos administrativos para LLC y POE	3.30	1.80	0.90
Comunicación y simplificación de la carga administrativa y regulatoria	2.50	1.60	0.50
Barreras de entrada en los sectores de servicios	0.70	1.70	0.60
Barreras de entrada en los sectores de redes	1.50	1.50	0.90

Fuente: OCDE, base de datos de reglamentos sobre el mercado de productos.

2.2.1. Revisión de las engorrosas regulaciones empresariales

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA OCDE: JAPÓN 2026 © OCDE 2026

En general, según los indicadores PMR de la OCDE, la creación de una POE o una LLC implica cinco y nueve contactos directos, respectivamente, lo que supone entre dos y cuatro pasos adicionales respecto a la media de la OCDE.

Las continuas mejoras en la infraestructura digital y los servicios públicos están allanando gradualmente el camino para impulsar el emprendimiento. La reducción de las cargas administrativas y regulatorias iniciales ayuda a crear un enfoque más favorable para las empresas en otras áreas posteriores (Martins y Veiga, 2022[8]). Además, las regulaciones de entrada simplificadas pueden aliviar las barreras para las empresas establecidas que están experimentando una transformación de su modelo de negocio intersectorial. El gobierno habilitó, aunque bajo ciertas condiciones, el registro comercial totalmente en línea en 2020. En línea con los procedimientos en papel, los POE deben registrarse ante las autoridades fiscales a través del portal e-Tax, utilizando la tarjeta digital My Number como identificador. En cuanto a las corporaciones, las solicitudes se presentan a través del sistema de registro en línea del Ministerio de Justicia, utilizando autenticación electrónica basada en certificados.

El acceso digital a los servicios gubernamentales para las empresas se ha simplificado significativamente a través de la plataforma gBizID. Esta última consiste en un sistema común de autenticación digital, gestionado por la Agencia Digital, gBizID permite a las empresas conectarse de forma segura con los servicios gubernamentales mediante una cuenta única y autenticación de dos factores. Independientemente de su forma jurídica, una vez registradas, las empresas pueden utilizarlo para acceder a una amplia gama de servicios gubernamentales, incluyendo solicitudes de licencias y permisos específicos del sector, subvenciones, ayudas y otros programas de apoyo, así como para cumplir con los requisitos reglamentarios posteriores al registro.

La digitalización del cumplimiento normativo relacionado con el empleo (posterior al registro) es un paso clave para agilizar los trámites de entrada. Sin embargo, la interacción presencial con contrapartes institucionales o de terceros sigue siendo necesaria para registrar la dirección postal oficial, abrir una cuenta bancaria y depositar el capital inicial (para JSC y LLC). Las solicitudes de licencia electrónica no están disponibles en todos los sectores. Además, el progreso desigual entre las instituciones públicas sugiere que el uso de sellos físicos tradicionales (hanko) persiste en algunas autoridades locales con recursos limitados que carecen de la capacidad para adoptar sistemas totalmente digitalizados. La evidencia de encuestas sugiere que el uso continuado de sellos físicos por parte de las empresas se debe a las preferencias de los clientes y a una legislación que aún no se ha adaptado al uso de nuevos sistemas de autenticación electrónica (Bengo4, 2024[9]).

El gobierno también planea desarrollar un método de firma remota utilizando certificados electrónicos emitidos por la Autoridad de Certificación de Registro Comercial. Al crear un sistema a prueba de manipulaciones para almacenar los certificados electrónicos de los usuarios e integrarlo con gBizID, el nuevo servicio, que entrará en vigor a mediados de 2026 (Oficina del Gabinete, 2025[10]), permitirá firmas electrónicas en múltiples dispositivos y eliminará la necesidad de que los usuarios almacenen los certificados localmente. Si bien no modifica los requisitos de revisión legal, esta reforma podría reducir las demoras previas a la presentación de documentos. La adopción prevista de un nuevo estándar de cifrado para 2030 mejorará aún más la seguridad de los certificados electrónicos.

Es necesario reforzar la disponibilidad y la adopción de procedimientos administrativos digitalizados para las empresas. Aproximadamente 250 servicios gubernamentales de autoridades nacionales y locales son accesibles a través de gBizID. De estos, alrededor del 68% eran gobiernos locales. Dado que Japón tiene 1788 gobiernos locales, esto sugiere un margen para expandir su adopción. GBizID ha emitido aproximadamente 1,45 millones de cuentas hasta marzo de 2026, con solo alrededor del 33% de las corporaciones de Japón registradas, muy por debajo del objetivo del 80% para 2030 (Oficina del Gabinete, 2025[10]). Los registros mensuales tendrían que crecer a más del doble del aumento mensual promedio registrado en el año hasta noviembre de 2025 para cumplir con ese objetivo. La tendencia en las cuentas "prime" de gBizID, las únicas que funcionan como una credencial de autenticación completa, también muestra margen de mejora. Si bien estas cuentas crecieron un 27% desde junio de 2024, alrededor de una cuarta parte de las cuentas prime existentes estaban en manos de empresas unipersonales, que representan alrededor del 44% de todas las empresas.

El tiempo necesario para iniciar un negocio también depende de la actividad prevista, especialmente si implica licencias y permisos complejos. La normativa vigente no establece plazos específicos para que los organismos públicos pertinentes completen los trámites necesarios. Si bien los costes administrativos iniciales son bajos, los procesos regulatorios prolongados o con múltiples etapas pueden implicar una considerable cantidad de papeleo que requiere tiempo y recursos adicionales, lo que aumenta la incertidumbre y reduce la eficacia de la planificación. Los elevados costes regulatorios asociados pueden tener efectos negativos o en forma de U invertida sobre el emprendimiento (Audretsch et al., 2024[11]).

Además, la evidencia de 17 países europeos sugiere que reducir el tiempo necesario para cumplir con

Las cargas administrativas tienen un mayor impacto en la entrada de empresas que la reducción de los costos financieros de las regulaciones existentes (Tomasi, Pieri y Cecco, 2023[12]). Por lo tanto, adoptar el principio de «el silencio es consentimiento» en las regulaciones de entrada, como en Francia y los Países Bajos, podría impulsar el espíritu empresarial.

La reducción de la carga administrativa en la formación de empresas mediante una mayor digitalización dependerá de:

Inversiones complementarias. La integración digital fluida entre los servicios gubernamentales será esencial para la plena aplicación del principio de "una sola vez", según el cual las empresas no tendrán que volver a presentar información ya compartida con otras autoridades públicas, como en Austria y Noruega. En este contexto, avanzar hacia una única plataforma digital para la mayoría de los trámites empresariales, como en Dinamarca y Grecia, podría consolidar aún más el acceso de los usuarios y mejorar la transparencia en los requisitos procesales.

2.2.2. Reducción de las distorsiones derivadas de la intervención estatal y las regulaciones sectoriales.

El índice PMR agregado relativamente alto de Japón refleja en parte las distorsiones derivadas de la propiedad pública y la participación estatal en las operaciones comerciales. Tras las privatizaciones de empresas estatales clave, la proporción de la capitalización bursátil en manos del Estado se redujo a alrededor del 3 % en 2023 (OCDE, 2024[13]).

No obstante, unos marcos de gobernanza sólidos para las empresas estatales son clave para las empresas privadas y los inversores en sectores regulados, ya que demuestran la credibilidad del compromiso del gobierno con la competencia leal.

Las empresas estatales japonesas, que operan principalmente en el sector servicios, no gozan de un trato fiscal ni regulatorio más favorable que sus competidores privados, ni están sujetas a normas específicas de insolvencia (Ministerio de Finanzas, 2025[14]). Aun así, la relativa laxitud de los estándares de gobernanza de las empresas estatales reduce la transparencia y la rendición de cuentas. A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, no existe ningún requisito específico para que los consejos de administración de las empresas estatales incluyan miembros independientes ni para que sus estados financieros sean sometidos a auditoría externa, como sí deben hacerlo las empresas cotizadas y las privadas según las normas de gobierno corporativo (véase más adelante).

También se carece de una divulgación centralizada de los paquetes de remuneración de los miembros del consejo de administración y los directivos de las empresas estatales, así como de un marco estratégico que defina la justificación de la tenencia de derechos de propiedad en cada empresa estatal comercial (OCDE, 2022[15]). Una mejor armonización de las normativas nacionales sobre divulgación y transparencia de las empresas estatales con las Directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las empresas estatales mejoraría la rendición de cuentas (OCDE, 2020[16]). Estas medidas enviarían señales positivas a los inversores extranjeros (véase más adelante).

También hay margen de mejora en la postura regulatoria de Japón sobre los servicios digitales (Figura 2.8, Panel A). Actualmente, existe una limitada capacidad de impugnación y una falta de transparencia en las normas que rigen el uso y el acceso a los datos. El enfoque de las autoridades hacia los mercados digitales se basa principalmente en un proceso de "monitoreo y revisión" que se lleva a cabo en un marco de corregulación (METI, 2024[17]). Los grandes proveedores de servicios ajustan voluntariamente sus servicios y procesos de acuerdo con las recomendaciones gubernamentales, basándose en evaluaciones de su plataforma. Sin embargo, estas evaluaciones se basan principalmente en informes de expertos en monitoreo, comentarios de usuarios empresariales de la plataforma y un informe presentado por el proveedor.

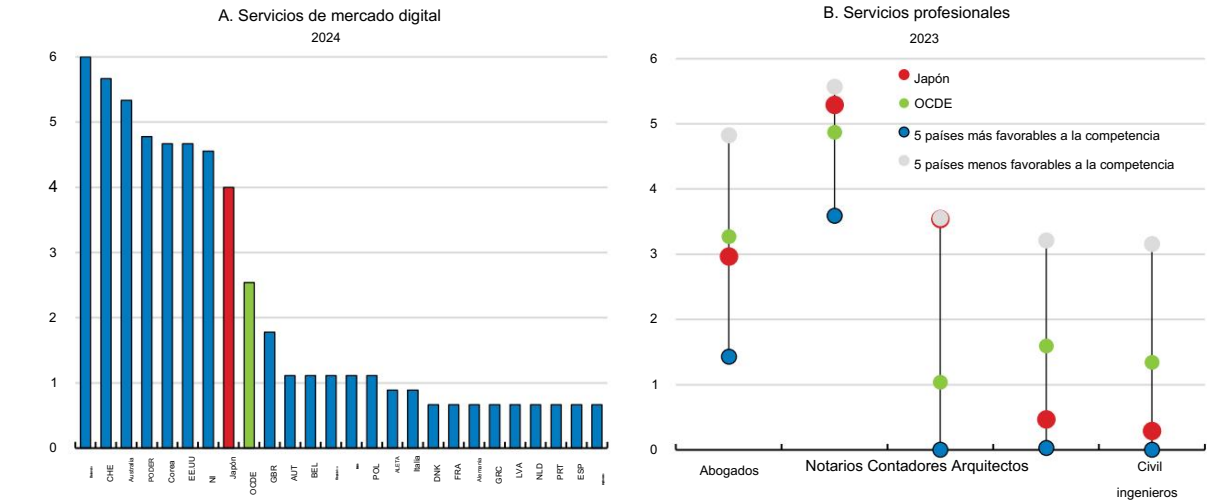
La Ley de Competencia de Software Móvil (MSCA) de 2024 podría contribuir a mejorar la competencia en los mercados digitales. Esta ley impone obligaciones previas a las empresas que ofrecen software y servicios para teléfonos inteligentes y que ostentan una posición de mercado significativa. Las nuevas normas están respaldadas por multas sustanciales en caso de incumplimiento. Las obligaciones obligan a las empresas a mejorar la interoperabilidad entre sistemas operativos y a facilitar el acceso de los clientes a tiendas de aplicaciones alternativas o sistemas de pago integrados. También se simplificará el cambio de navegadores predeterminados, y las empresas designadas deberán publicar términos y condiciones más claros. Esto debería ir acompañado de medidas que garanticen a los usuarios empresariales un acceso equitativo a sus datos. Una mayor portabilidad de datos permitirá a los usuarios transferir sus datos a proveedores alternativos. El impacto final de la MSCA en la reducción de las barreras de entrada y el fomento de la innovación dependerá de requisitos y directrices de cumplimiento más precisos (ITIF, 2025[18]), evaluaciones periódicas y una aplicación rigurosa de la ley. De tener éxito, este enfoque podría extenderse a otros mercados digitales clave.

Japón también se beneficiaría de una mayor relajación de los obstáculos regulatorios a la competencia en los sectores de servicios, donde los requisitos para los contadores, por ejemplo, son más estrictos que el promedio de la OCDE (Figura 2.8, Panel B).

Si bien solo los contadores públicos certificados pueden realizar auditorías legales, los contadores públicos certificados en impuestos poseen

derechos exclusivos para representar o asistir a empresas ante las autoridades tributarias. Además, las firmas de contadores tributarios —la categoría de contadores autorizados utilizada como referencia para Japón en la base de datos de la OCDE sobre la regulación del mercado de productos— deben operar bajo una forma jurídica que implica responsabilidad personal ilimitada para sus miembros (una característica que solo comparte México en la OCDE), excluyen a los contadores no autorizados de cualquier derecho de propiedad o voto, y están sujetas a limitaciones en publicidad y marketing. Estos requisitos frenan la competencia y reducen los incentivos para innovar, mejorar la calidad del servicio y aliviar los costos (OCDE, 2024[19]). Permitir que los contadores tributarios autorizados operen bajo estructuras de responsabilidad limitada, al tiempo que se flexibilizan las restricciones a las prácticas multidisciplinarias, es decir, las propiedades conjuntas integradas entre profesionales que prestan servicios en campos complementarios (como contadores, auditores y abogados), junto con la participación en las ganancias, armonizaría mejor el marco jurídico de Japón con los estándares de la OCDE.

Figura 2.8. La postura regulatoria restringe la competencia en los servicios digitales, legales y contables.



Nota: Basado en la legislación vigente a principios de 2024. El indicador varía de cero (menos estricto) a 6 (más estricto). Fuente: OCDE, base de datos de reglamentos sobre el mercado de productos.

StatLink 2<https://stat.link/gtjahx>

2.2.3. Reformar aún más el gobierno corporativo

La baja productividad también refleja una falta de dinamismo empresarial. Una gobernanza corporativa deficiente desalienta a los inversores extranjeros y reduce la innovación y la asunción de riesgos. Una mejor gobernanza corporativa tiene el potencial de mejorar el acceso de las empresas al capital, el seguimiento de su desempeño y la asignación de capital, lo que conduce a un uso más eficaz de la I+D y el capital humano (OCDE, 2023[20]). Esto impulsaría la productividad al facilitar la reducción de las actividades de baja productividad y la reasignación de recursos a las de alta productividad.

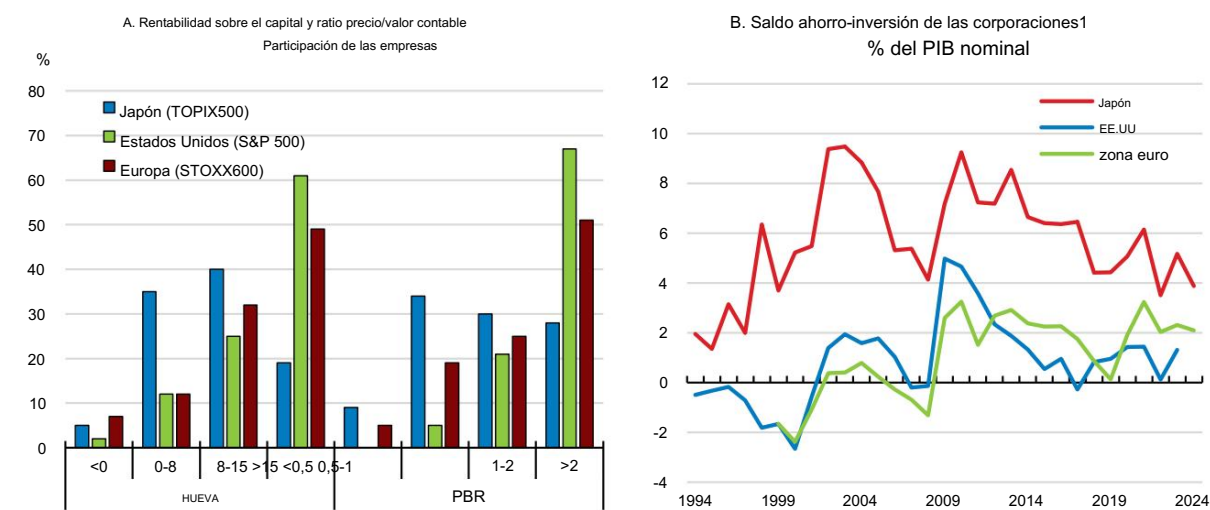
Japón mejoró su marco de gobierno corporativo con el Código de Administración de 2014 para inversores institucionales, para promover el crecimiento sostenible de las empresas a través de la inversión responsable y el diálogo con las partes interesadas, y el Código de Gobierno Corporativo de 2015 para impulsar el valor corporativo a medio y largo plazo de las empresas cotizadas, bajo el principio de "cumplir o explicar". Estos códigos se han revisado varias veces para mejorar su eficacia. El gobierno también lanzó los Principios para Propietarios de Activos en agosto de 2024 para alentar a los propietarios de activos, incluidos los fondos de pensiones y las compañías de seguros, a cumplir con sus deberes fiduciarios, como llevar a cabo actividades de administración y firmar los Principios internacionales (voluntarios) para la Inversión Responsable (Secretaría del Gabinete, 2024[21]). La Bolsa de Valores de Japón (JPX) también mejoró la divulgación e incentivó a algunas empresas a aumentar su valor corporativo.

El impacto del nuevo marco en el desempeño y la productividad de las empresas no se ha materializado por completo. Si bien el rendimiento promedio sobre el capital (ROE) de las empresas cotizadas ha mejorado, se ha estancado en torno al 9%, apenas superando el rendimiento mínimo de referencia del 8% comúnmente esperado por los inversores extranjeros (METI, 2014[22]), y muy por debajo del de Estados Unidos (alrededor del 18%). Alrededor del 40% de las empresas del TOPIX 500 reportaron un ROE inferior al 8% en 2022, lo que implica rendimientos por debajo de su costo estimado de capital, y aproximadamente el 43% tenía una relación precio-valor contable (PBR) inferior a 1, lo que indica

que los accionistas ganarían más si la empresa se liquidara que si se mantuviera en funcionamiento (Figura 2.9, Panel A). El persistente y elevado saldo de ahorro-inversión corporativa de Japón, en relación con Estados Unidos y la zona euro, apunta a una inversión interna moderada por parte de las empresas japonesas (Panel B). De hecho, las elevadas reservas de efectivo de las empresas, que representan el 57% del PIB en 2024, son considerablemente superiores a las de Estados Unidos (16,6%) (Cabinet Office, 2025[23]). En lugar de invertir y asumir riesgos para impulsar la innovación, la dirección de muchas empresas sigue manteniendo el statu quo.

Hasta cierto punto, el impacto limitado de las reformas en la rentabilidad refleja el hecho de que el alto cumplimiento a menudo proviene de las respuestas formalistas de las empresas (Buchanan y Deakin, 2024[24]), con empresas que tienden a centrarse en cumplir las recomendaciones mínimas en lugar de mejorar la asignación de recursos. Varias empresas reclasificaron parte de sus participaciones estratégicas como participaciones mantenidas con fines de "inversión pura", es decir, con la única intención de aumentar los rendimientos, pero a menudo sin justificación suficiente. En algunos casos, las empresas no habían acordado un cronograma con la empresa emisora para la venta ni habían desarrollado planes de venta concretos, a pesar de haber obtenido el acuerdo de la empresa emisora, lo que resultó en cambios en gran medida superficiales (FSA, 2024[25]). Para aumentar la transparencia en el proceso de reclasificación, en 2025, la FSA adoptó regulaciones que exigen a las empresas revelar cualquier acción reclasificada de "estratégica" a "inversión pura" en los últimos cinco ejercicios fiscales, lo cual es positivo. Las empresas también están obligadas a proporcionar razones para el cambio y la política subsiguiente sobre la tenencia o venta de esas acciones (FSA, 2024[26]).

Figura 2.9. Existe margen para mejorar la rentabilidad de la empresa y aumentar la inversión nacional.



Nota: 1. Préstamos netos (+) / endeudamiento neto (-).

Fuente: Japan Exchange Group; Base de datos de cuentas nacionales de la OCDE; Oficina del Gabinete; y cálculos de la OCDE.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/y2k8er>

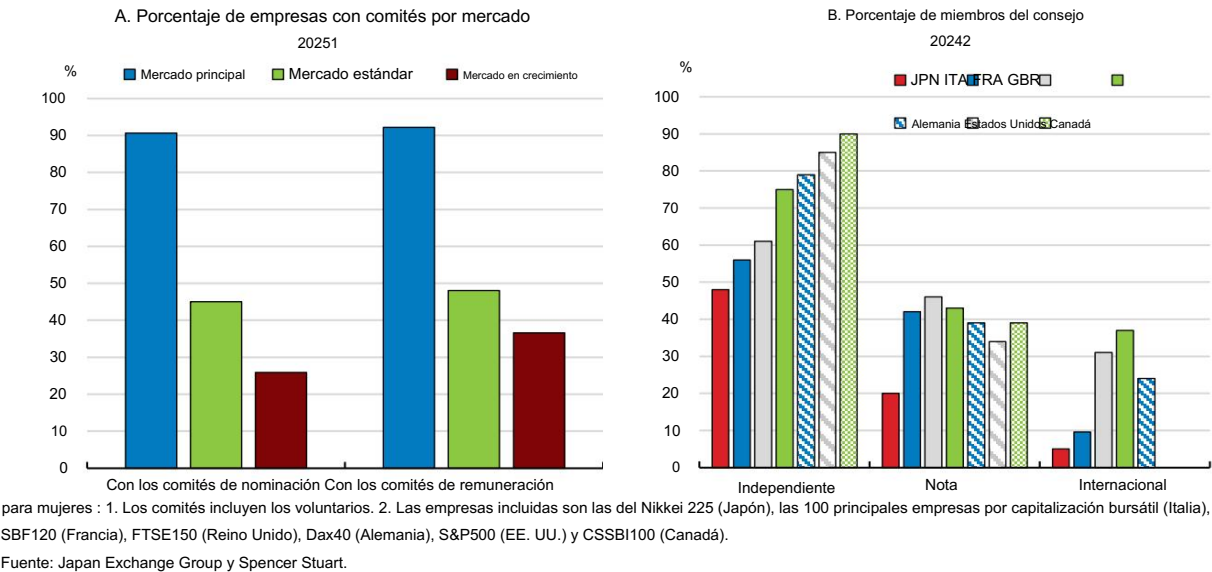
Se necesitan medidas más amplias para acelerar la desinversión de participaciones cruzadas estratégicas, que pueden reducir la apertura del mercado a los inversores extranjeros, debilitar la disciplina de gestión externa y disminuir la rentabilidad (Miyajima y Saito, 2023[27]). Una posibilidad es alentar a las empresas con exposiciones que superen un cierto umbral (como porcentaje de los activos netos) a establecer comités internos de directores y auditores independientes. Dichos comités podrían encargarse de revisar las participaciones existentes y formular una estrategia de desinversión a medio plazo con objetivos claros, complementada con un plan para el uso productivo de los ingresos que se extienda más allá del período de revisión. De manera más general, promover la alineación voluntaria de los inversores estratégicos con los principios de

El Código de Buen Gobierno Corporativo, que busca orientar el comportamiento de los inversores hacia las empresas cotizadas en apoyo de la creación de valor corporativo a largo plazo, impulsaría una gestión de activos más responsable. La difusión periódica de buenos ejemplos de transparencia en relación con las participaciones estratégicas, junto con los principales desafíos asociados, mejoraría aún más la calidad del diálogo entre inversores y empresas cotizadas.

Mejorar la composición y la calidad de los consejos de administración también es esencial para impulsar la eficacia de las reformas corporativas. Los consejos de administración en Japón están pasando gradualmente de un modelo de gestión a un modelo de supervisión. modelo, con comités de nominación y remuneración cada vez más comunes, especialmente en el Primer Ministro.

Mercado (Figura 2.10, Panel A). La política actual recomienda que al menos un tercio de los directores sean independientes para las empresas en el JPX Prime Market. Muchos países de la OCDE recomiendan o exigen al menos un 50 % de miembros independientes en el consejo de administración de las empresas cotizadas (OCDE, 2025[28]). La proporción de empresas con dicha mayoría se mantiene en torno al 26 % en el Prime Market y al 7 % en el Standard Market, aunque esta cifra está aumentando. La diversidad también es limitada entre los miembros del consejo de administración japoneses en términos de género, nacionalidad (Panel B) y edad. A pesar de la escasez de candidatos a directores externos, solo el 8 % y el 2 % de las empresas del Prime Market y del Standard Market, respectivamente, tienen planes de sucesión para sus miembros externos del consejo de administración (METI, 2025[29]). Estos miembros externos se superponen en gran medida con los directores independientes, es decir, directores que no están vinculados a la empresa por relaciones comerciales o participaciones accionarias significativas, en las grandes empresas cotizadas. Finalmente, la separación de las funciones de director ejecutivo y presidente del consejo de administración es poco común, ya que solo el 3 % de las empresas que cotizan en la Bolsa de Tokio cuentan con un presidente del consejo externo (Bolsa de Tokio, 2025[30]). Más de tres cuartas partes de los países de la OCDE exigen o fomentan dicha separación (OCDE, 2025[28]).

Figura 2.10. Se debe mejorar la calidad y la composición de los consejos de administración de las empresas.



Enlace estadístico 2<https://stat.link/x7qe2k>

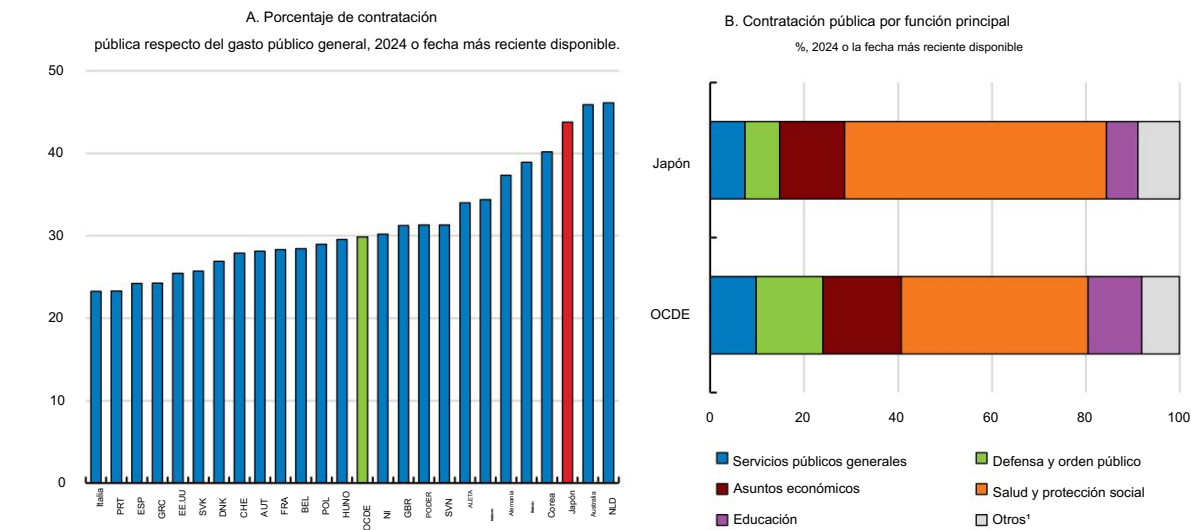
2.2.4. Aprovechamiento eficaz de la contratación pública

Los procesos de contratación eficaces pueden estimular la innovación, fomentar la eficiencia de los proveedores mediante la promoción de la transparencia y la competencia (Bleda y Chicot, 2020[31]) e impulsar la productividad empresarial y agregada (Hebous y Zimmermann, 2016[32]; Yuan, Ortega-Argiles y Uyarra, 2025[33]). Además de garantizar la eficiencia del gasto público, los sistemas de contratación pueden contribuir a respaldar las iniciativas de reforma. Esto implica mejorar la profesionalización de las compras gubernamentales (mediante el desarrollo de estructuras y procesos flexibles que alivien las limitaciones operativas), potenciar la competencia —incluso garantizando que las PYME tengan un acceso equitativo a los contratos gubernamentales—, al tiempo que se preserve la rendición de cuentas y se limita el margen para la mala gestión y el fraude.

Como signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio de 1994, Japón se compromete a una contratación justa, no discriminatoria y transparente. El ACP abarca los ministerios centrales, las agencias, las autoridades subcentrales designadas y las empresas públicas. Requiere la presentación de informes anuales sobre los contratos que superen determinados umbrales, los cuales varían según el tipo de contratación y el nivel de autoridad. Para fomentar la participación extranjera, el gobierno ha reducido voluntariamente ciertos umbrales para las empresas públicas, ha ampliado los plazos de presentación de ofertas y ha extendido los avisos en inglés. Al mismo tiempo, las autoridades han mejorado el acceso a licitaciones de alta tecnología en campos como las supercomputadoras, las TIC y los equipos médicos (Centro UE-Japón, 2025[34]). La contratación fuera del ACP se rige por la legislación nacional.

El mercado de la contratación pública es considerable. Según datos comparables internacionalmente, el gasto público en contratación (excluidas las empresas públicas) representó el 16,8 % del PIB en 2024, por encima del promedio de la OCDE del 13,1 %. Esto supuso el 44 % del gasto público total (Figura 2.11, Panel A). El gasto en contratación pública también se concentra por función, con un 56 % destinado a la salud y la protección social, cifra sustancialmente superior al promedio de la OCDE del 40 % (Panel B).

Figura 2.11. El gasto en contratación pública es elevado y está concentrado por función.



Nota: 1. Gasto en protección ambiental, vivienda y servicios comunitarios, y recreación, cultura y religión.
Fuente: OCDE (2025), Panorama del Gobierno 2025, OCDE Publishing, París; y OCDE, base de datos de Gasto Público por Función (COFOG).

StatLink 2<https://stat.link/0yzq75>

El Consejo de Promoción de la Reforma Administrativa, organismo que supervisa las reformas y formula recomendaciones, difunde semestralmente datos agregados sobre contratación pública, desglosados por nivel de entidad contratante y tipo de enfoque contractual. Sin embargo, estos datos solo abarcan la contratación pública nacional, es decir, los contratos de los ministerios tanto a nivel central (sede) como subcentral (oficinas locales), y excluyen las administraciones locales y las corporaciones públicas (incluso si están designadas por el GPA), así como los contratos voluntarios de menor cuantía. En consecuencia, el Consejo cuantificó el valor total de los contratos de contratación pública nacional en aproximadamente 15 billones de yenes en el año fiscal 2023 (ARPC, 2024[35]), de los cuales alrededor de un tercio refleja un aumento en las licitaciones para el Programa de Desarrollo de la Defensa. Esta cifra representa solo una fracción del gasto de 102 billones de yenes estimado a partir de los datos de las cuentas nacionales, lo que sugiere la necesidad de mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos sobre contratación pública.

En el año fiscal 2023, más del 60 % de las compras gubernamentales se realizaron mediante licitaciones competitivas, aunque aproximadamente un tercio atrajo a un solo postor. En otros casos, los contratos se adjudicaron directamente fuera de cualquier competencia (17 %) o después de intercambios informales de cotizaciones con un pequeño número de contratistas potenciales (20 %) (ARPC, 2024[35]). Sin embargo, bajo el esquema de pedidos de prueba de Japón, los contratos discrecionales también pueden adjudicarse a pymes y empresas emergentes innovadoras sin historial previo de adquisiciones, lo que les ayuda a construir el historial necesario para competir en futuras licitaciones abiertas. La evidencia anecdótica apunta a una alta dependencia de las ofertas de precio más bajo en los gobiernos locales. Las adjudicaciones basadas únicamente en el precio pueden limitar la innovación, mientras que los enfoques multicriterio incentivan a los proveedores a mejorar las prácticas, lo que apoya mayores ganancias de productividad. Sin embargo, esto generalmente se produce a expensas de mayores costos fiscales (OCDE, 2025[36]). Por lo tanto, se debe alentar a las entidades contratantes a reservar el criterio de precio más bajo para bienes y servicios bien estandarizados (OCDE, 2025[37]).

En términos de valor, la proporción de contratos no competitivos ha aumentado notablemente hasta el 62% en el año fiscal 2023, lo que refleja en gran medida los recientes aumentos en el gasto en defensa (Tabla 2.1). Excluyendo dichos elementos relacionados con la defensa, la proporción de procedimientos no competitivos se reduce al 34%. Hasta cierto punto, la sucesión de recientes crisis económicas complica la interpretación de estas estadísticas. Dicho esto, la relevancia decreciente de los contratos adjudicados en adquisiciones que

Las ofertas múltiples inducidas, junto con tasas de ofertas únicas solo ligeramente inferiores a las del año fiscal 2019, generan preocupación sobre las barreras estructurales a la competencia abierta. Estas preocupaciones se ven agravadas por el reciente proyecto de ley del Gabinete destinado a fortalecer las reservas de contratación pública para PYME. Al aumentar la probabilidad de un trato preferencial para las empresas nacionales en los mercados de contratación locales, tales medidas, si no se diseñan cuidadosamente, podrían restringir aún más la competencia, en particular para los inversores extranjeros. Aunque formalmente resultan de procedimientos competitivos, cuando no están relacionadas con excepciones legales (por ejemplo, derechos de patente exclusivos, urgencia o experiencia técnica única), las ofertas únicas recurrentes podrían crear distorsiones en términos de concentración de mercado y precios más altos (Titl, 2023[38]). Los datos de las licitaciones de obras públicas en la prefectura de Ehime del período 2014-22 sugieren que cada licitador que exceda el número medio de participantes efectivos redujo la relación del precio del contrato en aproximadamente un 1 % (Nishikawa, 2025[39]).

El desarrollo de plataformas electrónicas ha mejorado el ecosistema de contratación pública, pero persisten algunas deficiencias. Las interfaces digitales unificadas y los portales de contratación electrónica consolidados (como Chotatsu Portal y CALS/EC) han simplificado la presentación de avisos de licitación y documentación. Esto ha dado lugar, gradualmente, a una mayor participación de los proveedores, gracias a un acceso más sencillo a la información, una mayor claridad en los procedimientos, una menor carga administrativa y una supervisión más eficaz. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo no se coordinan entre las distintas jurisdicciones, lo que da lugar a iniciativas locales de contratación electrónica con enfoques distintos en cuanto a definiciones y marcos de supervisión. Tampoco existe un sistema de cualificación común para las empresas que deseen participar en proyectos de licitación competitiva entre administraciones locales y corporaciones públicas especiales, lo que implica trámites de registro engorrosos. Esto puede limitar la competencia, ya que los posibles licitadores de una jurisdicción deben invertir tiempo y esfuerzo en comprender la normativa de otra jurisdicción.

Tabla 2.1. Los procedimientos no competitivos representan una parte sustancial de la contratación pública.

Valor de las compras de las autoridades centrales, % del total anual

Año fiscal	Múltiples licitadores, contratos competitivos	Licitadores únicos, contratos competitivos	Contratos no competitivos	Año fiscal	Múltiple Licitadores únicos, licitadores, contratos competitivos	Contratos no competitivos	
	gobierno nacional				Gobierno nacional, excluido el Ministerio de Defensa.		
2019	36,5	17.5	46.0	2019	48.9	23.9	27.2
2020	36.4	16.4	47.2	2020	45.6	21.2	33.2
2021	35.2	15.1	49.6	2021	46.0	20.2	33.8
2022	36.6	16.7	46,7	2022	47.2	21.5	31.3
2023	24.3	13.9	61.8	2023	43.4	22.7	33.9

Nota: La cobertura se limita a las adquisiciones realizadas por ministerios y organismos nacionales a nivel central y subcentral, excluyendo las administraciones locales y las corporaciones públicas (incluso si están designadas por la GPA) y los contratos voluntarios de menor cuantía.

Fuente: Consejo para la Promoción de la Reforma Administrativa (2024), Resultados de la inspección de los esfuerzos de mejora de las adquisiciones del año fiscal 2023, Oficina del Gabinete.

Las Directrices del Estándar para la Promoción del Gobierno Digital recomiendan que los datos operativos brutos de contratación se entreguen en un formato legible por máquina que permita el análisis cruzado (Digital Agency, 2025[40]). Sin embargo, no existe una autoridad centralizada responsable de establecer políticas generales de contratación ni de garantizar una supervisión armonizada entre los ministerios. Las prefecturas, los municipios y las empresas públicas gestionan sus procesos de contratación de forma autónoma, bajo diferentes procedimientos legales, a menudo con sus propios requisitos de información (OMC, 2023[41]). En los niveles descentralizados, los datos sobre las diferentes fases del ciclo de contratación suelen estar dispersos en distintas plataformas, lo que puede complicar los procesos de planificación (Hirayama y Maeda, 2024[42]).

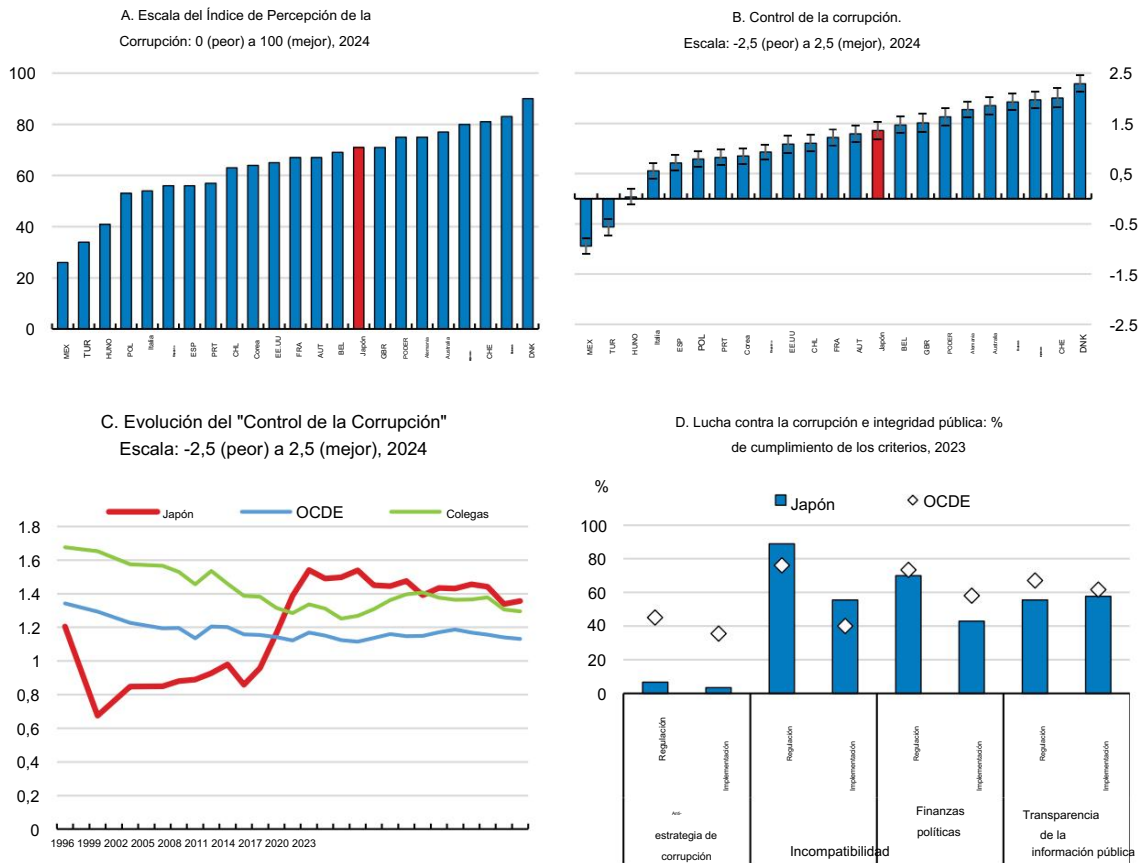
Esta fragmentación reduce la transparencia general y dificulta la generación de indicadores agregados fiables sobre el desempeño de las adquisiciones. Esto debilita la capacidad de aprovechar las adquisiciones públicas para alcanzar objetivos estratégicos más amplios o mejorar el control del gasto público, y tiende a generar mayores costos operativos y de infraestructura. Por lo tanto, se requiere una mayor integración y estandarización, por ejemplo, mediante plataformas digitales compartidas y un marco común de informes y seguimiento en todos los niveles de gobierno. Para respaldar este proceso, un objetivo fundamental debería ser la creación de un conjunto de indicadores clave de adquisiciones a nivel macro, como el número y el valor de los contratos adjudicados por categoría de gasto, tipo de autoridad contratante, tipo de contrato, número de licitadores y criterios de adjudicación. El marco podría basarse en el portal Chotatsu existente y extenderse gradualmente a las autoridades descentralizadas de forma colaborativa.

2.2.5. Reforzar la integridad para lograr la igualdad de condiciones.

Un alto nivel de integridad en el gobierno puede impulsar la eficiencia del sector público y el crecimiento de la productividad. La gobernanza responsable reduce el despilfarro y mejora la eficacia de las políticas. Una mayor transparencia podría desempeñar un papel fundamental en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas, que sigue siendo relativamente baja en Japón según encuestas internacionales (Edelman, 2025[43]). Sin embargo, la percepción de la corrupción, así como la de la capacidad de las autoridades para controlarla, es mejor que el promedio de la OCDE (Figura 2.12, Paneles AC).

Japón cuenta con normas relativamente estrictas en materia de conflictos de intereses en el sector público, y sus leyes de ética en la función pública están bien establecidas. La transparencia de la información pública se ajusta en gran medida a las normas de la OCDE, si bien el marco regulatorio para la financiación política se reforzó en diciembre de 2024 (Panel D). La adopción de normas centralizadas y armonizadas de control interno y auditoría, en lugar de delegar responsabilidades a ministerios individuales como en el sistema actual, podría fortalecer la gestión del riesgo de corrupción. La legislación que regula las actividades de cabildeo también es insuficiente. La introducción de un requisito para que los funcionarios públicos divulguen información sobre su interacción con los grupos de presión a través de registros públicos, como en la mayoría de los países de la OCDE (OCDE, 2021[44]), impulsaría la transparencia.

Figura 2.12. Los niveles de corrupción percibida siguen siendo moderados.



Nota: El panel B muestra la estimación puntual y el margen de error.
Fuente: Panel A: Transparencia Internacional; Paneles B y C: Banco Mundial, Indicadores Mundiales de Gobernanza; Panel D: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

StatLink 2<https://stat.link/k3vctm>

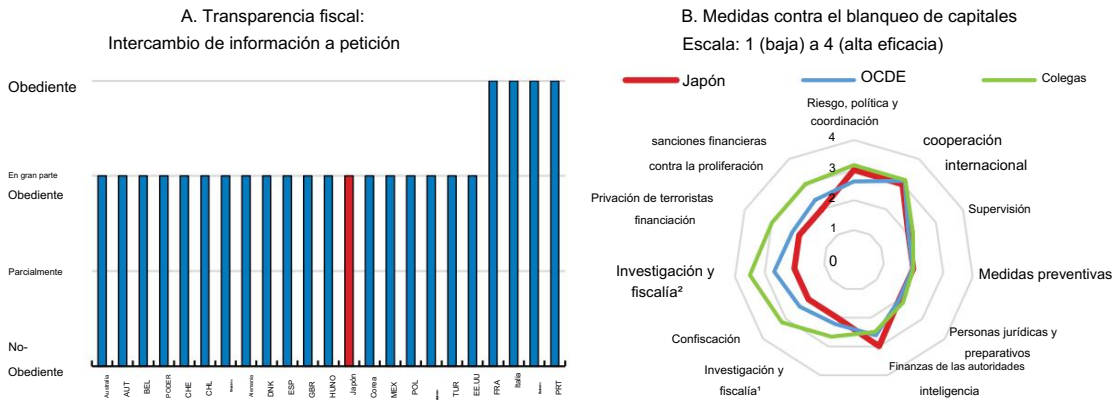
Las nuevas y mejoradas garantías legales para los denunciantes pueden allanar el camino para una aplicación más eficaz de la ley anticorrupción. Las revisiones a la Ley de Protección de Denunciantes en junio de 2025 ampliaron la cobertura a los trabajadores independientes, incluso hasta doce meses después de la terminación de sus contratos, introdujeron disposiciones que permiten inspecciones in situ, reforzaron las multas por conductas de represalia, al tiempo que trasladaron la carga de la prueba a los empleadores.

demostrar que cualquier despido o medida disciplinaria dentro del año posterior a la denuncia no es una represalia (Baker McKenzie, 2025[45]). La reforma de 2025 no modificó el umbral de tamaño de la empresa para el requisito de establecer un sistema interno de denuncia de irregularidades, que se activa con más de 300 empleados, pero introdujo sanciones penales por incumplimiento de la obligación de designar personal para gestionar las denuncias.

Japón cumple en gran medida con las mejores prácticas de la OCDE en materia de intercambio de información con las autoridades fiscales (Figura 2.13, Panel A), y en 2024 se adoptó un Plan de Acción Nacional para combatir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la financiación de la proliferación. El plan mejoró la disuasión mediante normas más claras y sanciones más proporcionales, y señaló la necesidad de una mayor coordinación y digitalización para que las investigaciones y los enjuiciamientos sean más eficaces. El GAFI (2024[46]) destacó el progreso de Japón en el cumplimiento técnico en áreas como las sanciones financieras selectivas (incluida la congelación de activos) y la extensión de las obligaciones de debida diligencia a los proveedores de servicios profesionales. Aun así, persisten desafíos en la aplicación de la política contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), especialmente en lo que respecta a la investigación, el enjuiciamiento y el decomiso (Panel B).

La revisión de 2024 de las directrices de la Agencia de Servicios Financieros (FSA) sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) exigió a las instituciones financieras que reforzaran sus procesos de evaluación de riesgos, especialmente en lo que respecta a la debida diligencia continua con los clientes. En 2025, la supervisión de la AML se reforzó mediante la publicación de procedimientos generales para ayudar a las entidades supervisadas a validar la eficacia de su marco de AML/CFT para identificar, evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos emergentes (FSA, 2025[47]). Estas reformas, que son muy positivas, podrían ayudar a Japón a alinearse más estrechamente con los estándares internacionales (GAFI, 2024[46]), si bien el impacto final dependerá de una implementación oportuna y coherente.

Figura 2.13. La aplicación de las medidas contra el blanqueo de capitales podría mejorarse.



Nota: El panel A resume la evaluación general sobre el intercambio de información en la práctica a partir de las revisiones por pares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. Las revisiones por pares evalúan la capacidad de las jurisdicciones miembros para garantizar la transparencia de sus entidades y acuerdos legales y para cooperar con otras administraciones tributarias de conformidad con el estándar acordado internacionalmente. La figura muestra los resultados de la segunda ronda en curso cuando están disponibles; de lo contrario, se muestran los resultados de la primera ronda. El panel B muestra las calificaciones de las revisiones por pares del GAFI de cada miembro para evaluar los niveles de implementación de las Recomendaciones del GAFI. Las calificaciones reflejan el grado en que las medidas de un país son efectivas frente a 11 resultados inmediatos. "Investigación y enjuiciamiento^b" se refiere al lavado de dinero. "Investigación y enjuiciamiento^a" se refiere a la financiación del terrorismo.

Fuente: Cálculo propio de la Secretaría de la OCDE basado en los materiales del Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales; y OCDE, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

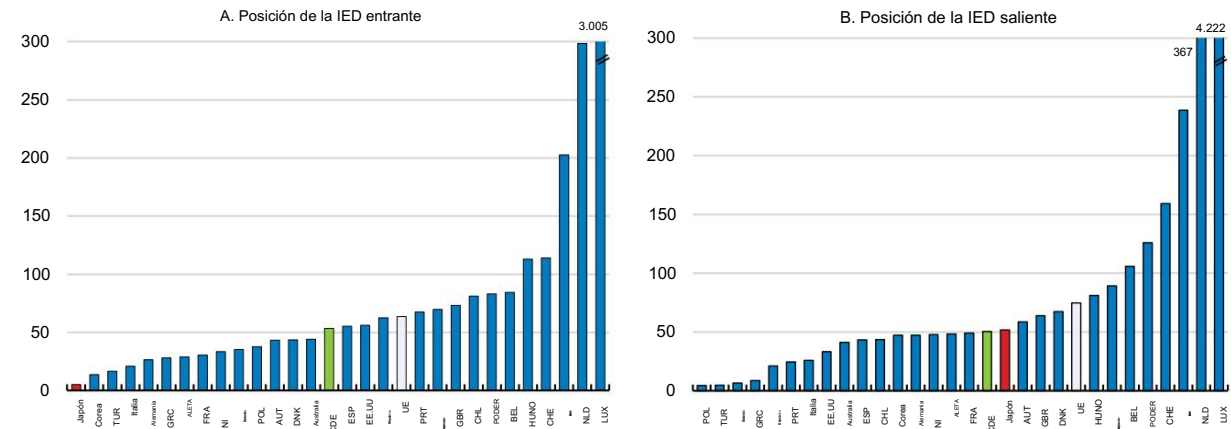
Enlace estadístico 2<https://stat.link/ipoe3u>

2.3. Fomentar la inversión extranjera directa para generar efectos indirectos en la productividad.

La inversión extranjera directa representó alrededor del 5,1 % del PIB en 2024 (Figura 2.14, Panel A), aproximadamente diez veces inferior al promedio de la OCDE y por debajo de la de otras economías del G7. Esto contrasta con la reciente tendencia de una percepción internacional cada vez más favorable del potencial del mercado japonés. Por ejemplo, el Índice de Confianza en la IED de 2025, basado en una encuesta a ejecutivos de empresas globales, identifica las perspectivas de inversión de Japón para los próximos tres años como las cuartas más atractivas, subiendo desde el séptimo puesto en 2024 (Kearney Foresight, 2025[48]).

Figura 2.14. La capacidad de Japón para atraer inversión extranjera sigue siendo baja.

% del PIB, 2024



Nota: Los datos se presentan sobre una base de contraparte inmediata y abarcan todas las unidades residentes, incluidas las Entidades de Propósito Especial (EPE), mientras que los promedios de la OCDE y la UE se refieren a unidades operativas residentes (que no son EPE).
Fuente: OCDE, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa (base de datos).

StatLink 2<https://stat.link/ejvkdf>

El gobierno ha intensificado sus esfuerzos para mejorar el atractivo de Japón para los inversores extranjeros con el Programa para la Promoción de la Inversión Extranjera Directa en Japón, publicado en junio de 2025. La Estrategia incluye medidas para simplificar las regulaciones y los procedimientos administrativos, reformar las políticas de inmigración para atraer y retener talento extranjero, proporcionar créditos fiscales y subsidios para la inversión innovadora y estratégica, y fortalecer el apoyo institucional y financiero a las iniciativas de IED de los gobiernos locales (Oficina del Gabinete, 2025[49]). El gobierno revisó su objetivo político clave de duplicar el stock de IED entrante de Japón (53 billones de yenes a finales de 2024) elevando el objetivo de 2030 a 120 billones de yenes y estableciendo una nueva meta de 150 billones de yenes a principios de la década de 2030. El stock de IED entrante aumentó a 61 billones de yenes a finales de 2025, medido en términos brutos.

El apoyo a la inversión priorizará los sectores estratégicos. El gobierno planea brindar apoyo a empresas extranjeras innovadoras que establezcan capacidad de producción en Japón, centrándose en sectores clave para la Transformación Digital (DX) y la Transformación Verde (GX), así como en las ciencias de la vida, con especial énfasis en los semiconductores y la IA. El apoyo podría adoptar la forma de Bonos de Transición Económica GX (Capítulo 1) o el acceso a programas de subsidios a largo plazo, como el programa de semiconductores de próxima generación. Si bien es ambicioso, el Programa para la promoción de la IED actualmente carece de detalles. La publicación temprana de las asignaciones de fondos adicionales previstas aumentaría la certeza de la inversión y permitiría evaluar la sostenibilidad fiscal del programa a mediano y largo plazo.

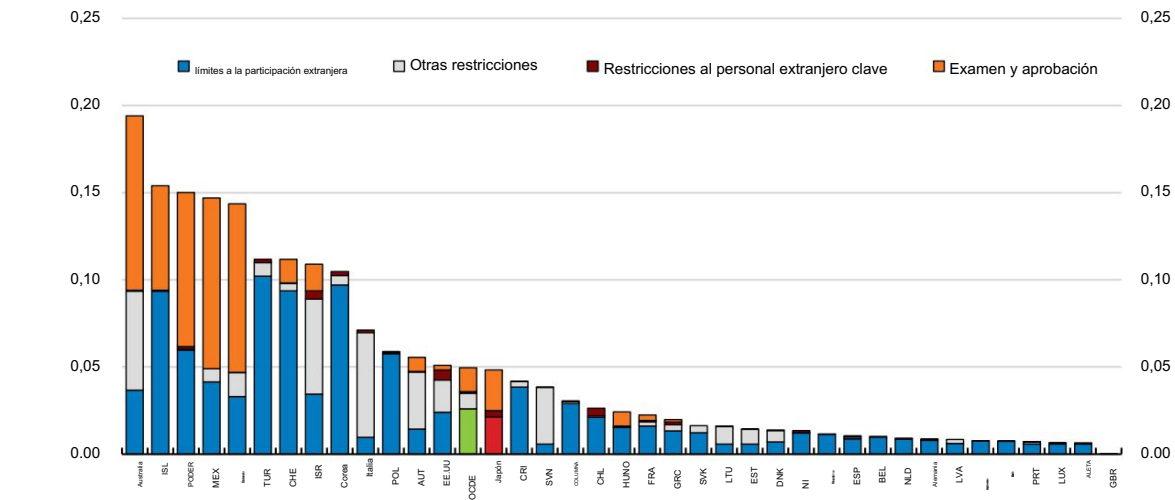
2.3.1. Eliminación de las barreras regulatorias restantes

Las regulaciones sobre la inversión extranjera directa (IED) entrante, medidas por el Índice de Restricción Regulatoria de la IED de la OCDE, son ligeramente menos estrictas que el promedio de la OCDE, pero más vinculantes que en las economías más abiertas de la OCDE, como el Reino Unido y los países nórdicos (Figura 2.15). Esto se debe principalmente a las restricciones comparativamente más severas a la movilidad del personal extranjero clave y al control de inversiones basado en el requisito de notificación previa para sectores empresariales específicos. Las restricciones más estrictas a la movilidad del personal extranjero clave se concentran en unos pocos sectores altamente regulados, como la radiodifusión y el transporte aéreo y marítimo.

En general, la nacionalidad no es un factor determinante en el derecho mercantil japonés. Los extranjeros pueden ser nombrados directores representantes de empresas japonesas y miembros del consejo de administración. Sin embargo, debido a preocupaciones de seguridad nacional, el nombramiento de directores extranjeros está efectivamente limitado por normas de licencia sectoriales que restringen la participación extranjera.

Figura 2.15. Las restricciones regulatorias a la inversión extranjera directa son bajas.

Índice de Restricción Regulatoria de la IED de la OCDE, de 0 (menos estricto) a 1 (más restrictivo), 2024



Fuente: OCDE, Índice de Restricciones Regulatorias a la Inversión Extranjera Directa (base de datos).

StatLink 2<https://stat.link/t1jfm2>

Solo las iniciativas de inversión extranjera directa (IED) en sectores empresariales específicos están sujetas a un control previo, pero el alcance de estos sectores se ha ampliado progresivamente (Recuadro 2.1). Conforme a la Ley de Divisas y Comercio Exterior revisada de 2019, la inversión extranjera directa en dichos sectores debe notificarse previamente. Las infracciones están sujetas a sanciones penales. El umbral para la notificación previa en las empresas cotizadas se redujo del 10% al 1% de los derechos de voto, lo cual es estricto desde una perspectiva internacional, aunque esto vino acompañado de la introducción de un sistema de exención de notificaciones previas.

Incluso antes de que comenzaran a notarse los efectos de las reformas en 2025, los procedimientos administrativos no parecían ser particularmente engorrosos, con una alta tasa de aprobación para las inversiones planificadas (Recuadro 2.1). Sin embargo, esta alta tasa de aprobación refleja en gran medida la práctica de las autoridades de interactuar de forma proactiva con los inversores extranjeros en una etapa temprana para mitigar los riesgos potenciales asociados con las IED y reducir la probabilidad de objeciones formales en etapas posteriores. Para mejorar la eficacia del sistema de control, el gobierno está fortaleciendo la capacidad de las Oficinas Financieras Locales —las sucursales regionales del Ministerio de Finanzas (MOF)— para recopilar y analizar información, identificar casos de incumplimiento y aplicar medidas correctivas con mayor rapidez (MOF, 2025[50]).

Fuera de los sectores empresariales designados, los inversores extranjeros solo están obligados a informar sobre las iniciativas de inversión extranjera directa (IED) entrantes dentro de los 45 días posteriores a la adquisición de al menos el 10 % de los derechos de voto en una empresa cotizada o cualquier participación en una empresa no cotizada. El cumplimiento implica la presentación de un informe posterior a la inversión al Banco de Japón, que generalmente consiste en un formulario estandarizado que solicita información sobre el inversor, la contraparte japonesa y la transacción, y que puede presentarse electrónicamente. La obligación de informar sobre la inversión posterior a la misma también se extiende a los casos en que los inversores extranjeros se acogen al régimen de exención de notificación previa. La función principal de los informes posteriores a la inversión es permitir al gobierno monitorear las tendencias de inversión extranjera y evaluar si se justifica una supervisión posterior. El incumplimiento de la presentación de dichos informes también está sujeto a sanciones penales.

Recuadro 2.1. Sistema de control de la inversión extranjera directa entrante en Japón

Según la Ley de Divisas y Comercio Exterior (FEFTA) revisada de 2019, los inversores extranjeros que adquieran al menos el 1 % de los derechos de voto en una empresa cotizada o cualquier participación en una empresa no cotizada —un umbral de control relativamente bajo según los estándares del G7 (Tabla 2.2)— deben presentar una notificación previa ante el Ministerio de Finanzas y los ministerios sectoriales pertinentes. Esto solo se aplica a la inversión extranjera en un conjunto de sectores empresariales designados que se consideran relevantes para garantizar la seguridad nacional, mantener el orden público y proteger la seguridad pública, como

Además de garantizar el buen funcionamiento de la economía, estos sectores incluyen semiconductores, suministro de energía y agua, transporte ferroviario y marítimo, radiodifusión, telecomunicaciones, ciberseguridad, vacunas y productos farmacéuticos, así como agricultura y pesca.

Tabla 2.2. Principales características de los sistemas de control de la inversión extranjera directa entrante en los países del G7

	Japón ¹	Estados Unidos ²	Reino Unido 25%	Francia	Alemania	Italia	Canadá ³
Umbrales (empresas cotizadas)	1%	Ninguno (sistema basado en derechos)		10%	10% / 20% 3% / 10%		33%
Sectores sujetos a revisión	Sectores designados	Actividades designadas (vinculado a tecnologías críticas sujetas a controles de exportación)	Sectores designados	Sectores designados	Sectores designados	Sectores designados	Todo
Número de exámenes previos obligatorios	2903	342	753	135	261	577	6

Nota: Los umbrales y demás información de la fila de preselección obligatoria corresponden a empresas cotizadas. El número de preselecciones obligatorias se basa en los datos publicados más recientes en el momento de redactar este informe (Japón, abril de 2024-marzo de 2025; Estados Unidos, Francia e Italia, enero-diciembre de 2023; Reino Unido y Canadá, abril de 2023-marzo de 2024; Alemania, enero-diciembre de 2024).

1. Existe un sistema de exención de notificación previa (exención general para instituciones financieras extranjeras, independientemente del coeficiente de adquisición; general La exención para inversores generales (coeficiente de adquisición: 1%-10%) solo se aplica si los inversores cumplen ciertas condiciones.
2. La notificación previa es obligatoria para cualquier transacción que otorgue a inversionistas extranjeros acceso a tecnologías críticas, infraestructura crítica o datos personales sensibles de ciudadanos estadounidenses, mediante el control de cualquier participación en el capital de una empresa estadounidense. Además, el requisito de notificación obligatoria se aplica únicamente cuando los inversionistas extranjeros adquieran derechos relacionados con empresas que diseñan, prueban, fabrican o desarrollan tecnologías críticas sujetas a los controles de exportación de EE. UU. Solo se muestra el número total de preinspecciones (incluidas las voluntarias).
3. El número de solicitudes sujetas a revisión de beneficios netos es seis. Además, hay 1195 notificaciones que se pueden proporcionar hasta 30 días una vez realizada la inversión.

Fuente: Ministerio de Finanzas (2025), [Sistema de Control de Inversiones Extranjeras – Informe Anual del Año Fiscal 2024](#) y la Secretaría de la OCDE.

Tras la presentación de una notificación previa, la ejecución de la inversión está sujeta a un período de espera obligatorio de treinta días, durante el cual las autoridades pueden revisar la transacción y solicitar información adicional. Este período de revisión puede extenderse hasta cuatro meses para un análisis más exhaustivo en casos sensibles o acortarse cuando se considera que la inversión no presenta riesgo alguno según las regulaciones de la FEFTA. El período de espera legal expira automáticamente si la autoridad competente no presenta ninguna objeción. En la práctica, el 79 % de las 2903 notificaciones previas recibidas (que abarcan adquisiciones de acciones y casos relacionados con acciones) fueron examinadas en un plazo de 14 días en el año fiscal 2024. De las 1638 notificaciones de adquisiciones de acciones, el 89 % correspondían a empresas no cotizadas. Los inversores extranjeros retiraron 363 notificaciones previas.

En total, las autoridades emitieron solo tres solicitudes de información durante el año fiscal 2024.

La aprobación casi universal de las notificaciones previas y sus retiros relativamente frecuentes se deben en gran medida a la práctica de las autoridades de mantener comunicaciones informales con los inversionistas extranjeros antes o después de la presentación oficial. Estos intercambios permiten la identificación temprana de transacciones que pueden presentar riesgos según las regulaciones de la FEFTA, lo que lleva a los inversionistas a cancelar la inversión prevista o a recalibrar los parámetros del proyecto y volver a presentar la notificación. El incumplimiento de la obligación de presentar una notificación previa expone a los inversionistas extranjeros a sanciones penales, especialmente si la omisión es intencional, oculta, reiterada o no se informa de inmediato una vez descubierta. En el año fiscal 2024, se registraron 356 casos sin notificación, la mayoría de los cuales reflejaban un desconocimiento del sistema, lo que impulsó iniciativas de información más efectivas. Las autoridades han intensificado la cooperación entre los ministerios y organismos pertinentes, al tiempo que fortalecen la capacidad de monitoreo y análisis mediante el uso cada vez mayor de anuncios públicos y el aprovechamiento de una gama más amplia de información empresarial.

Fuente: Ministerio de Finanzas (2025), [Sistema de Control de Inversiones Extranjeras – Informe Anual del Año Fiscal 2024](#).

A medida que los sistemas de control de inversiones extranjeras se extienden por los países (UNCTAD, 2025[51]), las condiciones de control más estrictas también pueden aumentar la complejidad regulatoria. Las autoridades deben garantizar la transparencia en los objetivos y prácticas regulatorias del régimen de control para mejorar la previsibilidad del sistema para los inversores extranjeros (OCDE, 2025[52]). Las directrices publicadas periódicamente, basadas en las lecciones aprendidas y la información que surge de los primeros intercambios informales con inversores extranjeros antes de las notificaciones previas, junto con estudios de caso ilustrativos, podrían ayudar a aclarar las normas de cumplimiento específicas del sector para los inversores potenciales. Normas actuales de Japón

Se hace mayor hincapié en las estrictas normas de entrada que en los requisitos posteriores a la evaluación, lo que reduce la capacidad de respuesta del enfoque regulatorio ante cambios en las estructuras accionariales que podrían modificar las implicaciones de seguridad de las adquisiciones extranjeras inicialmente aceptadas (Hiraki, 2024[53]). Un mejor seguimiento y control posterior a la inversión podría fomentar la transparencia regulatoria y garantizar un enfoque más equilibrado entre la protección de la seguridad económica y el mantenimiento de mercados nacionales abiertos.

2.3.2. Superación de las barreras informales a la mejora de la inversión extranjera

Si bien la normativa japonesa sobre inversión extranjera directa no es demasiado restrictiva, la integración en los ecosistemas empresariales locales suele resultar más compleja. Esto se debe, en parte, a barreras informales, principalmente a las limitaciones lingüísticas y a la dificultad para desenvolverse en el marco regulatorio.

Facilitar el obstáculo del idioma

Las barreras lingüísticas podrían dificultar que Japón alcance su ambicioso objetivo de triplicar la inversión extranjera directa (IED) entrante en la próxima década. Las diferencias lingüísticas y la distancia geográfica se han asociado con menores flujos bilaterales de IED, con una fuerte penalización para los idiomas distintos del inglés (Golesorkhi et al., 2024[54]). Sin embargo, la proximidad institucional y cultural entre los países receptores y de origen puede mitigar este efecto negativo (Ly et al., 2018[55]). En este sentido, mejorar los flujos de información transfronterizos es clave para atraer más IED.

Las empresas con filiales extranjeras consideran que una comunicación más eficaz en idiomas extranjeros es una de las principales mejoras necesarias para hacer negocios (JETRO, 2025[56]; JETRO, 2024[57]). Las dificultades en la interacción con socios locales y la limitada disponibilidad de documentos y sitios web traducidos al inglés surgieron como obstáculos clave. El acceso deficiente a la información incrementa los costos, lo que influye en los incentivos a la inversión y las estrategias de entrada.

De hecho, alrededor del 70% de las empresas extranjeras encuestadas identificaron la colaboración con socios locales como clave para la expansión de su negocio.

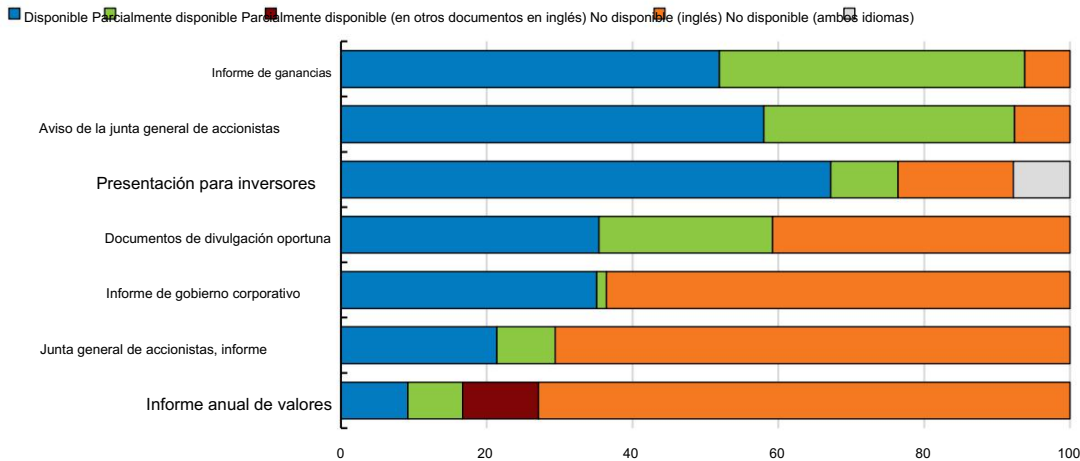
Se han logrado algunos avances. Por ejemplo, las autoridades financieras japonesas aceptan documentación en inglés de inversores extranjeros en sectores específicos. La Agencia de Servicios Financieros, en colaboración con las oficinas locales del Ministerio de Finanzas, creó la Oficina de Acceso al Mercado Financiero (FMEO) en 2021. Esta oficina, que actúa como punto de contacto único para las empresas de gestión de activos, asesoría de inversiones y agencias que se incorporan o que podrían incorporarse al mercado, gestiona todo el proceso regulatorio relacionado, desde la consulta previa hasta el registro y la supervisión posterior, en inglés (FSA, 2025[58]).

El ámbito de actuación de la FMEO se ha ampliado con el tiempo. Poco después de su creación, su función se extendió para abarcar determinados instrumentos financieros de tipo I y tipo II. Se trata de actividades que implican valores o derivados de mayor riesgo y activos financieros definidos como no valores, pero que aun así requieren regulación, respectivamente. Sin embargo, el enfoque sigue siendo fragmentado, ya que las licencias completas de tipo I para operaciones de valores más amplias continúan estando sujetas a procedimientos más onerosos que quedan fuera del ámbito de la FMEO. Podría considerarse una evaluación de la FMEO con vistas a ampliar su ámbito de tipos de negocio permitidos (por ejemplo, para incluir instrumentos financieros completos de tipo I) y a fortalecer los recursos humanos para agilizar los procesos de registro.

En abril de 2025, la Bolsa de Valores de Tokio (TSE) hizo obligatorio que las empresas que cotizan en su Mercado Principal (alrededor de 1600) publiquen sus resultados financieros y documentos de divulgación oportunos en su totalidad tanto en japonés como en inglés. Ya en 2024, el 94% de las empresas objetivo divulgaban informes de ganancias en inglés. Además, el 59% de las empresas proporcionaban documentos de divulgación puntuales, aunque una parte sustancial consistía en traducciones parciales (Figura 2.16). Con respecto a otros documentos clave, la TSE considera que las traducciones al inglés son «deseables» y, preferiblemente, completas. Si bien esta práctica ya es habitual en las presentaciones para inversores, sigue siendo considerable el número de empresas cotizadas para las que no se dispone de traducciones al inglés de los informes de gobierno corporativo, juntas de accionistas e informes anuales de valores. Aunque los sistemas de traducción automática reducen la desventaja informativa a la que se enfrentan los inversores extranjeros, las traducciones simultáneas obligatorias otorgarían a estas divulgaciones un carácter oficial. Esto podría aumentar la confianza de los inversores.

Figura 2.16. Existe margen para impulsar la divulgación bilingüe, incluso entre las empresas que cotizan en los principales mercados.

Porcentaje de información divulgada en inglés entre las empresas que cotizan en el Prime Market de la Bolsa de Tokio (%).



Fuente: JPX (2025), Informe resumido de la encuesta sobre el estado de implementación de la divulgación de información en inglés, Bolsa de Tokio.

StatLink 2<https://stat.link/tmy82s>

El gobierno está trabajando para aliviar las barreras lingüísticas para las empresas. En virtud de la Estrategia de Inversión Extranjera Directa (IED) de 2025, el gobierno debe considerar la posibilidad de extender el régimen comercial preferencial que actualmente se aplica en las cuatro zonas especiales de Japón para empresas de gestión financiera y de activos (que abarcan las principales áreas metropolitanas y ciudades) a otros gobiernos locales, sujeto a evaluaciones de necesidades (Oficina del Gabinete, 2025[49]). Estas zonas especiales ofrecen requisitos regulatorios menos estrictos y apoyo personalizado a través de centros de atención integral de las autoridades locales. Dichos centros asisten a las empresas extranjeras con los trámites de registro, facilitan el acceso a intérpretes y ofrecen asistencia en inglés. En este contexto, complementan la función de la Oficina de Gestión y Exención de Impuestos (OGEI) a nivel nacional. El gobierno también se comprometió a agilizar las traducciones de las leyes y reglamentos japoneses. Este paso positivo debería ir acompañado de mayores esfuerzos para garantizar la traducción oportuna al inglés de las políticas clave y los análisis pertinentes.

Mejorar la correspondencia entre empresas

La búsqueda de socios comerciales es un componente clave de las estrategias de promoción de la inversión extranjera directa (IED). La Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) actúa como principal enlace entre inversores extranjeros y empresas japonesas, ofreciendo apoyo personalizado para identificar socios fiables y fomentar la colaboración. Asimismo, proporciona asistencia para la entrada en el mercado, facilitación regulatoria y servicios de seguimiento para empresas con filiales extranjeras. Como eje central del complejo sistema japonés de promoción de la IED, JETRO conecta ministerios, gobiernos locales, centros de apoyo nacionales y redes internacionales con potenciales inversores a través de sus plataformas digitales.

Una plataforma digital renovada y gratuita promete facilitar la búsqueda de socios comerciales transfronterizos. En 2022, JETRO sustituyó su servicio de búsqueda de socios comerciales no verificado (TTPP, por sus siglas en inglés) por e-Venue, un sistema más controlado y alineado con las políticas, con una interfaz intuitiva. A diferencia del enfoque de publicación abierta de TTPP, e-Venue garantiza una mayor calidad al someter todas las propuestas a revisión y traducción al japonés antes de su publicación. Aunque no está coordinada estructuralmente con las iniciativas de promoción de la IED de JETRO, la plataforma ahora incluye Con aproximadamente 20 000 usuarios de más de 150 países (JETRO, 2025[59]), la plataforma desempeña un papel fundamental en la facilitación del establecimiento de alianzas de inversión transfronterizas, especialmente entre pymes. A través de E-Venue, los usuarios pueden buscar oportunidades, publicar ofertas e interactuar directamente con posibles socios. La plataforma también integra contactos de las oficinas de JETRO en el extranjero y de los Centros de Apoyo Empresarial de Invest Japan para impulsar el desarrollo de colaboraciones comerciales concretas.

JETRO también gestiona Centros de Apoyo Empresarial Invest Japan (IBSC) en seis ciudades importantes (Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe y Fukuoka). Estos son centros integrales que ofrecen a los inversores extranjeros espacio de oficina temporal,

Ofrecen consultoría experta multidimensional, apoyo en los trámites de constitución y obtención de licencias, y orientación sobre los incentivos nacionales y regionales disponibles. También brindan servicios de intermediación personalizados, incluyendo reuniones con potenciales socios comerciales nacionales. Se ha intensificado el desarrollo de los servicios digitales del IBSC para que los inversores extranjeros puedan acceder de forma remota a algunos de los servicios que ofrecen las 128 oficinas de JETRO (76 en el extranjero y 52 en Japón), incluyendo consultas en línea con expertos bilingües (JETRO, 2025[59]).

Ampliar aún más el alcance del apoyo ofrecido en línea, acercando así a los IBSC a un servicio virtual integral, podría ayudar a reducir los costes de entrada y a reforzar la percepción de Japón como un lugar accesible para hacer negocios.

Evaluar periódicamente la cartera de proyectos de inversión extranjera directa (IED) entrantes que reciben apoyo a través de la red IBSC podría ayudar a identificar las mejores prácticas y a obtener una buena relación calidad-precio.

Al desempeñar un papel facilitador clave en la promoción de la IED entrante, los Centros de Servicios Empresariales Integrados (CSI) se complementan con la Línea Directa de Negocios Invest Japan de JETRO. Esta ofrece a los inversores extranjeros un mecanismo de coordinación inicial de fácil acceso, que ayuda a mediar y asistir en las interacciones con los ministerios y agencias pertinentes cuando surgen obstáculos regulatorios. La Línea Directa también ayuda a transmitir las inquietudes de los inversores y coordinar el seguimiento con las autoridades competentes. Aun así, los posibles inversores que utilizan el apoyo de los CSI deben interactuar por separado con otros ministerios u organismos públicos para obtener las licencias y aprobaciones necesarias. Esto refuerza la impresión de un marco institucional excesivamente complejo, al tiempo que aumenta el riesgo de duplicación de procedimientos y mayores costos de cumplimiento. Para abordar desafíos similares, algunos países de la OCDE han simplificado sus marcos institucionales de IED entrante mediante el establecimiento de agencias de promoción de inversiones más centralizadas (Recuadro 2.2). En este contexto, fortalecer el mandato de coordinación de los CSI puede mejorar su función de ventanilla única. Un panorama institucional simplificado, combinado con la digitalización de los servicios públicos facilitadores clave, también contribuiría a una promoción de inversiones nacionales más eficaz.

Recuadro 2.2. Ejemplos de marcos simplificados para la promoción de la inversión extranjera directa (IED) entrante

La Agencia de Desarrollo Industrial de Irlanda (IDA, por sus siglas en inglés) opera desde 1994 como una agencia de promoción de inversiones extranjeras cada vez más centralizada y proactiva, que funciona efectivamente como una ventanilla única para los inversores extranjeros.

Como organismo público dependiente del Departamento de Empresa, Comercio y Desarrollo, la IDA es el principal punto de contacto para los inversores, desde la consulta inicial hasta el establecimiento y la expansión. Si bien las aprobaciones formales corresponden a las autoridades competentes, la función de gestión de proyectos de la IDA permite que las conversaciones sobre regulación, ubicación e incentivos se desarrollen en paralelo. Este modelo, junto con la administración directa de una amplia gama de incentivos financieros, reduce considerablemente la complejidad administrativa y mejora la claridad de los procedimientos.

El enfoque del Reino Unido para la promoción de la inversión extranjera sigue políticas de simplificación similares, aunque dentro de un marco institucional algo menos centralizado. El Departamento de Negocios y Comercio (DBT) actúa como principal punto de entrada para los inversores extranjeros, mientras que la Oficina de Inversiones (OFI) funciona como coordinadora intergubernamental para proyectos de importancia estratégica. Juntas, brindan apoyo a la gestión de proyectos, armonizando los procesos regulatorios y ayudando a resolver los obstáculos en los distintos niveles de autoridad. Si bien la autoridad regulatoria y la provisión de incentivos siguen estando distribuidas, esta especialización funcional contribuye a agilizar la interacción con los inversores y a reducir las fricciones administrativas.

Fuente: Secretaría de la OCDE, basada en la Red de Agencias de Promoción de Inversiones de la OCDE y fuentes nacionales.

2.4. Movilizar recursos para una economía más innovadora y dinámica.

Impulsar la productividad de Japón dependerá de una mayor difusión de la innovación y del desarrollo de habilidades avanzadas, respaldadas por sólidas líneas de investigación y talento internacional. Una reasignación más eficiente de los recursos, incluyendo la salida oportuna de las empresas de baja productividad, también es esencial para liberar recursos para nuevas empresas más innovadoras. Al mismo tiempo, se podrían lograr importantes aumentos de productividad mediante una mayor adopción de tecnologías digitales y de inteligencia artificial.

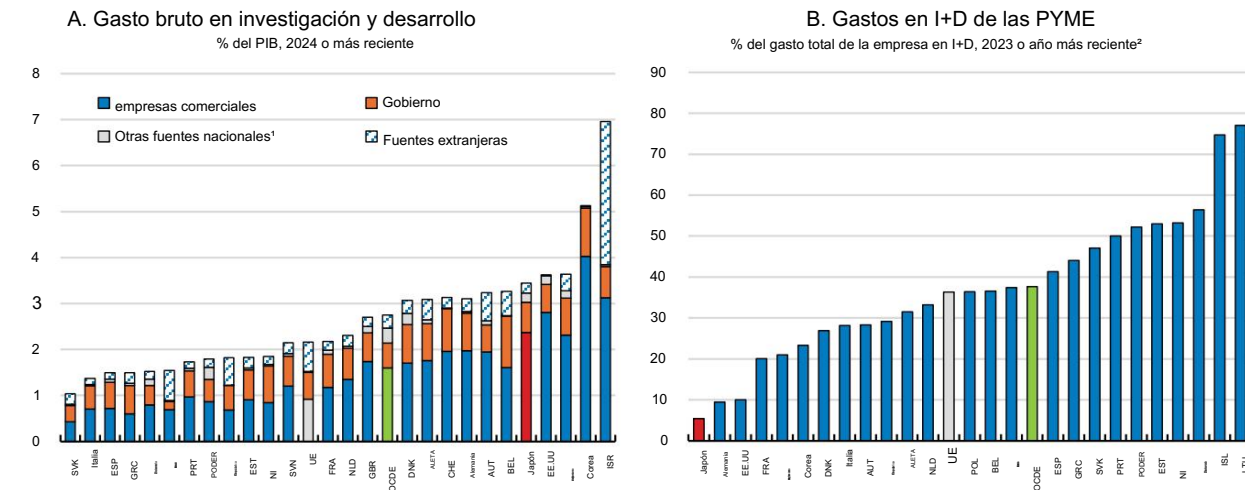
2.4.1. Convertir el sistema de I+D en un catalizador para la difusión generalizada de la innovación.

El atractivo de Japón para los inversores extranjeros radica en su destreza tecnológica y su larga trayectoria de excelencia industrial. Según encuestas realizadas a ejecutivos de grandes empresas globales, la alta capacidad tecnológica y de innovación se percibe como uno de los principales impulsores de la inversión extranjera en Japón, por encima del desempeño económico y la calidad de la infraestructura (Kearney Foresight, 2025[60]). De hecho, las empresas con filiales extranjeras consideran que las capacidades de I+D de las empresas e instituciones de investigación nacionales constituyen una ventaja competitiva clave del sector manufacturero japonés (JETRO, 2024[61]).

Japón tiene uno de los niveles más altos de gasto en investigación y desarrollo (I+D) en la OCDE (Figura 2.17, Panel A). Sin embargo, la tasa de crecimiento real anual promedio de alrededor del 1 % desde 2013 es una de las más bajas de la OCDE. Medido por gasto, el 79 % de la actividad de I+D se concentra en el sector empresarial, de la cual aproximadamente el 86 % es realizada por empresas manufactureras. Esta composición limita la contribución potencial de los servicios al crecimiento de la productividad agregada. Solo alrededor del 4 % del gasto en I+D empresarial se destina al sector de las TIC, en comparación con el 31 % en Estados Unidos. Las PYME realizan alrededor del 5 % de la I+D empresarial, la proporción más baja entre los países de la OCDE (Panel B). Esto reduce el margen para la innovación y la difusión, disminuyendo la probabilidad de que las pequeñas empresas desarrollen innovaciones disruptivas y posteriormente escalen.

La escasa integración con las redes internacionales de innovación y la falta de vínculos dentro del ecosistema nacional de I+D limitan la innovación y su difusión. En 2023, la proporción del gasto en I+D financiado por fuentes extranjeras fue del 0,6% del total, la segunda más baja de la OCDE. Sin embargo, el interés internacional por las pymes japonesas innovadoras está creciendo. La I+D financiada por fuentes extranjeras en empresas con entre 10 y 49 empleados casi se ha quintuplicado en comparación con el promedio del periodo 2015-2019, si bien partiendo de una base baja.

Figura 2.17. El gasto en I+D es elevado, pero está vinculado principalmente a las empresas más grandes.



Nota: 1. Incluye la educación superior y el sector privado sin fines de lucro. 2. Las PYME son empresas con hasta 249 empleados. Los datos de Francia, Irlanda, Noruega y Suecia excluyen los proyectos de I+D de empresas con menos de 10 empleados.
Fuente: OCDE, Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología; y OCDE, Base de datos de Estadísticas de Investigación y Desarrollo.

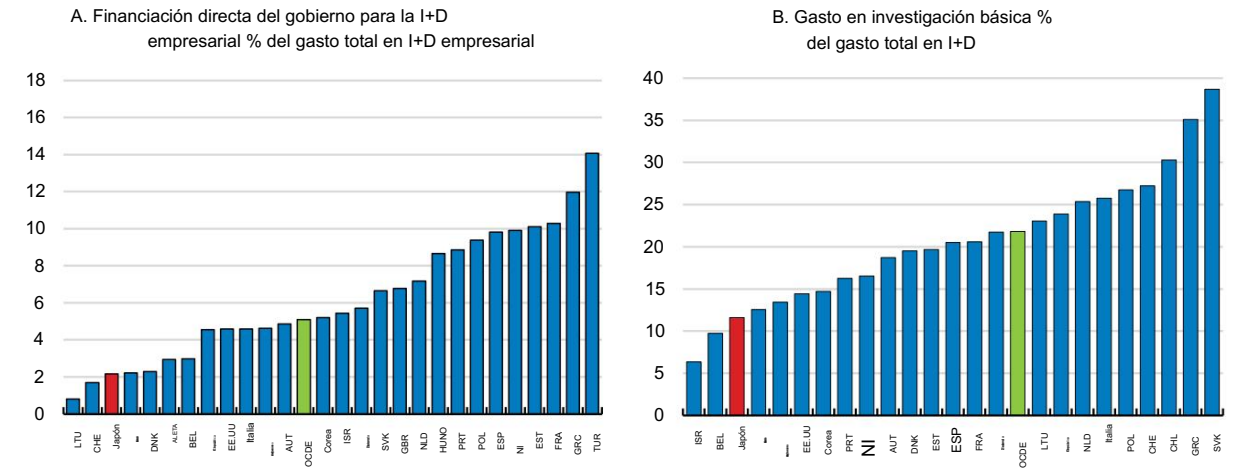
StatLink 2<https://stat.link/wjxfgl>

A pesar de un crédito fiscal relativamente generoso para proyectos de investigación conjuntos con universidades y ciertas instituciones públicas de investigación (el 30% de los gastos en I+D se pueden deducir de las obligaciones tributarias corporativas), la financiación empresarial para la investigación realizada en universidades e instituciones públicas de investigación representó solo el 0,9% de los gastos en I+D financiados por empresas en 2023. Asimismo, la financiación directa del gobierno para la I+D empresarial se mantiene muy por debajo del promedio de la OCDE (Figura 2.18, Panel A). Un enfoque relativamente fragmentado de la innovación limita el gasto total en investigación básica (Panel B), del cual el 46% es realizado por empresas. Esto podría limitar la medida en que la investigación básica sirve a objetivos colectivos más amplios, ya que las universidades, actores clave en la investigación más orientada socialmente, representan solo el 37% de la investigación básica, alrededor de veinte puntos porcentuales por debajo del promedio en la

Países de la OCDE con datos disponibles. Fortalecer las alianzas de investigación entre empresas, instituciones públicas de investigación y universidades puede ser útil en este sentido.

Figura 2.18. La orientación del sistema hacia la innovación de base amplia sigue siendo limitada.

2024 o el último año disponible



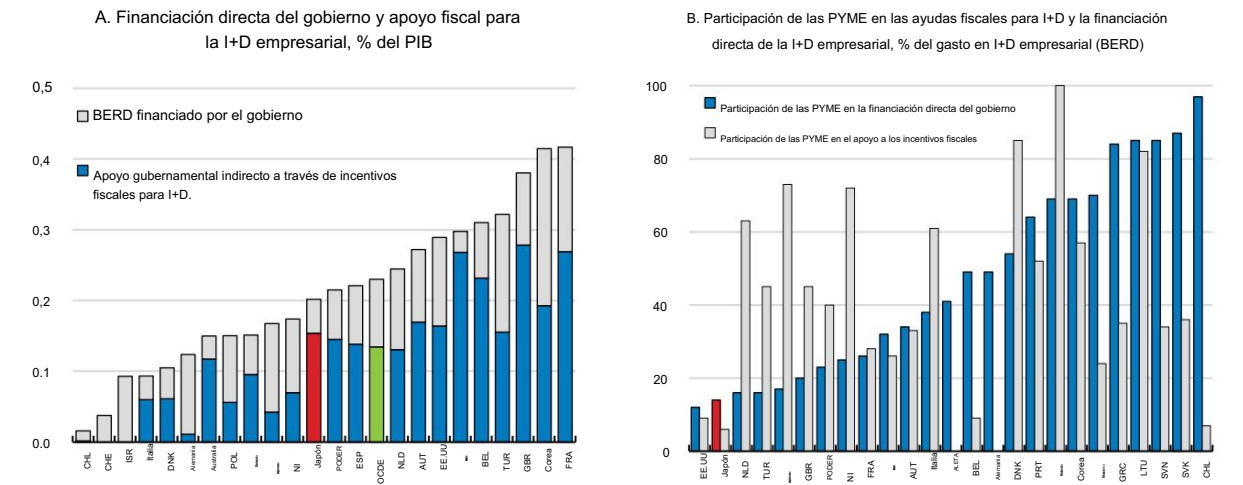
Fuente: OCDE, base de datos de estadísticas sobre investigación y desarrollo.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/jtnkve>

El apoyo público a la I+D empresarial se basa principalmente en incentivos fiscales. El apoyo público global a la I+D empresarial —que representa el 0,2 % del PIB en 2023— está por debajo del promedio de la OCDE. Alrededor del 75 % de este apoyo se destina a través de la ayuda fiscal a la I+D (Figura 2.19, Panel A). Existen dos créditos fiscales independientes pero combinables, con diversos límites máximos específicos y agregados para la desgravación fiscal admisible (METI, 2024[62]). Estos programas persiguen diferentes objetivos políticos, se administran por separado y aplican criterios de elegibilidad y cálculos de tipos distintos (Tabla 2.3). Una reciente reforma fiscal introdujo tipos de crédito fiscal mejorados para la I+D destinada a la inversión empresarial en campos de investigación de tecnología estratégica (MOF, 2025[63]), lo que podría aumentar la fragmentación. Condicionado a un plan de I+D plurianual aprobado, el programa aplicaría un tipo de crédito fiscal del 40 % a partir del año fiscal 2027, que aumentaría al 50 % para la investigación conjunta con universidades o institutos públicos de investigación certificados. Estos cambios van acompañados de una simplificación de los requisitos de documentación y certificación para los proyectos de innovación abierta.

Figura 2.19. La participación de las PYME en el apoyo a la I+D sigue siendo baja.

2023 o el último año disponible



Fuente: OCDE, base de datos de incentivos fiscales para I+D.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/1cef5a>

Tabla 2.3. El sistema de créditos fiscales para I+D

	Objetivo de la política	Tipo de crédito fiscal para I+D	Dominio de I+D	Tasa de crédito
Crédito fiscal general para I+D	Nutritivo base Esfuerzo de I+D en todas las empresas al ofrecer un crédito sobre total los gastos de I+D elegibles en el año fiscal	Basado en volumen (general)	I+D interna completa gastos relacionados a actividades de investigación experimental y aplicada.	<u>Grandes empresas:</u> entre el 0 % y el 14 %, según el porcentaje de variación de los gastos en I+D en relación con la media de los últimos 3 años, si la intensidad de la I+D de la empresa elegible ha aumentado considerablemente. <u>Pymes:</u> entre el 12 % y el 17 %, según el porcentaje de variación de los gastos en I+D con respecto a la media de los últimos 3 años.
Abierto innovación basado en la actividad Crédito fiscal para I+D	Fomentar la investigación conjunta o por contrato con organizaciones externas (universidades, instituciones públicas de investigación y empresas asociadas).	Basado en volumen (especial)	Es similar al crédito fiscal general, pero el gasto debe realizarse en proyectos conjuntos o encargados a socios de investigación aprobados.	<u>Todas las empresas:</u> Varía según el tipo de pareja*: 20% - Empresas privadas e instituciones públicas de investigación no acreditadas 25% - Empresas emergentes 30% - Universidades e instituciones públicas de investigación acreditadas. *Los criterios de elegibilidad son independientes de los del programa general.

Nota: Las tasas de crédito fiscal para I+D están sujetas a límites máximos tanto específicos del esquema como globales, expresados como la proporción máxima de la obligación tributaria sobre la renta corporativa que puede compensarse mediante el crédito. En ambos esquemas, los gastos de investigación y experimentación que cumplen los requisitos cubren todos los costos de I+D, excepto los servicios no directamente vinculados a las actividades de I+D. El crédito para innovación abierta suele estar sujeto a un límite máximo independiente de alrededor del 10 %. Para las empresas de capital riesgo de I+D que cumplen los requisitos, el uso combinado del crédito fiscal general para I+D y el crédito fiscal para I+D basado en la actividad de innovación abierta puede elevar el límite máximo global hasta el 60 %. Las PYME son empresas con un capital inferior a 100 millones de yenes. La tabla no incluye el esquema mejorado de crédito fiscal para I+D para la inversión en tecnologías estratégicas, aprobado a finales de marzo de 2026. Para obtener más detalles, consulte <https://stip.oecd.org/innotax/countries/Japan>.

Fuente: OCDE, [INNOTAX portal](#); y (METI, 2024[62]).

La estabilidad y la previsibilidad son determinantes clave de los incentivos fiscales eficaces para la I+D (Appelt et al., 2016[64]). Las repetidas revisiones, muchas de las cuales se derivaron de disposiciones temporales, incluida la introducción temporal de límites de deducción dinámicos (es decir, que varían según la tasa de aumento o disminución de los gastos en investigación experimental) en 2023, han disminuido la previsibilidad del sistema japonés. Las consiguientes cargas administrativas para las empresas más pequeñas, en particular las de nueva creación (Nagato, 2024[65]), pueden explicar en parte la importante subrepresentación de las pymes en el gasto empresarial en I+D, como también se refleja en su baja participación en el apoyo público total a la I+D, concretamente a través de incentivos fiscales (Figura 2.19, Panel B).

Un sistema de incentivos fiscales más ágil y estable contribuiría a que las pequeñas empresas innovadoras los adopten con mayor facilidad, ya que son las que tienen más probabilidades de impulsar un mayor crecimiento de la productividad. La Autoridad Tributaria Nacional, dependiente del Ministerio de Finanzas, se encarga de la implementación y el cumplimiento de los créditos fiscales para I+D, mientras que el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (METI) se encarga del diseño de las políticas, a veces con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (ECC) en cuestiones de colaboración con las universidades. La Oficina del Gabinete, a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCT), supervisa estratégicamente y garantiza la alineación general de la política de promoción de la investigación con los objetivos nacionales de innovación. Las estructuras de gobernanza altamente centralizadas no son adecuadas para delimitar responsabilidades y evaluar resultados en sistemas de innovación cada vez más complejos y con múltiples actores (Larrue et al., 2024[66]). Fortalecer los canales de retroalimentación entre las autoridades y los usuarios actuales y potenciales de los créditos fiscales para I+D, con el fin de adaptar las políticas, puede contribuir a que los programas sean más eficaces en la promoción de las PYME innovadoras.

El diseño de los incentivos fiscales para I+D debería reformarse y, en la medida de lo posible, simplificarse. La respuesta de las empresas a dichos incentivos es notablemente mayor cuando estos se desvinculan de su rentabilidad, por ejemplo, cuando la desgravación fiscal es reembolsable o puede canjearse contra los impuestos sobre la nómina (Appelt et al., 2023[67]). Algunos países cuentan con disposiciones de desgravación fiscal preferenciales para las pymes, ya sea mediante tipos impositivos mejorados o disposiciones de reembolso específicas para las pymes. Permitir el arrastre de los créditos fiscales para I+D no utilizados resulta igualmente beneficioso. Por lo tanto, el diseño de los incentivos fiscales para I+D debería permitir a las empresas destinar una mayor proporción de sus recursos a la I+D, incluso cuando tienen pocos o ningún ingreso imponible, como suele ser el caso de las empresas emergentes jóvenes y de alto crecimiento.

Como se destaca en la Encuesta de la OCDE sobre Japón de 2024, la ausencia de mecanismos, como el arrastre o el reembolso de incentivos fiscales no utilizados, ha limitado el acceso a subvenciones para I+D entre las empresas con bajos o nulos impuestos.

pasivos. Como resultado, el apoyo siguió concentrándose principalmente en empresas consolidadas y rentables, debilitando los incentivos a la inversión para nuevas empresas. El gobierno modificó la Ley de Medidas Especiales en Materia Tributaria en marzo de 2026 para permitir a las pymes trasladar los créditos fiscales por I+D no utilizados hasta tres años a partir del ejercicio fiscal 2027, lo cual es positivo. Sin embargo, en el marco del crédito fiscal general por I+D, esto se acompañó de una revisión de la curva de tipos de crédito, haciéndola menos favorable para las empresas que no aumentan su gasto en I+D con el tiempo. El mecanismo de traslado para las pymes también podría complementarse con medidas que hagan reembolsable el crédito para actividades de innovación alineadas con objetivos políticos específicos (por ejemplo, proyectos que fomenten la innovación sistémica), lo que ayudaría a garantizar un acceso más equitativo y a ampliar la base de la innovación. La combinación de estas medidas con límites máximos en el importe total de los incentivos fiscales no utilizados que se pueden trasladar o reembolsar podría ayudar a limitar sus costes fiscales.

El apoyo directo a la I+D es un complemento importante a los incentivos fiscales para la I+D y su eficacia es comparable. El efecto del incentivo fiscal es más pronunciado para las pequeñas empresas con limitaciones de liquidez —lo que confirma resultados previos específicos de Japón a partir de datos a nivel de empresa (Kobayashi, 2014[68])— y está inversamente relacionado con el nivel inicial de I+D (OCDE, 2024[69]). El análisis comparativo entre países de la OCDE, basado en datos microeconómicos, sobre el impacto de los instrumentos de apoyo a la innovación revela que cada unidad adicional de financiación directa del gobierno o apoyo fiscal genera, en promedio, una tasa de incrementalidad bruta de alrededor de 1,4 unidades de I+D empresarial adicional (Appelt et al., 2023[67]).

Un mayor uso de subvenciones directas complementaría eficazmente los incentivos fiscales para I+D y ayudaría a alinear la inversión empresarial con prioridades políticas específicas. Salvo algunas excepciones (OCDE, 2024[69]), los incentivos fiscales están diseñados para ser tecnológicamente neutros y, por lo tanto, resultan insuficientes para orientar la innovación hacia áreas prioritarias específicas. Además, cada vez requieren más marcos para abordar el posible fraude o el uso indebido (Dai y Zou, 2025[70]). Por otro lado, una mayor implementación del apoyo directo puede promover las inversiones empresariales en investigación básica y aplicada (Appelt et al., 2023[67]) y dirigirse a objetivos específicos, como la reducción de la brecha de financiación para la inversión intangible por parte de empresas emergentes con alto potencial de innovación. Los programas de subvenciones competitivas contribuyen a una innovación transformadora más eficaz, ya que tienden a fomentar la investigación básica y aplicada en sus primeras etapas (OCDE, 2020[71]). Si bien se asocian con costes relativos más elevados, las subvenciones competitivas bien diseñadas son más adecuadas para apoyar proyectos de alto riesgo y alto impacto, al tiempo que limitan el riesgo de malgastar recursos al seleccionar a los ganadores.

El gobierno ha ampliado su enfoque de apoyo a la I+D complementando las subvenciones basadas en insumos con un nuevo incentivo basado en resultados. A partir de abril de 2025 y durante un período de siete años, el nuevo programa Innovation Box ofrece una deducción fiscal del 30 % sobre los ingresos cualificados derivados de patentes y software relacionado con la IA desarrollados mediante I+D nacional (METI, 2025[72]). Al vincular proporcionalmente los beneficios del régimen de propiedad intelectual (PI) con el gasto en I+D nacional, el programa se alinea con la Acción 5 del estándar mínimo de la OCDE/G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) (OCDE, 2015[73]). El acceso está condicionado a la certificación del METI que confirme que la propiedad intelectual se encuentra dentro del ámbito de aplicación del programa. En el caso del software relacionado con la IA, se requiere la aprobación adicional de un tercero autorizado (por ejemplo, la Asociación de Software de Japón) (Abe et al., 2024[74]).

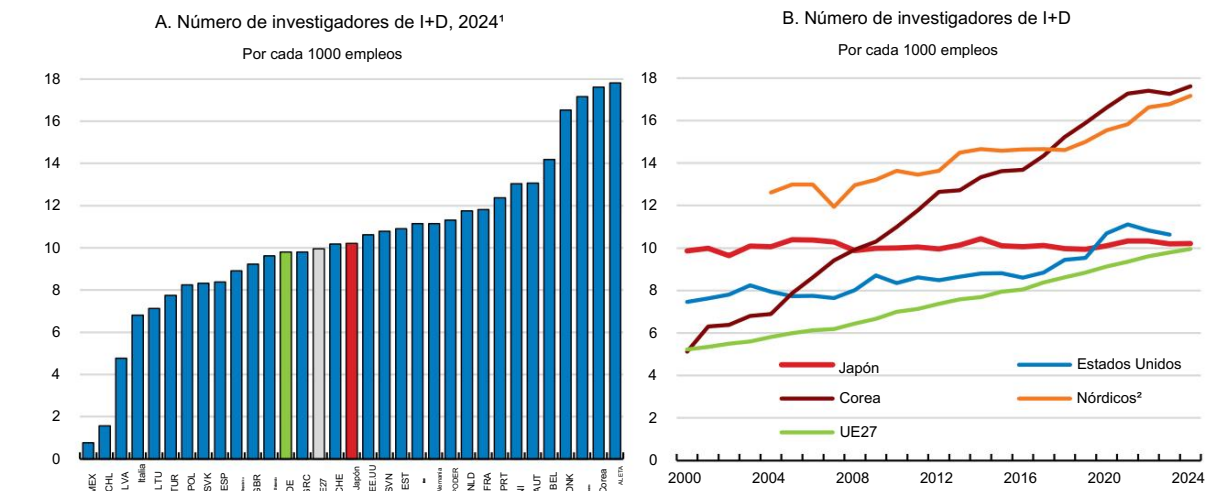
El objetivo del nuevo plan es posicionar a Japón como un mercado de innovación. Sin embargo, con tasas de impuesto corporativo —incluidos los impuestos locales— en torno al 30%, se espera que el régimen de la Caja de Innovación, en el mejor de los casos, reduzca la tasa impositiva aplicable a aproximadamente el 21%. La caja debe evaluarse periódicamente para garantizar que apoya las nuevas innovaciones. Esto se debe a que los incentivos fiscales, especialmente los regímenes de propiedad intelectual, tienden a concentrar los beneficios monetarios en las grandes empresas establecidas y pueden ser una forma menos rentable de apoyar la innovación en comparación con los créditos fiscales y las subvenciones (Appelt et al., 2023[75]). La implementación del Impuesto Mínimo Global de la OCDE, que introduce una tasa impositiva corporativa mínima efectiva del 15% para las grandes multinacionales, puede limitar aún más el atractivo de los incentivos fiscales basados en los ingresos en comparación con los basados en los gastos (OCDE, 2022[76]), lo que impulsa a muchos países a reconsiderar sus marcos de incentivos fiscales.

2.4.2. Promover un programa eficaz de desarrollo de habilidades.

La capacidad de innovación de Japón dependerá en gran medida del cultivo de una fuerza laboral equipada con habilidades avanzadas y adaptables. La capacidad de innovación actual de Japón, medida por el número de investigadores de I+D por cada 1000

personas empleadas, se situó en torno al promedio de la OCDE en 2023 (Figura 2.20, Panel A). Esto enmascara una divergencia de tendencia con respecto a los principales competidores de Japón, donde el número de investigadores ha aumentado más rápido que el empleo general desde 2015, mientras que en Japón ambos han crecido a un ritmo similar (Panel B). Esta expansión limitada refleja en parte la relativamente débil cantera de nuevos talentos que emergen del sistema de educación superior.

Figura 2.20. El número de investigadores se sitúa en torno a la media de la OCDE, pero se ha estancado.



Nota: 1. 2024 o el último año disponible. 2. Promedio no ponderado de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
Fuente: OCDE, base de datos de estadísticas sobre investigación y desarrollo.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/1zvtk4>

Hacer más atractivas las trayectorias educativas orientadas a la investigación.

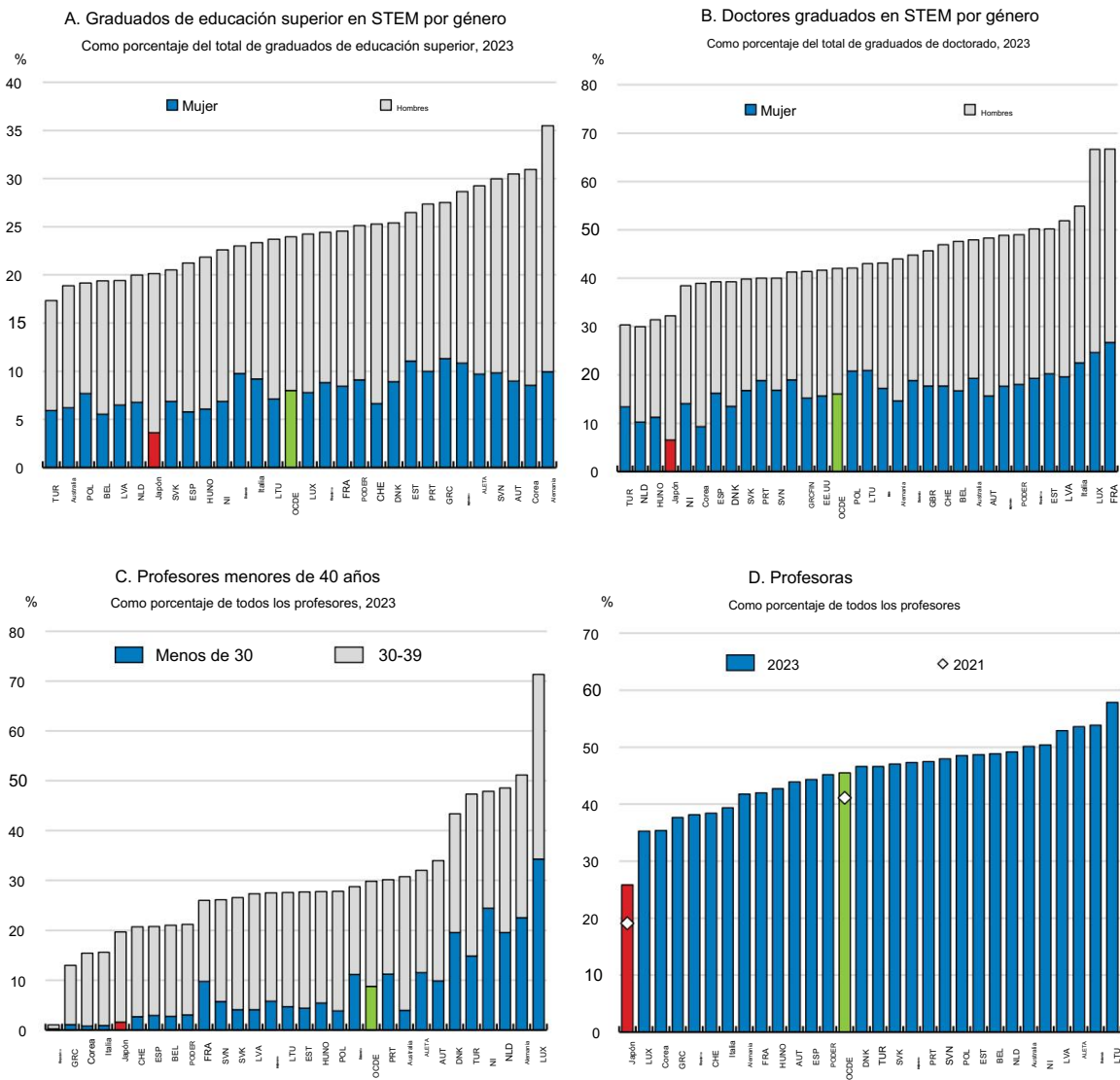
La proporción de graduados en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), que ronda el 20 % del total en 2023, se sitúa por debajo de la media de la OCDE (Figura 2.21, Panel A). Esto se observa especialmente en el caso de las mujeres, cuya proporción en CTIM respecto al total de graduados, del 3,6 %, es la más baja de la OCDE. La posición de Japón en la clasificación de doctorados en CTIM también es baja (Panel B), si bien esto refleja en parte la menor proporción general de doctores (entre el 35 % y el 40 % de la de Alemania y Estados Unidos). La tasa de acceso a programas de doctorado alcanzó su punto máximo en 2000, con un 17 %, antes de descender a menos del 10 % en los últimos años. Además, alrededor del 40 % de los admitidos en programas de doctorado en el año fiscal 2024 eran adultos en edad laboral (NISTEP, 2025[77]). Como se destaca en la Encuesta de la OCDE sobre Japón de 2024, este interés relativamente débil por las carreras orientadas a la investigación refleja en parte el estancamiento de los salarios, la lenta progresión profesional y las limitadas oportunidades académicas para los profesores jóvenes y las profesoras (Paneles CD).

Dado que los alumnos japoneses de 15 años obtienen las mejores calificaciones en matemáticas y ciencias en toda la OCDE, aumentar la proporción de graduados en STEM requerirá fomentar un interés activo por las profesiones científicas, comenzando en los niveles de educación primaria y secundaria inferior. Con este fin, en el año fiscal 2024, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología lanzó un proyecto para analizar cómo se podrían aprovechar los enfoques de enseñanza basados en problemas e indagación en las escuelas primarias y secundarias inferiores para estimular el interés concreto de los alumnos en estas materias (MEXT, 2024[78]). Los resultados de los proyectos piloto indican que permitir que los alumnos identifiquen sus propios problemas les ayuda a percibir la relevancia de la ciencia y las matemáticas en la vida cotidiana, pero una formación docente adecuada es un factor clave para el éxito de la iniciativa.

La escasa representación de las mujeres en la educación y las trayectorias profesionales STEM refleja en parte los estereotipos de que las profesiones científicas son demasiado exigentes en cuanto al trabajo como para conciliarlas con las responsabilidades familiares y de maternidad (Katsumura, 2023[79]). Para contrarrestar estos estereotipos, la Oficina de Igualdad de Género, un organismo gubernamental central encargado de formular, coordinar y promover políticas nacionales de género, organiza talleres para aumentar la concienciación y el interés en las carreras STEM entre niñas de todas las edades y sus padres a través del desafío RICO. Los programas STEM Girls Ambassadors y Girls Meet STEM in Tokyo también conectan a mujeres

Profesionales de STEM en escuelas secundarias de nivel básico y superior. Estas iniciativas positivas deben ser respaldadas mediante una mentoría femenina eficaz para promover las vocaciones STEM entre las estudiantes de secundaria superior y los primeros años de universidad (OCDE, 2024[80]).

Figura 2.21. El escaso interés por las carreras de investigación refleja en parte las complejas transiciones académicas.



Nota: En los paneles A y B, STEM se refiere a ingeniería, manufactura y construcción, tecnologías de la información y la comunicación, y ciencias naturales, matemáticas y estadística. La OCDE se refiere al promedio no ponderado de los países de la OCDE con datos disponibles.
Fuente: OCDE, Panorama general de la educación (base de datos).

Enlace estadístico 2<https://stat.link/d68j72>

Se espera que las recientes políticas para aumentar el número de estudiantes de doctorado que reciben un apoyo anual para gastos de manutención de alrededor de 1,8 millones de yenes (que podría ascender a unos 2,9 millones de yenes al combinarse con componentes para gastos de investigación en el marco de programas específicos) incrementen el interés por las carreras de investigación. Estas políticas podrían complementarse con una mayor flexibilidad de los sistemas de empleo y salarios universitarios, basada en marcos de evaluación del desempeño eficaces. Las universidades pueden utilizar fondos externos procedentes de donaciones, proyectos de investigación competitivos o conjuntos para financiar gastos de personal, apoyar puestos y estructuras de investigación. Además, los fondos externos captados por las universidades no se compensan con el importe de las subvenciones gubernamentales para corporaciones universitarias nacionales proporcionadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, al calcular las asignaciones futuras (MEXT, 2025[81]). Esto podría fortalecer significativamente la voluntad de las universidades de participar en la investigación.

Amplias aplicaciones potenciales en la ciencia y la industria. La implementación de estas medidas debe evaluarse periódicamente para garantizar que respalden la investigación de alta calidad y el uso eficaz de los recursos.

Una mayor autonomía financiera también podría permitir a las universidades aislar mejor al personal de investigación de una participación excesiva en tareas administrativas y de gestión (OCDE, 2024[80]). Establecer progresivamente límites más bajos en la proporción de tiempo que los diferentes puestos académicos pueden asignar a actividades no relacionadas con la investigación podría conducir a un entorno de trabajo más propicio para la innovación. Asimismo, flexibilizar las normas de antigüedad en la gestión de proyectos y desvincular la financiación de los jóvenes investigadores de la afiliación obligatoria con profesores asociados o titulares podría fomentar proyectos más innovadores. Hacer que la experiencia interorganizacional, la capacidad de desarrollo del personal y los avances en la diversidad de género y edad, como criterios clave para la promoción de altos directivos universitarios, podría fomentar una mayor innovación en la gestión universitaria.

La puesta en marcha gradual del Fondo de Dotación Universitaria podría tener un impacto significativo en el ecosistema de innovación de Japón. Creado en 2022, el Fondo tiene como objetivo utilizar los rendimientos de su capital inicial de 10 billones de yenes para proporcionar financiación a largo plazo a universidades seleccionadas y transformar sus sistemas de innovación. Los recursos están destinados a fortalecer la infraestructura de investigación, mejorar los salarios y las condiciones laborales de los investigadores para atraer a los mejores talentos. Esto puede promoverse mediante un nuevo sistema de permanencia que brinde a los investigadores noveles y de media carrera mayor autonomía y funciones de supervisión, e impulsar la creación de empresas emergentes universitarias. Si bien las universidades seleccionadas gozarán de plena discreción en el uso de estos fondos, el apoyo está condicionado a su compromiso con la reforma institucional, la existencia de estrategias empresariales y financieras creíbles y la implementación de estructuras de gobernanza autónomas y responsables. El Fondo otorgó 15.400 millones de yenes a la Universidad de Tohoku en marzo de 2025, mientras que el Instituto de Ciencias de Tokio fue seleccionado tras la segunda ronda de solicitudes y comenzó a recibir financiación en abril de 2026. El seguimiento continuo garantizará que la investigación financiada no se vea limitada a tecnologías preferidas o a vías puramente comerciales.

Crear las condiciones adecuadas para el talento internacional

Dada la disminución de cohortes y la menor propensión a ingresar a carreras STEM, atraer estudiantes internacionales es esencial para asegurar la base de habilidades para el crecimiento de la productividad impulsado por la innovación. La movilidad estudiantil internacional fue la octava más alta en la OCDE en 2022, con estudiantes internacionales que representaron el 4,2 % del total de matrículas terciarias (OCDE, 2025[82]). Después de disminuir durante la pandemia, el número de estudiantes extranjeros matriculados en instituciones de educación superior japonesas repuntó en 2024, con alrededor del 25 % cursando estudios de ciencia e ingeniería. Las nacionalidades asiáticas representan más del 92 % del total, siendo los estudiantes de China, Nepal y Vietnam las comunidades más grandes (JASSO, 2025[83]).

Japón cuenta con un marco bien desarrollado y diversas políticas para atraer y retener a estudiantes e investigadores internacionales, como becas de estudios superiores y programas y becas de investigación postdoctoral altamente competitivos. Algunas reformas recientes podrían tener efectos adversos no deseados para los estudiantes internacionales, por lo que es fundamental comunicar su justificación. Por ejemplo, la reforma de 2024 permite a las universidades nacionales fijar las tasas de matrícula para estudiantes internacionales por encima del nivel de referencia establecido por el gobierno, como ocurre en varios otros países de la OCDE. El objetivo de la reforma es fortalecer la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades nacionales y permitirles ofrecer programas educativos y de investigación más atractivos a nivel internacional.

De igual modo, a partir del año fiscal 2027, se suspenderá el acceso de los estudiantes de doctorado internacionales al componente de gastos de manutención de las subvenciones otorgadas por el programa SPRING (Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation), manteniendo el apoyo para los gastos de investigación. El objetivo es que el programa se ajuste a su propósito original de ampliar el acceso a estudios de doctorado para estudiantes japoneses excelentes en áreas de investigación estratégicas. Se deberá realizar un seguimiento del posible impacto de estas políticas en la matrícula de estudiantes internacionales.

Japón ha tenido un éxito moderado en la atracción de académicos extranjeros, que representaron alrededor del 5% del personal académico a tiempo completo en 2024 (MEXT, 2025[84]). Sin embargo, la evidencia de encuestas apunta a que muchos académicos internacionales experimentan un acceso limitado a responsabilidades, desarrollo profesional y avance profesional (Chen y Chen, 2023[85]). Esto se debe en parte a prácticas de reclutamiento cautelosas, donde las universidades a menudo priorizan a los candidatos que se perciben como más propensos a permanecer en Japón (Chen, 2024[86]). Tal postura conservadora conlleva riesgos.

Esto limita la difusión del conocimiento, mientras que los candidatos más pragmáticos pueden optar por trayectorias profesionales más ambiciosas dentro del mercado laboral académico japonés, relativamente seguro. Esto refuerza la necesidad de fortalecer las políticas de retención, comenzando por trayectorias profesionales transparentes basadas en marcos de evaluación del desempeño eficaces.

El sistema de inmigración de Japón para profesionales altamente cualificados está bien desarrollado. Con el visado para profesionales altamente cualificados, investigadores, directivos y trabajadores altamente especializados obtienen una estancia de cinco años y se benefician de un trato preferencial para la residencia permanente, la posibilidad de participar en múltiples actividades profesionales y condiciones de entrada y empleo facilitadas para sus familiares (ISA, 2025[87]). El gobierno también está reforzando sus esfuerzos para apoyar la matriculación escolar de niños extranjeros, con el objetivo de implementar un modelo a nivel nacional para finales del año fiscal 2026, ampliando el apoyo multilingüe en instituciones médicas clave y desarrollando un nuevo sitio web que proporciona información multilingüe y guías prácticas sobre vivienda (Cabinet Office, 2025[49]). Estas políticas de integración de migrantes deben continuar (Capítulo 1).

2.4.3. Aumentar la eficiencia de la asignación de recursos

Hacer que el apoyo público a las PYME sea más eficaz.

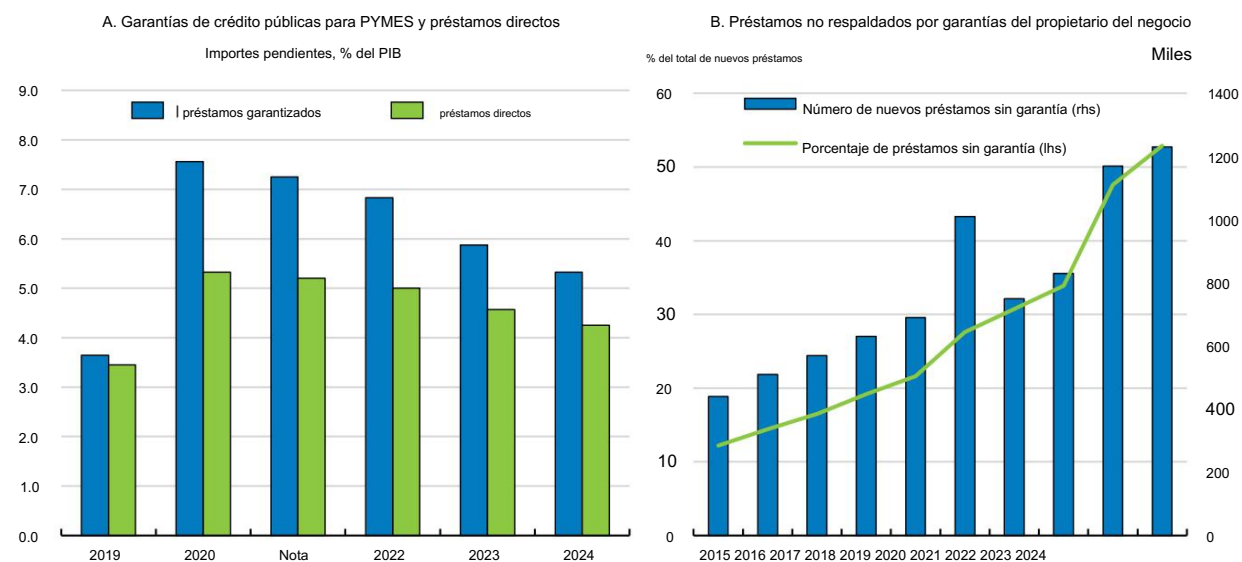
El apoyo financiero público a las PYME ha disminuido desde su pico durante la pandemia, pero se mantiene muy por encima de los niveles previos a la COVID-19, lo que podría afectar la asignación eficiente de recursos. En marzo de 2025, los préstamos con garantía pública, que aún ofrecían una generosa cobertura del 80%, estaban en manos del 44% de todas las PYME. Esto representó el 5,3% del PIB de 2024 y el 9,6% del total de préstamos pendientes a pymes, cifra sustancialmente superior al 3,6% del PIB del ejercicio fiscal 2019 (Figura 2.22, Panel A). Las pymes también recibieron préstamos directos de instituciones financieras públicas por un valor adicional del 4,2 % del PIB. Las garantías generalizadas y los préstamos subvencionados ayudan a las empresas no viables a mantenerse a flote, retrasando la reestructuración y dificultando la reasignación de recursos hacia negocios más dinámicos. Asimismo, las generosas garantías de las Corporaciones de Garantía de Crédito, que cubren el riesgo crediticio de los bancos privados y están reaseguradas por la Corporación Financiera de Japón, de propiedad pública, reducen la exposición al riesgo de los bancos y pueden debilitar la evaluación crediticia. Reducir las tasas de cobertura de las garantías, como se recomienda en el Estudio de Japón de la OCDE de 2024, contribuiría a fortalecer la evaluación de riesgos de los bancos. Mejorar la recopilación sistemática de datos sobre las características de las empresas beneficiarias (por ejemplo, tamaño, sector, rentabilidad, historial de préstamos) también permitiría realizar evaluaciones periódicas del impacto del programa en las diferentes categorías de empresas, lo que facilitaría una orientación más eficaz del apoyo a los distintos segmentos de las pymes.

El sistema público de garantía de crédito de Japón canaliza la mayor parte del apoyo a las pymes a través de préstamos bancarios, lo que refuerza la dependencia de las relaciones crediticias tradicionales y limita el desarrollo de opciones de financiación alternativas. Esto también ha fomentado una cultura crediticia conservadora, en la que los bancos históricamente han favorecido las garantías inmobiliarias y personales, lo que restringe a las empresas innovadoras con pocos activos. Aun así, datos recientes muestran que más del 52 % de los préstamos a pymes se emiten ahora sin garantías personales del directivo, frente al 12 % en el ejercicio fiscal de 2015 (Figura 2.22, Panel B).

Las prácticas de financiación más flexibles, que se están afianzando gradualmente, deberían verse reforzadas por los avances continuos en las reformas destinadas a impulsar la financiación de la innovación.

En mayo de 2025, el gobierno promulgó una ley que aclara el marco legal para la garantía de bienes muebles y cuentas por cobrar. Anteriormente, estas prácticas —que a menudo implicaban transferencias temporales de la propiedad de activos como maquinaria, inventarios o la pignoración de cuentas por cobrar— dependían en gran medida de precedentes judiciales (MoJ, 2025[88]). Las nuevas normas, que entrarán en vigor a finales de 2027, deberían fomentar un uso más amplio de los instrumentos de financiación existentes basados en cuentas por cobrar, incluido el «Sistema de Garantía de Préstamos con Activos Líquidos» gestionado por las Corporaciones Regionales de Garantía de Crédito. Al mejorar la seguridad jurídica, se espera que la reforma alivie la volatilidad del flujo de caja a corto plazo para las pymes y fortalezca su capacidad de inversión y expansión, si bien el impacto dependerá de la solidez de los métodos de valoración y de la aceptación por parte de las entidades financieras.

Figura 2.22. El apoyo público a las PYME sigue siendo alto, pero las vías de crédito están cambiando.



de 2021 : El eje se refiere a los años fiscales. Los préstamos directos en el Panel A se refieren a los préstamos otorgados por instituciones financieras afiliadas al gobierno.

Fuente: Japan Finance Corporation, Guía de operaciones de la Unidad de PYME – 2025; METI; OCDE, Perspectivas económicas (base de datos); y Agencia de Servicios Financieros.

StatLink 2<https://stat.link/pf7g8x>

Las reformas que permitirán a las empresas constituidas utilizar activos intangibles como garantía para finales de 2026 están avanzando. El Cargo por Valor Empresarial (EVC, por sus siglas en inglés), creado bajo la Ley de 2024 sobre la Promoción de Préstamos Basados en Flujos de Caja, introduce un derecho de garantía sobre el valor empresarial de una empresa, lo que permite el uso de activos intangibles, fondo de comercio y cuentas por cobrar futuras como garantía (JBA, 2025[89]). Las autoridades planean restringir el EVC a las corporaciones, exigir un acuerdo de fideicomiso de garantía con un titular de EVC no posesorio autorizado y hacer que el cargo sea efectivo solo después del registro (FSA, 2025[90]; FSA, 2025[91]; Baker McKenzie, 2024[92]). Si bien el esquema puede ampliar las opciones de financiamiento para empresas orientadas a la innovación, su complejidad y los costos relacionados con el fiduciario podrían limitar inicialmente su uso para las empresas más pequeñas hasta que las prácticas de valoración y operativas maduren.

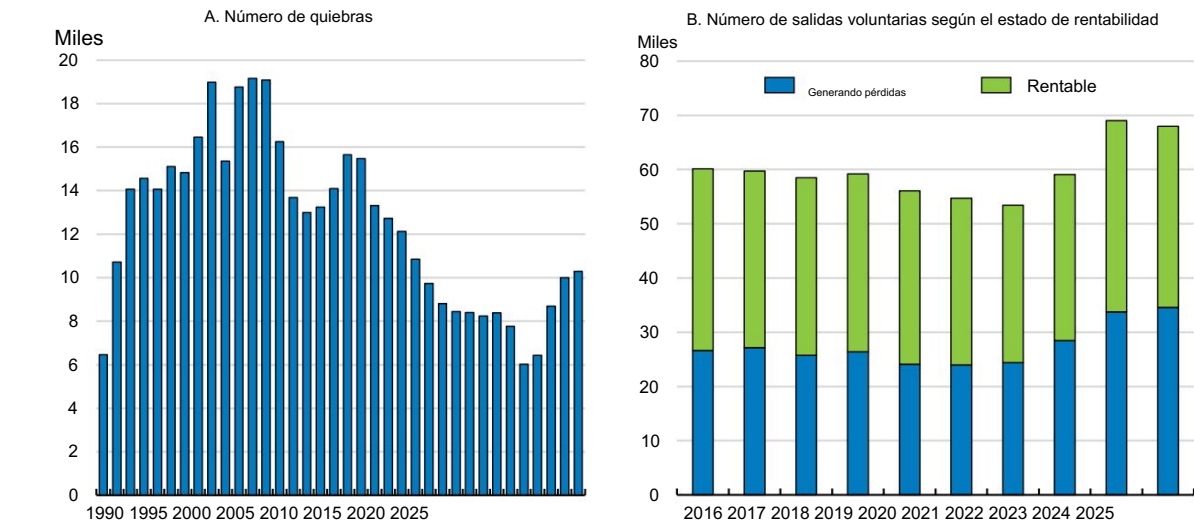
La implementación del EVC plantea varios desafíos. Las autoridades financieras están preparando directrices de supervisión, acuerdos de coordinación y modelos para ayudar a los bancos a construir la infraestructura operativa necesaria (FSA, 2025[90]), mientras que los registros mercantiles requieren importantes actualizaciones y capacitación del personal para respaldar las presentaciones de garantías a nivel empresarial. Se espera que los bancos, que actúan como asesores principales de las empresas deudoras en estrategias para aumentar el valor empresarial, adapten significativamente sus procesos y capacidades. La regulación también debe garantizar la igualdad de condiciones, ya que las compañías fiduciarias pueden actuar simultáneamente como banco principal de un deudor. Si bien se espera que reduzca los costos relacionados con el fideicomiso, tal superposición podría tener implicaciones para la competencia. Si las transacciones relacionadas con el EVC se concentran en un número reducido de instituciones financieras, los bancos podrían utilizar el nuevo sistema para retener a los prestatarios y abstenerse de ofrecer apoyo para aumentar el valor (JBA, 2025[89]). Si bien las regulaciones permiten a los deudores solicitar la fijación del principal en cualquier momento, preservando la opción formal de refinanciamiento, se debe monitorear periódicamente la efectividad de este mecanismo para limitar el poder de negociación de los bancos principales. La capacidad del EVC para fortalecer la financiación de la innovación dependerá de un marco regulatorio flexible que permita que la dinámica del mercado guíe su evolución. Al mismo tiempo, debe garantizarse una protección efectiva en los procedimientos de insolvencia, donde la garantía —que se obtiene únicamente al registrarse— permanece sujeta a suspensiones de ejecución y a una posible subordinación a garantías preexistentes (Sakai y Yoshizawa, 2025[93]).

Mejorar la eficiencia de la salida y reestructuración de empresas.

La creciente incertidumbre y la retirada de las medidas de apoyo financiero relacionadas con la pandemia han provocado un aumento en el número de quiebras empresariales con deudas de al menos 10 millones de yenes (61 600 euros) en el periodo 2023-25.

(Figura 2.23, Panel A). Esta cifra se sitúa en torno al promedio a largo plazo. El deterioro de las condiciones empresariales entre las empresas con menos de 10 empleados representó el 89 % de todas las quiebras. Esto refleja en gran medida la eliminación gradual de las prórrogas fiscales especiales por la COVID-19, la persistente escasez de mano de obra y el aumento de las presiones inflacionarias. Estos factores han afectado negativamente a la rentabilidad de las empresas menos estructuradas, especialmente en los sectores de servicios y construcción (Tokyo Shoko Research, 2025[94]). Los datos mensuales sobre quiebras apuntan a un nuevo incremento interanual durante el primer trimestre de 2026.

Figura 2.23. Aumento de las quiebras y las salidas voluntarias.



Nota: Panel A: Quiebras con una deuda total de 10 millones de yenes o más. La quiebra se define como la incapacidad de la empresa para pagar sus deudas o continuar su actividad económica e incluye quiebras privadas, es decir, la suspensión de transacciones bancarias y la reorganización interna. Panel B: Las salidas voluntarias se refieren a la suspensión, el cierre y la disolución de la empresa. Las empresas rentables y deficitarias se basan en el beneficio neto del período inmediatamente anterior a la suspensión, el cierre o la disolución. Fuente: Tokyo Shoko Research, Situación Nacional de Quiebras Corporativas y Teikoku Databank, Encuesta Nacional sobre Suspensión, Disolución y Tendencias de Disolución de Empresas.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/ohk3v4>

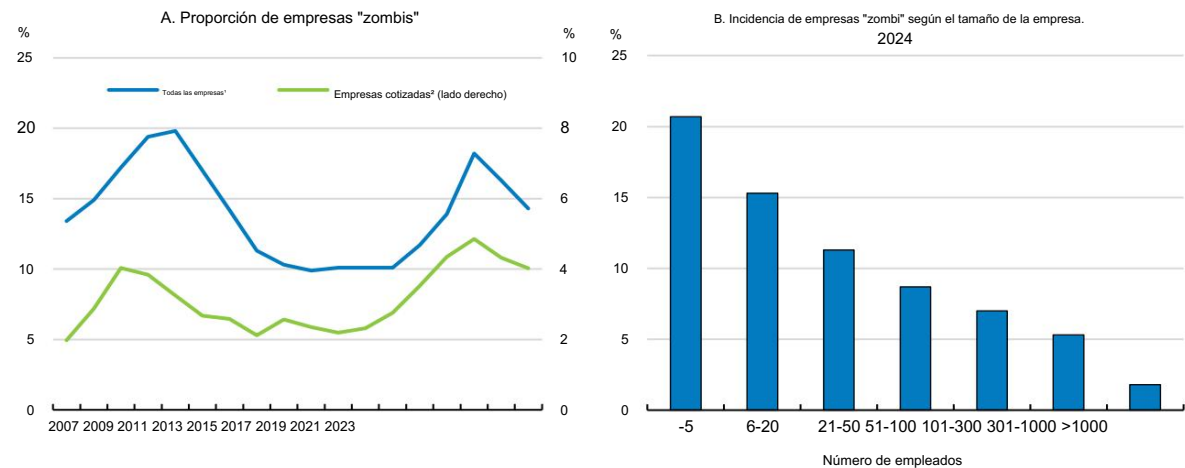
La menor rentabilidad en sectores de bajo margen, impulsada por el aumento de los costos de los insumos y los salarios, también provocó un incremento en las salidas voluntarias. Alrededor de 68 000 empresas (aproximadamente el 2 % del total de empresas) completaron salidas de negocios no judiciales a través de procedimientos de suspensión, cierre o disolución en 2025 (Teikoku Databank, 2026[95]). Sin embargo, solo alrededor del 51 % de estas salidas voluntarias involucraron a empresas con pérdidas (Panel B). Casi dos tercios (63 %) de las empresas que salieron tenían brechas positivas de activos y pasivos —un máximo histórico— y aproximadamente una cuarta parte de ellas también reportaron ganancias netas. Aunque la proporción de empresas viables en el total de cierres voluntarios ha disminuido constantemente desde 2020, su número absoluto sigue siendo superior a los niveles prepandémicos. El rápido envejecimiento de los propietarios de negocios, junto con los esfuerzos políticos para promover cierres ordenados, parece ser la base del aumento de los cierres voluntarios. En 2025, la edad promedio de los gerentes que suspendieron, cerraron o disolvieron sus negocios alcanzó un máximo histórico de 71,5 años, mientras que casi una cuarta parte de todos los cierres voluntarios involucraron a propietarios de 80 años o más (Teikoku Databank, 2026[95]), lo que refleja transiciones de sucesión empresarial débiles.

La proporción de empresas zombi sigue siendo alta a pesar de la eliminación gradual del apoyo por la pandemia.

El amplio apoyo público a las pymes contribuyó a un aumento en la proporción de empresas zombi, es decir, negocios que permanecen activos a pesar de las pérdidas persistentes y los ingresos insuficientes para cubrir los pagos de intereses. Si bien la proporción de empresas zombi disminuyó del 18 % en el año fiscal 2022 al 14,3 % en el año fiscal 2024 (a unas 210 000 empresas), a medida que se redujo el apoyo durante la pandemia y comenzaron los reembolsos de los préstamos "cero-cero", siguen siendo elevadas en comparación con los niveles previos a la pandemia. (Figura 2.24, Panel A). Las empresas zombi se concentran especialmente entre las empresas más pequeñas, en un 21% de las que tienen menos de seis empleados (Panel B). Sin embargo, la inviabilidad económica no se limita a las PYME. Las estimaciones de la Secretaría de la OCDE muestran que las tasas de empresas zombi entre las empresas cotizadas siguen la misma tendencia, aunque a niveles más bajos, con

El impacto de la pandemia afectó a las empresas cotizadas con mayor severidad que la crisis financiera de 2008, en parte debido a la concentración del apoyo público en las PYME (Panel A).

Figura 2.24. La prevalencia de empresas zombis es relativamente alta, especialmente entre las empresas más pequeñas.



Nota: 1. Las empresas zombi son empresas que han estado establecidas por al menos 10 años y reportan un índice de cobertura de intereses inferior a uno durante tres años fiscales consecutivos y. 2. Empresas que cotizan en los mercados Premium y Estándar de la Bolsa de Valores de Tokio.
Fuente: Banco de Datos Teikoku y cálculos de la OCDE basados en datos de Worldscope.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/cp9dqk>

Las garantías de préstamos públicos, los préstamos subvencionados y la indulgencia de los acreedores pueden distorsionar la competencia y debilitar la asignación eficaz de recursos, al permitir que las empresas no viables resistan impactos sustanciales. Las grandes concentraciones de empresas zombi inmovilizan recursos en empresas consolidadas de baja productividad, desplazando a las empresas más eficientes (Adalet McGowan et al., 2017[96]). La evidencia empírica para Japón muestra que los rígidos procesos de salida en la década de 1990 impusieron costos significativos a la producción potencial (Caballero et al., 2008[97]). La proporción relativamente alta de pymes no viables puede ayudar a explicar las bajas tasas de salida y la reestructuración tardía en Japón, lo que reduce el crecimiento de la productividad. Por lo tanto, fortalecer los mecanismos de reasignación de recursos es primordial.

Hacer más flexible el régimen de insolvencia.

Un mayor dinamismo empresarial depende de normas de insolvencia que permitan la salida oportuna de empresas no viables a un coste mínimo, al tiempo que proporcionan flexibilidad para reestructurar las viables, apoyando la reasignación de recursos, la asunción de riesgos y el crecimiento de la productividad, especialmente en sectores intensivos en intangibles (Demmou y Franco, 2021[98]). Las reformas posteriores a la pandemia en muchos países de la OCDE han incorporado cada vez más herramientas de resolución simplificadas y previas a la insolvencia en los marcos legales, mientras que Japón se ha centrado en mejorar las condiciones de los mecanismos extrajudiciales existentes (Ueno et al., 2025[99]). El marco de insolvencia liderado por los tribunales de Japón funciona relativamente bien a nivel internacional y prioriza la continuidad empresarial (André y Demmou, 2022[100]), complementado por esquemas de reestructuración extrajudicial que dependen del tamaño. A pesar de la gestión eficiente de los casos y los plazos predecibles, los altos costos procesales y el estigma de la bancarrota disuaden a los deudores de utilizar los procedimientos formales (Ueno et al., 2023[101]). A fecha de 2024, el 89% de los casos judiciales eran quiebras ordinarias, y solo una pequeña parte correspondía a reorganizaciones corporativas y rehabilitación civil, los dos procedimientos de reestructuración (Recuadro 2.3).

Los rígidos criterios de elegibilidad y funcionamiento han limitado la adopción de los planes de reestructuración extrajudicial de Japón. Por regla general, los marcos de reestructuración de PYMES y de resolución alternativa de disputas (introducidos en la década de 2000 como procedimientos basados en reglas y administrados de forma privada) excluyen a los acreedores no financieros y carecen de mecanismos de imposición, lo que requiere el consentimiento unánime de los acreedores para aprobar los planes de reestructuración (Recuadro 2.3). Esto limita su velocidad, previsibilidad y alcance en los casos en que los intereses de los acreedores no están perfectamente alineados. La Ley de Recuperación Temprana de Empresas (EBR) de 2025 estableció un esquema híbrido extrajudicial para todas las empresas, que permite a aquellas en riesgo de dificultades financieras recuperar su negocio antes de la insolvencia formal. Se espera que entre en funcionamiento a finales de 2026, y el esquema encarga a entidades independientes designadas por el METI la verificación de la situación preinsolvente de un deudor.

estado y revisión de su plan de recuperación. Conforme a la Ley, una resolución para modificar la parte no garantizada de los créditos pertinentes se vuelve vinculante si es aprobada por los acreedores que representan el 75% de los derechos de voto. Cuando un solo acreedor posee el 75% o más de esos derechos, se requiere una mayoría adicional. Los tribunales también garantizan la equidad del plan y la integridad procesal. Los procedimientos son confidenciales y se aplican solo a las obligaciones financieras, con ajustes limitados a las partes no garantizadas de los créditos garantizados. Se pueden otorgar suspensiones temporales de la ejecución para preservar los activos durante todo el procedimiento (METI, 2025[102]).

Recuadro 2.3. Características principales de las opciones de reestructuración en el régimen de insolvencia de Japón.

Además de las quiebras ordinarias, los procedimientos judiciales en Japón incluyen un procedimiento especial de liquidación y dos planes de reestructuración que se adaptan a empresas de diferentes tamaños. La liquidación especial es una disolución simplificada, supervisada por un tribunal, conforme a la Ley de Sociedades, principalmente para empresas solventes o casi solventes que han decidido disolverse. Ofrece una alternativa más sencilla y económica a la quiebra, utilizada a menudo para reestructuraciones voluntarias o de grupo. Las reorganizaciones corporativas brindan a los acreedores una mayor protección al excluir a los deudores de las operaciones comerciales, que son asumidas por un administrador judicial. La complejidad procesal y los mayores costos las hacen adecuadas principalmente para insolvencias a gran escala (13 casos en 2024). El procedimiento de rehabilitación civil permite a los deudores continuar con sus operaciones comerciales mientras reestructuran sus pasivos, basándose en un plan de revitalización empresarial aprobado y supervisado por el tribunal. Este debe contar con el respaldo de la mayoría de los acreedores, tanto en número como en valor representativo (al menos la mitad del total de las reclamaciones). El procedimiento de rehabilitación civil para personas con deudas pequeñas está disponible para trabajadores autónomos cuyos niveles de deuda se encuentran por debajo de determinados umbrales, lo que reduce los gastos judiciales y administrativos. La solicitud de rehabilitación civil disminuyó aproximadamente un 20 % en 2024, situándose en un mínimo histórico de 91.

Japón también cuenta con dos marcos principales de reestructuración extrajudicial, con intervención judicial únicamente si posteriormente se solicita su ejecución. Ambos se aplican exclusivamente a los acreedores financieros y requieren el consentimiento unánime para la aprobación de un plan de revitalización empresarial. El programa SME Turnaround apoya a las pymes mediante un proceso coordinado liderado por expertos designados que ayudan a preparar el plan de revitalización y median en las negociaciones. Para las empresas medianas y grandes, el programa de Resolución Alternativa de Disputas (RAD) Turnaround ofrece una solución formalmente administrada por una organización de RAD certificada.

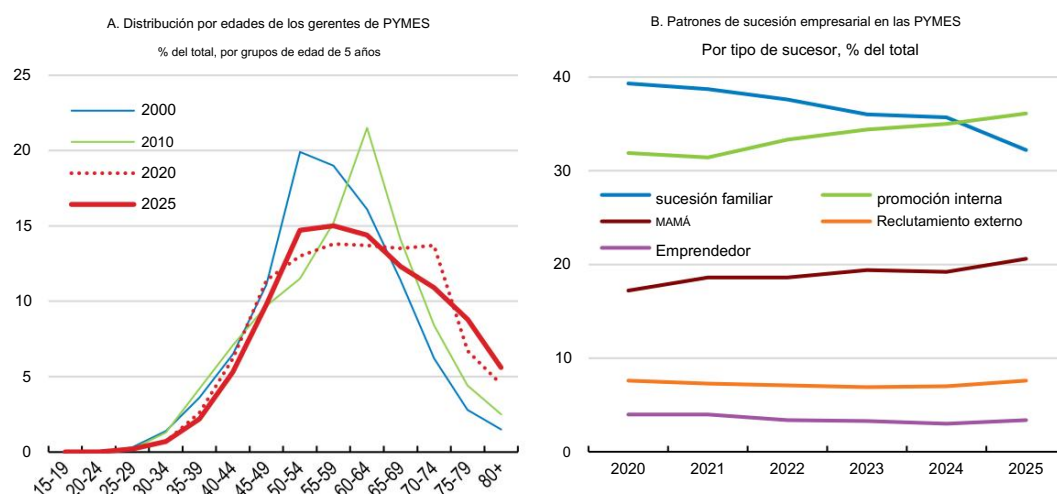
Fuente: Ueno, H. et al. (2024), Chambers Global Practice Guide: Japan Insolvency 2024, Nishimura & Asahi.

El uso del EBR por parte de las pymes podría verse limitado por sus costes procedimentales, ya que, a diferencia del programa SME Turnaround, el EBR no subvenciona explícitamente la participación de expertos en la elaboración del plan de recuperación. Para reforzar los incentivos a las pymes para que utilicen el EBR, las autoridades podrían subvencionar sus costes. Además, existe el riesgo de que los acreedores financieros prefieran otras opciones, donde su poder de negociación es mayor.

Mejorar la sucesión empresarial

El creciente número de cierres voluntarios de empresas propiedad de directivos mayores de 69 años, que representaron alrededor del 63 % de los cierres en 2023, refleja en parte la creciente proporción de directivos de pymes en este grupo de edad (Figura 2.25, Panel A). La falta de una planificación de sucesión adecuada también es un factor clave, ya que alrededor del 50 % de todas las pymes carecían de un sucesor o aún no lo habían identificado en 2025, una mejora respecto al pico del 67 % en 2017, pero aún elevada. La ausencia de un sucesor afecta a cerca del 22 % de las empresas con directivos mayores de 80 años. La limitada disponibilidad de candidatos jóvenes idóneos es una limitación adicional, especialmente en las zonas rurales con una alta prevalencia de empresas familiares, lo que refleja el envejecimiento de la población y las diferencias generacionales en las preferencias profesionales (Teikoku Databank, 2025[103]). Aunque todavía se encuentran en una etapa temprana de la transición demográfica, varios países de Europa Central pertenecientes a la OCDE —donde las pymes son predominantemente de propiedad familiar— ya se enfrentan a problemas similares (Schiefer et al., 2019[104]). En este contexto, las medidas políticas implementadas en Japón pueden ofrecer valiosas lecciones.

Figura 2.25. El envejecimiento de la clase empresarial está transformando los patrones de sucesión empresarial de las PYME.



Nota: El Panel B: Fusiones y Adquisiciones se refiere al total de adquisiciones, cesiones temporales y escisiones, mientras que Emprendedor se refiere a los casos en los que el fundador permanece o retoma el rol de representante porque no se ha designado a ningún sucesor.

Fuente: Banco de Datos de Teikoku y Agencia para la Pequeña y Mediana Empresa, Libro Blanco sobre la Pequeña y Mediana Empresa de 2025.

StatLink 2<https://stat.link/k70q3v>

Si bien cierta liquidación es inevitable dadas las cambiantes condiciones demográficas y podría generar economías de escala para las empresas restantes, la liquidación de una gran proporción de negocios viables debido a la falta de sucesores debe ser monitoreada. La probabilidad de una sucesión sin contratiempos aumenta con el tamaño de la empresa (Xu, 2023[105]), mientras que las empresas más pequeñas y de bajo crecimiento tienen menos probabilidades de haber identificado a un sucesor y, cuando no lo tienen, tienden a mantener más efectivo (Tsuruta, 2021[106]). Los gerentes mayores sin un sucesor tienen más probabilidades de cerrar su negocio o sufrir una quiebra, lo que sugiere que la salida voluntaria al jubilarse suele ser la vía preferida para los propietarios más pequeños. Al mismo tiempo, la experiencia específica de la empresa y del sector se ha convertido en un criterio cada vez más importante en las decisiones de sucesión, superando a los lazos familiares, con una proporción de sucesiones basadas en la familia del 32%, por debajo de las promociones internas no familiares del 36% (Panel B), y con un 84% de sucesores que tienen al menos diez años de experiencia específica del sector (Teikoku Databank, 2025[103]).

En el marco del Sistema de Impuestos sobre la Sucesión Empresarial, las transferencias de acciones de empresas no cotizadas —o de activos empresariales en el caso de autónomos— a un sucesor, incluso uno sin vínculo previo con la empresa, pueden beneficiarse de importantes aplazamientos fiscales y, para las pymes, de exenciones potencialmente totales (por ejemplo, cuando el sucesor se convierte en consejero, se mantienen los niveles de empleo o se presenta un Plan Especial de Sucesión). Sin embargo, este trato favorable desincentiva otras vías de sucesión sujetas a las normas del impuesto sobre la renta estándar, como las ventas directas a terceros o las fusiones y adquisiciones, que las pymes ya perciben como complejas y costosas en términos de trámites. Para mitigar este sesgo, las autoridades han ampliado el apoyo a través de la red nacional de Centros de Apoyo a la Sucesión y Transición Empresarial (BSTSC).

Estos organismos ofrecen subvenciones, servicios de asesoramiento específicos en fusiones y adquisiciones, una plataforma en línea de sucesión y búsqueda de socios para fusiones y adquisiciones gestionada por la Corporación Financiera de Japón y un registro público de asesores certificados en fusiones y adquisiciones. Como resultado, los BSTSC facilitaron 2132 transacciones de sucesión basadas en fusiones y adquisiciones en el año fiscal 2024, frente a las 923 del año fiscal 2018, de entre más de 16 000 empresas que solicitaron asesoramiento (OSMER, 2025[107]). Es necesario reforzar aún más los esfuerzos para ampliar el apoyo a la sucesión y búsqueda de socios para fusiones y adquisiciones, al tiempo que se reajusta gradualmente el tratamiento fiscal de las diferentes modalidades de sucesión para reducir las distorsiones entre las transferencias del régimen especial y otras opciones de sucesión comercialmente viables.

2.4.4. Impulsar la adopción de tecnologías digitales avanzadas

Japón ocupa el puesto 30 de 69 países según el Índice Mundial de Competitividad Digital del IMD (IMD, 2025[108]).

Si bien la infraestructura digital está bien desarrollada, la adopción desigual de la innovación digital, en particular por parte de las pymes y el sector público, ha lastrado el crecimiento de la productividad, como se analiza en profundidad en el Informe de la OCDE sobre Japón de 2021.

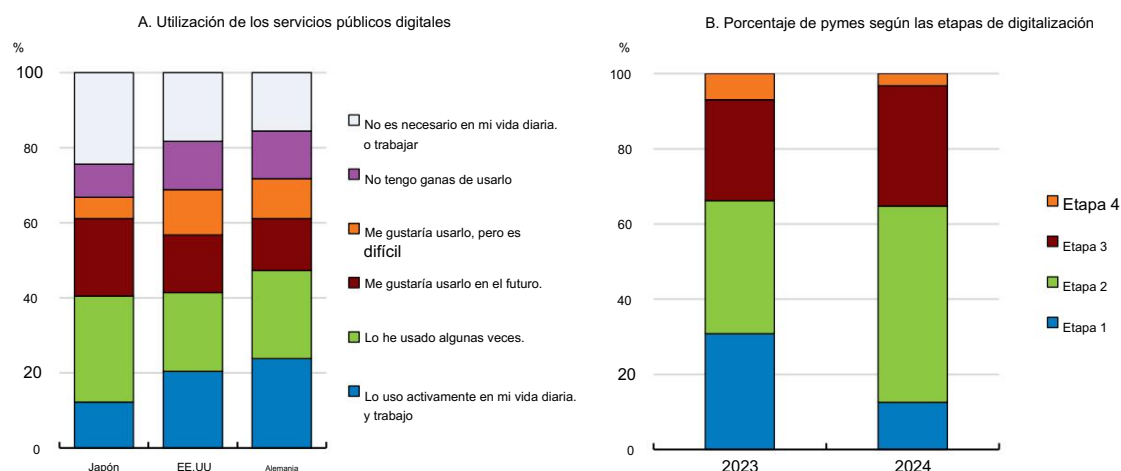
Por lo tanto, es positivo que el gobierno esté priorizando la transformación digital (DX), con el establecimiento de

la Agencia Digital en 2021 y la adopción del Plan de Prioridades para el Avance de una Sociedad Digital en 2025 (Agencia Digital, 2025[109]).

La transformación digital del sector público puede agilizar los procesos y crear funciones gubernamentales transparentes y eficaces. La digitalización del sector público en Japón está rezagada según el índice de políticas de gobierno digital de la OCDE de 2022, basado en seis dimensiones, desde el diseño digital hasta la orientación al usuario y la proactividad (OCDE, 2025[110]), pero se están produciendo mejoras graduales. La Agencia Digital está coordinando la adopción digital en todos los organismos públicos y la estandarización de los sistemas gubernamentales, especialmente a nivel local. La cobertura de la tarjeta My Number (identificación personal nacional), que tiene como objetivo facilitar la vinculación de datos con la prestación de servicios públicos, alcanzó el 81 % en diciembre de 2025. Las autoridades también han promovido una plataforma gubernamental en la nube para modernizar la infraestructura en todos los ministerios.

La adopción de nuevas tecnologías digitales por parte de diferentes usuarios (hogares, empresas y autoridades locales) será crucial para lograr aumentos de productividad. Sin embargo, los datos de encuestas sugieren que el uso recurrente de los servicios de gobierno electrónico para fines cotidianos y laborales sigue siendo bajo (Figura 2.26, Panel A). Si bien aumenta gradualmente, el uso de los servicios en línea para trámites administrativos y emisión de certificados, por ejemplo, de residencia, sigue siendo bajo en un 16 % y un 26 %, respectivamente. Reducir la brecha digital, asegurando que las personas mayores y las zonas rurales no se queden atrás, garantizando la privacidad de los datos y fomentando la confianza pública en los servicios digitales, impulsaría su adopción. Los sistemas informáticos heredados y la falta de capacidad han provocado una escasa adopción de servicios digitales por parte de algunas autoridades locales, que necesitan apoyo para una transición fluida. La digitalización en el sector público puede aumentar la eficiencia de la contratación pública y las regulaciones para elevar las tasas de puesta en marcha (ver arriba), ayudar a superar la escasez de mano de obra en los servicios de educación y atención y aumentar la eficiencia del gasto en salud (Capítulo 1).

Figura 2.26. La adopción de soluciones digitales se enfrenta a obstáculos.



Nota: Panel B: La etapa 1 se refiere a la ausencia de implementación de la digitalización. Las etapas 2 a 4 se refieren al uso de herramientas digitales para reemplazar soluciones analógicas, mejorar la eficiencia empresarial, transformar los modelos de negocio y fortalecer la competitividad, respectivamente.

Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones, Libro Blanco de Japón 2025 sobre Información y Comunicaciones, y Agencia para la Pequeña y Mediana Empresa, Libro Blanco sobre la Pequeña y Mediana Empresa en Japón.

StatLink 2 <https://stat.link/fpzec6>

La digitalización plantea retos y oportunidades para las pymes japonesas, ya que los cambios demográficos, las expectativas cambiantes de los consumidores y la creciente competencia mundial intensifican la necesidad de adoptar nuevas tecnologías.

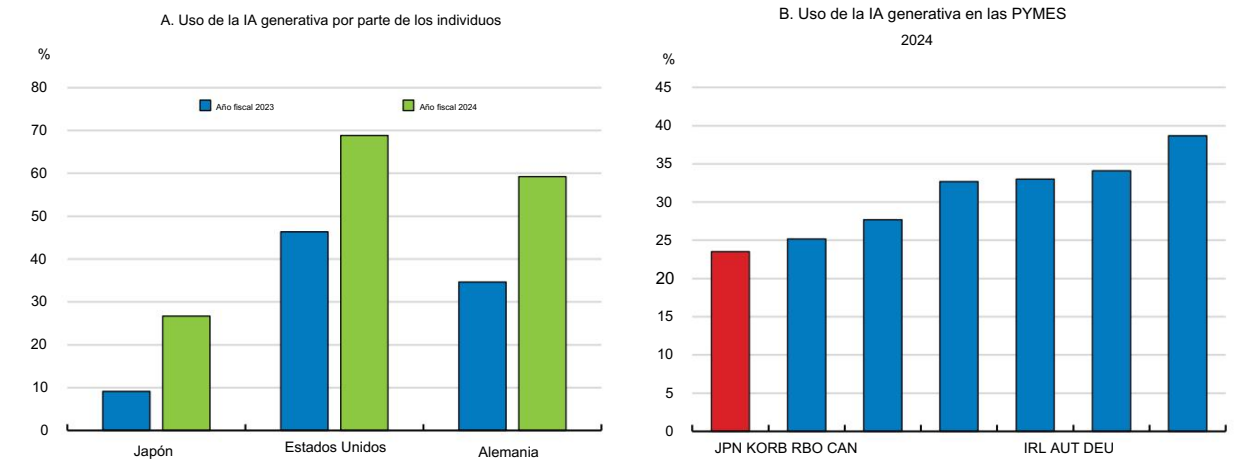
La adopción de tecnologías digitales varía según el tamaño de la empresa, desde el 90% en grandes empresas (más de 1000 empleados) hasta 30 % en empresas con menos de 100 empleados (IPA, 2025[111]). Además, la digitalización en las pymes se produce principalmente mediante la sustitución de funciones analógicas, mientras que la dependencia de la transformación digital para mejorar la eficiencia y la competitividad empresarial sigue siendo baja (Figura 2.26, Panel B), ya que a menudo se ven limitadas en términos de tiempo, habilidades y capital para invertir en capital organizativo complementario. Por lo tanto, impulsar las habilidades digitales (Capítulo 1) y crear un entorno que apoye la adopción digital en las pymes son claves.

Japón cuenta con diversas políticas de apoyo a las pymes, como subvenciones, programas de formación, incentivos fiscales y servicios de asesoramiento. Estos servicios incluyen guías paso a paso para la implementación de herramientas digitales básicas, desde plataformas de facturación electrónica hasta sistemas de gestión de relaciones con el cliente. Sin embargo, según una encuesta reciente de la OCDE, solo el 14 % de las pymes japonesas conocen los programas de apoyo gubernamentales, una cifra superior a la de Estados Unidos, pero inferior a la de Corea y los principales países europeos (OCDE, 2024[112]). De las que sí los conocen, solo el 25 % se ha beneficiado de ellos.

Las herramientas financieras existentes deben complementarse con medidas que fomenten la concienciación y la asistencia técnica para aprovechar las tecnologías digitales. Por ejemplo, Alemania cuenta con 26 Centros de Innovación Digital para Pymes que ofrecen una amplia gama de servicios centrados en la adopción digital por parte de las pymes. Estos incluyen fábricas de demostración que reproducen las operaciones corporativas para proporcionar a los directivos ejemplos reales de cómo las tecnologías digitales podrían transformar sus operaciones y oportunidades para probar sus propias soluciones técnicas. La Agencia Letona de Inversión y Desarrollo gestiona una ventanilla única que envía grupos de investigadores universitarios a las empresas para ayudarlas a abordar cuestiones tecnológicas.

El uso de la IA generativa tanto a nivel personal como empresarial está aumentando, pero sigue siendo moderado en comparación con sus principales competidores. Los datos de la encuesta de 2024 indican que solo el 27 % de las personas informaron haber utilizado o usar servicios de IA generativa. Esto es aproximadamente tres veces más que en 2023, pero muy por debajo de los niveles en Alemania y Estados Unidos (Figura 2.27, Panel A). En el ámbito empresarial, solo el 55 % de las empresas japonesas utilizan IA generativa, en comparación con más del 90 % en Alemania y Estados Unidos (MIC, 2025[113]), y la adopción de IA es especialmente baja entre las pymes (Panel B). La limitada adopción de IA puede reflejar en parte la baja inversión privada específica en tecnología, ya que la inversión empresarial acumulada en IA en Japón ascendió a 5900 millones de dólares entre 2013 y 2024, la novena más alta de la OCDE. Sin embargo, esta cifra es inferior a los 7300 millones de dólares de Suecia y representa solo el 1,3 % de la de Estados Unidos. En consecuencia, durante el mismo período, Japón registró solo 0,3 empresas de IA recién financiadas por cada 100 000 habitantes, en comparación con 0,5 en Corea, 1,3 en el Reino Unido y 2,0 en Estados Unidos (Maslej et al., 2025[114]). Al mismo tiempo, las empresas japonesas tienen aproximadamente tres veces más probabilidades que las estadounidenses de citar la escasez de talento relacionado con la IA como una barrera para la adopción de la IA (OCDE, 2025[115]).

Figura 2.27. El uso de la inteligencia artificial generativa está creciendo, pero sigue siendo bajo.



Nota: Panel B: Respuestas a la pregunta: "¿Alguien en su empresa, incluyéndose usted mismo, utiliza alguna vez inteligencia artificial generativa en el trabajo?".
Fuente: Ministerio del Interior y Comunicación, Libro Blanco sobre Información y Comunicaciones de 2025 y OCDE, Encuesta de 2024 sobre cómo las PYME utilizan la IA generativa para abordar las necesidades de mano de obra y cualificaciones.

Enlace estadístico 2<https://stat.link/wh7ruk>

La gobernanza de la IA en Japón opera a través de sistemas multinministeriales coordinados liderados por la Oficina del Gabinete, con el apoyo de coordinación del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tradicionalmente basado en un enfoque de derecho blando con múltiples partes interesadas, ahora está cambiando hacia un modelo híbrido que combina flexibilidad con legislación basada en principios (Ichikawa, 2025[116]). Un elemento central de esta transición es la Ley de IA de 2025, que no

La IA debe regularse de forma prescriptiva, pero debe promoverse la investigación, el desarrollo y la implementación innovadora mediante una mayor coordinación intergubernamental y respuestas proporcionadas a los riesgos emergentes.

Para lograr un mayor desarrollo y difusión de la IA, será necesario un progreso sostenido en la infraestructura digital.

A pesar del amplio despliegue de fibra óptica, que proporciona la conectividad de alto ancho de banda necesaria para las cargas de trabajo de IA, Japón alberga solo dos centros de datos por millón de habitantes (para un total de 250), por debajo del promedio de la OCDE de diez (Mapa de centros de datos, 2025[117]). El METI lanzó el Desafío Acelerador de IA Generativa en 2024.

para apoyar el acceso de las empresas a los recursos informáticos necesarios para desarrollar modelos fundamentales de IA generativa, incluso subvencionando las tarifas de uso de los servicios de computación en la nube y supercomputación para entrenar y probar dichos modelos, y para promover la creación de comunidades (METI, 2024[118]). El gobierno también apoya el desarrollo de centros de datos a gran escala fuera de Tokio y Osaka, por ejemplo en las regiones de Hokkaido y Kyushu, con programas destinados a compensar los costos de infraestructura y construcción de instalaciones de los desarrolladores hasta en 30 mil millones de yenes. Estos programas de descentralización deben revisarse adecuadamente antes de su implementación, incluyendo las inversiones complementarias necesarias para garantizar una infraestructura de red eléctrica resiliente en las regiones afectadas.

El reducido tamaño del mercado de capital riesgo, que representa el 0,05 % del PIB en 2023 (promedio de la OCDE: 0,11 % del PIB), podría frenar el desarrollo de la IA a nivel nacional. La inversión en capital riesgo (VC) relacionada con la IA, que alcanzó los 1700 millones de dólares en 2024, equivalía a 14 dólares por habitante, frente a un promedio de la OCDE de 87 dólares (26 dólares si se excluye a Estados Unidos). La inversión en VC creció a una tasa anual promedio de tan solo el 5 % desde 2017, muy por debajo del promedio de la OCDE del 21 %. Los montos invertidos por empresa también siguen siendo modestos, con una mediana de aproximadamente 2 millones de dólares, en comparación con los 4,5 millones de dólares del promedio de la OCDE y los 6 millones de dólares en Estados Unidos (OCDE, 2025[119]). Las bajas valoraciones siguen siendo comunes entre las startups innovadoras, ya que la limitada disponibilidad de capital riesgo nacional en etapas avanzadas a menudo las obliga a salir a bolsa antes de alcanzar la escala suficiente (micro-IPO), lo que restringe su capacidad para obtener financiación adicional (Palmer, 2025[120]). Para las startups de IA y tecnología avanzada, una mayor dependencia del capital riesgo público, por ejemplo, a través de la filial Venture Growth Investment de Japan Investment Corporation, podría brindarles tiempo para escalar antes de entrar en los mercados públicos. Para limitar la exposición pública directa, este apoyo podría complementarse con un mayor uso de instrumentos de financiación mezzanine, que ofrecen capital de crecimiento flexible y ayudan a salvar la brecha entre el capital riesgo y la deuda tradicional.

Aunque el número de nuevos robots industriales disminuyó un 9 % en 2023, Japón sigue siendo un país líder en la adopción de la robótica, con más de 46 000 unidades instaladas (Maslej et al., 2025[114]). Si bien la Ley de IA no identifica explícitamente la robótica como un área de política estratégica, la Estrategia Integrada de Innovación 2025 designa la IA-robótica y la IA física como campos prioritarios para fortalecer la capacidad de innovación de Japón. La Estrategia se centra en el desarrollo de modelos fundamentales de IA-robótica y entornos de entrenamiento virtual, el fortalecimiento de la I+D en IA-robótica y la integración de IA avanzada en robots de próxima generación, al tiempo que promueve una adopción más rápida de la IA en sectores intensivos en robótica. En este contexto, en marzo de 2026, el gobierno formuló una Estrategia de IA-Robótica que se sustenta en una mayor coordinación institucional, lo cual es positivo (Secretaría del Gabinete, 2026[121]). En consonancia con la estrategia de IA, se debería hacer mayor hincapié en las políticas para ampliar la implementación social de la robótica habilitada por IA, en particular mediante el fortalecimiento de las medidas del lado de la demanda y los conocimientos técnicos sobre robótica operativa.

Tabla 2.4. Recomendaciones para impulsar el crecimiento de la productividad

PRINCIPALES HALLAZGOS		RECOMENDACIONES (Las recomendaciones clave están en negrita)	
Fortalecer la competencia			
La adopción de sistemas de autenticación digital aún es limitada entre las empresas y las autoridades descentralizadas.	Promover la implementación oportuna de certificados de registro mercantil digitales, al tiempo que se apoya la adopción por parte de las empresas de herramientas de autenticación digital.		
La limitada integración digital en los servicios gubernamentales restringe el cumplimiento del principio de "una sola vez", obligando a las empresas a presentar información que ya se ha compartido. La falta de plazos para completar los trámites de licencias y permisos reduce la capacidad de las empresas para planificar con antelación.	Garantizar una integración digital perfecta de los servicios gubernamentales, para Por ejemplo, para el registro y la concesión de licencias comerciales, y adoptar el principio de que "el silencio es consentimiento", cuando proceda.		
La capacidad de la Ley de Competencia de Software Móvil (MSCA, por sus siglas en inglés) para aumentar la participación en el mercado podría verse socavada por la resistencia de las empresas ya establecidas.	Apoyar la implementación de la MSCA mediante un seguimiento eficaz y evaluaciones periódicas de la competencia específicas de cada mercado.		
No existe un requisito uniforme para las empresas estatales. Los consejos de administración deberán incluir miembros independientes o someter sus estados financieros a auditoría externa.	Es necesario armonizar mejor las regulaciones nacionales de las empresas estatales sobre los requisitos de divulgación y transparencia con las Directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las empresas estatales.		
Prohibir que los contadores trabajen en sociedades de responsabilidad limitada y en despachos multidisciplinarios integrados puede frenar la innovación y la calidad del servicio.	Permitir que las firmas de contabilidad fiscal adopten formas jurídicas de responsabilidad limitada y flexibilizar las restricciones sobre las prácticas multidisciplinarias integradas.		
La falta de diversidad en los consejos de administración y los requisitos de divulgación menos estrictos para los inversores estratégicos, como las empresas con participaciones cruzadas, pueden estar reduciendo la eficacia de la reforma del gobierno corporativo.	Fomentar la adhesión voluntaria de los inversores estratégicos a los principios del Código de Buenas Prácticas, por ejemplo, mediante la difusión de las mejores prácticas. Mejorar la independencia y la diversidad de los miembros de los consejos de administración de las empresas.		
La contratación pública está fragmentada tanto a nivel institucional como procedimental, lo que puede socavar la comparabilidad de los datos y limitar el alcance de una supervisión eficaz a nivel de mercado.	Establecer, en cooperación con las autoridades descentralizadas, un marco común de información y seguimiento de los datos de contratación pública.		
Japón no cuenta con leyes específicas ni requisitos de divulgación para las interacciones del gobierno con grupos de interés.	Exigir a los funcionarios públicos que divulguen información sobre sus interacciones con grupos de presión a través de registros digitales de acceso público o agendas abiertas.		
Fomentar la inversión extranjera directa.			
El Programa de Promoción de la IED 2025 establece objetivos ambiciosos para aumentar el volumen de inversión extranjera directa recibida a principios de la década de 2030, pero la falta de detalles sobre la financiación genera incertidumbre en materia de inversión.	Publicar la financiación prevista destinada a apoyar el nuevo objetivo de inversión extranjera directa (IED).		
El creciente número de sectores sujetos a controles de inversión extranjera directa puede aumentar la complejidad percibida del sistema y desalentar a los inversores extranjeros.	Publicar periódicamente directrices sectoriales específicas y estudios de casos ilustrativos, basándose en las lecciones aprendidas de los intercambios informales con inversores extranjeros antes del procedimiento de notificación previa.		
Las regulaciones sobre inversión extranjera directa hacen mayor hincapié en las normas de entrada estrictas que en los requisitos posteriores al control.	Mejorar aún más la supervisión y el cumplimiento de las normas posteriores a la selección.		
La traducción al inglés de los documentos políticos clave no es estándar y a menudo se realiza con retraso, mientras que la traducción oficial de leyes y reglamentos es limitada.	Garantizar la traducción oportuna al inglés de los documentos e informes oficiales clave para facilitar el escrutinio internacional y generar confianza.		
Las ventanillas únicas para la inversión extranjera directa entrante se enfrentan a limitaciones en su capacidad para establecer contacto directo con otras autoridades de registro, concesión de licencias y cumplimiento normativo.	Se debe capacitar a las ventanillas únicas para la inversión extranjera directa entrante para que sirvan como interfaces más activas con las autoridades de registro, concesión de licencias y cumplimiento, con el fin de reducir la carga administrativa para los inversores extranjeros.		
Aprovechar ecosistemas de innovación y de empresas emergentes más sólidos.			
Diversas revisiones y disposiciones temporales han hecho que el sistema de incentivos fiscales para I+D resulte administrativamente engorroso para las pequeñas y medianas empresas (PYME) jóvenes, al tiempo que han afectado negativamente a su previsibilidad.	Simplificar el sistema de incentivos fiscales para la I+D, al tiempo que se mejora la previsibilidad de los tipos de deducción efectivos para las pymes jóvenes.		
La inversión en I+D por parte de las pymes sigue estando entre las más bajas de la OCDE.	Complementar las disposiciones de arrastre de los créditos fiscales por I+D no utilizados de las PYME con un límite máximo de reembolso para las actividades de innovación alineadas con objetivos políticos específicos (por ejemplo, fomentar la innovación sistémica).		
El apoyo directo a la innovación promueve las tecnologías emergentes al tiempo que ayuda a alcanzar objetivos políticos específicos.	Complementar los incentivos fiscales para I+D con un mayor uso de subvenciones directas competitivas orientadas a resultados.		
Un sistema de innovación relativamente fragmentado y orientado a los negocios limita la investigación básica.	Fortalecer las alianzas de investigación entre empresas privadas, instituciones públicas de investigación y universidades para impulsar la investigación básica.		
El porcentaje de graduados en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) es bajo, especialmente entre las mujeres.	Promover una mayor participación en las disciplinas STEM, especialmente a través de iniciativas de mentoría dirigidas a estudiantes mujeres.		
La excesiva carga de trabajo administrativo y los rígidos marcos de microgestión limitan el tiempo y la eficacia de la investigación de los académicos.	Establecer límites anuales progresivamente más bajos para el tiempo que los diferentes puestos académicos dedican a actividades no relacionadas con la investigación.		
Las limitadas oportunidades de progresión profesional debilitan la capacidad de las universidades japonesas para retener a académicos internacionales.	Establecer trayectorias profesionales transparentes que conduzcan a puestos permanentes.		
Garantías públicas de amplia base y préstamos subsidiados, que siguen siendo elevados, puede ayudar a que las empresas no viables se mantengan a flote, retrasando la reestructuración.	Mejorar el reparto de riesgos entre los bancos y el sector público, por ejemplo, reduciendo aún más el porcentaje de cobertura de las garantías de préstamos públicos.		
Si bien el Cargo por Valor Empresarial (EVC) ampliará la financiación de la innovación al permitir la garantía de los intangibles, su alto	Garantizar un marco regulatorio flexible que permita a la EVC evolucionar en función de las necesidades del mercado.		

Los costes de implementación pueden ser un obstáculo para su eficacia.	Introducir mecanismos sólidos de separación funcional y supervisión que protejan a los deudores de las presiones indebidas ejercidas por las empresas fiduciarias que actúan también como sus bancos principales.
La capacidad de las PYME para utilizar el programa extrajudicial de Recuperación Temprana de Negocios (EBR, por sus siglas en inglés), en el que no se aplican requisitos de unanimidad, puede verse reducida por los elevados costes procesales.	Subvencionar los costes de los procedimientos EBR para las PYME, de forma similar al Plan de Recuperación de las PYME, al tiempo que se trabaja para reducir los costes de los procedimientos.
En el marco del Sistema Tributario de Sucesión Empresarial, las transferencias de acciones y activos reciben un trato mucho más favorable que las ventas a terceros.	Continuar reforzando la sucesión en fusiones y adquisiciones y el apoyo equivalente para las PYMES, al tiempo que se armoniza gradualmente el tratamiento fiscal en todos los tipos de sucesión.
La difusión de las tecnologías digitales en las PYMES está rezagada.	Incrementar el asesoramiento técnico y de gestión que se presta a las PYME para aumentar la adopción de tecnologías digitales.
La limitada disponibilidad de financiación para el crecimiento empuja a las empresas emergentes innovadoras de inteligencia artificial (IA) y tecnología avanzada a salir a bolsa prematuramente.	Reforzar las iniciativas públicas de capital riesgo, junto con las opciones de financiación intermedia, para ayudar a las empresas emergentes innovadoras de IA a crecer antes de salir a bolsa.
La Estrategia de Robótica con IA de 2026 complementará la estrategia nacional de IA al poner en práctica el despliegue a gran escala de robótica con capacidad de IA en los flujos de trabajo cotidianos y los entornos operativos.	Garantizar una rápida implementación de la Estrategia de Robótica con IA.

Referencias

- Abe, N. et al. (2024), Reforma fiscal del año fiscal Reiwa 6: Comentario, https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/PDF/p0382-0594.pdf. [74]
- Adalet McGowan, M. et al. (2017), "¿Los muertos vivientes? Empresas zombi y desempeño de la productividad en los países de la OCDE", Documentos de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE, n.º 1372, <https://doi.org/10.1787/180d80ad-en>. [96]
- André, C. y L. Demmou (2022), "Mejora de los marcos de insolvencia para apoyar la renovación económica", Documentos de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE, n.º 1738, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/8ef45b50-en>. [100]
- Andre, C. et al. (2025), "Productividad y crecimiento en una sociedad que envejece: Perspectivas desde Japón", Journal of the Economics of Ageing, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5304811>. [6]
- Appelt, S. et al. (2016), "Incentivos fiscales para I+D: evidencia sobre diseño, incidencia e impactos", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 32, <https://doi.org/10.1787/5jlr8fldqk7j-en>. [64]
- Appelt, S. et al. (2023), "El impacto de los incentivos fiscales para I+D: resultados del proyecto OECD MicroBERD+", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, <https://doi.org/10.1787/1937ac6b-en>. [67]
- Appelt, S. et al. (2023), "Costo y adopción de incentivos fiscales basados en los ingresos para I+D e innovación", Documentos de trabajo de la OCDE sobre ciencia, tecnología e industria, vol. 03, <https://doi.org/10.1787/4f531faf-en>. [75]
- ARPC (2024), Resultados de la inspección de los esfuerzos de mejora de adquisiciones del año fiscal 2023, Consejo de Promoción de la Reforma Administrativa, https://www.gyokaku.go.jp/chotatsu/R05kaizen/img/R05_honbun.pdf. [35]
- Audretsch, D. et al. (2024), "Regulación de la calidad y cantidad del emprendimiento", Research Policy, Vol. 53, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104942>. [11]
- Baker McKenzie (2025), Enmienda de 2025 a la Ley de Protección de Denunciantes de Japón, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6702ea3f-b67c-4441-8917-081f126cc318>. [45]
- Baker McKenzie (2024), Cargo por valor empresarial: el nuevo derecho de garantía flotante de Japón, https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJICH2WAVkxTyloWy7GTxEWpgrsK%2F6&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQbuwypnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HEsg%2FZ312Bk8OIuOIH1c%2BY4beLEAeELRb7IVQtDM%3D&f. [92]
- Bengo4 (2024), Encuesta sobre la situación actual de las empresas que utilizan contratos electrónicos. [9]
- Bleda, M. y J. Chicot (2020), "El papel de la contratación pública en la formación de mercados para la innovación", Journal of Business Research, Vol. 107, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.032>. [31]
- Buchanan, J. y S. Deakin (2024), "¿Ha llegado la reforma del gobierno corporativo de Japón a un punto de inflexión? Algunas notas de precaución", Asia Pacific Business Review, Vol. 30, <https://doi.org/10.1080/13602381.2024.2320535>. [24]
- Caballero, R. et al. (2008), "Préstamos zombis y reestructuración deprimida en Japón", American Economic Review, Vol. 98, <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.98.5.1943>. [97]
- Oficina del Gabinete (2025), Informe anual sobre la economía y las finanzas públicas japonesas 2025, <https://www5.cao.go.jp/keizai3/2025/0729wp-keizai/setsumei-e2025.pdf>. [23]
- Oficina del Gabinete (2025), Plan de Prioridades para la Realización de una Sociedad Digital: Lista de Políticas Prioritarias, https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/1e27e6d1/20250613_policies_priority_outline_04.pdf. [10]
- Oficina del Gabinete (2025), Programa para la promoción de la inversión extranjera directa en Japón, https://www.cao.go.jp/invest-japan/committee/program2025_en.pdf. [49]
- Secretaría del Gabinete (2026), Estrategia de robótica con IA: Acelerar la implementación social y abrir un mercado enorme, Conferencia de enlace interministerial sobre robótica con IA, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ai_robo/dai2/shiryo1.pdf. [121]
- Secretaría del Gabinete (2024), Principios del Propietario de Activos, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/assetownerprinciplesen.pdf. [21]

- Chen, L. (2024), "Tokenizados pero presentes: ¿cómo dan sentido los académicos internacionales a su decisión de permanecer en universidades japonesas?", *Educación Superior*, Vol. 88, <https://doi.org/10.1007/s10734-024-01191-4>. [86]
- Chen, L. y L. Chen (2023), "Quedarse o irse: Las intenciones de rotación de los académicos internacionales en las universidades japonesas", *Journal of Studies in International Education*, Vol. 28, <https://doi.org/10.1177/10283153231164842>. [85]
- Dai, X. y C. Zou (2025), "Regulación del reetiquetado de gastos estratégicos en incentivos fiscales para I+D mediante la divulgación obligatoria de información", *China Economic Review*, vol. 89, <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2024.102338>. [70]
- Mapa del centro de datos (2025), Mapa del centro de datos. [117]
- Demmou, L. y G. Franco (2021), "Cuidado con la brecha de financiación: Mejorar la contribución de los activos intangibles a la productividad", *Documentos de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE*, n.º 1681, <https://doi.org/10.1787/7aefd0d9-en>. [98]
- Agencia Digital (2025), Directrices estándar para la promoción del gobierno digital: Capítulo 6 - Adquisiciones, https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/ae9a37b7/20250619_resources_standard_guidelines_guideline_05.pdf. [40]
- Agencia Digital (2025), Plan de Prioridades para el Avance de una Sociedad Digital, https://www.digital.go.jp/assets/contents/en/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/6509b68b/20250728_policies_priority_outline_en_01.pdf. [109]
- Edelman (2025), Barómetro de confianza Edelman 2025 - Informe global: Confianza y la crisis de las quejas, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2025-01/2025%20Edelman%20Trust%20Barometer_Final.pdf. [43]
- Centro UE-Japón (2025), Contratación pública, <https://www.eu-japan.eu/government-procurement/public-procurement-japan-outline/wto>. [34]
- GAFI (2024), Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: Japón; 3er Informe de seguimiento reforzado, <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fur/Follow-Up-Report-Japan-2024.pdf.coredownload.inline.pdf>. [46]
- Filippucci, F. et al. (2024), "¿Milagro o mito? Evaluación de las ganancias de productividad macroeconómica de la inteligencia artificial", *OECD Artificial Intelligence Papers No. 29*, <https://doi.org/10.1787/b524a072-en>. [7]
- FSA (2025), "Proyecto de Orden de Ejecución de la Ley de Promoción de la Financiación Empresarial" y "Proyecto de Ordenanza de la Oficina del Gabinete sobre Empresas Fiduciarias Relacionadas con Intereses de Garantía de Valor Empresarial", <https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250430-2/20250430.html>. [91]
- FSA (2025), Garantía de Valor Empresarial (anteriormente Garantía de Crecimiento Empresarial), <https://www.fsa.go.jp/policy/kigyokuchi-tanpo/index.html>. [90]
- FSA (2025), Cuestiones y prácticas para el diálogo sobre la validación de la eficacia de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - Versión 1, Agencia de Servicios Financieros, <https://www.fsa.go.jp/en/news/2025/20250331/01.pdf>. [47]
- FSA (2025), Oficina de Acceso al Mercado Financiero, <https://www.fsa.go.jp/en/policy/marketentry/index.html>. [58]
- FSA (2024), Publicación de las enmiendas propuestas a la Ordenanza de la Oficina del Gabinete sobre la divulgación de asuntos corporativos, <https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241126/20241126.html>. [26]
- FSA (2024), Resultados de la revisión del informe de valores del año fiscal 2024 y puntos importantes a tener en cuenta basados en los resultados, <https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250401-3/01.pdf>. [25]
- Fukao, K., Y. Kim y H. Kwon (2021), "Fuentes de crecimiento y estancamiento en la economía japonesa: un análisis basado en datos de empresas cotizadas que abarcan más de cinco décadas", <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/21e094.pdf>. [3]
- Golesorkhi, S. et al. (2024), "Lost in Translation: The impact of language on national FDI stocks", <https://doi.org/10.2139/ssrn.4845398>. [54]
- Hebous, S. y T. Zimmermann (2016), "¿Puede la demanda gubernamental estimular la inversión privada? Evidencia de las compras federales de EE. UU.", *Documentos de trabajo del FMI* 60, <https://doi.org/10.5089/9781513578729.001>. [32]
- Hiraki, A. (2024), Las medidas de seguridad económica de Japón son inmensas pero ineficaces, <https://eastasiaforum.org/2024/12/06/japans-economic-security-measures-are-immense-but-ineffective/>. [53]

- Hirayama, Y. y E. Maeda (2024), Construyendo vías de contratación abierta hacia Japón, <https://www.open-contracting.org/es/2024/09/19/building-open-contracting-pathways-to-japan/>. [42]
- Ichikawa, T. (2025), Strategic Japan 2025: Norms in New Technological Domains, Center for Strategic & International Studies (CSIS), <https://www.csis.org/analysis/norms-new-technological-domains-japans-ai-governance-strategy>. [116]
- IMD (2025), Clasificación mundial de competitividad digital 2025, https://imd.widen.net/content/xclarczvwr/pdf/WDCR_Report_2025.pdf. [108]
- IPA (2025), Tendencias de transformación digital 2025, <https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf>. [111]
- ISA (2025), Sistema de gestión de residencia e inmigración preferencial basado en puntos para profesionales altamente cualificados, https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_index.html?hl=en. [87]
- ITIF (2025), Comentarios a la Comisión de Comercio Justo de Japón sobre el borrador de las directrices para la Ley de la Economía de la Competencia del Software Móvil, <https://itif.org/publications/2025/06/13/comments-to-iftc-regarding-draft-guidelines-for-the-mobile-software-competition-economy-act/>. [18]
- JASSO (2025), Resultado de la Encuesta Internacional de Estudiantes en Japón, 2024, Organización de Servicios Estudiantiles de Japón, https://www.studyinjapan.go.jp/en/mt/2025/04/data2024z_e.pdf. [83]
- JBA (2025), Informe sobre el uso de garantías sobre el valor empresarial, Asociación de Banqueros Japoneses, <https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news370327.pdf>. [89]
- JETRO (2025), e-Venue, https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s/?language=en_US. [59]
- JETRO (2025), Encuesta sobre actividades comerciales en el extranjero: año fiscal 2024, Organización Japonesa de Comercio Exterior, <https://www.jetro.go.jp/news/releases/2025/a2074f44be097739.html>. [56]
- JETRO (2024), Encuesta del año fiscal 2023 sobre empresas extranjeras: Resumen de los resultados de la encuesta, https://www.jetro.go.jp/ext_images/News/releases/2024/fee004b83b66c3b4/202403.pdf. [61]
- JETRO (2024), Encuesta sobre actividades comerciales en el extranjero: año fiscal 2023, <https://www.jetro.go.jp/news/releases/2023/a94a50ab7a748d5d.html>. [57]
- Katsumura, M. (2023), Cómo Japón está incentivando a más mujeres a participar en STEM, <https://www.weforum.org/stories/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem>. [79]
- Kearney Foresight (2025), El Índice de Confianza en la IED de Kearney 2025: El mundo en un punto de inflexión, <https://www.kearney.com/service/global-business-policy-council/foreign-direct-investment-confidence-index/2025-full-report>. [60]
- Kearney Foresight (2025), World at Inflection: The 2025 FDI Confidence Index, <https://www.kearney.com/documents/291362523/306728540/World+at+inflection-The+2025+FDI+Confidence+Index-PDF.pdf/e8460c9a-79b1-141a-52eb-cd0b839d7eaf?t=1744015874000>. [48]
- Kobayashi, Y. (2014), "Efecto de los créditos fiscales para I+D para las PYME en Japón: un análisis microeconómico centrado en las restricciones de liquidez", Small Business Economics, Vol. 42, <https://doi.org/10.1007/s11187-013-9477-9>. [68]
- Larrue, P. et al. (2024), "Monitoreo y evaluación de políticas de innovación orientadas a la misión: De la teoría a la práctica", Documentos de trabajo de la OCDE sobre ciencia, tecnología e industria, <https://doi.org/10.1787/5e4c3204-en>. [66]
- Ly, A. et al. (2018), "Qué impulsa la inversión extranjera: el papel del idioma, la distancia geográfica, los flujos de información y la similitud tecnológica", Journal of Business Research, Vol. 88, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.007>. [55]
- Martins, J. y L. Veiga (2022), "El gobierno digital como facilitador de negocios", Information Economics and Policy, Vol. 60, <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2022.100990>. [8]
- Maslej, N. et al. (2025), Informe anual del Índice de IA 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.07139>. [114]
- METI (2025), Grupo de Estudio de Gobierno Corporativo: Materiales de Referencia de la 6ª Secretaría para el Fortalecimiento del "Poder de Generación de Ganancias", https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/earning_power/pdf/006_04_00.pdf. [29]

- METI (2025), Directrices del sistema tributario Innovation Box, https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/innovation_tax_guideline.pdf. [72]
- METI (2025), Esquema de la Ley sobre Procedimientos de Ajuste de Deuda Financiera para Empresas para Facilitar la Recuperación Empresarial (Ley de Recuperación Empresarial Temprana), Ministerio de Economía, Comercio e Industria, <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/outline/169/905R712.pdf>. [102]
- METI (2024), Evaluación sobre la transparencia y la equidad de plataformas digitales específicas recopiladas, METI, https://www.meti.go.jp/english/press/2024/0202_002.html. [17]
- METI (2024), GENIAC se lanzará como un proyecto para mejorar la capacidad de Japón para desarrollar IA generativa, Ministerio de Economía, Comercio e Industria, https://www.meti.go.jp/english/press/2024/0202_001.html. [118]
- METI (2024), Resumen del sistema tributario de I+D y reformas tributarias para los años fiscales 2023 y 2024, https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/R6gaiyou_set.pdf. [62]
- METI (2014), Revisión de la competitividad y los incentivos para el crecimiento sostenible. [22]
- MEXT (2025), Materiales fundamentales para la reforma de la gestión de personal y salarios, Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, https://www.mext.go.jp/content/20250825-mxt_hojinka-000044428_4.pdf. [81]
- MEXT (2025), Encuesta sobre intercambios de investigadores, Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, https://www.mext.go.jp/content/20250611-mxt_kagoku_000042934_02.pdf. [84]
- MEXT (2024), Plan de promoción del aprendizaje basado en la indagación para fomentar el amor por la ciencia y las matemáticas entre los estudiantes, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/new/1389014_00001.htm. [78]
- MIC (2025), Libro Blanco de Información y Comunicación 2025, Ministerio del Interior y Comunicación, <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/index.html>. [113]
- Ministerio de Finanzas (2025), El sistema de activos del gobierno japonés y las condiciones actuales, https://www.mof.go.jp/english/policy/national_property/TheJapaneseGovernmentAssetSystemAndCurrentConditions.pdf. [14]
- Miyagawa, T. y T. Ishikawa (2021), "Disminución de la formación de capital en Japón y el papel de los intangibles: estudios empíricos que utilizan datos a nivel de industria", No. 20, RIETI, <https://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/21040008.html>. [1]
- Miyajima, H. y T. Saito (2023), "El impacto de las reformas de gobierno corporativo en las participaciones cruzadas en Japón", RIETI Policy Discussion Papers, No. 5, <https://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/23040009.html>. [27]
- MOF (2025), Sistema de control de inversiones extranjeras, https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/fdi/Data/annual_report2024_en.pdf. [50]
- MOF (2025), Esquema de la reforma tributaria en Reiwa 8, https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm#03. [63]
- MoJ (2025), Ley sobre acuerdos de garantía transferibles y acuerdos de reserva de dominio, Ministerio de Justicia, <https://www.moj.go.jp/content/001440978.pdf>. [88]
- Nagato, T. (2024), "Diseño de un sistema tributario que fomente la innovación en las empresas emergentes", Public Policy Review, Vol. 20, https://www.mof.go.jp/english/pri/publication/pp_review/ppr20_1_1.pdf. [65]
- Nishikawa, M. (2025), Comportamiento de licitación, precios de contratos y número de participantes en la contratación pública de las prefecturas japonesas, https://doi.org/10.1007/978-3-031-77322-8_12. [39]
- NISTEP (2025), Indicadores de Ciencia y Tecnología 2025, Instituto Nacional de Política Científica y Tecnológica, MEXT, https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2025/RM349_00.html. [77]
- OCDE (2025), Inteligencia artificial y el mercado laboral en Japón, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/b825563e-en>. [115]
- OCDE (2025), Panorama general del gobierno 2025, <https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en>. [110]
- OCDE (2025), Implementación de la Recomendación de la OCDE sobre contratación pública en los países de la OCDE y sus socios - Informe 2020-2024, <https://doi.org/10.1787/02a46a58-en>. [37]

- OCDE (2025), Indicador de movilidad estudiantil internacional, <https://www.oecd.org/en/data/indicators/international-student-mobility.html>. [82]
- OCDE (2025), Maximizar los beneficios de la competencia efectiva en la contratación pública en Eslovenia, <https://doi.org/10.1787/c1e5d31f-en>. [36]
- OCDE (2025), Libro de datos sobre gobierno corporativo de la OCDE 2025, <https://doi.org/10.1787/f4f43735-en>. [28]
- OCDE (2025), oecd.ai, <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai-and-data>. [119]
- OCDE (2025), Recomendación del Consejo en Directrices para las políticas de inversión de los países receptores relacionadas con la seguridad nacional, OCDE, Publicaciones de la OCDE, <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/227/227.en.pdf>. [52]
- OCDE (2024), Competencia y regulación en las profesiones y ocupaciones, <https://doi.org/10.1787/20758677>. [19]
- OCDE (2024), ¿Cómo dirigen los gobiernos el apoyo a la innovación?, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/09/how-do-governments-direct-support-for-innovation_0203e501/c1d93d1c-en.pdf. [69]
- OCDE (2024), Estudios económicos de la OCDE: Japón 2024, <https://doi.org/10.1787/41e807f9-en>. [80]
- OCDE (2024), Propiedad y gobernanza de las empresas estatales 2024, <https://doi.org/10.1787/395c9956-en>. [13]
- OCDE (2024), "Digitalización de las PYME para gestionar crisis y transiciones: encuesta D4SME de la OCDE de 2024", Documentos sobre PYME y emprendimiento de la OCDE, n.º 62, <https://doi.org/10.1787/eb4ec9ac-en>. [112]
- OCDE (2023), Principios de gobierno corporativo del G20/OCDE 2023, <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>. [20]
- OCDE (2023), Perspectivas de la OCDE sobre las PYME y el emprendimiento, Publicaciones de la OCDE, París, <https://doi.org/10.1787/342b8564-en>. [5]
- OCDE (2022), Remuneración de los consejos de administración y la alta dirección en las empresas estatales, <https://doi.org/10.1787/80d6dc04-en>. [15]
- OCDE (2022), Incentivos fiscales y el impuesto mínimo global sobre las empresas: reconsiderando los incentivos fiscales tras las normas GloBE, OCDE Publishing, París., <https://doi.org/10.1787/25d30b96-en>. [76]
- OCDE (2021), Panorama general del gobierno de la OCDE 2021, <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>. [44]
- OCDE (2020), Implementación de las Directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las empresas estatales: Revisión de los desarrollos recientes, <https://doi.org/10.1787/4caa0c3b-en>. [16]
- OCDE (2020), "Los efectos de los incentivos fiscales para la I+D y su papel en la combinación de políticas de innovación: Resultados del proyecto micro-BerD de la OCDE, 2016-19", Documentos de política científica, tecnológica e industrial de la OCDE n.º 92, <https://doi.org/10.1787/65234003-en>. [71]
- OCDE (2015), Luchar con mayor eficacia contra las prácticas fiscales nocivas, teniendo en cuenta la transparencia y el fondo - Acción 5: Informe final de 2015, <https://doi.org/10.1787/9789264241190-en>. [73]
- OSMER (2025), Logros de los Centros de Apoyo a la Sucesión y Transferencia Empresarial del Año Fiscal 2024 - Comunicado de Prensa, https://www.smrj.go.jp/press/2025/f7mbjf000000dnpt-att/20250530_press01.pdf. [107]
- Palmer, M. (2025), 'Grandes en Japón' no es suficiente: ¿dónde están las empresas emergentes globales de Japón?, <https://globalventuring.com/corporate/asia/japan-global-startups>. [120]
- Sakai, E. y Y. Yoshizawa (2025), Leyes y reglamentos de financiación de proyectos en Japón 2025, <https://iclg.com/practice-areas/project-finance-laws-and-regulations/japan>. [93]
- Schiefer, J. et al. (2019), "Obstáculos y desafíos de la sucesión empresarial en Europa central", Journal of International Business Research and Marketing, Vol. 4/5, <https://doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.45.3004>. [104]
- Banco de Datos Teikoku (2026), Análisis de la situación actual de las "empresas zombi", <https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260129-zombie/>. [4]
- Teikoku Databank (2026), Encuesta nacional sobre suspensión, cierre y disolución de empresas (2025), <https://www.tdb.co.jp/report/industry/20260109-kyuhaigo25y/>. [95]

- Teikoku Databank (2025), Encuesta nacional sobre tendencias en "ausencia de sucesores", <https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251121-successor25y/>. [103]
- Tittl, V. (2023), El único e irreplicable: Licitación única en la contratación pública, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3954295>. [38]
- Tokyo Shoko Research (2025), Situación nacional de quiebras corporativas, https://www.tsr-net.co.jp/news/status/detail/1200857_1610.html. [94]
- Bolsa de Valores de Tokio (2025), Libro Blanco sobre Gobierno Corporativo para Empresas Cotizadas en la Bolsa de Valores de Tokio. [30]
- Tomasi, C., F. Pieri y V. Cecco (2023), "Trámites burocráticos y dinámica de la industria: un análisis transnacional", Journal of Industrial and Business Economics, Vol. 50, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40812-023-00266-0>. [12]
- Tsuruta, D. (2021), "Falta de sucesores, incumplimiento de la empresa y desempeño de las pequeñas empresas", Japan and the World Economy, Vol. 57, <https://doi.org/10.1016/j.japwor.2020.101051>. [106]
- Ueno, H. et al. (2023), Chambers Global Practice Guides: Insolvency 2023, Nishimura & Asaki, <https://www.nishimura.com/sites/default/files/images/96206.pdf>. [101]
- Ueno, H. et al. (2025), Tendencias y desarrollos en reestructuración e insolvencia en el Japón pospandémico, Global Restructuring Review, <https://globalrestructuringreview.com/review/asia-pacific-restructuring-review-archived/2025/article/trends-and-developments-in-restructuring-and-insolvency-in-post-pandemic-japan>. [99]
- UNCTAD (2025), Informe Mundial sobre Inversiones 2025 - Inversión Internacional en la Economía Digital, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2025_en.pdf. [51]
- OMC (2023), Examen de la política comercial, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s438_e.pdf. [41]
- Xu, P. (2023), "Envejecimiento de la población y dinámica de las pequeñas empresas", Serie de documentos de debate sobre políticas de RIETI, vol. 23, <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/23p032.pdf>. [105]
- Yagi, T. et al. (2022), "Tendencias de productividad en Japón: Revisión de hechos recientes y perspectivas para la era posterior a la COVID-19", Banco de Japón, https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2022/data/wp22e10.pdf. [2]
- Yuan, P., R. Ortega-Argiles y E. Uyarra (2025), "El papel de los compradores gubernamentales en la configuración de la productividad de las empresas", IPEC Research Brief, <https://www.ipec.org.uk/publication/the-role-of-government-buyers-in-shaping-firm-productivity/>. [33]

Estudios económicos de la OCDE:

Japón 2026

Mayo de 2026

Volumen 2026/12

La economía de Japón ha demostrado resiliencia a pesar de los vientos en contra globales, y se proyecta que el crecimiento continúe a un ritmo moderado respaldado por la demanda interna. A medida que Japón transita hacia un nuevo equilibrio de precios y salarios más altos, las políticas macroeconómicas deben calibrarse cuidadosamente para equilibrar el mantenimiento de la inflación cerca del objetivo del 2%, garantizar la sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento a largo plazo en una sociedad que envejece. El aumento de los costos del servicio de la deuda pone de manifiesto la importancia de encauzar la deuda pública a la baja abordando las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población, aumentando los ingresos fiscales y limitando la dependencia de presupuestos suplementarios. En el contexto de una población en edad de trabajar cada vez menor se necesita aumentar la población, impulsar la productividad y la oferta de mano de obra para mantener los niveles de vida. Impulsar la productividad depende de revitalizar el dinamismo empresarial, mejorar los efectos indirectos de la innovación, atraer más capital extranjero y plenamente aprovechar la digitalización. Es necesario aumentar aún más la participación femenina en la fuerza laboral y la calidad del empleo, ampliar el papel de los trabajadores extranjeros, aumentar la flexibilidad del mercado laboral y fortalecer los sistemas de aprendizaje de adultos para facilitar el trabajo. Escasez y vientos en contra demográficos. Asegurar la adicionalidad de la inversión en Transformación Verde (GX), mejorar la gobernanza de la política climática, simplificar los procedimientos de permisos y reforzar la red eléctrica ayudaría cumplir los objetivos climáticos.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL: IMPULSO DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD



ISBN IMPRESO 978-92-64-33890-6
PDF ISBN 978-92-64-44150-7

9HSTCQE*ddijag+